



Área de Presidencia

Secretaría General del Pleno.

SESIÓN EXTRAORDINARIA EN SUSTITUCIÓN DE ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE CELEBRADA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a dos de marzo de dos mil dieciocho siendo las ocho y cuarenta y tres minutos, se reunió el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, en el Salón de Sesiones del Palacio Insular, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Don CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ, Presidente de dicha Excmo. Corporación, para celebrar sesión EXTRAORDINARIA EN SUSTITUCIÓN DE ORDINARIA de la misma, previo cumplimiento de los requisitos legales para ello prevenidos, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, Don ANTONIO MESSÍA DE YRAOLA y del Secretario General, Don DOMINGO JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Concurren los Sres Consejeros:

Grupo Coalición Canaria.

Don Efraín Medina Hernández.
Doña María Coromoto Yanes González.
Don Antonio García Marichal.
Don Alberto Bernabé Teja.
Don Jesús Morales Martínez.
Don Félix Fariña Rodríguez.
Don Leopoldo Benjumea Gámez.
Doña María del Cristo Pérez Zamora.
Doña Carmen Delia Herrera Priano.

Grupo Socialista.

Doña Josefa María Mesa Mora.
Don Aurelio Abreu Expósito.
Don Miguel Ángel Pérez Hernández.
Doña Amaya Conde Martínez.
Don José Antonio Valbuena Alonso.
Doña Estefanía Castro Chávez.
Don Manuel Fernando Martínez Álvarez. Se incorpora a las 10:32, punto 24.

Grupo Popular.

Don Pedro Suárez López de Vergara.
Doña Ana Zurita Expósito.
Don Manuel Fernández Vega.
Don Sebastián Ledesma Martín.
Doña Natalia Asunción Mármol Reyes.

Grupo Podemos.

Don Fernando Sabaté Bel.
Doña Milagros de la Rosa Hormiga.
Don Julio Concepción Pérez.
Doña Francisca Rosa Rivero Cabeza.
Doña María José Belda Hernández.

Asisten como Directores/as Insulares:

Doña María Dolores Alonso Álamo.
Doña Juana María Reyes Melián.
Don Juan Carlos Pérez Frías.
Doña Marta Arocha Correa.
Don Jesús Martín de Bernardo Rodríguez.
Doña Ofelia Manjón- Cabeza Cruz.
Doña Juana de la Rosa González.
Don Javier Rodríguez Medina.
Don Miguel Becerra Domínguez.
Don José Luis Rivero Plasencia.

Seguidamente se adoptaron los siguientes acuerdos:

ÁREA DE PRESIDENCIA.

VICASECRETARÍA GENERAL.

1.- Dación de cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos superiores y directivos de la Administración Insular, dictados en el mes de enero de 2018, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del R.O.F.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 62 del R.O.F. a los efectos de control y fiscalización de la gestión de los órganos de gobierno a que se refiere el artículo. 33.2,e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se da cuenta al Pleno de los decretos de la Presidencia y de las Resoluciones de los Consejeros Insulares de Área, Consejeros Delegados y demás órganos superiores y directivos de la Administración Insular, adoptados durante el mes de enero de 2018

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA.

2.- Dación de cuenta al Pleno de la amortización anticipada de endeudamiento neto del Cabildo, de "Buenavista Golf S.A." y de "AGROTEIDE".

"Visto acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 5 de diciembre de 2017, relativo a la amortización anticipada de endeudamiento neto del Cabildo por importe de 19.176.773,75 euros, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Visto el expediente para la amortización anticipada de endeudamiento neto del Cabildo por importe total de 19.176.773,75 euros, distribuidos 7.942.281,69 euros con cargo al exceso de financiación afectada y 11.234.492,06 euros con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2016.

Visto el informe - propuesta del Servicio Administrativo de Gestión Financiera y Tesorería de 20 de noviembre y el informe de la Intervención General de fecha 1 de diciembre, en el que se muestra conforme con la amortización parcial anticipada de las operaciones de crédito una vez que haya entrado en vigor la correspondiente modificación de crédito.

Resultando que el Consejo de Gobierno el 10 de octubre aprobó inicialmente el expediente de Modificación de crédito nº 8 del Presupuesto del Cabildo, por el que se daba de baja créditos por importe de 7.942.281,69 euros, al tiempo que se daba de alta en la partida 2017 0000 0111 91300 dicha cifra para llevar a cabo una amortización anticipada del préstamo concertado en 2016 para financiar inversiones, ya que en el Decreto de incorporación de Remanentes figuraban saldos de crédito por dicho importe que tienen carácter finalista y que no se van a ejecutar.

Resultando asimismo que a través de la enmienda nº 1 al expediente nº 8 se propuso, un Crédito Extraordinario por importe total de 11.234.492,06 euros desglosados en 10.249.077,06 euros y 985.415,00 euros con alta en la partida de gastos 17.0000.0111.91300 para dar cumplimiento al artículo 32 de la LOEPSF, es decir, para disminuir el endeudamiento neto de la Corporación con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, tanto del saldo del RTGG del Cabildo (1.631.702,17 euros) como del de los distintos Organismos Autónomos (8.617.374,89 euros) y, a una baja de gastos por importe de 985.415,00 euros de un proyecto de gastos incluido dentro de las inversiones financieramente sostenibles.

Resultando que el Pleno aprobó inicialmente el 27 de octubre el expediente de modificación de créditos nº 8 en el que figura, entre otros, el alta en la partida 17 0000 0111 91300 por importe total de 19.176.773,75 euros y que a la fecha actual dicha Modificación de crédito aprobada inicialmente por el Pleno no ha entrado en vigor.

Considerando que el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial, establece que "En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda". "A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la

deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea”.

Considerando que la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda comercial en el Sector Público introduce en la LOEPSF la Disposición Adicional 6ª, por la que se establecen las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario para aquellas corporaciones Locales en las que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento y que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales.

Considerando que la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado prorroga la aplicación para el ejercicio 2016 de dicha Disposición adicional Sexta de la LOEPSF, en la que se establecen las reglas especiales de aplicación del superávit presupuestario, y que la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, publicada en el BOE de 28 de junio, la prorroga a su vez para el ejercicio 2017.

Considerando que la Base 11ª sobre las Modificaciones de Crédito de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017, establece en su apartado 4º que las modificaciones de créditos aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que no se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación inicial y en el apartado 7º que se podrán tramitar expedientes de gasto cuyo crédito se encuentre incluido en el correspondiente expediente de modificación presupuestaria, siempre a propuesta del Área gestora competente y previa incorporación al mismo del acuerdo de aprobación de la oportuna modificación. En todo caso, el acuerdo de aprobación del citado gasto deberá contener declaración expresa de condición suspensiva hasta la efectiva entrada en vigor del expediente de modificación de crédito en trámite.

*Considerando que el órgano competente para la autorización de la amortización anticipada de deuda según la Base 27ª es el Consejo de Gobierno Insular, este órgano **ACUERDA**, condicionando su efectividad a la entrada en vigor de la Modificación de crédito nº 8 aprobada por el Pleno inicialmente el 27 de octubre:*

- 1.- Autorizar la amortización anticipada, por importe de 11.234.492,06 euros de la operación de préstamo nº 9620.313.57766592 firmada el 27 de noviembre de 2014 con La Caixa por importe de 25.509.995,25 euros para la refinanciación de las operaciones del RDL 4/2012 del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2016.*
- 2.- Autorizar la amortización anticipada, por importe de 7.942.281,69 euros del préstamo nº 0182 5717 16 00049819 firmado el 29 de julio de 2016 con BBVA por importe de 24.600.000,00 euros para la financiación de inversiones en la partida 000 011A 91300 del vigente presupuesto con cargo al exceso de financiación afectada.*
- 3.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación del acuerdo adoptado al respecto.*

4.- Facultar al Director Insular de Hacienda para la adopción de las resoluciones y comunicaciones que correspondan con el fin de dar cumplimiento al mismo."

Vistos los acuerdos de Consejo de Gobierno de fecha 7, 14 y 30 de noviembre de 2017, por los que se determina que será esta Corporación quien cancele el importe correspondiente al capital pendiente de las deudas que Buenavista Golf, S.A. tenía con Caixabank por importe total de 2.244.157,47 euros, con cargo a parte del Remanente de Tesorería del Cabildo del ejercicio 2016.

Vista Resolución del Sr. Consejero Insular del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca de 18 de diciembre de 2017, por la que resuelve en su apartado segundo Autorizar, disponer y abonar con carácter anticipado y a favor de la Entidad Insular para el Desarrollo Agrícola, Ganadero y Pesquero (Agroteide) una aportación específica de capital consignada en el Anexo IV de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Cabildo para el ejercicio 2017 para la cancelación total de las operaciones de endeudamiento que mantiene la entidad con dos entidades financieras, cuyo importe asciende a 3.796.797,62 euros con cargo a parte del Remanente de Tesorería del Cabildo del ejercicio 2016."

El Pleno **ACUERDA**, previo Dictamen de la Comisión Plenaria de Presidencia, quedar enterado del contenido del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de diciembre de 2017, relativo a la amortización anticipada de endeudamiento neto del Cabildo por importe de 19.176.773,75 euros antes indicado y de la amortización anticipada de las deudas con entidades financieras de Buenavista Golf, S.A. por importe de 2.244.157,47 euros y de AGROTEIDE por importe de 3.796.797,62 euros con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, tanto del Cabildo como de Organismos Autónomos, al exceso de financiación afectada y a baja de gastos."

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO, FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

3.- Dación de cuenta del Informe de la Intervención General relativo a los Decretos dictados por la Presidencia durante el ejercicio 2016, resolviendo la discrepancia ante los reparos formulados por dicha Intervención y otras actuaciones de control interno.

En relación con este asunto, se Acuerda dar cuenta de un Informe – Resumen de Intervención sobre dicha cuestión, acompañado de sus Anexos con la documentación justificativa, cuyo tenor literal es el siguiente:

PRIMERO.- INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL CRITERIO DE ELEVACIÓN.

Dispone el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), según la redacción dada por el número Tres del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lo siguiente:

"1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos

propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

2. *Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.*

3. *El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local."*

En relación con el precepto citado, que también está contemplado en el apartado 6 de la Base 62 de Ejecución del Presupuesto, esta Intervención formula las siguientes consideraciones cuya valoración se estima que puede resultar de interés:

1.- Ámbito de actuación. En cuanto a los actos administrativos sometidos a fiscalización, debe tenerse en cuenta que el Cabildo Insular es una organización local compleja en la que, además de la Entidad Local, se integran Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y Empresas Públicas constituidas bajo fórmulas societarias diferentes y en la que concurre, además, un régimen de delegaciones y desconcentraciones específicas y genéricas.

Por ello, las resoluciones o acuerdos que son objeto de fiscalización hay que entenderlos en sentido amplio y referido a todos los órganos de gobierno existentes en la Entidad Local y sus Organismos Autónomos dependientes, excluyéndose las Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y Sociedades Mercantiles.

En este sentido, en el apartado cuarto de este Informe se detallan de manera separada los reparos efectuados por los Interventores Delegados de los Organismos Autónomos de esta Corporación.

2.- Informe del Presidente justificativo de su actuación. En aras a lograr una mayor transparencia en la información económico financiera de las Entidades y tal y como recoge el preámbulo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, resulta conveniente clarificar y deslindar el diferente ámbito de actuación que es consustancial a las funciones propias del régimen de intervención y fiscalización -que quedan sujetas a parámetros de control y fiscalización interna en la gestión económico-financiera y presupuestaria- de aquellas otras que corresponden a la actuación del cargo electo o personal directivo y que se basan necesariamente en aspectos de oportunidad o conveniencia. Como consecuencia de ello, la Ley 27/2013, 27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local introduce en el artículo 218 TRLRHL la posibilidad de que el Presidente de la Corporación presente ante el Pleno un informe justificativo de su actuación.

Es por ello que, con carácter previo a su elevación al Pleno, del presente Informe se dará traslado al Sr. Presidente de la Corporación a fin de que, a la vista del mismo, pueda elaborar y presentar el mencionado informe justificativo de su actuación, sin perjuicio de que, en caso de existir discrepancias respecto a los reparos efectuados, el Presidente podrá elevar su resolución "al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera", (artículo 218.2 del TRLRHL).

3.- Obligaciones de remisión de información en relación con los resultados de las actuaciones de la función interventora.

3.1.- Con la modificación del artículo 218 del TRLRHL, se introduce una nueva obligación para el órgano interventor que consiste en la remisión anual al Tribunal de Cuentas de todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, acompañados, en su caso, de los informes justificativos presentados por la Corporación. Ello deberá realizarse de forma telemática conforme al procedimiento establecido por la Resolución de 10 de julio de 2015 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la remisión telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

En relación a ello, debe indicarse que con fecha 28 de abril de 2017 por esta Intervención se ha remitido la información exigida por el Tribunal de Cuentas. Dicha remisión se realizó de forma telemática mediante firma electrónica a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales (www.rendiciondecuentas.es) siguiendo las instrucciones contempladas en la Instrucción mencionada.

3.2.- Otra nueva obligación de información de los resultados de las actuaciones realizadas en el ejercicio de la función interventora es la impuesta a través del último párrafo del artículo 213 del TRLRHL, que obliga al órgano interventor a remitir a la Intervención General del Estado un informe resumen de los resultados de los controles desarrollados en cada ejercicio. No obstante, su contenido, metodología de aplicación y plazo todavía están pendientes de desarrollo normativo, por lo que, de momento, parece inaplicable.

3.3.- Por último, con la reciente entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo artículo 122 establece que los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entiende que la elevación a conocimiento del Pleno debería incluir también a las cuatro entidades de carácter asociativo que han quedado adscritas al Cabildo y que son las siguientes:

- Consorcio de Extinción de Incendios de Tenerife: 30 reparos.
- Consorcio de Tributos de Tenerife: 2 reparos.
- Consorcio de la Isla Baja: informa negativo.

- Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación Turística del Puerto de la Cruz: informa negativo.

Se exponen a continuación, en la siguiente tabla, el número de reparos formulados por dichas entidades, distinguiéndose a su vez por materias:

	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife	Consorcio de Tributos de Tenerife	Consorcio de la Isla Baja	Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación Turística del Puerto de la Cruz	TOTAL
Contratación administrativa	9	0	0	0	9
Subvenciones	18	0	0	0	18
Personal	3	2	0	0	5
Convenios de colaboración	0	0	0	0	0
Encomiendas de gestión	0	0	0	0	0
Contratos privados	0	0	0	0	0
Anticipos de Caja Fija	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
TOTAL	30	2	0	0	32

SEGUNDO.- DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL RESULTADO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

En el ejercicio de la función interventora contemplada en el artículo 214.2.a) del TRLRHL, esta Intervención, de acuerdo con los datos extraídos del Sistema de Información Contable (SIGEC), ha llevado a cabo, en el transcurso del ejercicio de 2016, las siguientes actuaciones de control distribuidas atendiendo a la clasificación por programas de la aplicación presupuestaria imputable y concretamente según la política del gasto:

RESUMEN DE REPAROS SEGÚN LA POLÍTICA DEL GASTO

Área de Gobierno	Nº Reparos
PRESIDENCIA	16
COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA	0

GOBIERNO ABIERTO, ACCION SOCIAL Y ATENCION CIUDADANA	4
SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y SEGURIDAD	5
EMPLEO, COMERCIO Y DESARROLLO ECONOMICO	8
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	1
TENERIFE 2030: INNOVACION, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	9
POLITICA TERRITORIAL	3
TURISMO, INTERNACIONALIZACION Y ACCION EXTERIOR	7
JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTORICO	3
TOTALES	56

Como se puede apreciar el número de reparos formulados por la Intervención General en el ejercicio 2016 ascendió a 56, por lo que atendiendo a los datos reseñados, en comparación con el ejercicio anterior, se observa que en el ejercicio 2016 se formularon por Intervención 20 reparos menos que en el ejercicio 2015 (que fueron 76. No obstante, debe tenerse en cuenta que en el cómputo total no se han incluido 4 reparos que al cierre del ejercicio 2016 se encontraban pendientes de solventar.

Por razones obvias, en este informe sólo se computarán aquellos reparos solventados por el Sr. Presidente y por el Pleno Insular en el ejercicio 2016, sin hacer referencia a todos aquellos reparos emitidos en su momento por la Intervención en aquellos casos en que fueron aceptados o asumidos por los Servicios Gestores y consecuentemente subsanadas las anomalías o irregularidades que dieron lugar a su emisión, al resultar innecesario en este caso la resolución de la correspondiente discrepancia.

El artículo 216.2 del TRLRHL, relativo a los efectos de los reparos formulados en ejercicio de la función interventora determina la suspensión de la tramitación del expediente hasta que el reparo sea solventado en los siguientes casos:

- a) *Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el presupuesto no sea adecuado.*
- b) *Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.*
- c) *En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.*
- d) *Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.*

Siguiendo esta casuística se presenta a continuación el número total de reparos formulados por la Intervención General, indicándose también el importe total en euros que los mismos suponen:

Causa de reparo	Nº total de reparos	Importes
ARTº 216.2 A) Insuficiencia o inadecuación de crédito	2	20.300,00 €
ARTº 216.2 B) Falta de fiscalización de actos previos a las órdenes de pago	0	0,00 €
ARTº 216.2 C) Omisión de requisitos o trámites esenciales	54	215.252.415,76 €
ARTº 216.2 D) Reparos deriva de comprobaciones materiales	0	0,00 €
TOTALES	56	215.272.715,76 €

Para los supuestos en que la discrepancia planteada por Intervención ha sido solventada, se indica a continuación el número de reparos solventados por cada uno de los órganos competentes, esto es, el Pleno en los casos de reparos formulados por insuficiencia o inadecuación de crédito del artículo 216.2 a) del TRLRHL o por tratarse de asuntos de su competencia y el Presidente de la Corporación en el resto de los casos. Se indica también para cada uno de ellos el correspondiente importe:

Reparos resueltos	Número	Importe
Por el Pleno	2	20.300,00 €
Por el Presidente	54	215.252.415,76 €
TOTAL	56	215.272.715,76 €

Asimismo, y si bien el precepto hace referencia únicamente a *las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados*, se consigna a continuación, como medida de transparencia para facilitar su seguimiento, el número de reparos pendientes de subsanar a 31 de diciembre de 2016, también con su correspondiente importe:

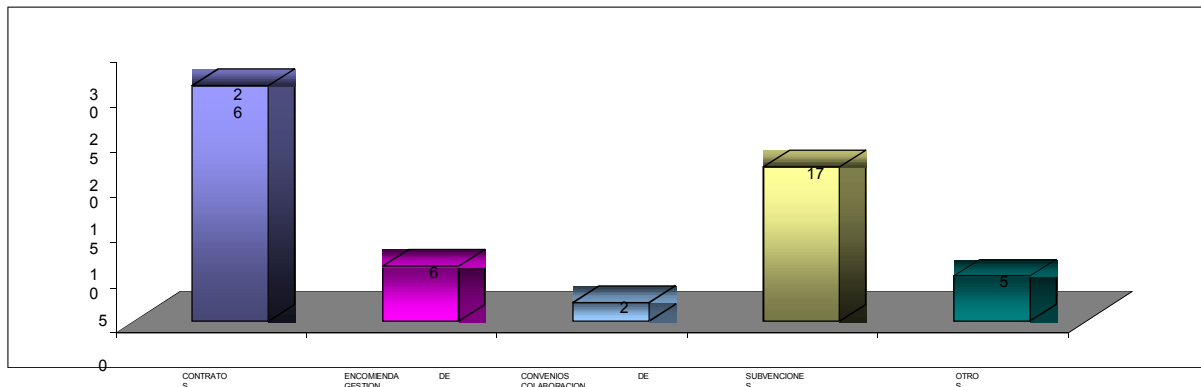
Disposición vulnerada	Órgano competente para solventar la discrepancia	Reparos pendientes de subsanar a 31 de diciembre de 2016	Importe
Artículo 216.2 c)	Presidente	4	1.407.888,89 €
		4	1.407.888,89 €

Se concluye, por tanto, que en total durante el ejercicio 2016 se formularon por Intervención un total de 60 reparos de los cuales han sido solventados 56, quedando a 31 de diciembre de 2016 un total de 4 reparos pendientes de solventar de los que se dará cuenta con ocasión de la dación de cuenta de correspondiente al ejercicio 2017, en su caso.

Se acompaña, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 218 del TRLRHL, como documentación complementaria relativa a la función fiscalizadora durante el ejercicio 2016, el **Anexo I** que comprende para cada actuación de fiscalización informada negativamente con nota de reparo la siguiente documentación: informe propuesta del Servicio Gestor, informe de Intervención, resolución o acuerdo finalmente adoptado y, según corresponda, decreto de Presidente o acuerdo plenario solventando el reparo.

TERCERO.- TIPOS DE EXPEDIENTES Y MOTIVOS DE DISCREPANCIA.

Como se observa en el cuadro relativo a las causas de reparo, el mayor número de reparos se formulan por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, es decir por la vulneración del artículo 216.2 c) del TRLRHL, concretamente 54 de un total de 56 reparos, que afectan a 215.252.415,76 €



Del análisis de los motivos de discrepancia en los expedientes reparados por el artículo 216.2 c) del TRLRHL y atendiendo a la naturaleza jurídica de cada expediente, se concluye que, en su mayor parte, los reparos solventados se refieren a las materias de **contratación administrativa, encomiendas de gestión y convenios de colaboración y subvenciones**, lo que resulta coherente con la actividad desarrollada por este Cabildo Insular que se centra principalmente en estos ámbitos de actividad administrativa.

A) CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

En cuanto a los motivos concretos de discrepancia producidos se destacan por su reiteración los siguientes:

1.- La adopción de resoluciones o acuerdos sin que previamente se haya tramitado el procedimiento legalmente establecido, dando lugar a situaciones constitutivas de "vía de hecho", o la prolongación de los efectos del contrato una vez que éste ya ha quedado extinguido.

2.- La utilización del contrato menor en sucesivas contrataciones con la misma empresa y objeto, constituyendo un fraccionamiento del objeto contractual.

3.- La falta de adecuada justificación de la existencia de causas imprevistas en las modificaciones de los contratos.

4.- La utilización del régimen excepcional de la contratación de emergencia más allá de los supuestos legalmente contemplados.

B) ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.

En la mayoría de los casos las encomiendas de gestión se reparan por no ajustarse su procedimiento a lo establecido en la Base 80ª de Ejecución del Presupuesto que regula de forma pormenorizada la tramitación de estos expedientes, especialmente en lo relativo al estudio de ingresos y costes que suponen el importe de las obras, trabajos, servicios o suministros u otras actividades que se encomiendan o por exceder los límites establecidos para los abonos anticipados.

C) CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

El número de reparos en esta materia se debe fundamentalmente a la utilización de la fórmula del convenio de colaboración con objeto de eludir la contratación administrativa o la convocatoria de una subvención. En su mayoría, los reparos se basan en el hecho de que, tras la imagen externa de tales convenios, subyace en realidad una relación diferente que debe encuadrarse por su naturaleza jurídica en un contrato administrativo o en una subvención y, además, en la omisión de trámites esenciales para la aprobación de los mismos.

D) SUBVENCIONES.

Se observa en 2016 un aumento de los expedientes de subvenciones reparados que pasan de 12 a 17. Entre los motivos que han sido objeto de reparo se encuentran los siguientes:

1.- Defectos de tramitación de los expedientes tales como ausencia de documentación o de informes preceptivos, valoración defectuosa que no se ajusta a los criterios establecidos en las Bases en ocasiones por ser éstas demasiado restrictivas, falta de coincidencia de los presupuestos presentados y falta de justificación de subvenciones concedidas anteriormente a los mismos perceptores y por los mismos conceptos.

2.- El otorgamiento de subvenciones directas sin que se justifique en el expediente la imposibilidad o dificultad de realizar una convocatoria pública, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley General de Subvenciones y 19 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Corporación Insular. Cabe señalar que este supuesto es el que se ha registrado con mayor frecuencia a lo largo del ejercicio 2016.

3.- La no aplicación de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, a gastos que por su naturaleza debían sujetarse a dicha Ley. Tales gastos se refieren fundamentalmente a gastos que bajo el concepto de representativos o protocolarios encierran verdaderas subvenciones en especie y a determinados contratos menores, contratos de patrocinio o convenios de colaboración que, dada su naturaleza y contenido, deberían quedar sometidos a la referida normativa.

4.- La ausencia de la correcta acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o la falta de adecuada justificación del gasto de acuerdo con la finalidad para la que fue concedida.

5.- No someterse a las obligaciones de publicidad que establece el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, recientemente modificado por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

CUARTO.- REPAROS EFECTUADOS POR LOS INTERVENTORES DELEGADOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CORPORACIÓN.

Se exponen a continuación, en la siguiente tabla, el número de reparos formulados por las Intervenciones Delegadas de los diferentes Organismos Autónomos, distinguiéndose a su vez por materias:

	Instituto Insular de Atención Social Y Sociosanitaria	Patronato Insular de Música	Consejo Insular de Aguas de Tenerife	Museos de Tenerife	TOTAL
Contratación administrativa	269	5	27	0	301
Subvenciones	29	0	0	0	29
Personal	24	0	0	0	24
Convenios de colaboración	0	0	1	1	2
Encomiendas de gestión	0	2	0	0	2
Contratos privados	1	0	0	0	1
Anticipos de Caja Fija	0	0	0	0	0
Otros	8	0	0	0	8
TOTAL	331	7	28	1	367

Como se puede apreciar el número de reparos formulados por las Intervenciones Delegadas en el ejercicio 2016 ascendió a 367, por lo que atendiendo a los datos reseñados, en comparación con el ejercicio anterior, se observa que en el ejercicio 2016 se formularon por las Intervenciones 309 reparos menos que en el ejercicio 2015 (que fueron 676)

Atendiendo al **principio de importancia relativa**, debe tenerse en cuenta el volumen de recursos públicos que se gestionan a través de los distintos Organismos Autónomos, aspecto cuantitativo que condiciona el número de operaciones y expedientes fiscalizados, ascendiendo los créditos definitivos del Estado de Gastos del Presupuesto para el Ejercicio 2016 de los Organismos Autónomos de este Excmo. Cabildo Insular, a las siguientes cifras:

ORGANISMO AUTÓNOMO	PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Museos y Centros (OAMC)	8.746.944,83 €
Patronato Insular de Música (PIM)	5.892.938,90 €
Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATFE)	34.467.651,11 €
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS)	142.739.921,26 €
TOTAL	191.847.456,51€

De forma sucinta se señalan a continuación los motivos de discrepancia más relevantes en los expedientes objeto de reparo durante el ejercicio 2016 en los Organismos Autónomos:

A) CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

1.- La superación del importe máximo establecido en el artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) para la celebración de contratos menores y aprobación de prórrogas de los mismos que se encuentran prohibidas de manera expresa en el artículo 23.3 del TRLCSP.

2.- La utilización de la figura del contrato menor en sucesivas contrataciones o prórrogas con la misma empresa y objeto, constituyendo un fraccionamiento del objeto contractual.

3.- La realización de contrataciones sin que previamente se haya seguido el procedimiento legalmente previsto, dando lugar a situaciones constitutivas de "vía de hecho".

4.- Utilización del trámite de urgencia sin encontrarse debidamente motivada la declaración de la misma por el órgano de contratación.

5.- Por efectuar la contratación de prestaciones de recaudación que suponen un incumplimiento en la gestión, liquidación y recaudación de los precios públicos regulada en la Ordenanza correspondiente y en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

6.- El incremento de los reparos del Organismo Autónomo IASS en materia de contratación, se explica según informe del Interventor Delegado en la falta de criterio en la facturación y en la aplicación irregular del IGIC.

B) SUBVENCIONES.

1.- La falta de acreditación de las razones debidamente justificadas que permiten acudir al otorgamiento de una subvención directa sin promover la concurrencia, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones y 19 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Corporación Insular.

2.- La incorrecta justificación de las subvenciones otorgadas por realizarse fuera del plazo establecido, por no efectuarse conforme a lo exigido en las Bases que las regulan, por no ajustarse las facturas presentadas a la normativa vigente

o por destinarse los fondos públicos a fines distintos de los que motivaron su concesión.

C) GASTOS DE PERSONAL.

1.- Abono de remuneraciones no amparadas en el Convenio Colectivo, retribuciones de funciones inherentes a puestos no desempeñados, inadecuación presupuestaria de gastos, incorrecta cotización en materia de seguridad social, falta de regularización de incidencias por la tramitación de expediente de reintegro por pagos indebidos en meses anteriores, etc.

2.- Abono de horas extraordinarias contraviniendo lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular y Resolución de la Sra. Coordinadora Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica.

3.- Nóminas de productividad variable del personal laboral, en concreto el cómputo de periodos no previstos en el Convenio Colectivo a la hora de satisfacer a cada trabajador y las regularizaciones llevadas a cabo como consecuencia de reclamaciones de dicho personal.

D) CONVENIOS DE COLABORACIÓN:

1.- Utilización de la fórmula del convenio de colaboración para eludir la contratación administrativa.

2.- Realización de convenios y abonos de cantidades sin formalizar previamente los Convenios correspondientes, ejecutándose por la vía de hecho.

3.- Inexistencia de justificación de los gastos en el plazo concedido.

Se acompaña **Anexo II** en el que se incluye, para cada actuación fiscalizadora en la que se ha informado negativamente con nota de reparo, fotocopia del informe de la Intervención Delegada, de la resolución o acuerdo reparado y del Decreto del Presidente o Acuerdo del órgano colegiado superior del Organismo solventando el reparo.

QUINTO.- FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE INGRESOS.

El artículo 218 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), establece que el órgano interventor elevará al Pleno un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, debiendo ponerse de manifiesto que en este Excmo. Cabildo Insular se efectúa, con carácter general, una toma de razón en contabilidad de las liquidaciones y autoliquidaciones de ingresos que se practican, al no disponerse de recursos suficientes, lo que supone una limitación para el desempeño de la función fiscalizadora con las debidas garantías y efectividad, máxime teniendo en cuenta la amplitud y extensión de las áreas de riesgo existentes.

Dejando sentado lo anterior, merece especial atención, tanto por su importancia cuantitativa (126.898.990,00.-€, cifra de previsiones iniciales en el Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2016) como por su destacado peso relativo dentro de las previsiones del capítulo II "Impuestos Indirectos" del Estado de Ingresos (36,09%), la inclusión, un año más, de los recursos correspondientes a la participación de los Ayuntamientos de la Isla en los recursos procedentes del Régimen Económico-Fiscal de Canarias. Al respecto esta Intervención ha manifestado en distintas actuaciones de control su desacuerdo, reiterándose en el criterio ya expresado en el Informe del Presupuesto correspondiente al

ejercicio 2006 y posteriores, considerando que tanto los flujos de fondos líquidos percibidos correspondientes a dicha participación como sus correlativos pagos a los Ayuntamientos deben recibir el tratamiento de operaciones no presupuestarias, formulándose al respecto la observación de que la configuración presupuestaria actual constituye una técnica poco ortodoxa o inadecuada, que afecta de forma severa, dada su importancia cuantitativa, al principio de imagen fiel, por lo que debe ser subsanada y corregida.

Por otra parte, y a modo de resumen, las restantes anomalías principales puestas de manifiesto durante el ejercicio 2016 han sido las siguientes:

- La modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por la realización de actividades administrativas en materia de caza, estableciendo bonificaciones económicas que suponen un incumplimiento de los principios de justicia, igualdad y equitativa distribución de la carga tributaria, establecidos en el artículo 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y consagrados en los artículos 14 y 31 de nuestro texto constitucional, así como de lo preceptuado en el artículo 9 del TRLRHL, que prohíbe el reconocimiento de otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
- Los ingresos percibidos por la prestación del servicio de tratamiento de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano (SANDACH) en el Complejo Ambiental de Tenerife deberían tener la calificación jurídica de tasa y, consecuentemente, aprobarse la correspondiente Ordenanza Fiscal conforme al artículo 15 del TRLRHL, así como resulta improcedente la no liquidación de los intereses correspondientes por los retrasos en que se ha incurrido por la concesionaria conforme al acuerdo de autorización en vigor para efectuar los ingresos en las cuentas de esta Corporación Insular.
- Revocación de las resoluciones de inicio de procedimientos sancionadores en los que no haya recaído resolución de terminación y no incoación de nuevos procedimientos sancionadores en tanto no se apruebe una nueva regulación sobre el acceso a los montes y circulación de vehículos de motor por pistas forestales, habiéndose instado por esta Intervención la realización de los trámites administrativos oportunos para solventar la ausencia de regulación indicada (sin perjuicio de que, si fuera necesario, se dicten las medidas provisionales que se estimen necesarias), advirtiéndose de la responsabilidad patrimonial en que puede incurrirse en caso de producirse algún incidente y el perjuicio que puede estarse irrogando al interés general ante la inactividad de esta Administración si ha devenido insuficiente la regulación actual, cuya finalidad es garantizar el acceso a las pistas forestales en condiciones de seguridad para los usuarios sin afectar al destino principal de las mismas (gestión agroforestal, labores de vigilancia y extinción de incendios, etc.), responsabilidad que puede hacerse extensiva a las autoridades y demás personal a su servicio.
- La documentación justificativa auxiliar a remitir por los Servicios gestores a la Tesorería de la Corporación con respecto a los ingresos que en concepto de tasas, precios públicos, reclamaciones de daños al

dominio público, etc. se liquidan a través de las distintas cuentas corrientes restringidas abiertas al efecto, cuya gestión y control tienen encomendada, además de no remitirse en general con la periodicidad mensual exigida en las Bases de Ejecución del Presupuesto y no ser original, adolece de la información que resulta exigible para proceder a su adecuada contabilización, relativa a los datos identificativos del tipo de ingreso y del sujeto pasivo, lo que viene además a poner en cuestión que se esté efectuando la obligada verificación de la materialización de los ingresos con carácter previo a la tramitación de la solicitud de que se trate conforme a lo exigido en las distintas Ordenanzas que regulan su exacción.

En lo que respecta a los Organismos Autónomos, no se ha informado de anomalías en la gestión de ingresos en el ejercicio 2016, a excepción del O.A. Patronato Insular de Música.

Con respecto a dicho Organismo señalar que el procedimiento seguido de gestión, liquidación y recaudación de los precios públicos por los servicios que presta y los términos y condiciones en que los mismos se han realizado no se ajusta a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de su exacción y en las Bases de Ejecución del Presupuesto y, por ende, en la normativa vigente, así como tampoco a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 23 de septiembre de 2013, por el que se encomienda a Auditorio de Tenerife la gestión del cobro de los precios públicos del Patronato Insular de Música, puesto que en el caso de que se utilicen medios electrónicos o telemáticos para su pago por los sujetos pasivos [esto es, a través de la web de "Auditorio de Tenerife, S.A.U. o de Terminales de Punto de Venta (T.P.V.)], el producto de dicha venta debe materializarse en una cuenta restringida de titularidad del Patronato Insular de Música y la recaudación de dinero en efectivo realizada a través de la taquilla del Auditorio debe ser objeto de depósito en dicha cuenta restringida titularidad del Patronato Insular de Música con una periodicidad quincenal.

Sin embargo, los ingresos de derecho público procedentes de la venta de abonos y entradas a través de la web de "Auditorio de Tenerife, S.A.U." o de Terminales de Punto de Venta (T.P.V.) se producen en una cuenta titularidad de la sociedad mercantil Auditorio de Tenerife, que posteriormente realiza su ingreso con retrasos injustificados y/o de forma fraccionada en la cuenta restringida del Patronato Insular de Música, no se cumple con la periodicidad quincenal de los ingresos que recauda por cuenta del Organismo Autónomo en efectivo, no se aporta la justificación de la recaudación obtenida en los términos exigidos y se ha observado la aplicación de exenciones en supuestos no autorizados o sin quedar debidamente acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para su aplicación, con las infracciones y responsabilidades en que puede incurrirse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 y ss de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD.

4.- Dación de cuenta al Pleno del Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias relativo a la fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de Tenerife, ejercicio 2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, el Pleno **ACUERDA** quedar enterado del contenido del Informe de Fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias, relativo a la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2015.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN JURÍDICO, RELACIONES SINDICALES Y SECTOR PÚBLICO.

5.- Dación de cuenta de aprobación, por Consejo de Gobierno Insular, del Convenio de Marco entre el Cabildo Insular de Tenerife y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria para la realización de prácticas externas universitarias.

Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular adoptado en sesión de 14 de febrero de 2018 relativo al expediente de Convenio de Cooperación Educativa entre el Cabildo Insular de Tenerife y la **Universidad de Las Palmas de Gran Canaria**, para la realización de prácticas externas en el ámbito del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, sus Organismos Autónomos Consorcios y el Sector Público adscrito al mismo, en el ejercicio de la competencia delegada por Acuerdo Plenario, **este Pleno queda enterado** en los términos que obran en el expediente

SERVICIO TÉCNICO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

6.- Dación de cuenta al Pleno de la aprobación, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de febrero de 2018, de la Memoria Anual de Actividades del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y del Informe de Accidentabilidad Laboral del Personal de la Corporación Insular, correspondientes al año 2017; así como de la Programación Anual de Actividades para el año 2018 del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Plenaria Permanente ordinaria del Área de Presidencia de fecha 26 de febrero de 2018, relativo al Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2018, en virtud del cual se dispone dar cuenta al Pleno de la Corporación, a los efectos de su conocimiento, de la Memoria Anual de Actividades del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y del Informe de Accidentabilidad Laboral del Personal de la Corporación Insular, correspondientes al año 2017; así como de la Programación Anual de Actividades para el año 2018 del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales; elaborados por el Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, y,

Resultando que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2011, aprobó la tercera edición del Plan de Prevención de Riesgos Laborales como documento básico que describe el sistema de gestión, la política, la organización, funciones y responsabilidades, áreas de actuación y documentos del sistema de gestión de la prevención.

Resultando que con fecha 26 de febrero de 2018 la Comisión Plenaria Permanente ordinaria del Área de Presidencia emite Dictamen favorable, relativo al Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el

día 20 de febrero de 2018, en virtud del cual se dispone dar cuenta al Pleno de la Corporación, a los efectos de su conocimiento, de la Memoria Anual de Actividades del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y del Informe de Accidentabilidad Laboral del Personal de la Corporación Insular, correspondientes al año 2017; así como de la Programación Anual de Actividades para el año 2018 del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales.

Considerando que la promulgación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, han establecido unas necesidades específicas de actuaciones a desarrollar en materia de prevención en el ámbito laboral, por las que las entidades públicas y privadas tienen entre sus preceptivos deberes en materia de prevención de riesgos laborales, el de la elaboración anual de la memoria y de la programación de su servicio de prevención (artículo 15.5 del citado RD 39/97), que en el caso del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife está constituido por el Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. En cumplimiento de dicha normativa, por el referido Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales se ha elaborado la Memoria Anual de actividades, así como el Informe de Accidentabilidad Laboral, correspondientes al año 2017, que obran en el expediente; así como la Programación Anual de Actividades para el año 2018, que también obra en el expediente.

Considerando que en cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 39, apartado 2, párrafo d), de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, se ha remitido por correo electrónico a los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2017 y el Informe de Accidentabilidad Laboral del año 2017, dando cumplimiento con ello, igualmente, al deber establecido por la Orden de 8/5/2003 de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Considerando que, según lo establecido en los apartados 8.1 y 8.2 del Plan de Prevención referido en el resultando primero de la presente propuesta, así como en los Procedimientos Operativos PSP-02 y PSP-19 del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (aprobados en sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno de 1 de diciembre de 2003), la Memoria Anual de Actividades es un documento que ha de ser aprobado por el Consejo de Gobierno Insular y posteriormente elevado al Pleno para su conocimiento. Asimismo, en la medida en que la citada normativa establece que el Informe de Accidentabilidad laboral de la Corporación debe ser incorporado a la Memoria Anual de Actividades Preventivas, debe entenderse que ha de seguir idénticos trámites.

Considerando que se ha elaborado por el Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales la Programación Anual de Actividades correspondiente al año 2018, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 del RD 39/1997. Por su parte, dicha Programación Anual ha sido conocida e informada en el seno del Comité de Seguridad y Salud de la Corporación, en sesión ordinaria de 31 de enero de 2018, dándose así cumplimiento a lo establecido por el artículo 39 de la Ley 31/1995.

Considerando que, según lo establecido en el artículo 29.5, letra b) del Reglamento Orgánico de la Corporación, la aprobación de la Programación Anual correspondiente al año 2018 es competencia del Consejo de Gobierno Insular.

Considerando que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria de fecha 20 de febrero de 2018, acuerda:

"PRIMERO.- *Aprobar la Memoria Anual de Actividades del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente al año 2017, así como del Informe Estadístico de Accidentabilidad Laboral del año 2017.*

SEGUNDO.- *Aprobar la Programación Anual del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente al año 2018.*

TERCERO.- *Dar cuenta al Pleno de la Corporación del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular a los efectos de su conocimiento de la Memoria Anual de Actividades del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente al año 2017, así como del Informe Estadístico de Accidentabilidad Laboral del año 2017 y de la Programación Anual de Actividades del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente al año 2018."*

Considerando que, según lo dispuesto en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Pleno de la Corporación debe ser informado, tanto de la Memoria Anual de Actividades Preventivas como de la Programación Anual.

Por todo lo expuesto, a la vista del Dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Presidencia **el PLENO queda enterado** del contenido **de la Memoria Anual de Actividades del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente al año 2017, así como del Informe Estadístico de Accidentabilidad Laboral del año 2017 y de la Programación Anual de Actividades del Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente al año 2018.**

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA.

SECRETARÍA DELEGADA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DEL IASS.

7.- Dación de cuenta de la aprobación y suscripción de la Adenda de modificación y prórroga del Convenio de Colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2016 entre el Instituto Canario de Igualdad y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para el desarrollo del Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de Tenerife.

Visto el expediente de dación de cuenta al Pleno de la aprobación y suscripción de la Adenda de modificación y prórroga del Convenio de Colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2016 entre el Instituto Canario de Igualdad y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para el desarrollo del Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de Tenerife, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y en el artículo 29.5.s) del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife, el Pleno queda enterado de dicho asunto.

8.- Dación de cuenta de la aprobación y suscripción del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de las Consejerías de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Sanidad, y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes, destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias.

Visto el expediente de dación de cuenta al Pleno de la aprobación y suscripción del Convenio de cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de las Consejerías de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Sanidad, y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y en el artículo 29.5.s) del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife, el Pleno queda enterado de dicho asunto.

9.- Dación de cuenta de la aprobación y suscripción del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, para la prestación del servicio de promoción de la autonomía personal para el año 2017.

Visto el expediente de dación de cuenta al Pleno de la aprobación y suscripción del Convenio de cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, para la prestación del servicio de promoción de la autonomía personal para el año 2017, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y en el artículo 29.5.s) del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife, el Pleno queda enterado de dicho asunto.

ÁREA DE TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.

10.- Dación de cuenta al Pleno de la aprobación de los Convenios de Colaboración para el fomento de la Sociedad de la Información, a través de la Red Insular de Centros de Inclusión Digital (RICID), entre el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de la Villa de Los Silos y La Victoria de Acentejo (A-513-2016).

En relación con el expediente de Gestión y dinamización de la Red Insular de Centros de Inclusión Digital del Cabildo Insular de Tenerife (A513-2016) y, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

El Consejo de Gobierno Insular, mediante acuerdos adoptados el 12 de diciembre de 2017 y el 9 de enero de 2018, aprobó los Convenios de Colaboración para el fomento de la Sociedad de la Información a través de la Red

Insular de Centros de Inclusión Digital (RICID), entre el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de la Villa de Los Silos y la Victoria de Acentejo, respectivamente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), "las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado (...)"

Así mismo, en su apartado 3 de ese mismo artículo, se establece que "la suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera"

El artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias establece que los Cabildos Insular podrán celebrar convenios con los Ayuntamientos de su isla en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público.

Segundo.- De acuerdo con el artículo 29.5.s) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Tenerife, entre las atribuciones del Consejo de Gobierno Insular se encuentra, "*La aprobación de todos los convenios de colaboración que celebre la Corporación Insular, ya sea con entidades privadas o públicas, amparen o no gastos o su cuantificación no se encuentre determinada en el momento de su aprobación, dando cuenta posterior al Pleno, en la primera sesión que se celebre, en este último supuesto, cuando se trate de convenios entre Administraciones públicas.*" Consecuentemente, una vez aprobado el Convenio específico, debe darse cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Respecto a la competencia para la formalización del Convenio, el artículo 6.1.m) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Tenerife otorga al Presidente de la Corporación la facultad para la firma de convenios suscritos con otras Administraciones Públicas.

Por lo expuesto y, considerando las atribuciones que ostenta este Consejero con delegación especial en TIC y Sociedad de la Información, en virtud de Resolución de delegación de competencias de fecha 9 de julio de 2015, a la vista de todo lo expuesto anteriormente, se eleva al Pleno la siguiente propuesta:

En atención a los antecedentes y fundamentos descritos y previo dictamen de la Comisión Plenaria del Área de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, Juventud e Igualdad, el Pleno **ACUERDA:**

QUEDAR ENTERADO de la aprobación de los Convenios de Colaboración para el fomento de la Sociedad de la Información a través de la Red Insular de Centros de Inclusión Digital (RICID), entre el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de la Villa de Los Silos y de la Victoria de Acentejo, mediante acuerdos del Consejo de Gobierno Insular adoptados en sesiones ordinarias celebradas el 12 de diciembre de 2017 y el 9 de enero de 2018, respectivamente.

11.- Dación de cuenta al Pleno de la aprobación del Convenio de Colaboración para el fomento de la Sociedad de la Información a través de la Red Insular de Centros de Inclusión Digital (RICID), entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Úrsula (A-513-2016).

En relación con el expediente de Gestión y dinamización de la Red Insular de Centros de Inclusión Digital del Cabildo Insular de Tenerife (A513-2016) y, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

El Consejo de Gobierno Insular, mediante acuerdo adoptado el 6 de febrero de 2018, aprobó el Convenio de Colaboración para el fomento de la Sociedad de la Información a través de la Red Insular de Centros de Inclusión Digital (RICID), entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Úrsula.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Primero.- El artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), "las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado (...)"

Así mismo, en su apartado 3 de ese mismo artículo, se establece que "la suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera"

El artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias establece que los Cabildos Insular podrán celebrar convenios con los Ayuntamientos de su isla en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público.

Segundo.- De acuerdo con el artículo 29.5.s) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Tenerife, entre las atribuciones del Consejo de Gobierno Insular se encuentra, "*La aprobación de todos los convenios de colaboración que celebre la Corporación Insular, ya sea con entidades privadas o públicas, amparen o no gastos o su cuantificación no se encuentre determinada en el momento de su aprobación, dando cuenta posterior al Pleno, en la primera sesión que se celebre, en este último supuesto, cuando se trate de convenios entre Administraciones públicas.*" Consecuentemente, una vez aprobado el Convenio específico, debe darse cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Respecto a la competencia para la formalización del Convenio, el artículo 6.1.m) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Tenerife otorga al Presidente de la Corporación la facultad para la firma de convenios suscritos con otras Administraciones Públicas.

En atención a los antecedentes y fundamentos descritos y previo dictamen de la Comisión Plenaria del Área de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, Juventud e Igualdad, el Pleno ACUERDA:

QUEDAR ENTERADO de la aprobación del Convenio de Colaboración para el fomento de la Sociedad de la Información a través de la Red Insular de Centros de Inclusión Digital (RICID), entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Úrsula, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular adoptado en sesión ordinaria celebradas el 06 de febrero de 2018.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES.

12.- Dación cuenta de la aprobación de la II Adenda al Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de el Puerto de la Cruz, dentro del programa Tenerife + Activa 2016 - 2019, de mejora y acondicionamiento de instalaciones deportivas municipales, en el año 2017.

Vista resolución de la Consejera Delegada de Deportes de 02 de agosto de 2017, que se transcribe a continuación:

"La Consejera Delegada de Deportes adoptó el 02 de agosto de 2017 la siguiente resolución:

"ANTECEDENTES

PRIMERO.- *Que el 27 de junio de 2014, la Corporación Insular aprobó, en sesión ordinaria del Pleno, el texto del convenio con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que incluía como actuación la reparación de la cubierta del Pabellón Miguel Ángel Díaz Molina.*

SEGUNDO.- *Que el 27 de agosto de 2014, se suscribe un Convenio de Colaboración entre el Cabildo Insular y el Ayuntamiento para la ejecución de las obras de reparación de la cubierta del Pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, además de la reparación de cinco torres de iluminación en el campo municipal de beisbol.*

TERCERO.- *Que el 5 de julio de 2016, el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife aprobó el **Programa "Tenerife + Activa, de Mejora y Acondicionamiento de Instalaciones Deportivas Municipales**, en las cuales figura como actuación la precitada reparación de la cubierta en el Pabellón Miguel Ángel Díaz Molina.*

CUARTO.- *Que el 25 de julio de 2016, la Corporación Insular aprueba, en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular, una Adenda al precitado Convenio de Colaboración, en el sentido de establecer los porcentajes de financiación y el valor estimado de la actuación por importe de 405.949,09 euros.*

QUINTO.- *Que, a fecha de hoy, esta actuación se está ejecutando, habiéndose certificado un importe total de 255.007,14 euros.*

SEXTO.- *Que, el 19 de mayo de 2017, el Ayuntamiento de El Puerto de la Cruz solicita al Cabildo Insular que se incorpore en el citado Programa "Tenerife + Activa" una actuación para sustituir el pavimento de esta instalación, cuestión que está totalmente ligada a la reparación de la cubierta, habida cuenta que la impermeabilización de la misma, permitiría sustituir el pavimento con garantías.*

SÉPTIMO.- *Que, a este respecto, la normas de funcionamiento del citado programa, prevén en su apartado trece lo siguiente:*

"9. MODIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES

9.1. Las actuaciones podrán ser modificadas a instancia del CIT y/o el Ayuntamiento si existieran condicionantes que así lo recomendaran y, siempre, dentro de los parámetros que fundamentaron la elegibilidad de las actuaciones.

9.2. De este modo, las modificaciones, en un primer nivel, serán estudiadas y valoradas por el Servicio Administrativo de Deportes, el cual elevará un informe al Consejo de Gobierno Insular para su aprobación, en su caso.

9.3. Para la correcta valoración de las modificaciones presentadas por los Ayuntamientos se tendrán en cuenta los criterios de Red Básica y que debe acreditar la presencia de un interés público para esta Corporación Insular, alineándose con los objetivos de este Programa.”

OCTAVO.- En este sentido, consta en el expediente informe de la Unidad de Promoción Deportiva, de 26 de mayo de 2017, relativo a la oportunidad de la actuación como mejora cualitativa de la instalación deportiva que forma parte de la Red Básica de Instalaciones Deportivas de la Isla de Tenerife.

NOVENO.- Que, además de lo anterior, figura en el expediente informe de la Unidad Técnica de Obras, de , 13 de junio de 2014, relativo a la reparación de las instalaciones deportivas del Campo de Béisbol y del Pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, en el cual se señalaba lo siguiente:

“ (...) derivado de la falta de estanqueidad de la cubierta desde la puesta al uso del edificio, es el precario estado en el que se encuentra el parquet de la cancha deportiva con piezas astilladas y sueltas que pueden generar situaciones de peligro para los usuarios.”

DÉCIMO.- Con fecha 28 de julio de 2017, Intervención General emitió informe favorable a la aprobación de la citada Adenda.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- Los Cabildos insulares, como órganos de gobierno, administración y representación de las islas, ejercen las competencias propias que corresponden a las islas y las que le sean delegadas por otras administraciones públicas de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local y en su legislación específica.

Como instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde a los cabildos insulares el ejercicio de las funciones, competencias y facultades que se determinan en el Estatuto de Autonomía de Canarias, así como las competencias autonómicas que le sean atribuidas, transferidas o delegadas conforme a lo establecido en la ley de Cabildos entre las asumidas por la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias y en el resto del ordenamiento jurídico, conforme a lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

SEGUNDO.- El Cabildo insular de Tenerife, en virtud del artículo 2.B) del Decreto 152/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canarias a los Cabildos Insulares en materia de cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico, ostenta las siguientes **competencias:**

"1. Fomentar y coordinar la práctica del deporte para todos y la educación física no escolar. (...)

4. La coordinación de las Administraciones municipales de la isla en la promoción y difusión de la cultura física y deportiva. (...)

7. Elaboración, aprobación y ejecución de los Planes Insulares de construcción, modernización y ampliación e instalaciones deportivas, atendándose a las directrices del Plan Canario de Infraestructuras Deportivas."

TERCERO.- El artículo 2.2 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, establece que las Administraciones Públicas deben garantizar la actividad físico-deportiva, entre otras, mediante las siguientes líneas de actuación:

a) La promoción del deporte en todas sus expresiones.

b) La planificación y promoción de una **red de instalaciones deportivas suficiente y racionalmente distribuida.**

(...)

g) La asignación de recursos para atender, con carácter global, las líneas generales de actuación.

Asimismo, el artículo 9 en su apartado 2.a) de la Ley 8/1997, atribuye a los Cabildos la promoción de la actividad física y deportiva, estableciendo asimismo, en el artículo 11 como uno de los principios generales para ejercer las competencias en materia de actividad física y deportiva de las diferentes Administraciones Públicas, el de colaboración, utilizando como técnica la celebración de convenios.

CUARTO.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en su artículo 6, apartado 2, dispone que:

"En todo caso, en los términos de la presente ley y de la legislación reguladora de los distintos sectores de actuación pública, **se atribuirán a los cabildos insulares competencias** en las materias siguientes:

(...)

o) Cultura, **deportes**, ocio y esparcimiento.(...)"

QUINTO.- Que el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas habilita a las Administraciones Públicas para la celebración de convenios con personas de derecho público o privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado.

"1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

(...)”

Asimismo, la celebración de Convenios de Colaboración se encuentra amparada en la previsión legal contenida en el artículo 15 de la LRJAPC:

“El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y éstos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público”.

SEXTO.- El Reglamento Orgánico del Cabildo, establece en la letra s) del artículo 29.5 la competencia del Consejo de Gobierno Insular para aprobar convenios de colaboración que celebre la Corporación Insular con otras Administraciones Públicas, dando cuenta posterior al Pleno, en la primera sesión que se celebre.

De acuerdo con el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aportación financiera de la Corporación Insular se supedita de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

SÉPTIMO.- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, introduce modificaciones en la Ley de Bases de Régimen Local limitando —en el artículo 7— el ejercicio de competencias de las entidades locales a aquellas que son propias o por delegación. El artículo 25.2 a), en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, establece como competencia propia de los municipios, el urbanismo, considerando incluido en el mismo el planeamiento, gestión y ejecución; de igual manera en el apartado b) establece como competencia municipal el medio ambiente urbano, en particular parques y jardines públicos; así mismo recoge en el apartado l) la promoción del deporte e instalaciones deportivas. El objeto del convenio entra dentro de las competencias municipales previstas legalmente.

OCTAVO.- El artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se establece que será el Convenio una de las formas de cooperación económica, técnica y administrativa entre las administraciones. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

NOVENO.- Que la competencia para aprobar este tipo de programas corresponde al Consejo de Gobierno Insular de acuerdo al Reglamento Orgánico de la Corporación Insular, artículo 29, apartado 5, letra b). y que el mismo ha delegado esta competencia en la Consejera Delegada de Deportes mediante acuerdo adoptado el 7 de marzo de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P. nº 40 del 3 de abril de 2017).

Por todo lo expuesto, **RESUELVO:**

PRIMERO.- APROBAR LA II ADENDA DE MODIFICACIÓN del Convenio de colaboración suscrito entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, para la ejecución de las obras de "Reparación de cinco torres de iluminación en el campo municipal de beisbol", así como de la cubierta del Pabellón de Deportes "Miguel Ángel Díaz Molina, en el sentido de incorporar al ejercicio de 2017 la sustitución del pavimento en el citado Pabellón, cuyo tenor literal es el siguiente:

"ANEXO I

II Adenda al Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, suscrito con fecha 27 de agosto de 2014, para la ejecución de las obras de "Reparación de cinco torres de iluminación en el campo municipal de béisbol, así como de la cubierta y el pavimento del pabellón municipal Miguel Ángel Díaz Molina".

En Santa Cruz de Tenerife, a ...

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. DON CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

De otra, el Sr. DON LOPE DOMINGO AFONSO HERNÁNDEZ, en su condición de Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de La Cruz.

INTERVIENEN

El primero, por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del **Excmo. Cabildo Insular de Tenerife**. Previamente ha sido facultado para este acto por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Insular en sesión celebrada el día 27 de junio de 2014.

El segundo, también por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del **Excmo. Ayuntamiento de Puerto de La Cruz**, previamente facultado para este acto por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Corporación Municipal en sesión celebrada el día 28 de julio de 2014.

Dichas partes, según intervienen, se reconocen entre sí la capacidad jurídica necesaria para la suscripción del presente Convenio de Colaboración.

EXPONEN

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Puerto de La Cruz y el Cabildo Insular de Tenerife, con la finalidad de mejorar sus instalaciones deportivas, pretenden acometer las obras de "Reparación de pavimento del pabellón municipal Miguel Ángel Díaz Molina", optimizando así el uso que de los mismos hacen los usuarios.

SEGUNDO.- El Cabildo Insular, como entidad pública territorial está interesado en garantizar el acceso de la población de la Isla al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal, conforme a lo estipulado en el artículo 36.2 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril.

El fomento de la Educación Física y el Deporte constituye una actividad que enlaza directamente con las competencias de los Cabildos Insulares a cuyo fin deberán aplicar los medios disponibles de la forma más conveniente al interés público.

TERCERO.- La suscripción de este Convenio se enmarca en el ámbito del ejercicio por parte de este Cabildo de las competencias atribuidas por la Disposición Adicional primera de la Ley 14/1990 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, el Decreto 152/1994, de 21 de julio de transferencia de funciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de deporte y, en último término, de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, en concreto, las competencias para la determinación de la política de infraestructura deportiva de cada isla, dentro de los parámetros del Plan Regional de Infraestructuras Deportivas de Canarias, llevando a cabo la construcción y mejora de las instalaciones deportivas, directamente o en colaboración con los Ayuntamientos (arts. 9, apartado 2.b), y 31).

CUARTO.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en su artículo 6, apartado 2, dispone que:

"En todo caso, en los términos de la presente ley y de la legislación reguladora de los distintos sectores de actuación pública, **se atribuirán a los cabildos insulares competencias** en las materias siguientes:

(...)

o) Cultura, **deportes**, ocio y esparcimiento.(...)".

QUINTO- Que el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas habilita a las Administraciones Públicas para la celebración de convenios con personas de derecho público o privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado.

"1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

(...)"

Asimismo, la celebración de Convenios de Colaboración se encuentra amparada en la previsión legal contenida en el artículo 15 de la LRJAPC:

"El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y éstos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público".

SEXTO.- Dado que existe interés coincidente en el Cabildo Insular de Tenerife y en el Ayuntamiento de Puerto de La Cruz en la ejecución de dichas

actuaciones, se instrumenta dicha colaboración en el presente Convenio, y estando conformes en su contenido y efectos, deciden formalizarlo con arreglo a las siguientes estipulaciones.

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto y presupuesto.

El objeto de la presente Adenda lo constituye la modificación del Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, para la ejecución de las obras de "reparación de cinco torres de iluminación en el campo municipal de béisbol, así como de la cubierta y el pavimento del pabellón municipal Miguel Ángel Díaz Molina".

A través de esta II Adenda, se incluye una nueva actuación complementaria denominada "**SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DEL PABELLÓN MUNICIPAL MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MOLINA**", cuyo presupuesto estimado asciende a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (118.157,50 €) **sin IGIC**, cantidad que será financiada por ambas Administraciones Públicas conforme a la siguiente distribución:

Cabildo de Tenerife: 94.526,00 EUROS, que se corresponde con el 80 % del total de la inversión.

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz: 23.631,50 EUROS, que se corresponde con el 20% del total de la inversión.

Todo ello sin perjuicio de las incidencias que en ejecución del contrato se puedan producir (actualizaciones del proyecto, revisiones, modificaciones contractuales, liquidación de contrato, entre otras) y que serán atendidas, en su caso, por el presupuesto del Ayuntamiento.

SEGUNDA.- Obligaciones del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz.

En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:

- a) Remitir, en su caso, el proyecto de ejecución de la actuación, o memoria técnica correspondiente, que deberá incluir el acuerdo de aprobación por el órgano correspondiente así como informe técnico de supervisión municipal.
- b) Soportar los tributos, así como las cargas y gravámenes derivados de la expedición de licencias y concesiones municipales o de otro tipo para la realización de la actuación, como pudiera ser la inversión del sujeto pasivo.
- c) Colocar de modo permanente, en lugar destacado y bien visible de la instalación deportiva un cartel con el anagrama del Cabildo Insular, que será aportado por el Área de Deportes del Cabildo Insular.
- d) Contratar las obras y/o suministro y comunicar al Área de Deportes con la antelación suficiente, las fechas previstas de inicio y terminación. La contratación, ejecución y dirección de las obras/suministro se efectuará por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, bajo su exclusiva responsabilidad, con arreglo a la legislación

de Contratos de las Administraciones Públicas, respetando en todo caso los principios de publicidad y concurrencia.

- e) Remitir a este Cabildo Insular la documentación técnica para la ejecución de las obras y suministro de las actuaciones referidas, la resolución o acuerdo de adjudicación, tanto de la asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de las obras, si fuese necesario y de las demás actuaciones detalladas en este Convenio, como del contrato de ejecución de las mismas, así como las modificaciones u otras incidencias que en ejecución del contrato puedan producirse.*
- f) Designar al personal técnico necesario para la supervisión de la obra/suministro mencionada, incluida, en su caso, la del plan de seguridad y salud, ensayos y cuantas otras prevenciones sean preceptivas por las disposiciones vigentes.*
- g) En el lugar de ejecución de la obra/suministro, en su caso, deberá figurar un cartel durante el periodo de ejecución, según el modelo establecido, en el que se hará constar, al menos, el Programa Insular, la denominación de la obra, el presupuesto total, la aportación del ECIT y el plazo de ejecución. El responsable de confeccionar y colocar dicho cartel, será la Administración que contrate. El modelo de cartel podrá obtenerse en la página WEB del ECIT.*
- h) Justificar ante el ECIT la realización de la actuación objeto de la colaboración, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la misma. Justificar la aplicación material de los fondos percibidos, dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la realización de la obra y/o suministro que en ningún caso, podrá superar el 1 de marzo de 2018, salvo autorización expresa del Cabildo Insular de Tenerife.*
- i) Recibir en su caso las obras y/o equipamiento y encargarse de su mantenimiento y dinamización, adoptando las medidas relativas al sello de calidad previstas en el apartado 13 de este Programa.*
- j) Asumir un derecho de uso gratuito y preferente del CIT sobre estas instalaciones deportivas, por razones de interés general, de acuerdo con los calendarios previamente establecidos y coordinados con el programa municipal de actividades deportivas.*
- k) Someterse a las actuaciones de inspección a efectuar por el CIT respecto la actuación. Asimismo deberá permitir el acceso a las obras del personal técnico del Cabildo, al objeto de poder realizar las labores de comprobación que estimaren oportunas.*
- l) Dotar a la instalación del correspondiente personal específico, tanto de mantenimiento/ control, como facultativo/técnico deportivo, debidamente cualificado académica y profesionalmente para su cometido, de manera que se obtenga el mayor rendimiento deportivo y social de la infraestructura deportiva creada.*
- m) Dotar a la instalación del correspondiente programa de actividades anual, tanto del servicio como del mantenimiento*

preventivo y que el mismo figure en la instalación. (Sello de calidad).

n) Los Municipios que consten como beneficiarios del Programa deberán aportar la siguiente documentación:

- Certificación del Acuerdo del órgano competente aprobando el proyecto de convenio con el CIT.
- Certificado de disponibilidad presupuestaria de la entidad local, en aquel supuesto en que el Ayuntamiento deba aportar también, parte de la financiación de la obra/actuación.
- Aportación de original o copia del Proyecto Básico y de Ejecución, o bien de la memoria técnica, en caso de que lo financie el Ayuntamiento.

o) Remitir al CIT copia del acta de comprobación de replanteo y de la recepción de las obras.

p) Las incidencias que en ejecución del contrato de obras se puedan producir serán atendidas, en su caso, por el presupuesto de la Corporación Municipal (entre otras, revisión de precios, modificaciones del contrato, liquidación del contrato, etc.).

q) Las bajas correspondientes a la aportación económica del CIT que se produzcan como consecuencia de la adjudicación de los contratos de ejecución serán utilizados para el pago de posibles revisiones de precios y/o liquidaciones que pudieran devengarse y, en último caso, para financiar mejoras en el equipamiento de la instalación deportiva.

r) Reintegrar las cantidades financiadas por el CIT no aplicadas al objeto previsto en este Convenio o las que pudieran derivarse de un exceso de financiación de la Corporación Insular que, como máximo, ascenderá al 80% del coste de ejecución de esta actuación.

s) El resto de obligaciones que pudieran derivarse del Acuerdo del consejo de gobierno que dispone las normas del Programa y se incluyen como anexo de este convenio.

TERCERA.- Obligaciones del Cabildo de Tenerife.

El Cabildo Insular de Tenerife, por su parte, asume las siguientes obligaciones:

- a) Aportar al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz la cantidad máxima de 94.526,00 €, para la ejecución de las obras y/o suministros descritas en la estipulación primera de este convenio y que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 17.0741.3425.76240 y que no podrán superar el 80% del coste de la precitada actuación. El abono se realizará una vez suscrito el presente Convenio.
- b) Prestar conformidad, en su caso y con carácter previo, al proyecto de ejecución de las actuación cuya financiación es objeto del presente convenio.

CUARTA.- Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización y mantendrá su vigencia hasta fin del año 2019, que coincide con la duración del Programa "Tenerife más activa"

QUINTA.- Publicidad.

En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de la ejecución de la obra y/o suministro se hará constar expresamente que ésta se lleva a cabo en virtud de la colaboración establecida en este Convenio, debiendo figurar, expresamente el anagrama del Cabildo, con la obligación a cargo del contratista de colocar el cartel en el que figure el presupuesto total de la citada obra así como el importe de la financiación.

SEXTA.- Interpretación.

Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio serán resueltas expresamente por una Comisión integrada por un representante de cada una de las partes intervinientes.

SÉPTIMA.- Extinción anticipada.

Aparte del cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, serán causas de extinción de este Convenio:

- a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos asumidos.*
- b) Mutuo acuerdo entre las partes.*

En caso de extinción anticipada de la vigencia del presente Convenio, las partes acuerdan que la terminación de las inversiones en curso corresponderá al Ayuntamiento.

OCTAVA.- Jurisdicción.

El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, siendo la Jurisdicción Contencioso- Administrativa la competente para conocer cuantos litigios puedan derivarse del mismo.

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento por triplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados."

SEGUNDO.- AUTORIZAR, DISPONER Y ORDENAR, con cargo a la aplicación presupuestaria 2017.0741.3425.76240, la cantidad de **(94.526,00€), NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS,** 80 % del importe del presupuesto estimado de ejecución."

Por lo expuesto, previo dictamen de la Comisión Plenaria Permanente del Área TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, el Pleno **QUEDA ENTERADO** de la aprobación por resolución de la Consejera Delegada de Deportes del 2 de agosto de 2017, de la **APROBACIÓN DE LA II ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE LA CRUZ DENTRO DEL PROGRAMA "TENERIFE + ACTIVA 2016-2019, DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, EN EL AÑO 2017.**

13.- Dación cuenta de la aprobación de los Convenios de Colaboración con los Ayuntamientos de Santa Úrsula, Los Silos y La Orotava, dentro del Programa Insular Tenerife Verde + 2017-2021.

Vista resolución de la Consejera Delegada de Deportes de 29 de diciembre de 2017, que se transcribe a continuación:

"La Consejera Delegada de Deportes adoptó el 29 de diciembre de 2017 la siguiente resolución:

En relación con el expediente "**PROGRAMA INSULAR TENERIFE VERDE + 2017-2021**" (**MEDI LÍNEA ACTUACIÓN 1.4.3**), se tiene en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 26 de julio de 2016 se aprobó con **carácter inicial** el **PROGRAMA INSULAR TENERIFE VERDE + 2017-2021**", cuyo objeto, con carácter general, consiste en el establecimiento de un conjunto de actuaciones para la renovación del pavimento deportivo de los campos de fútbol existentes en la isla de Tenerife.

SEGUNDO.- Tras un periodo de consultas y alegaciones con los Ayuntamientos de la isla, y previo informe de la Unidad de Promoción Deportiva del Servicio Administrativo de Deportes, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 28 de septiembre de 2016 se aprueba con **carácter definitivo** el **PROGRAMA INSULAR TENERIFE VERDE + 2017-2021**".

TERCERO.- Posteriormente, por acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 21 de marzo de 2017 se **aprueba el cronograma de acciones del PROGRAMA "TENERIFE VERDE + 2017-2021, así como** el texto de los Convenios, a suscribir con los Ayuntamientos.

CUARTO.- Vista la delegación efectuada en el Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 21 de marzo de 2017, por la Consejera Delegada con fecha 25 de mayo de 2017 se modifica el PROGRAMA INSULAR TENERIFE VERDE + 2017-2021", al considerar dos líneas de actuación:

- **Primera línea de actuación:** iniciación del expediente de contratación conforme al Programa y el Convenio aprobado y con una financiación del 50% respecto del precio que resulte de la adjudicación con los Ayuntamientos que han presentado la documentación requerida: **El Sauzal, San Miguel de Abona y La Matanza.**
- **Segunda línea de actuación:** iniciación del expediente de transferencia del crédito con una financiación del 50%, tal y como se había precisado inicialmente en el programa, en una cuantía máxima de 100.000 euros, conforme a la suscripción de nuevo convenio que determinará que la licitación y ejecución de las obras se harán por el Ayuntamiento, y asimismo, se establecerán los derechos y obligaciones por ambas partes. En relación a los Ayuntamientos de: **Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Adeje, El Rosario y Tegeste.**

QUINTO.- En sesión del Consejo de Gobierno Insular de 20 de junio de 2017 se aprueba el **texto de los Convenios de Colaboración** a suscribir entre el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos intervinientes del programa para la anualidad 2017 (Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Adeje, El Rosario y Tegeste).

SEXO.- El Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de 21 de marzo de 2017, que aprueba el cronograma de acciones del PROGRAMA "TENERIFE VERDE + 2017-2021", dispone que dichas acciones "podrán ser anticipadas o demoradas en función de las disponibilidades presupuestarias para cada ejercicio en el Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife y de los Ayuntamientos."

SÉPTIMO.- Teniendo en cuenta que existe disponibilidad presupuestaria en el presente ejercicio económico para llevar a cabo la transferencia de crédito del importe correspondiente a la aportación insular respecto de las tres siguientes actuaciones según el cronograma aprobado, es por lo que, con fecha 30 de octubre se remite escrito a los Ayuntamientos de Los Silos, La Orotava y Arafo solicitando documentación necesaria para poder continuar con la tramitación del expediente.

OCTAVO.- Posteriormente, con fecha 31 de octubre de 2017 se recibe escrito por parte del Ayuntamiento de Arafo en el que solicita que la actuación en el Campo de Fútbol Blas Reyes sea demorada hasta el ejercicio presupuestario de 2019, justificado en la falta de disponibilidad presupuestaria para hacer frente a la parte correspondiente a la aportación municipal en el próximo ejercicio 2018.

NOVENO.- Visto el anterior escrito, por el Servicio de Deportes se procede a requerir con fecha 2 de noviembre de 2017, al siguiente Ayuntamiento conforme al cronograma aprobado, que es Santa Úrsula, la documentación necesaria para incluir el "Campo de fútbol Argelio Tabares" entre las actuaciones a realizar durante este ejercicio presupuestario.

DÉCIMO.- Una vez analizada la documentación recibida por los citados Ayuntamientos, y que obra dentro del expediente, por parte del Servicio Administrativo de Deportes, se comprueba que la misma es conforme.

UNDÉCIMO.- En fecha 19 de diciembre de 2017 fue remitido el presente expediente para su fiscalización por parte de la Intervención General.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- El artículo 4 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte (en adelante LCD) reconoce, entre los principios generales que deben inspirar la actuación de las Administraciones públicas, los de cooperación, coordinación, eficiencia en el ejercicio de sus respectivas competencias y participación y colaboración de las entidades deportivas.

SEGUNDO.- De acuerdo con el artículo 9.2 LCD, los Cabidos Insulares son competentes para:

"a) La promoción de la actividad física y deportiva, fomentando especialmente el deporte para todos.

b) la determinación de la política de infraestructura deportiva de cada isla, dentro de los parámetros de los parámetros del Plan Regional de Infraestructuras Deportivas de Canarias, llevando a cabo la construcción y mejora de las instalaciones deportivas, directamente o en colaboración con los ayuntamientos."

TERCERO.- Por su parte, los Ayuntamientos canarios, según dispone el artículo 10.2, ostentan las siguientes competencias:

"a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente las actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los colectivos de especial atención señalados en el artículo 3 de esta Ley. (...)

d) Velar por el cumplimiento de las condiciones reglamentarias de seguridad e higiene de las instalaciones y competiciones deportivas locales.

e) La cooperación con otros entes públicos o privados para el cumplimiento de las finalidades previstas por la presente Ley."

CUARTO.- El artículo 11 de la citada LCD establece, como uno de los principios generales para ejercer las competencias en materia de actividad física y deportiva de las diferentes Administraciones Públicas, el de colaboración, utilizando como técnica la celebración de convenios.

QUINTO.- El artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece expresamente que "Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia."

SEXTO.- El artículo 472.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone: "2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:

a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas."

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.4 de la Ley 40/2015, en relación con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas locales, se somete a fiscalización previa el citado convenio para continuar con el marco de actuación del Programa aprobado en Consejo de Gobierno.

OCTAVO.- La competencia para la aprobación de texto de los convenios le corresponde al Consejo de Gobierno Insular conforme al artículo 29.5 r) del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife; no obstante, la misma se encuentra delegada en la Sra. Consejera, en virtud de Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 21 de marzo de 2017.

NOVENO.- Al tratarse de un convenio entre Administraciones Públicas, se dará cuenta posterior al Pleno en la primera sesión que se celebre. Le corresponderá al Presidente la firma de la formalización del citado convenio, conforme al artículo 3.1.m) del Reglamento Orgánico del Cabildo.

Por todo lo expuesto, **RESUELVO:**

PRIMERO.- INCLUIR dentro de la segunda línea de actuación prevista en el Programa Tenerife Verde Plus 2017-2021 (aprobada por Resolución de la

Consejera Delegada el 25 de mayo de 2017) las actuaciones referidas a los Ayuntamientos de Los Silos, La Orotava y Santa Úrsula, correspondiendo la licitación y ejecución de las obras a los citados Ayuntamientos.

SEGUNDO.- AUTORIZAR, DISPONER Y ORDENAR el pago por el importe de cien mil euros (100.000,00 €) a favor de cada uno de los Ayuntamientos de Los Silos, La Orotava y Santa Úrsula con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria 17.0741.3426.76240.

TERCERO.- APROBAR el texto de los Convenios de Colaboración a suscribir entre el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de Los Silos, La Orotava y Santa Úrsula, cuyas estipulaciones se transcriben como anexo.

CUARTO.- AUTORIZAR al Excmo. Sr. Presidente de este Excmo. Cabildo Insular para suscribir los mencionados convenios.

QUINTO.- DAR CUENTA al Pleno en la próxima sesión que se celebre, conforme al artículo 29.5 r) del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife.

SEXTO.- NOTIFICAR a los Ayuntamientos que correspondan, a los efectos de que se proceda a la firma del Convenio por duplicado ejemplar en primer lugar, y la posterior remisión original de los mismos para la firma por el Sr. Presidente del Cabildo de Tenerife.

SÉPTIMO.- A la vista del inminente cierre del ejercicio presupuestario 2017, la presente Resolución quedará condicionada al resultado de la fiscalización que se realice por parte de la Intervención General.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE [REDACTED], PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TENERIFE VERDE + 2017-2021.

En Santa Cruz de Tenerife, a...

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. DON CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

De otra, el [REDACTED], en su condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de [REDACTED].

INTERVIENEN

El primero, por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del **Excmo. Cabildo Insular de Tenerife**. Previamente ha sido facultado para este acto por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Insular en sesión celebrada el día 19 de junio de 2015.

El segundo, también por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del **Ayuntamiento de [REDACTED]**, previamente facultado para este acto por acuerdo adoptado por [REDACTED] en sesión celebrada el día [REDACTED].

Dichas partes, según intervienen, se reconocen entre sí la capacidad jurídica necesaria para la suscripción del presente Convenio de Colaboración.

EXPONEN

PRIMERO. - Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 28 de septiembre de 2016 se aprueba con **carácter definitivo** el **PROGRAMA INSULAR TENERIFE VERDE + 2017-2021**", cuyo objeto era la instalación y/o renovación del césped artificial en Campos de Fútbol de la isla de Tenerife. Esta línea de trabajo atenderá a las necesidades de inversión para acondicionar y mejorar los espacios de práctica deportiva en la Isla de Tenerife. Asimismo, los principios rectores de este Programa se centrarán en el equilibrio territorial que no tienen por qué ser municipal porque existen dotaciones de ámbito supramunicipal que garantizan su sostenibilidad, así como el de solidaridad.

SEGUNDO. - Que por la Consejera Delegada con fecha 25 de mayo de 2017 se dicta Resolución por la que se aprueba "una segunda línea de actuación: iniciación del expediente de transferencia del crédito con una financiación del 50%, tal y como se había precisado inicialmente en el programa, en una cuantía máxima de 100.000 euros, conforme a la suscripción de nuevo convenio que determinará que la licitación y ejecución de la actuación se harán por el Ayuntamiento, y asimismo, se establecerán los derechos y obligaciones por ambas partes."

TERCERO. - Que la ejecución de actuaciones se acompaña de la implantación de un sello de calidad en las instalaciones que incluye un compromiso por parte de los Ayuntamientos para cumplir requisitos básicos que garanticen la calidad de la instalación y los servicios ofertados.

CUARTO. - La Corporación Insular como entidad pública territorial está interesado en garantizar el acceso a la población de la Isla al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal, conforme a lo estipulado en el artículo 36.2 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril. El fomento de la Educación Física y el Deporte constituye una actividad que enlaza directamente con las competencias de los Cabildos Insulares a cuyo fin deberán aplicar los medios disponibles de la forma más conveniente al interés público.

QUINTO.- La suscripción de este Convenio se enmarca en el ámbito del ejercicio por parte de este CIT de las competencias atribuidas por la Disposición Adicional primera de la Ley 14/1990 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, el Decreto 152/1994, de 21 de julio de transferencia de funciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de deporte y, en último término, de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, en concreto, las competencias para la determinación de la política de infraestructura deportiva de cada isla, dentro de los parámetros del Plan Regional de Infraestructuras Deportivas de Canarias, llevando a cabo la construcción y mejora de las instalaciones deportivas, directamente o en colaboración con los Ayuntamientos (arts. 9, apartado 2.b), y 31).

SEXTO.- La celebración de Convenios de Colaboración se encuentra amparada en la previsión legal contenida en el artículo 15 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias. Según el párrafo primero de este precepto, "El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y éstos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público". Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares de Canarias.

SÉPTIMO.- Dado que existe interés coincidente en el Cabildo y el Ayuntamiento en la ejecución de dicha actuación, se instrumenta dicha colaboración en el presente Convenio, y estando conformes en su contenido y efectos, deciden formalizarlo con arreglo a las siguientes estipulaciones.

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO Y PRESUPUESTO.

Es objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre el Excmo. CIT y el Ayuntamiento de ██████████ para la ejecución de las obras y/o suministro de la instalación y/o renovación del césped artificial del campo de fútbol denominado ██████████, insertadas en el Programa de Tenerife Verde + 2017-2021.

El presupuesto estimado global que se destina a las actuaciones a acometer conforme al presente convenio se cifra en 200.000 euros, financiación distribuida entre ambas Administraciones en un 50 %.

El Cabildo de Tenerife, tras la suscripción del presente convenio y con carácter previo a la licitación del oportuno contrato, aportará la cifra máxima de **100.000 euros**. Sin perjuicio de que, teniendo en cuenta que la financiación de esta Corporación Insular será **el 50% del precio de adjudicación** o bien, como **máximo la cifra de 100.000 euros**, una vez finalizada la actuación, en su caso, si hubiera sobrante, se devolverá, o bien se invertirá en la instalación, previa autorización.

El Ayuntamiento será el encargado de licitar y adjudicar el correspondiente contrato, así como el seguimiento del mismo hasta su finalización.

En el caso que, el Ayuntamiento, por cuestiones de eficiencia y eficacia, incluya otras actuaciones añadidas al objeto del presente convenio, es decir, además de "la instalación y/o renovación del césped artificial", como pudiera ser: movimientos de tierra, gradas, vestuarios, o cualquier otra, siempre dentro de la misma instalación, tendrá que afrontar estas últimas con su propio presupuesto municipal. Por tanto, si bien podrá licitarse la totalidad de las actuaciones en un único contrato, el presupuesto del Cabildo solo irá destinado a la "la instalación y/o renovación del césped artificial".

Una vez determinado el precio cierto de la presente actuación, se comunicará al Cabildo mediante la notificación de la adjudicación del contrato por el órgano municipal competente, en el que conste de forma detallada el importe exacto en lo que se refiere a la "la instalación y/o renovación del césped artificial". Si este fuera inferior a 100.000 euros, podrá, o proceder a su devolución.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.

En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:

t) Remitir la documentación técnica necesaria conforme a lo señalado en la cláusula 3.3 B) del Programa Tenerife Verde + 2017-2021 aprobado en Consejo de Gobierno Insular de fecha 28 de septiembre de 2016, tras la firma del presente Convenio y antes de iniciar el expediente de contratación.

u) Soportar los tributos, así como las cargas y gravámenes derivados de la expedición de licencias y concesiones municipales para la realización de las obras.

v) Colocar de modo permanente, en lugar destacado y bien visible de la instalación deportiva un cartel con el anagrama del Cabildo Insular, que será aportado por el Área de Deportes del Cabildo Insular.

w) La tramitación íntegra del expediente de contratación comunicando al S.A. de Deportes con la antelación suficiente, las fechas previstas de inicio y terminación. La contratación, ejecución y dirección de las obras, en su caso, se efectuará por el Ayuntamiento de ■■■■■, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público.

x) Notificar a este Cabildo Insular la adjudicación de la contratación de la presente actuación aprobada por el órgano municipal competente.

y) Designar al personal técnico necesario para la supervisión de la ejecución del contrato (obras/suministro), incluida, en su caso, la del plan de seguridad y salud, ensayos y cuantas otras prevenciones sean preceptivas por las disposiciones vigentes.

z) En el lugar donde se esté ejecutando la actuación, deberá figurar un cartel durante el periodo de ejecución, según el modelo establecido, en el que se hará constar, al menos, el Programa Insular (TENERIFE VERDE + 2017-2021), la denominación de la obra/suministro, el presupuesto total, la aportación del CIT y el plazo de ejecución. El responsable de confeccionar y colocar dicho cartel, será la Administración municipal, no obstante requerirá el visto bueno de la Corporación Insular dará el visto bueno al modelo de cartel propuesto por el Ayuntamiento.

aa) Justificar ante el CIT la realización de la presente actuación, mediante Certificado del Secretario/Interventor del municipio, donde se haga constar el cumplimiento del presente convenio y la efectiva aplicación material de los fondos percibidos, dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la realización de la actuación y/o suministro que, en ningún caso, podrá superar el 1 de octubre de 2018, salvo autorización expresa del CIT.

bb) Recibir en su caso las obras y/o equipamiento y encargarse de su mantenimiento y dinamización, adoptando las medidas relativas al sello de calidad previstas en este Programa.

cc) Someterse a las actuaciones de inspección a efectuar por el CIT respecto la actuación, permitiendo el acceso a la instalación al personal técnico del Cabildo, al objeto de poder realizar las labores de comprobación que estimaren oportunas.

dd) Dotar a la instalación del correspondiente personal específico, tanto de mantenimiento/ control, como facultativo/técnico deportivo, debidamente cualificado académica y profesionalmente para su cometido, de manera que se obtenga el

mayor rendimiento deportivo y social de la infraestructura deportiva creada.

ee) Notificar al CIT, dentro del plazo máximo de 10 días, el acta de recepción.

ff) Las incidencias que en ejecución del contrato se puedan producir serán atendidas, en su caso, con el presupuesto de la Corporación Municipal (entre otras, revisión de precios, modificaciones del contrato, liquidación del contrato, etc.), así como cualquier otra actuación que no sea "la instalación y/o renovación del césped artificial", es decir, que esté fuera del objeto del presente Programa de actuación.

gg) Reintegrar las cantidades financiadas por el CIT no aplicadas al objeto previsto en este Convenio o las que pudieran derivarse de un exceso de financiación de la Corporación Insular que, como máximo, ascenderá al 50% del precio de adjudicación de la "la instalación y/o renovación del césped artificial" hasta un máximo de 100.000 euros. Todo ello sin perjuicio de que, en el caso de que existiera un sobrante de la aportación insular, éste se invirtiera en la misma instalación deportiva, previa justificación y autorización del Cabildo.

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CABILDO DE TENERIFE.

El CIT, por su parte, asume las siguientes obligaciones:

✓ Aportar al Ayuntamiento de [REDACTED] la cantidad máxima de 100.000 euros, para la ejecución de las obras y/o suministros consistente en la instalación y/o renovación del césped artificial conforme a las estipulaciones descritas en el presente convenio y que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 17.0741.3426.76240. El abono se realizará una vez suscrito el Convenio.

✓ Supervisión de la documentación técnica remitida por el Ayuntamiento, tras la firma del presente Convenio y antes de iniciar el expediente de contratación.

✓ Inspección en la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento.

✓ Verificar que se ha llevado a cabo la actuación, instando, en su caso, la devolución de la aportación en caso de total incumplimiento.

CUARTA.- VIGENCIA.

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización y mantendrá su vigencia hasta el año 2019.

QUINTA.- PUBLICIDAD.

En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de la ejecución de la obra y/o suministro se hará constar expresamente que ésta se lleva a cabo en virtud de la colaboración establecida en este Convenio, debiendo figurar, expresamente el anagrama del Cabildo y el del Ayuntamiento, con la obligación a cargo del contratista de colocar el cartel en el que figure el presupuesto total de la citada obra así como

el importe de la financiación, de acuerdo al diseño remitido por la Corporación Insular.

SEXTA.- INTERPRETACIÓN.

Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio serán resueltas expresamente por una Comisión integrada por un representante de cada una de las partes intervinientes.

SÉPTIMA.- EXTINCIÓN ANTICIPADA.

Aparte del cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, serán causas de extinción de este Convenio:

- a. Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos asumidos.
- b. Mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de extinción anticipada de la vigencia del presente Convenio, las partes acuerdan que la terminación de las inversiones en curso corresponderá al Ayuntamiento.

OCTAVA.- JURISDICCIÓN.

El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, siendo la Jurisdicción Contencioso- Administrativa la competente para conocer cuantos litigios puedan derivarse del mismo.

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento por triplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados."

Por lo expuesto, previo dictamen de la Comisión Plenaria Permanente del Área TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, el Pleno **QUEDA ENTERADO** de la aprobación por resolución de la Consejera Delegada de Deportes de fecha 29 de diciembre de 2017, de la **APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE SANTA ÚRSULA, LOS SILOS Y LA OROTAVA DENTRO DEL PROGRAMA INSULAR TENERIFE VERDE + 2017-2021.**

14.- Dación de cuenta al Pleno de la aprobación de la Adenda al Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Fasnia, dentro del Programa "Tenerife + Activa 2016 - 2019", de Mejora y Acondicionamiento de instalaciones deportivas municipales, en el año 2017.

Vista resolución de la Consejera Delegada de Deportes de 20 de febrero de 2018, que se transcribe a continuación:

"La Consejera Delegada de Deportes adoptó el 20 de febrero de 2018 la siguiente resolución:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La actuación se incluye en el **PROGRAMA INSULAR DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, TENERIFE + ACTIVA 2016-2019 (PMAID)**, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (ECIT) con fecha 5 de julio de 2016.

SEGUNDO.- El Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2016 aprueba el texto de los convenios de colaboración que serán suscritos entre el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos intervinientes del PROGRAMA "TENERIFE + ACTIVA 2016-2019", DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, para la anualidad 2017, suscribiéndose el **convenio de colaboración entre esta Corporación Insular y el Ayuntamiento de Fasnia el día 6 de febrero de 2017.**

En dicho convenio se establecen que el presupuesto estimado que se destina a las actuaciones que se van a acometer, que incluyen la contratación del proyecto de obras, la contratación de la ejecución de las obras y la dirección facultativa, así como la coordinación de seguridad y salud; y/o suministro, se cifra en la cantidad de 355.400,00 € para cubrir la pista polideportivo, y de 65.900,00 € para la pavimentación de la pista de asfalto, lo que supone un total de 421.300 €, cuya financiación se distribuye según el siguiente detalle:

- Aportación del Il. Ayuntamiento de Fasnia: 10% del importe total de las obras (42.130,00 €)

- Aportación del Cabildo Insular de Tenerife: 90% del importe total de las obras (379.170,00 €)

TERCERO.- Por Resolución de la Sra. Consejera Delegada de Deportes de 7 de febrero de 2017 se acuerda la **contratación a favor de DORGON, Ingeniería y Arquitectura**, con NIF B-765421384 de la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y de la ejecución y coordinación de seguridad y salud por importe de 19.153,00 € (IGIC incluido) con el siguiente detalle:

Aportación Cabildo (90 %):.....17.237,70 €

Aportación Ayuntamiento (10 %):.....1.915,30 €

CUARTO.- El Consejo de Gobierno Insular en fecha de Gobierno Insular de fecha 06 de junio de 2017, **tomó en consideración el proyecto** para la ejecución de la obra de "CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FASNIA redactado por DORGON, Ingeniería y Arquitectura, con NIF B-765421384, con un Presupuesto Base de Licitación de quinientos cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y siete euros con setenta y un céntimos (**557.847,71 €**), IGIC incluido.

QUINTO.- Teniendo en cuenta el presupuesto total estimado en el Convenio formalizado (421.300 €), una vez disminuida la cantidad a la que ascendió la contratación de los servicios de redacción y dirección (19.153,00 €), resulta que existe un saldo total para la obra de cuatrocientos dos mil ciento cuarenta y siete euros (**402.147,00 €**), el cual resulta insuficiente para cubrir el presupuesto base de licitación de la misma (557.847,71 €), resultando necesario, por tanto, aprobar gasto por la cuantía de ciento cincuenta y cinco mil setecientos euros con setenta y un céntimos (**155.700,71 €**), distribuido de la siguiente manera:

Aportación insular (90 %):.....140.130,64 €

Aportación municipal (10 %):.....15.570,07 €

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- Los Cabildos insulares, como órganos de gobierno, administración y representación de las islas, ejercen las competencias propias que corresponden a las islas y las que le sean delegadas por otras administraciones públicas de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local y en su legislación específica.

Como instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde a los cabildos insulares el ejercicio de las funciones, competencias y facultades que se determinan en el Estatuto de Autonomía de Canarias, así como las competencias autonómicas que le sean atribuidas, transferidas o delegadas conforme a lo establecido en la ley de Cabildos entre las asumidas por la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias y en el resto del ordenamiento jurídico, conforme a lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

SEGUNDO.- El Cabildo insular de Tenerife, en virtud del artículo 2.B) del Decreto 152/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canarias a los Cabildos Insulares en materia de cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico, ostenta las siguientes **competencias**:

"1. Fomentar y coordinar la práctica del deporte para todos y la educación física no escolar. (...)

4. La coordinación de las Administraciones municipales de la isla en la promoción y difusión de la cultura física y deportiva. (...)

7. Elaboración, aprobación y ejecución de los Planes Insulares de construcción, modernización y ampliación e instalaciones deportivas, atendándose a las directrices del Plan Canario de Infraestructuras Deportivas."

TERCERO.- El artículo 2.2 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, establece que las Administraciones Públicas deben garantizar la actividad físico-deportiva, entre otras, mediante las siguientes líneas de actuación:

a) La promoción del deporte en todas sus expresiones.

b) La planificación y promoción de una **red de instalaciones deportivas suficiente y racionalmente distribuida**.

(...)

g) La asignación de recursos para atender, con carácter global, las líneas generales de actuación.

Asimismo, el artículo 9 en su apartado 2.a) de la Ley 8/1997, atribuye a los Cabildos la promoción de la actividad física y deportiva, estableciendo asimismo, en el artículo 11 como uno de los principios generales para ejercer las competencias en materia de actividad física y deportiva de las diferentes Administraciones Públicas, el de colaboración, utilizando como técnica la celebración de convenios.

CUARTO.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en su artículo 6, apartado 2, dispone que:

"En todo caso, en los términos de la presente ley y de la legislación reguladora de los distintos sectores de actuación pública, **se atribuirán a los cabildos insulares competencias** en las materias siguientes:

(...)

o) Cultura, **deportes**, ocio y esparcimiento. (...)"

QUINTO.- Que el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas habilita a las Administraciones Públicas para la celebración de convenios con personas de derecho público o privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado.

"1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

(...)"

Asimismo, la celebración de Convenios de Colaboración se encuentra amparada en la previsión legal contenida en el artículo 15 de la LRJAPC:

"El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y éstos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público".

SEXTO.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone en su artículo 48.3 que la suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; reiterando, de esta manera, lo ya señalado en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según el cual, la aportación financiera de la Corporación Insular se supedita de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

SÉPTIMO.- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, introduce modificaciones en la Ley de Bases de Régimen Local limitando —en el artículo 7— el ejercicio de competencias de las entidades locales a aquellas que son propias o por delegación; en este sentido, el artículo 25.2 l), en la redacción dada por la Ley

27/2013, de 27 de diciembre, establece como competencia propia de los municipios, la promoción del deporte e instalaciones deportivas.

OCTAVO.- El artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se establece que será el Convenio una de las formas de cooperación económica, técnica y administrativa entre las administraciones. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

NOVENO.- El Reglamento Orgánico del Cabildo, establece en la letra s) del artículo 29.5 la competencia del Consejo de Gobierno Insular para aprobar convenios de colaboración que celebre la Corporación Insular con otras Administraciones Públicas, dando cuenta posterior al Pleno, en la primera sesión que se celebre y que el mismo ha delegado esta competencia en la Consejera Delegada de Deportes mediante acuerdo adoptado el 7 de marzo de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P. nº 40 del 3 de abril de 2017).

Por todo lo expuesto, **RESUELVO:**

PRIMERO.- Aprobar la Adenda de modificación del Convenio de colaboración suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Fasnia para la ejecución de las obras de reparación de la **"CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA"**, en el sentido de adaptar el presupuesto estimado según el Convenio al presupuesto de ejecución material reflejado dentro del proyecto aprobado.

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de este acuerdo en la primera sesión que el mismo celebre.

ANEXO I

Adenda al Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento de Fasnia, suscrito con fecha 6 de febrero de 2017, para la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto "CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA".

En Santa Cruz de Tenerife, a ...

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. DON CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

De otra, el Sr. D. DAMIÁN PÉREZ VIERA, en su condición de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Fasnia.

INTERVIENEN

El primero, por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del **Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.** Previamente ha sido facultado para este acto por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Insular en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2017.

El segundo, también por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del **Excmo. Ayuntamiento de Fasnia,** previamente facultado

para este acto por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Corporación Municipal en sesión celebrada el día 27 de enero de 2017.

Dichas partes, según intervienen, se reconocen entre sí la capacidad jurídica necesaria para la suscripción del presente Convenio de Colaboración.

EXPONEN

Primero.- El Cabildo Insular, como entidad pública territorial está interesado en garantizar el acceso a la población de la Isla al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal, conforme a lo estipulado en el artículo 36.2 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Segundo.- El fomento de la Educación Física y el Deporte constituye una actividad que enlaza directamente con las competencias de los Cabildos Insulares a cuyo fin deberán aplicar los medios disponibles de la forma más conveniente al interés público.

Tercero.- La suscripción de este convenio se enmarca en el ámbito del ejercicio por parte de este Cabildo de las competencias atribuidas por el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Decreto 152/1994, de 21 de julio de transferencia de funciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de deporte y, en último término, de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, en concreto, las competencias para la determinación de la política de infraestructura deportiva de cada isla, dentro de los parámetros del Plan Regional de Infraestructuras Deportivas de Canarias, llevando a cabo la construcción y mejora de las instalaciones deportivas, directamente o en colaboración con los Ayuntamientos (arts. 9, apartado 2.b), y 31).

Cuarto.- La celebración de Convenios de Colaboración se encuentra amparada en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público. Por otro lado, nuestro Reglamento Orgánico del Cabildo, establece en la letra s) del artículo 29.5 la competencia del Consejo de Gobierno Insular para aprobar convenios de colaboración que celebre la Corporación Insular con otras Administraciones Públicas, dando cuenta posterior al Pleno, en la primera sesión que se celebre, no obstante, esta competencia se ha delegado en la Consejera Delegada de Deportes mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular adoptado el 7 de marzo de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P. nº 40 del 3 de abril de 2017).

Quinto.- Dado que existe interés coincidente en el Cabildo Insular de Tenerife y en el Ayuntamiento de Fasnia en la ejecución de dichas actuaciones, se instrumenta dicha colaboración en el presente Convenio, y estando conformes en su contenido y efectos, deciden formalizarlo con arreglo a las siguientes estipulaciones.

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto y presupuesto.

El objeto de la presente Adenda lo constituye la modificación del Convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento de Fasnia, para la ejecución de las obras en el sentido de incluir el presupuesto del proyecto de las obras a ejecutar tras la presentación y aprobación del mismo, así como establecer los porcentajes de financiación entre ambas administraciones.

El presupuesto inicialmente estimado del total de la inversión ha sido incrementado tras la presentación y aprobación del proyecto de ejecución "**CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA**", que asciende a la cantidad de quinientos cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y siete euros con setenta y un céntimos (557.847,71 €), con IGIC incluido, hasta la cuantía de **quinientos setenta y siete mil euros con setenta y un céntimos (577.000,71 €), IGIC incluido** (incluyendo los gastos de redacción y dirección) cantidad que será financiada por ambas administraciones públicas conforme a la siguiente distribución:

Cabildo de Tenerife: 519.300,64 €, que se corresponde con el 90 % del total de la inversión.

Ayuntamiento de Fasnia: 57.700,07 €, que se corresponde con el 10% del total de la inversión.

Todo ello sin perjuicio de las incidencias que en ejecución del contrato se puedan producir (actualizaciones del proyecto, revisiones, modificaciones contractuales, liquidación de contrato, entre otras) y que serán atendidas, en su caso, por los presupuestos del Ayuntamiento y del Cabildo Insular de Tenerife, aplicándoles los porcentajes anteriormente establecidos.

SEGUNDA.- Obligaciones del Ayuntamiento de Fasnia.

En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:

- ✓ La firma del presente Convenio implica automáticamente la autorización al Cabildo Insular para la detracción de la Carta Municipal de las cantidades comprometidas por el Ayuntamiento.
- ✓ Poner a disposición del Cabildo Insular de Tenerife los bienes necesarios para la ejecución de las obras, a través del acuerdo o certificación que resulte pertinente, que deberá hacer referencia a los datos relativos a su inscripción en el registro municipal.
- ✓ Designar a un técnico competente municipal para que actúe como responsable del contrato, junto con un técnico competente del Cabildo Insular de Tenerife.
- ✓ Realizar todas las actuaciones necesarias para autorizar la ejecución de las obras (licencias, autorizaciones, tasas, etc), así como, en cualquier caso, asumir el importe de las mismas.
- ✓ Recibir del Cabildo Insular de Tenerife, tras su finalización, las obras objeto de este Convenio, a cuyo efecto se suscribirá la correspondiente acta de entrega y recepción.
- ✓ Una vez concluidas las obras, su conservación, mantenimiento y dinamización, en debidas condiciones de uso y seguridad, será de exclusiva responsabilidad del Ayuntamiento, atendiendo dichas obligaciones con su presupuesto.
- ✓ Colaborar con el Cabildo Insular de Tenerife, en cuantas actuaciones fuera requerido para la correcta finalización de las obras.

TERCERA.- Obligaciones del Cabildo de Tenerife.

El Cabildo Insular de Tenerife, por su parte, asume las siguientes obligaciones:

- ✓ *Acometer todas las actuaciones necesarias para la adjudicación y ejecución del proyecto de **"CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA"**.*
- ✓ *Designar a un técnico competente para que actúe como responsable del contrato, junto con un técnico competente del Ayuntamiento de Fasnia.*
- ✓ *Notificar al Ayuntamiento de la fecha de inicio y finalización de los contratos de las citadas obras, así como cualquier otra circunstancia relevante que se produzca durante la ejecución de los trabajos.*
- ✓ *Una vez finalizadas las obras, y recibidas éstas de conformidad por el Cabildo de Tenerife, se procederá a levantar un Acta de recepción y entrega del Cabildo Insular de Tenerife al Ayuntamiento de Fasnia.*

CUARTA.- Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización y mantendrá su vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, con los límites previstos en el artículo 49 de la Ley 40/2015, e 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público.

QUINTA.- Publicidad.

En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de la ejecución de la obra se hará constar expresamente que ésta se lleva a cabo en virtud de la colaboración establecida en este Convenio, debiendo figurar, expresamente el anagrama del Cabildo y el del Ayuntamiento, con la obligación a cargo del contratista de colocar el cartel en el que figure el presupuesto total de la citada obra así como el importe de la financiación.

SEXTA.- Interpretación.

Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio serán resueltas expresamente por una Comisión integrada por un representante de cada una de las partes intervinientes.

SÉPTIMA.- Extinción anticipada.

Aparte del cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, serán causas de extinción de este Convenio:

- a) *Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos asumidos.*
- b) *Mutuo acuerdo entre las partes.*

En caso de extinción anticipada de la vigencia del presente Convenio, las partes acuerdan que la terminación de las inversiones en curso corresponderá al Ayuntamiento.

OCTAVA.- Jurisdicción.

El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, siendo la Jurisdicción Contencioso- Administrativa la competente para conocer cuantos litigios puedan derivarse del mismo.

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento por duplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados."

Por lo expuesto, previo dictamen de la Comisión Plenaria Permanente del Área TENERIFE 2030: INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, el Pleno **QUEDA ENTERADO** de la aprobación por resolución de la Consejera Delegada de Deportes de fecha 20 de febrero de 2018, de la **APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FASNIA DENTRO DEL PROGRAMA "TENERIFE + ACTIVA 2016-2019, DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, EN EL AÑO 2017.**

15.- Dación de cuenta al Pleno de la aprobación del texto de los Convenios de Colaboración a suscribir con los Ayuntamientos intervinientes dentro del Programa Insular de Instalaciones Deportivas al Aire Libre 2017-2021 y la toma en consideración de la formalización de los Convenios suscritos.

Visto acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 30 de noviembre de 2017, que se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - *Que con fecha 27 de mayo de 2016, el Pleno Insular aprobó el Marco Estratégico Plurianual de Actuaciones para el Desarrollo de Tenerife 2016-2025 (en adelante MEDI) que dispone en el Programa 1.4 "Tenerife Deportes" que despliega cuatro líneas de actuación como son el Programa de Mejora y Acondicionamiento de Instalaciones Deportivas Insulares; el Programa Tenerife Verde plus, el Programa Insular de Piscinas y el Programa Tenerife más azul.*

SEGUNDO. - *Que la Sra. Consejera Delegada de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife (en adelante CIT) manifestó la necesidad de la puesta en marcha de un Programa Insular de Instalaciones Deportivas Insulares al aire libre, que tendrá por finalidad principal, atender a la mayoría de los practicantes de actividad física y deporte en la Isla de Tenerife.*

A este respecto, el Plan Estratégico de Deportes del Cabildo Insular tiene como uno de sus ejes principales atender a la mayoría de practicantes que no son federados, sino que quieren realizar su actividad física al aire libre y demandan la existencia y acondicionamientos de estos espacios deportivos, cuestiones puestas de manifiesto por la reciente encuesta de hábitos deportivos publicada en la web de deportes de Tenerife.

TERCERO. - *Que este Programa sería un instrumento que coexistiría con el resto de líneas de actuación previstas en el Plan Tenerife Deportes, por el cual se gestionarían las actuaciones inversoras principales del Área de Deportes del Cabildo Insular.*

CUARTO. - *Que el 14 de febrero de 2017, el Consejo de Gobierno Insular acordó la aprobación inicial del citado Programa de Instalaciones Deportivas al Aire Libre 2017-2021.*

QUINTO. - *Que el 16 de mayo de 2017 Consejo de Gobierno Insular acordó la inclusión de este Programa de Instalaciones Deportivas al Aire Libre en la línea del MEDI 1.4.5*

SEXTO. - Que entre los **objetivos específicos** del Programa figuran los siguientes:

"Las actuaciones a definir dentro de este Programa Insular de Instalaciones Deportivas al Aire Libre tendrán como finalidad preferente el completar y optimizar la Red Básica de Instalaciones Deportivas de la Isla, y como tal han de cumplir con los siguientes requisitos generales:

- a) Tener perfil polivalente y multideportivo: diversidad de formas de práctica deportiva.*
- b) No presentar ninguna discriminación de acceso para ningún colectivo de población: edad, condición física, sexo, nivel económico, etc.*
- c) Ofrecer una alta rentabilidad social, permitiendo la atención a un gran número de personas usuarias sin poner en riesgo la sostenibilidad de los espacios naturales y urbanos.*
- d) Tener carácter permanente, dando servicio continuado a las personas usuarias.*
- e) Inspirarse en los principios de red deportiva suficiente y equilibrada territorialmente."*

SÉPTIMO. - Que, debido a la complejidad y variedad de los espacios no convencionales, se aprobaron las siguientes tipologías para unificar los criterios a exponer a los municipios:

A) PARQUE/ÁREA DEPORTIVA URBANO:

Los parques son uno de los espacios públicos más emblemáticos de un municipio. No son sólo lugares de sombra o de paseo que ofrecen la posibilidad de descansar, relajarse y disfrutar de la naturaleza sino que se constituyen en superficies lúdicas, deportivas, de esparcimiento y sobre todo, de encuentro entre los vecinos de la localidad.

Es por esto, que con el objetivo de la optimización de estos espacios públicos para la promoción de actividades físicas representa una alternativa sostenible que aporta otros beneficios transversales como pueden ser la mejora de la seguridad de los ciudadanos en las diferentes áreas del parque en cualquier horario, convirtiéndolos en espacios públicos multifuncionales, generadores de integración social, diseñados para toda la familia.

Para ello, se podrá aprovechar los elementos del medio y contruidos para la implantación de equipamientos para la práctica de actividad física de forma libre y simultánea como un complemento perfecto para aquellos parques que cuentan con espacio suficiente.

B) ESPACIOS DEPORTIVOS NATURALES:

Los espacios naturales son lugares privilegiados para la práctica de deporte y actividad física al aire libre, por lo que facilitar su práctica y promoción de estas actividades con unas garantías de calidad y seguridad, a la vez que se vela por la conservación de estos, es una de las líneas de actuación de este programa.

Cabe reseñar a título orientativo que dichos espacios normalmente no conllevan modificación alguna por parte de las administraciones, sino que

requieren de un apoyo en señalética, mantenimiento, seguridad, accesibilidad, etc., como por ejemplo en senderos, rutas de orientación, olas, etc.

Además, ocupar el tiempo libre de ocio en el medio natural como forma de práctica deportiva alternativa que ofrecen los municipios, permite igualmente conocer el patrimonio natural y cultural de la Isla de Tenerife.

C) INSTALACIONES SINGULARES:

Si bien los parques o espacios naturales y urbanos pueden estar formados por un conjunto de instalaciones o espacios singulares, debemos tratar algunos de estos espacios de forma individual por su especificidad o singularidad. Tales espacios serían: Pistas de bmx, mountain bike, skate park, pistas de tierra para correr, vías de escalada, gimnasios al aire libre, circuitos de campo a través, etc.

OCTAVO. - Que, como **resultados** a destacar del Programa Insular, se deben destacar:

- La propuesta de Red de Instalaciones Deportivas al aire libre en la Isla de Tenerife.
- Basar este programa en criterios de solidaridad, equilibrio, suficiencia y racionalidad (artículo 2 de la LCD). Se prevé, al menos, una acción por comarca y que cada una disponga de un espacio deportivo al aire libre para la práctica.
- Se acompaña de la implantación de un sello de calidad en las instalaciones que incluye un compromiso por parte de los Ayuntamientos para cumplir requisitos básicos que garanticen la calidad de la instalación y los servicios ofertados.

El importe total estimado del Programa, por parte del Cabildo Insular ascendería a 4.150.000 euros, a los que se debe sumar la financiación municipal que se determinará en función del número de habitantes del municipio, aplicando un criterio de solidaridad para favorecer a los municipios más necesitados y con menos posibilidades, resultando una aportación económica según los tramos siguientes

Hasta	20.000	habitantes.....	90%		
De	20.000	a	50.000	habitantes.....	80%
Desde	50.000	habitantes.....	50%		

Que, a modo de resumen, este Programa debe:

- a) Concebir la Isla de Tenerife como un espacio de práctica deportiva en sí misma.
- b) Basarse en un amplio consenso e implicación de los agentes deportivos públicos y privados y ciudadanos, con la necesaria dosis de coordinación institucional, entre Ayuntamientos y Cabildo Insular, principalmente.
- c) Generar valor añadido a nuestra Isla como destino de Turismo Activo.

NOVENO. - Que en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2017, por el cual se aprobó inicialmente el programa, se dispuso como procedimiento de colaboración, el siguiente:

"7.1. Una vez recibidas las propuestas según el detalle del apartado 6, estas serán valoradas por la comisión técnica constituida por el Área de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife a tal efecto, quien hará una propuesta inicial para su aprobación si procede por el Consejo de Gobierno Insular. Dando traslado de la misma a las corporaciones locales para su aprobación o alegaciones pertinentes. Recibidas las alegaciones se emitirá propuesta definitiva para su aprobación si procede por el órgano competente.

(...)NOTIFICAR a los Ayuntamientos la aprobación inicial del PROGRAMA INSULAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE y su programación, abriendo un plazo de presentación de proyectos, de acuerdo a las normas del programa, hasta el 31 de marzo de 2017, antes de proceder a la aprobación definitiva del Programa por el Consejo de Gobierno Insular."

DÉCIMO. - Que, con fecha 27 de abril de 2017, la Sra. Consejera Delegada del Área de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife amplió el citado plazo **hasta el 31 de mayo de 2017.**

UNDÉCIMO. - Que consta en el expediente informe de la Unidad Técnica del Servicio Administrativo de Deportes, que se configura como comisión técnica del Área de Deportes, a la hora de analizar las propuestas municipales y definir las acciones a desarrollar en el período 2017-2021 incluidas en este Programa y su cronograma previsto, que se recoge en la parte dispositiva de esta propuesta.

Que, este cronograma, tiene carácter orientativo y está condicionado al análisis detallado de cada proyecto que abarcará no sólo la idoneidad de la acción vinculada a su emplazamiento, movilidad, sino a su viabilidad deportiva concisa, lo que puede originar ajustes en la elegibilidad de las acciones y financiación de las mismas.

Que, a la hora de determinar el cronograma, se ha seguido además de los criterios técnicos y administrativos previstos en el programa, se atiende a los principios rectores del mismo, exigidos por el órgano de control interno del Cabildo Insular, como son la solidaridad y equilibrio territorial, determinándose inicialmente y a título orientativo, 65 actuaciones que se prevé acometer en 5 años.

Que, a fecha de hoy, las actuaciones serán financiadas con los porcentajes establecidos en función del criterio poblacional entre la Administración Insular y Municipal.

DUODÉCIMO. - Con fecha de 19 de septiembre de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno Insular **el cronograma orientativo de las acciones del PROGRAMA INSULAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 2017-2021**, con el contenido previsto en el Anexo que acompaña al mismo. En dicho acuerdo se establece además que:

"Estas acciones podrán ser invalidadas o modificadas en función de un análisis detallado del emplazamiento y demás cuestiones técnicas y administrativas y, desde un punto de vista presupuestario, anticipadas o demoradas en función de los créditos disponibles para cada ejercicio en los Presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife y de los Ayuntamientos.

SEGUNDO.- NOTIFICAR a los Ayuntamientos solicitantes el cronograma orientativo de las acciones del PROGRAMA INSULAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 2017-2021, con el contenido previsto en el Anexo que acompaña a esta propuesta, abriéndose un período de observaciones y/o alegaciones, exclusivamente, sobre las propuestas presentadas hasta el día 27 de septiembre de 2017, inclusive"

DECIMOTERCERO.- Una vez notificado el acuerdo a los Ayuntamientos interesados, resulta que se han presentado las siguientes alegaciones:

1.- Municipio de Arafo.-

Por parte de este Ayuntamiento se había propuesto inicialmente la realización de una serie de actuaciones, 3 parques urbanos y un skatepark en la zona de la "antigua Estación de Guaguas", y por importe de 230.365,27€.

No obstante dicha petición, se aporta un Certificado de la Secretaria General del Ayuntamiento, en el que se concluye que:

"PRIMERO.- La Clasificación del suelo es la de Suelo Urbano Manzana Cerrada 2 Planta, donde las condiciones urbanísticas que rigen para este tipo de suelo hacen NO VIABLE el uso pretendido.

SEGUNDO.- En relación a la disponibilidad de la parcela donde se pretende ubicar el equipamiento deportivo, se traslada que, está pendiente de que se resuelva definitivamente la cesión de los bienes cedidos en su día al Excmo. Cabildo Insular y la consiguiente reversión, hasta tanto se implante por parte de este Ayuntamiento una parada de guaguas en las cercanías de la estación y que se establece como condicionante por e Cabildo para formalizar la reversión pretendida..."

Debido a lo expuesto, no se incluye en el Cronograma propuesto las referidas actuaciones, debido a la imposibilidad jurídica de su realización.

Posteriormente, una vez notificado el acuerdo que aprueba inicialmente el cronograma de actuaciones, se remite por el referido Ayuntamiento una certificación del acuerdo del Sr. Alcalde Presidente de fecha 8 de septiembre de 2017, por el que se aprueba la contratación de la redacción de los documentos necesarios para la tramitación parcial del PGOU del municipio de Arafo, para el cambio de uso de la actual estación de guaguas.

Al respecto se observa que, en nada se modifica en la fecha actual la situación jurídica de la Parcela propuesta (estación de guaguas), y lo que existe es únicamente una propuesta de modificación de la calificación urbanística de la parcela. Sería necesario por tanto esperar al futuro acuerdo de aprobación. Por otro lado, tampoco se aporta la correspondiente reversión al Ayuntamiento, la cual no ha culminado. No procede por lo expuesto la actuación propuesta por el Ayuntamiento de Arafo en el PIDAL, debido a su inviabilidad.

2.- Municipio de El Sauzal.-

Se transcribe a continuación el informe técnico emitido al respecto de las alegaciones de este Ayuntamiento:

"Visto el escrito recibido con fecha 26 de septiembre de 2017 en donde solicitan:

"Adelantar la actuación correspondiente al Skate Park Parque San Pedro a la anualidad 2017."

Considerando que en el citado cronograma, siguiendo los principios de solidaridad y equilibrio territorial determinados en las bases de este Programa, se ha tenido en cuenta las diferentes actuaciones que este Servicio tiene aprobadas en ese municipio:

2018	Actuación	Programa	Importe
T.Lucha Calvario:	Sustitución Tatami	(PMAID)	16.200 €
P.Paulino Rivero:	Mejora recogida aguas	(PMAID)	19.440 €
T.Lucha Ravelo	Vestuários e iluminación	(PMAID)	108.000 €
C:F Las Breñas:	Inst,Cesped artificial	(VERDE+)	100.000 €

Por todo lo cual, informo negativamente el adelanto de la actuación correspondiente al Skate Park Parque San Pedro a la anualidad 2017."

3.- Municipio de Los Silos.-

También en este caso se desestiman las alegaciones presentadas con base en los siguientes motivos:

Visto el escrito recibido con fecha 26 de septiembre de 2017 en donde solicitan:

"Adelantar la actuación de instalación de las máquinas Biosaludables y Señalética al año 2018."

Teniendo en cuenta que en la propuesta de ese ayuntamiento no aparece realizado un desglose por cada acción solicitada, lo que hace difícil un análisis de cada actuación estando además localizadas en diferentes emplazamientos.

Considerando que en el citado cronograma, siguiendo los principios de solidaridad y equilibrio territorial determinados en las bases de este Programa, se ha tenido en cuenta las diferentes actuaciones que este Servicio tiene aprobadas en ese municipio:

2018	Actuación	Programa	Importe
C.F. Juan Valiente:	Inst,Cesped artificial	(VERDE+)	100.000 €
Piscina Municipal:	Remodelación vaso	(RPIP)	208.681.33 €
CEIP Las Salinas	Pavimento e iluminación	(PMAID)	71.910 €
CEIP Las Salinas	Vestuários y equipamiento	(PMAID)	116.640 €

Por todo lo cual, informo negativamente el "Adelanto de la actuación correspondiente a la instalación de las máquinas Biosaludables y Señalética al año 2018."

4.- Municipio de La Matanza de Acentejo.-

Se señala en el informe técnico lo siguiente:

"Visto el escrito recibido con fecha 26 de septiembre de 2017 en donde solicitan:

1.- "Adelantar la financiación del CIT de la Obra "Parque Multiuso" con presupuesto de 238.824.00 € al 2018."

2.- "Incluir para el 2019 la segunda actuación de un skatepark con un presupuesto de 147.633.25 €..."

Considerando que en el citado cronograma, siguiendo los principios de **solidaridad y equilibrio territorial** determinados en las bases de este Programa, se ha tenido en cuenta las diferentes actuaciones que este Servicio tiene aprobadas en ese municipio:

2017	Actuación	Programa	Importe
Campo de futbol:	Instalación Césped	(VERDE +)	100.000 €
C. Deportivo:	Sistema ventilación	(PMAID)	90.000 €
	Cambio cubierta	(PMAID)	45.900 €

2018

Piscina:	Mejora eficiencia energética	(RPIP)	
171.000 €			

Por todo lo cual, informo negativamente el adelanto de la financiación de la Obra "Parque Multiuso" con presupuesto 238.824.00 €".

5.- San Miguel de Abona.-

Al respecto de las alegaciones presentadas se informa lo siguiente:

Visto el escrito recibido con fecha 3 de octubre de 2017 en donde solicitan:

"El adelanto a 2018 de las propuestas presentadas por esta Corporación municipal, puesto que ninguna de ellas se plantea en el próximo año."

Teniendo en cuenta que el citado escrito ha sido presentado fuera del plazo de alegaciones, ya que dicho plazo se cerró el pasado 27 de septiembre.

Considerando que en el citado cronograma, siguiendo los principios de **solidaridad y equilibrio territorial** determinados en las bases de este Programa, se ha tenido en cuenta las diferentes actuaciones que este Servicio tiene aprobadas en ese municipio:

2018	Actuación	Programa	Importe
C.F. Paco Tejera:	Inst,Césped artificial	(VERDE+)	100.000 €
Poldep. Guargacho	Inst. Cubierta	(PMAID)	319.860 €
Llano CamelloGym Outdoor		(PMAID)	13.500 €

Por todo lo cual, informo negativamente su solicitud de "El adelanto a 2018 de las propuestas presentadas por esta Corporación municipal, puesto que ninguna de ellas se plantea en el próximo año."

6.- Santa Cruz de Tenerife.-

Se solicita en este caso la inclusión en el Programa de Instalaciones Deportivas al Aire Libre la inclusión de la actuación inicialmente propuesta de "Parque o Espacio natural y urbano", con diversas instalaciones singulares, en este caso en la parcela "Cuchillitos de Tristán".

Como en el propio escrito se pone de manifiesto, el expediente de reversión del inmueble al Ayuntamiento se ha iniciado por parte de la Gerencia del Organismo Autónomo Deportes, ya que el mismo fue cedido al Instituto Nacional de Tiempo Libre, y éste a su vez lo traspasa a la Comunidad Autónoma de Canarias. En tales circunstancias, en la actualidad, no se puede incluir las actuaciones en la referida parcela dentro del PIDAL, puesto que el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife carece de la disponibilidad de los terrenos.

7.-Municipio de Icod de Los Vinos.-

Por la Unidad Técnica deportiva se emite de informe del siguiente tenor:

"Visto el escrito recibido con fecha 27 de septiembre de 2017 en donde solicitan:

- 1.- "Adelantar el proyecto ESPACIO URBANO Y BIOSALUDABLE EN SANTA BARBARA previsto para 2019 a la anualidad 2018"
- 2.- Adelantar el proyecto ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA ESPACIO DEPORTIVO CRUZ DEL CAMINO previsto para 2021 a la anualidad 2018.
3. Adelantar el proyecto PUESTA EN VALOR DE LA FINCA AIROSA previsto para 2019 a la anualidad 2018.
4. Adelantar el proyecto SKATE PARK previsto para 2020 a la anualidad 2018
5. Adelantar el proyecto ROCODROMO PLAZA DE AMERICA previsto para 2021 a la anualidad 2018

Considerando que en el citado cronograma, siguiendo los principios de **solidaridad y equilibrio territorial** determinados en las bases de este Programa, se ha tenido en cuenta las diferentes actuaciones que este Servicio tiene aprobadas en ese municipio:

2018	Actuación	Programa	Importe
P.M. José Leonardo	Reparación vestuarios	(PMAID)	113.360 €
EM. El Molino	Marquesina	(PMAID)	39.821 €

Por todo lo cual, informo negativamente las solicitudes referidas"

DECIMOCUARTO. - En cuanto al gasto que conlleva el presente expediente, consta en el mismo, copia del acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2017 por el que se aprueba el expediente de modificación de Créditos nº 6, donde se recoge un crédito extraordinario por importe de 150.000€ en la aplicación presupuestaria 17.0741.3428.76240, Py. 17/0989, Programa Insular de Instalaciones Deportivas al Aire Libre.

DECIMOQUINTO. - Respecto al gasto futuro que da cobertura presupuestaria al presente Programa en los años 2018 a 2020, consta asimismo en el expediente informe favorable del Servicio de Presupuesto y Gasto Público.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO. - Los Cabildos Insulares, como órganos de gobierno y administración de la isla, tienen atribuido en general, "el fomento y administración de los intereses peculiares de la isla" y en particular en la materia deportiva "el fomento y coordinación de la práctica del deporte", debiendo realizar todas aquellas actividades que tiendan a proteger, promover, financiar e impulsar el fenómeno deportivo.

SEGUNDO. - El Cabildo Insular está interesado en garantizar el acceso a la población de la Isla al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal, conforme a lo estipulado en el artículo 36.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

TERCERO. - Que el artículo 6, apartado 2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares dispone que:

"En todo caso, en los términos de la presente ley y de la legislación reguladora de los distintos sectores de actuación pública, **se atribuirán a los cabildos insulares competencias** en las materias siguientes:

(...)

o) Cultura, **deportes**, ocio y esparcimiento.(...)"

CUARTO. - Que el Cabildo insular de Tenerife, en virtud del artículo 2.B) del Decreto 152/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canarias a los Cabildos Insulares en materia de cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico, ostenta las siguientes competencias:

"1. Fomentar y coordinar la práctica del deporte para todos y la educación física no escolar. (...)

4. La coordinación de las Administraciones municipales de la isla en la promoción y difusión de la cultura física y deportiva. (...)

7. Elaboración, aprobación y ejecución de los Planes Insulares de construcción, modernización y ampliación e instalaciones deportivas, atendándose a las directrices del Plan Canario de Infraestructuras Deportivas."

QUINTO. - El artículo 2.2 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte (en adelante LCD) establece que las Administraciones Públicas deben garantizar la actividad físico-deportiva, entre otras, mediante las siguientes líneas de actuación:

a) La promoción del deporte en todas sus expresiones.

g) La asignación de recursos para atender, con carácter global, las líneas generales de actuación.

SEXTO. - Que el artículo 4 de la LCD reconoce, entre los principios generales que deben inspirar la actuación de las Administraciones Públicas, los de cooperación, coordinación, eficiencia en el ejercicio de sus respectivas competencias y participación y colaboración de las entidades deportivas.

SÉPTIMO. - Que, respecto a la selección de actuaciones, el artículo 103 de la Constitución dispone que:

"1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho."

OCTAVO. - Que la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 2 de diciembre de 2001, respecto a la potestad discrecional establece los límites del artículo 103 de la Constitución:

"[...] ante la limitación de medios económicos destinados a estos fines, la Administración tendrá que valorar las diferentes propuestas presentadas, dando preferencia a aquellas que de una forma más clara cumplan los objetivos previstos... y rechazando aquellas otras que (...) imposible cubrir tales objetivos. (...)"

NOVENO. - Que la competencia para aprobar este tipo de programas corresponde al Consejo de Gobierno Insular de acuerdo al Reglamento Orgánico

de la Corporación Insular, artículo 29, apartado 5, letra b). Además de lo expuesto, también es competencia de dicho órgano la aprobación de gastos de carácter plurianual, conforme a lo establecido en las bases de Ejecución del Presupuesto Corporativo.

No obstante lo anterior, en acuerdo de fecha 14 de febrero pasado, en el que se aprueba inicialmente este Programa, se acuerda **DELEGAR**, a los efectos de hacer más ágil el presente expediente, en la **Sra. Consejera Delegada de Deportes**, la competencia para la **aprobación definitiva del Programa, así como cualesquiera modificaciones** anteriores o posteriores al mismo que sean necesarias; y actos administrativos de ejecución que sean precisos, debiendo publicarse la delegación en el Boletín Oficial de la Provincia, para su validez.

Dicha delegación fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 59 del miércoles 17 de mayo de 2017.

A la vista de la delegación efectuada y de que no se aprueba en este acto ningún gasto plurianual, corresponde la competencia a la Sra. Consejera Delegada de Deportes la aprobación definitiva del programa.

DÉCIMO.- A la vista de la regulación contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 47 a 53, se puede afirmar que nos encontramos ante un convenio de colaboración del artículo 47.2,a) y que cumple con los requisitos establecidos, particularmente importantes los siguientes:

"3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria.

5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio."

Asimismo, su contenido se ajusta a las prevenciones legales de dicha normativa (artículo 49 y siguientes)..

A la vista de lo expuesto, y previo informe favorable de la Intervención General, el Consejo de Gobierno Insular **ACUERDA:**

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones y solicitudes presentadas por algunos Ayuntamientos (Arafo, El Sauzal, Los Silos, La Matanza de Acentejo, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, e Icod de Los Vinos) al cronograma orientativo de las acciones del PROGRAMA INSULAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 2017-2021, aprobado provisionalmente por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 19 de septiembre de 2017.

SEGUNDO.- APROBAR definitivamente el PROGRAMA INSULAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 2017-2021, y el cronograma de las acciones del mismo, con el contenido previsto en el Anexo I que acompaña a esta propuesta.

Estas acciones podrán ser invalidadas o modificadas en función de un análisis detallado del emplazamiento y demás cuestiones técnicas y administrativas que puedan surgir, y, desde un punto de vista presupuestario, anticipadas o demoradas en función de los créditos disponibles para cada ejercicio en los Presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife y de los Ayuntamientos.

TERCERO.- Aprobar el texto de los convenios de colaboración a suscribir con los Ayuntamientos de la Isla que realicen por sí mismos las actuaciones previstas en el cronograma previa transferencia económica que se producirá a la firma del mismo, texto que se incorpora como **Anexo II** a la presente propuesta.

Dar cuenta al Pleno de la Corporación de los convenios interadministrativos que se vayan celebrando, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Corporativo.

ANEXO 1 PROPUESTA DE CRONOGRAMA PIDAL 2017-2021													
AYTO.	TIPO DE INSTALACION	ZONA	TOTAL	FINANC.AYTO.		FINANC.CIT		FINANCIACION CIT					
				%	IMPORTE	%	IMPORTE	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	
	Modulos												
1	LA OROTAVA	Biosaludables	1	La Luz	20.770,20	20%	4.154,04	80%	16.616,16	16.616,16			
2	LA OROTAVA	Biosaludables	1	El Pinalito	14.175,09	20%	2.835,02	80%	11.340,07	11.340,07			
3	LA OROTAVA	Biosaludables	1	Plaza Carmenaty	11.151,91	20%	2.230,38	80%	8.921,53	8.921,53			
4	LA OROTAVA	Biosaludables	1	P. Candelaria del Lomo	28.162,03	20%	5.632,41	80%	22.529,62		22.529,62		
					74.259,23		14.851,85		59.407,38				
5	LA LAGUNA	Calistenia	1	Parque La Vega	45.000,00	50%	22.500,00	50%	22.500,00	22.500,00			
6	LA LAGUNA	Calistenia	1	Valle de Guerra	15.000,00	50%	7.500,00	50%	7.500,00	7.500,00			
7	LA LAGUNA	Calistenia	1	Parque de San Benito	15.000,00	50%	7.500,00	50%	7.500,00	7.500,00			
8	LA LAGUNA	Calistenia	1	Parque de Ofra	15.000,00	50%	7.500,00	50%	7.500,00	7.500,00			
9	LA LAGUNA	Calistenia	1	Punta Hidalgo	15.000,00	50%	7.500,00	50%	7.500,00			7.500,00	
10	LA LAGUNA	Biosaludables	1	Guamasa	10.000,00	50%	5.000,00	50%	5.000,00			5.000,00	
11	LA LAGUNA	Calistenia	1	Geneto	15.000,00	50%	7.500,00	50%	7.500,00	7.500,00			
12	LA LAGUNA	Calistenia	1	Tejina	15.000,00	50%	7.500,00	50%	7.500,00	7.500,00			
13	LA LAGUNA	Calistenia	1	La Cuesta	30.000,00	50%	15.000,00	50%	15.000,00		15.000,00		
14	LA LAGUNA	Calistenia	1	Parque del Polvorin Taco	30.000,00	50%	15.000,00	50%	15.000,00		15.000,00		
15	LA LAGUNA	Paneles señalización	1	Costa Lagunera	12.000,00	50%	6.000,00	50%	6.000,00		6.000,00		
16	LA LAGUNA	Paneles señalización	1	Sendero Cañada lagunera	12.000,00	50%	6.000,00	50%	6.000,00		6.000,00		
17	LA LAGUNA	Paneles señalización	1	Mesa Mota	12.000,00	50%	6.000,00	50%	6.000,00		6.000,00		
18	LA LAGUNA	Señalización V. Escalada	1	Valle Tabares	15.000,00	50%	7.500,00	50%	7.500,00		7.500,00		
19	LA LAGUNA	Rocodromo y "Boulder"	1	Punta Hidalgo	200.000,00	50%	100.000,00	50%	100.000,00			100.000,00	
20	LA LAGUNA	Reforma Skate park	1	Punta Hidalgo	186.000,00	50%	93.000,00	50%	93.000,00		93.000,00		
					642.000,00		321.000,00		321.000,00				
21	ICOD	Biosalud. Calist. P. Infant.	3	Santa Bárbara	63.658,74	20%	12.731,75	80%	50.926,99		50.926,99		

22	ICOD	Parque infantil, Calistenia	2	Cruz del Camino	42.354,00	20%	8.470,80	80%	33.883,20					33.883,20
23	ICOD	Calistenia	1	Airosa Llanito Perera	52.019,59	20%	10.403,92	80%	41.615,67			41.615,67		
24	ICOD	Skatepark	1	Plaza de América	42.800,00	20%	8.560,00	80%	34.240,00				34.240,00	
25	ICOD	Rocodromo	1	Plaza de América	86.884,00	20%	17.376,80	80%	69.507,20					69.507,20
					287.716,33		57.543,27		230.173,06					
26	TACORONTE	Parque multiuso	1	Parque Hoya de Machado	250.000,00	20%	50.000,00	80%	200.000,00	50000	150.000,00			
27	CANDELARIA	Skatepark	1	Polideportivo Punta Larga	83.137,94	20%	16.627,59	80%	66.510,35			66.510,35		
28	CANDELARIA	Parque multiuso	1	Punta Larga	280.000,00	20%	56.000,00	80%	224.000,00					200.000,00
					363.137,94		72.627,59		290.510,35					
29	GUIA DE ISORA	Calistenia y Petanca	2	Playa San Juan	97.483,00	20%	19.496,60	80%	77.986,40			77.986,40		
30	GUIA DE ISORA	Calistenia	1	La Jaquita Alcalá	58.632,00	20%	11.726,40	80%	46.905,60		46.905,60			
					156.115,00		31.223,00		124.892,00					
31	LOS REALEJOS	Calistenia	1	Parque J. Marrero	64.299,21	20%	12.859,84	80%	51.439,37		51.439,37			
32	SAN MIGUEL	Skatepark y BMX	2	Las Chafiras	110.415,86	10%	11.041,59	90%	99.374,27			99.374,27		
33	SAN MIGUEL	Rocodromo	1	Centro Jonay Risco Perez	186.051,60	10%	18.605,16	90%	167.446,44				167.446,44	
34	SAN MIGUEL	Skatepark	1	Parque Llano del Camello	55.572,56	10%	5.557,26	90%	50.015,30			50.015,30		
					352.040,02		35.204,00		316.836,02					
35	LA MATANZA	Parque multiuso	1	Parque natural del Montillo	238.824,00	10%	23.882,40	90%	214.941,60			200.000,00		
					238.824,00		23.882,40		214.941,60					
36	EL TANQUE	Biosal. Calist. P. Infant.	3	San J. Los Llanos	73.590,93	10%	7.359,09	90%	66.231,84		66.231,84			
37	LA GUANCHA	Biosalud. y Calistenia	2	R.C. Barrios Rodriguez	26.418,30	10%	2.641,83	90%	23.776,47			23.776,47		
38	LA GUANCHA	Skatepark	1	Plaza de Canarias	100.000,00	10%	10.000,00	90%	90.000,00				90.000,00	
					126.418,30		12.641,83		113.776,47					
39	STA.URSULA	Parque multiuso	1	Mencey Bencomo	313.257,25	10%	31.325,73	90%	281.931,53		200.000,00			
40	STA.URSULA	Pista para correr	1	La Palmeras	259.277,30	10%	25.927,73	90%	233.349,57					200.000,00
					572.534,55		57.253,46		515.281,10					
41	EL SAUZAL	Skatepark	1	Parque San Pedro	29.894,48	10%	2.989,45	90%	26.905,03			26.905,03		
42	EL SAUZAL	Skatepark	1	Parque de Ravelo	29.771,36	10%	2.977,14	90%	26.794,22		26.794,22			
					59.665,84		5.966,58		53.699,26					

43	S.JUAN RAMBLA	Parque multiuso	1	Recinto Ferial Las Rosas	218.267,13	10%	21.826,71	90%	196.440,42			196.440,42		
44	ARICO	Biosaludables y Skatepark	2	El Rio	31.299,92	10%	3.129,99	90%	28.169,93		28.169,93			
45	ARICO	Biosaludables y fitness	2	Arico Viejo	25.440,72	10%	2.544,07	90%	22.896,65			22.896,65		
46	ARICO	Calistenia y Rocódromo	2	Abades	107.991,22	10%	10.799,12	90%	97.192,10				97.192,10	
					164.731,86		16.473,19		148.258,67					
47	BUENAVISTA	Calistenia	1	Poldep. San Francisco	83.120,89	10%	8.312,09	90%	74.808,80		74.808,80			
48	BUENAVISTA	Rocodromo	1	Poldep. San Francisco	115.875,00	10%	11.587,50	90%	104.287,50				104.287,50	
					198.995,89		19.899,59		179.096,30					
49	GARACHICO	Biosalud. Calist. P. Infantil	3	San Juan del Reparó	93.096,63	10%	9.309,66	90%	83.786,97		83.786,97			
50	GARACHICO	Skatepark	1	San Juan del Reparó	15.474,93	10%	1.547,49	90%	13.927,44		13.927,44			
					108.571,56		10.857,16		97.714,40					
51	LOS SILOS	Parque infantil, Calistenia	2	Edificios Sibora y Daute										
52	LOS SILOS	Skatepark	1	Edificios Sibora y Daute										
53	LOS SILOS	Rocodromo	1	Edificios Sibora y Daute										
54	LOS SILOS	Biosaludables	1	Pl. Juanquin Cal. Interian										
55	LOS SILOS	Biosaludables y señáletica	2	La Ballena										
					200.000,00	10%	20.000,00	90%	180.000,00			90.000,00	90.000,00	
56	LA VICTORIA	Biosaludables	1	Centro cultural La Vera	18.551,39	10%	1.855,14	90%	16.696,25			16.696,25		
57	LA VICTORIA	Biosalud. y P. Infantil	2	Los Arroyos	63.919,66	10%	6.391,97	90%	57.527,69		57.527,69			
58	LA VICTORIA	Parque infantil	1	La Resbala	37.936,04	10%	3.793,60	90%	34.142,44			34.142,44		
59	LA VICTORIA	Parque infantil	1	Plaza de Santo Domingo	26.134,62	10%	2.613,46	90%	23.521,16			23.521,16		
60	LA VICTORIA	Skatepark	1	Casa de la Juventud	94.177,56	10%	9.417,76	90%	84.759,80				84.759,80	
					240.719,27		24.071,93		216.647,34					
61	FASNIA	Biosal. Calist. P. Infantil	3	C. Futbol Miguel Díaz	110.456,29	10%	11.045,63	90%	99.410,66			99.410,66		
62	VILAFLO	C. Ubicación Rocodromo	1	El Salguero	31.330,95	10%	3.133,10	90%	28.197,86		28.197,86			
63	PTO LA CRUZ	Skatepark y BMX	2	San Antonio	120.000,00	20%	24.000,00	80%	96.000,00				96.000,00	

64	EL ROSARIO	Cartografía Orientación	1	Las Raíces	2.530,55	10%	253,06	90%	2.277,50	2.277,50					
65	SANTIAGO	Biosal. Calist. P. Infant.	3	Los Gigantes	77.679,86	10%	7.767,99	90%	69.911,87			69.911,87			
TOTALES			86							149.155,26	998.819,34	1.000.719,28	795.076,70	774.150,20	3.717.920,77

ANEXO II

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE [REDACTED], PARA LA EJECUCIÓN DE [REDACTED]

En Santa Cruz de Tenerife, a...

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. DON CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

De otra, el [REDACTED], en su condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de [REDACTED].

INTERVIENEN

*El primero, por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del **Excmo. Cabildo Insular de Tenerife**. Facultado para este acto en virtud del artículo 6,1, n) del Reglamento Orgánico Corporativo, Texto Refundido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 91 del lunes 31 de julio de 2017.*

*El segundo, también por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del **Ayuntamiento de [REDACTED]**, previamente facultado para este acto por acuerdo adoptado por [REDACTED] en sesión celebrada el día [REDACTED].*

Dichas partes, según intervienen, se reconocen entre sí la capacidad jurídica necesaria para la suscripción del presente Convenio de Colaboración.

EXPONEN:

PRIMERO.- Con fecha 27 de mayo de 2016, el Pleno Insular aprobó el Marco Estratégico Plurianual de Actuaciones para el Desarrollo de Tenerife 2016-2025 (en adelante MEDI) que dispone en el Programa 1.4 “Tenerife Deportes” que despliega cuatro líneas de actuación como son el Programa de Mejora y Acondicionamiento de Instalaciones Deportivas Insulares; el Programa Tenerife Verde Plus, el Programa Insular de Piscinas y el Programa Tenerife Más Azul.

SEGUNDO.- La Sra. Consejera Delegada de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife manifestó la necesidad de la puesta en marcha de un Programa Insular de Instalaciones Deportivas Insulares al aire libre, que tendrá por finalidad principal, atender a la mayoría de los practicantes de actividad física y deporte en la Isla de Tenerife.

A este respecto, el Plan Estratégico de Deportes del Cabildo Insular tiene como uno de sus ejes principales atender a la mayoría de practicantes que no son federados, sino que quieren realizar su actividad física al aire libre y demandan la existencia y acondicionamientos de estos espacios deportivos, cuestiones puestas de manifiesto por la reciente encuesta de hábitos deportivos publicada en la web de Deportes de Tenerife.

TERCERO.- El 14 de febrero de 2017, el Consejo de Gobierno Insular acordó la aprobación inicial del citado Programa de Instalaciones Deportivas al Aire Libre 2017-2021.y el 16 de mayo de 2017 el Consejo de Gobierno Insular

acordó la inclusión de este Programa de Instalaciones Deportivas al Aire Libre en la línea del MEDI 1.4.5.

CUARTO.- Las actuaciones definidas dentro de este Programa Insular de Instalaciones Deportivas al Aire Libre tienen como finalidad preferente el completar y optimizar la Red Básica de Instalaciones Deportivas de la Isla, y como tal cumplen con los siguientes requisitos generales:

- a) Tener perfil polivalente y multideportivo: diversidad de formas de práctica deportiva.
- b) No presentar ninguna discriminación de acceso para ningún colectivo de población: edad, condición física, sexo, nivel económico, etc.
- c) Ofrecer una alta rentabilidad social, permitiendo la atención a un gran número de personas usuarias sin poner en riesgo la sostenibilidad de los espacios naturales y urbanos.
- d) Tener carácter permanente, dando servicio continuado a las personas usuarias.
- e) Inspirarse en los principios de red deportiva suficiente y equilibrada territorialmente.”

QUINTO.- Con fecha de 19 de septiembre de 2017 se aprueba por el Consejo de Gobierno Insular el cronograma orientativo de las acciones del PROGRAMA INSULAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 2017-2021, con el contenido previsto en el Anexo que acompaña al mismo, y una vez se dio traslado a los municipios interesados, el referido Programa es aprobado mediante resolución de la Sra. Consejera delegada de Deportes de fecha , en virtud de la delegación efectuada por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de febrero de 2017.

SEXTO.- Los Cabildos Insulares, como órganos de gobierno y administración de la isla, tienen atribuido en general, “el fomento y administración de los intereses peculiares de la isla” y en particular en la materia deportiva “el fomento y coordinación de la práctica del deporte”, debiendo realizar todas aquellas actividades que tiendan a proteger, promover, financiar e impulsar el fenómeno deportivo.

En el artículo 6, apartado 2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares dispone que:

“En todo caso, en los términos de la presente ley y de la legislación reguladora de los distintos sectores de actuación pública, se atribuirán a los Cabildos Insulares competencias en las materias siguientes:

(...)

o) Cultura, deportes, ocio y esparcimiento.(...)”.

El Cabildo insular de Tenerife, en virtud del artículo 2.B) del Decreto 152/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canarias a los Cabildos Insulares en materia de cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico, ostenta las siguientes competencias:

“1. Fomentar y coordinar la práctica del deporte para todos y la educación física no escolar. (...)

4. La coordinación de las Administraciones municipales de la isla en la promoción y difusión de la cultura física y deportiva. (...)

7. Elaboración, aprobación y ejecución de los Planes Insulares de construcción, modernización y ampliación e instalaciones deportivas, atendándose a las directrices del Plan Canario de Infraestructuras Deportivas.”.

El artículo 2.2 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte (en adelante LCD) establece que las Administraciones Públicas deben garantizar la actividad físico-deportiva, entre otras, mediante las siguientes líneas de actuación:

a) La promoción del deporte en todas sus expresiones.

g) La asignación de recursos para atender, con carácter global, las líneas generales de actuación.

El artículo 4 de la LCD reconoce, entre los principios generales que deben inspirar la actuación de las Administraciones Públicas, los de cooperación, coordinación, eficiencia en el ejercicio de sus respectivas competencias y participación y colaboración de las entidades deportivas.

SÉPTIMO.- Además de lo anterior, y respecto a la selección de actuaciones, el artículo 103 de la Constitución dispone que:

“1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”

Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 2 de diciembre de 2001, respecto a la potestad discrecional establece los límites del artículo 103 de la Constitución:

“[...] ante la limitación de medios económicos destinados a estos fines, la Administración tendrá que valorar las diferentes propuestas presentadas, dando preferencia a aquellas que de una forma más clara cumplan los objetivos previstos... y rechazando aquellas otras que (...) imposible cubrir tales objetivos. (...)”.

OCTAVO.- El presente convenio de colaboración se ajusta además a las previsiones contenidas en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

NOVENO.- Dado que existe interés coincidente en el Cabildo y el Ayuntamiento en la ejecución de dichas actuaciones, se instrumenta la colaboración en el presente Convenio, y estando conformes en su contenido y efectos, deciden formalizarlo con arreglo a las siguientes estipulaciones.

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO Y PRESUPUESTO.

El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre el Excmo. CIT y el Ayuntamiento de [REDACTED] para las actuaciones, en general, mejora y acondicionamiento de instalaciones deportivas municipales previstas en el Programa Tenerife + Activa.

Las actuaciones a acometer, de acuerdo al presente Convenio, son las siguientes:

El presupuesto estimado global que se destina a las actuaciones a acometer conforme al presente convenio se cifra en la cantidad de **euros** cuya financiación se distribuye entre ambas Administraciones, según el siguiente detalle:

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.

En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:

hh) Ejecutar las actuaciones objeto del presente convenio, bajo su exclusiva responsabilidad, bien con sus propios medios, bien mediante su contratación externa con arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, respetando en todo caso los principios de publicidad y concurrencia. En caso de ejecución de obras necesarias para realizar las actuaciones la dirección facultativa así como la coordinación de Seguridad y salud serán asimismo responsabilidad del Ayuntamiento.

ii) Destinar la financiación del ECIT, exclusivamente, al objeto de este convenio y justificar ante el mismo la realización de la actuación objeto de la colaboración, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la misma.

Se deberá justificar la aplicación material de los fondos percibidos, dentro de los tres meses siguientes a la realización de la misma, y siempre antes de que finalice el plazo de vigencia del presente convenio, salvo que se acuerde su prórroga por acuerdo unánime de las partes, conforme a lo prevenido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La referida justificación podrá efectuarse por cualquier medio admisible en Derecho que deje constancia, preferentemente mediante certificación del Secretario/Interventor municipal.

Asimismo y a tales efectos, el Ayuntamiento deberá someterse, en cualquier momento, a las actuaciones de inspección a efectuar por el CIT respecto la actuación, permitiendo el acceso al personal del Cabildo para efectuar las comprobaciones oportunas

jj) Soportar los tributos, así como las cargas y gravámenes derivados de la expedición de licencias y concesiones municipales para la realización de las actuaciones, en caso necesario.

kk) Designar al personal técnico necesario para la supervisión de la ejecución de las actuaciones, incluidos ensayos, seguridad y salud y cuantas otras prevenciones sean preceptivas por las disposiciones vigentes.

II) Se deberá remitir a este Cabildo Insular la siguiente documentación:

- *Certificado de titularidad de la Instalación y Calificación Urbanística.*
- *Certificación del acuerdo del órgano competente, de la aprobación del convenio y compromiso de financiación.*
- *Documentación técnica previa y necesaria para la ejecución de la actuación, como en el caso de ejecución de obras, en que se deberá remitir el proyecto de ejecución, con el acuerdo de aprobación del mismo por el órgano correspondiente así como el informe técnico de supervisión municipal.*
- *La documentación administrativa que se considere pertinente para acreditar el cumplimiento de la actuación así como restantes obligaciones municipales, (como acuerdo de adjudicación en caso de contratación externa y/o certificaciones de obra, acuerdo de liquidación o acta de recepción...etc).*

mm) *En el lugar de ejecución de la actuación deberá figurar un cartel durante el periodo de ejecución, según el modelo establecido, en el que se hará constar, al menos, el Programa Insular, la denominación de la actuación, el presupuesto total, la aportación del CIT y el plazo de ejecución, y todo ello conforme al modelo o diseño que se facilite por la Corporación Insular.*

nn) *Además del anterior, así como del cartel de obra que corresponda (en caso de que se trate de una obra de ejecución, se deberá colocar de modo permanente, en lugar destacado y bien visible de la instalación deportiva - o en el lugar de la actuación - un cartel con la imagen y anagrama del Cabildo Insular, en su versión de sello de calidad o como agente impulsor de la actuación, conforme sea facilitado por el Área de Deportes.*

oo) *Cesión de uso gratuito y preferente del ECIT sobre estas instalaciones deportivas, por razones de interés general, de acuerdo con los calendarios previamente establecidos y coordinados con el programa municipal de actividades deportivas.*

pp) *Una vez recibidas las obras y/o equipamiento, o cualquier otra actuación, será titularidad del Ayuntamiento, por lo que el mismo deberá encargarse de su mantenimiento y dinamización, dotando a la instalación del correspondiente personal específico, tanto de mantenimiento/ control, como facultativo/técnico deportivo, debidamente cualificado académica y profesionalmente para su cometido, de manera que se obtenga el mayor rendimiento deportivo y social de la infraestructura deportiva creada (o la actuación de que se*

trate), sin perjuicio de que el la Corporación municipal disponga la forma de gestión que estime conveniente.

- qq) Las bajas correspondientes a la aportación económica del CIT que se produzcan como consecuencia de la adjudicación de los contratos, podrán ser utilizados, en último caso, para financiar otras actuaciones, a solicitud del Ayuntamiento y previa autorización del CIT. En ese caso, esas otras actuaciones quedarán asimismo incorporadas al presente "Programa de Deporte al Aire Libre".
- rr) Las incidencias que en ejecución del contrato se puedan producir serán atendidas, en su caso, por el presupuesto de la Corporación Municipal (entre otras, revisión de precios, modificaciones del contrato, liquidación del contrato, etc.), salvo que su cuantía no exceda del valor estimado de la actuación inicialmente previsto en el convenio y por tanto pueda ser atendido con las bajas correspondientes a las aportaciones económicas de ambas administraciones.- requiriendo previamente la autorización del ECIT-.
- ss) Reintegrar las cantidades, así como los intereses correspondientes, financiadas por el CIT no aplicadas al objeto previsto en este Convenio, ni contempladas en el apartado anterior, o las que pudieran derivarse de un exceso de financiación de la Corporación Insular que, como máximo, ascenderá al [REDACTED] % del coste de ejecución de cada una de las actuaciones contempladas individualmente.
- tt) En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de la ejecución del presente convenio se hará constar expresamente que ésta se lleva a cabo en virtud de la colaboración establecida en el mismo.

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CABILDO DE TENERIFE.

El CIT, por su parte, asume las siguientes obligaciones:

- a) Aportar al Ayuntamiento de [REDACTED] la cantidad máxima de [REDACTED], para la ejecución de las obras y/o suministros descritas en la estipulación primera de este convenio y que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 17.0741.3428.76240. La transferencia se realizará una vez suscrito el Convenio.
- b) Prestar asistencia y colaboración técnica y jurídica a la Corporación municipal.
- c) En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de la ejecución del presente convenio se hará constar expresamente que ésta se lleva a cabo en virtud de la colaboración establecida en el mismo.

CUARTA.- VIGENCIA.

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización y mantendrá su vigencia durante dos años, o hasta la

extinción del mismo por el cumplimiento de las obligaciones de las partes si es anterior.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta dos años más, o su extinción, en los términos de la letra h) del artículo 49 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (40/2015, de 1 de octubre).

QUINTA.- INTERPRETACIÓN. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL.

Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio serán resueltas expresamente por una Comisión paritaria integrada por un representante de cada una de las partes intervinientes, que ejercerá las funciones legalmente establecidas.

SEXTA.- EXTINCIÓN ANTICIPADA.

Aparte del cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, el presente convenio se extinguirá por concurrir alguna causa de resolución, a saber:

- a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.*
- b) El acuerdo unánime de las partes.*
- c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes en los términos de la letra c) del artículo 51.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.*

La resolución del presente convenio, por cualquiera de sus causas, desplegará los efectos establecidos en el artículo 52 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.

El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, siendo la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la competente para conocer cuántos litigios puedan derivarse del mismo.

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento por duplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados."

A la vista de lo expuesto, previo dictamen de la Comisión Plenaria Permanente de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, Juventud e Igualdad, el PLENO QUEDA ENTERADO de la aprobación por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión extraordinaria de fecha 30 de noviembre de 2017, DE LA APROBACIÓN DEL TEXTO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON LOS AYUNTAMIENTOS INTERVINIENTES DENTRO DEL "PROGRAMA INSULAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE" 2017-2021, ASÍ COMO DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, :

	AYUNTAMIENTO	FECHA FORMALIZACIÓN
64	EL ROSARIO	28/12/2017
26	TACORONTE	21/12/2017
1	LA OROTAVA	28/12/2017

ÁREA DE PRESIDENCIA.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ASESORAMIENTO LEGAL AL PLENO Y A LAS COMISIONES PLENARIAS, DE REGISTRO Y FE PÚBLICA DE DICHS ÓRGANOS.

16.- Propuesta de aprobación inicial de la modificación parcial del Reglamento Orgánico de la Corporación.

En relación con el expediente de propuesta de modificación parcial del Reglamento Orgánico de la Corporación, y teniendo en cuenta que:

PRIMERO: La Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2018, en su Disposición Final Séptima introduce una modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, añadiéndole una disposición adicional tercera, en los siguientes términos:

«Disposición adicional tercera.- Cargos públicos de los Cabildos Insulares.

1. Tienen la condición de cargos públicos de la Administración de los cabildos insulares:

- a) El presidente o presidenta.*
- b) Los consejeros o consejeras insulares titulares de áreas o departamentos insulares.*
- c) Los consejeros o consejeras insulares que ejerzan competencias por delegación del presidente o de un consejero titular de área.*
- d) Los miembros del Consejo de Gobierno Insular.*
- e) Las personas titulares de las coordinaciones técnicas y de las direcciones insulares.*

2. A los cargos públicos de los cabildos insulares les será de aplicación el régimen jurídico de los cargos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, salvo las disposiciones de carácter organizativo y los órganos competentes, que se regirán por lo establecido en la legislación básica de régimen local, en esta ley y en los reglamentos orgánicos que se aprueben por los cabildos insulares.

3. Los cargos públicos que se enumeran en esta disposición tienen la consideración de altos cargos a los efectos previstos en las normas de buen gobierno establecidas en la legislación básica estatal».

SEGUNDO: Esta disposición adicional viene a clarificar enormemente la naturaleza jurídica de la figura de los directores insulares y los

coordinadores técnicos configurados hasta ahora en la ley como órganos directivos pero no como altos cargos, salvo en lo referente a su régimen de incompatibilidades (artículo 79 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares) .

Esta configuración (que ya aparecía en el Reglamento Orgánico en su artículo 5.4), unida a la circunstancia de que, como también se recoge en el apartado 3 del mismo artículo 5 del ROCIT , dichos cargos públicos computan dentro del límite de cargos que pueden prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, según lo dispuesto en el artículo 75.ter. apartado tercero de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, unida también a la naturaleza de las funciones que el propio Reglamento atribuye a dichos órganos, todo ello coadyuva a la configuración de los mismos como órganos de naturaleza esencial y eminentemente política, al margen de su perfil técnico, y, en consecuencia, distintos de aquellos órganos directivos que, por su naturaleza exclusivamente profesional o técnica, deban ser considerados como "directivos profesionales", cuya selección y nombramiento debe regirse por los requisitos previstos en el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

TERCERO: En consecuencia con lo anterior, parece que procede clarificar dicha distinción en el propio texto del Reglamento Orgánico, estableciendo una clara separación entre los órganos directivos, que lo son, pero con una naturaleza eminentemente política, y por tanto, reúnen la condición de alto cargo, de aquéllos otros, para los que por su naturaleza esencialmente técnica y profesional, deba reservarse la condición de directivo público profesional.

CUARTO: Para ello se propone, por parte de la Presidencia, la modificación del artículo 5 del ROCIT, en concreto, los apartados 1 y 2 del mismo, distinguiendo con claridad a los órganos superiores, a los órganos directivos de carácter político, a los órganos directivos de existencia legalmente preceptiva y a los órganos directivos que tienen la naturaleza de directivos públicos profesionales. Así se propone la supresión del apartado 2 de la referencia al Jefe del Gabinete de la Presidencia, por no tener la consideración de directivo público profesional, compartiendo la naturaleza jurídica de las Direcciones Insulares. Igualmente se propone la modificación de la letra k) del apartado 5 del artículo 29 para añadir entre las atribuciones del Consejo de Gobierno Insular no sólo la de nombrar y cesar a los órganos directivos de la Administración Insular, sino también la del nombramiento y cese de los directivos públicos profesiones previstos en el nuevo apartado 2 del artículo 5.

QUINTO: Por otra parte, la Junta de Portavoces de la Corporación, en sesión celebrada el 19 de julio de 2017, y en relación a la regulación del "Debate sobre la actuación política insular" previsto en el artículo 93 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, acordó instar de la Secretaría General del Pleno la iniciación del procedimiento de modificación del Reglamento Orgánico vigente, para la regulación del debate sobre la orientación general de la política insular, al objeto de su aplicación en los años 2018 y sucesivos, conforme al régimen contenido en la Propuesta de

la Presidencia, que se elevó a dicha Junta y quedó transcrita en el acta de la mencionada sesión.

En consecuencia, se propone la inclusión de un apartado nuevo, un apartado 7 en el artículo 43, con el fin de prever en dicho precepto la necesidad de que se incorpore el mencionado debate en el pleno ordinario de abril o de febrero, si se tratase de año electoral, así como un apartado nuevo, que sería igualmente el 7, en el artículo 47 para detallar el régimen del debate.

SEXTO: Con fecha 23 de enero de 2018, se emite informe favorable de la Secretaría General del Pleno sobre la mencionada propuesta, informe que se emite con carácter preceptivo al tratarse de una de las materias contenidas en el artículo 123.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que requieren para su aprobación de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

SÉPTIMO: El Consejo de Gobierno Insular, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de enero de 2018, acuerda proponer al Pleno la modificación parcial del Reglamento Orgánico de la Corporación, en los términos de la propuesta de la Presidencia de 23 de enero, que fue elevada a dicho órgano, en virtud de la competencia que le atribuyen los artículos 6.1.a), 10.1.c) en su condición de titular del Área de la Presidencia y 63.1.A) del vigente Reglamento Orgánico.

OCTAVO: De conformidad con lo previsto en apartado Segundo de la parte dispositiva de dicho acuerdo, se da traslado de la propuesta a la Secretaría General del Pleno para que se proceda a la apertura de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES de exposición a efectos de presentación de enmiendas de los Portavoces de los distintos Grupos Políticos de la Corporación, cuyo plazo se inicia el día 25 de enero finalizando el 7 de febrero de 2018. En el mencionado plazo de exposición se presentan DOS ENMIENDAS, una por el Grupo Popular con fecha 31 de enero y número 67 en el registro de entrada del Registro General del Pleno, y otra por el Grupo Podemos, con fecha 7 de febrero, y número 85 en el registro de entrada del Registro General del Pleno.

NOVENO: Ambas enmiendas proponen en idénticos términos la modificación del apartado 7.1 del artículo 47, para limitar la intervención del Presidente a treinta minutos, así como la supresión del apartado 7.3 del mismo artículo 47, que permitía la intervención del Presidente a lo largo del debate en cualquier momento y sin límite de tiempo.

DÉCIMO: En cuanto al procedimiento interno de aprobación deben cumplirse las exigencias de los artículos 29.3 en relación con el 63 del Reglamento Orgánico, y por lo tanto:

- a) El Consejo de Gobierno Insular debe conocer la presente propuesta de la Presidencia y, si fuera aprobada como propuesta al Pleno, deberá remitirla al Secretario General del Pleno para la apertura de un plazo de diez días hábiles de exposición a efectos de presentación de enmiendas de adición, supresión o modificación por los Portavoces de los distintos grupos políticos, que podrá reducirse como máximo a la mitad o al doble cuando el Presidente lo decrete por razones justificadas, previa audiencia de la Junta de Portavoces.

- b) Finalizado dicho plazo el Secretario General del Pleno remitirá el expediente con las enmiendas presentadas a la Presidencia a los efectos de la convocatoria de la correspondiente Comisión Plenaria, que emitirá el Dictamen que proceda, resolviendo sobre las expresadas enmiendas.
- c) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación de la modificación parcial, con el voto favorable de la mayoría absoluta de número legal de miembros de la Corporación.
- d) Sometimiento del expediente al trámite de información pública por plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, considerándose definitivamente aprobada si no las hubiera, o resolviéndose las mismas por el Pleno con el mismo quórum.
- e) Publicación del acuerdo de aprobación definitiva y del texto del Reglamento Orgánico modificado en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor.

UNDÉCIMO: La Comisión Plenaria de Presidencia, en sesión celebrada el día 26 de febrero, acordó rechazar por mayoría las enmiendas presentadas en plazo por el Grupo Popular y por el Grupo Podemos, y dictamina, igualmente por mayoría, favorablemente la propuesta elevada por el Consejo de Gobierno, proponiendo al Pleno la modificación del texto del vigente Reglamento Orgánico, en los términos de la misma.

Por todo lo anterior, con base en los antecedentes y consideraciones jurídicas que constan en el expediente, el Pleno, ACUERDA:

PRIMERO: Rechazar, por mayoría, la enmienda de modificación y supresión presentada en plazo por el Grupo Podemos, por 10 votos en contra (8 CC-PNC +2 PSOE), 4 abstenciones del Grupo Popular, y 5 votos a favor de la enmienda de los Consejeros del Grupo Podemos, sin que quede acreditado en el sistema electrónico de votación instalado en el salón de sesiones, que el resto de los Consejeros presentes hubiera ejercitado su derecho de voto a dicha enmienda.

SEGUNDO: Rechazar, por mayoría, la enmienda de modificación y supresión presentada en plazo por el Grupo Popular, por 14 votos en contra (9 CC-PNC +5 PSOE), y 10 votos a favor de la enmienda (5 PP+ 5 PODEMOS), sin que quede acreditado en el sistema electrónico de votación instalado en el salón de sesiones, que el resto de los Consejeros presentes hubiera ejercitado su derecho de voto a dicha enmienda.

TERCERO: Aprobar inicialmente, por mayoría, la modificación parcial del Reglamento Orgánico de la Corporación, por 12 votos a favor (7 CC-PNC + 5 PSOE), 3 abstenciones del Grupo Popular y 5 votos en contra de los Consejeros del Grupo Podemos, sin que quede acreditado en el sistema electrónico de votación instalado en el salón de sesiones, que el resto de los Consejeros presentes hubiera ejercitado su derecho de voto al Dictamen de la Comisión Plenaria de Presidencia, **en los siguientes términos:**

A) Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 5, quedando dicho artículo 5 con la siguiente redacción:

TÍTULO PRIMERO

(...)

CAPÍTULO II

Órganos Superiores y Directivos.

Artículo 5.1.- Son órganos superiores y directivos de la Administración Insular los siguientes:

A) Órganos Superiores:

- a) El/la Presidente/a
- b) Los siguientes miembros del Consejo de Gobierno Insular:
 - Vicepresidentes/as.
 - Consejeros/as Insulares de Área.

B) Órganos directivos de las Áreas de Gobierno:

- a) Los/las Viceconsejeros/as Insulares.
- b) Los/las Consejeros/as con Delegación Especial.
- c) Los/las Directores/as Insulares.
- d) Los/las Coordinadores/as Técnicos/as

Siguiendo las directrices de los órganos superiores, los titulares de los órganos directivos de las Áreas de Gobierno participan en la formación de la voluntad política de los órganos de gobierno, mediante la elaboración de propuestas, proyectos, programas y planes relativos a cualquier materia comprendida en su ámbito competencial, y su gestión está sujeta al control político del Pleno y sus Comisiones, en los términos regulados en el presente Reglamento.

C) Órganos directivos de la Organización General :

- a) El Secretario General del Pleno.
- b) El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular y al Consejero Secretario del mismo, que se denominará Vicesecretario General.
- c) El Director de la Asesoría Jurídica.
- d) El Interventor General.
- e) El Director de la Oficina de Contabilidad

2.- Tendrán la condición de directivo público profesional los titulares de los órganos directivos distintos a los enumerados en las letras B) y C) del apartado anterior, que desarrollen funciones directivas profesionales en la gestión del área funcional encomendada. Dichas funciones directivas de carácter profesional estarán definidas en la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación Insular. La designación de sus titulares atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Dichos puestos podrán ser calificados como funcionariales, si su titular reúne la condición de funcionario, o laborales. Cuando reúna la condición de

personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

Asimismo, y en los mismos términos, tendrán también la condición de directivos los máximos órganos de dirección de los Organismos Autónomos, de las Entidades Públicas Empresariales y de los órganos especiales de Administración, entendiéndose por tales a los Gerentes, a los que les resulta de aplicación la previsión contenida en el artículo 85. bis.1, letra b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3.- En el cómputo del límite de cargos públicos que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, según lo dispuesto en el artículo 75.ter. apartado tercero de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, serán tenidos en cuenta además de los Órganos Superiores, los Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno.

4.- De conformidad con lo previsto en los artículos 61.2, 79, y apartados 2 y 3 de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, los cargos públicos previstos en el apartado anterior, que tendrán la consideración de altos cargos, están sujetos al régimen de incompatibilidades establecido en la legislación básica de régimen local y en la legislación de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

B) Modificación de la letra k) del artículo 29.5 , quedando dicha letra k) con la siguiente redacción:

TÍTULO SEGUNDO

DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR

(...)

Artículo 29.5. k): El nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos de la Administración Insular, así como el nombramiento y cese de los directivos públicos profesionales, conforme a las previsiones de este Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de Régimen Local para los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional.

(...)

C) Modificación del artículo 43, añadiéndole un apartado 7, quedando dicho artículo 43 con la siguiente redacción:

CAPÍTULO V.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL PLENO.

Artículo 43.- 1. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Dicha periodicidad será fijada por acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria, que habrá de convocar el Presidente dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación.

El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes, en los días y hora que se fijen por el mismo y que podrán ser cambiados en cualquier momento posterior por dicho órgano.

A todos los efectos, se aplicará el régimen jurídico de las sesiones ordinarias a aquéllas extraordinarias que se celebren en sustitución de las primeras por razones motivadas que justifiquen su no celebración en la fecha correspondiente, excepto en lo referente a la adopción de acuerdos fuera del orden del día, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en los artículos 51 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D.Leg. 781/1986, de 18 de abril, y 83 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre.

2. El Pleno celebrará sesión extraordinaria de carácter monográfico cuando lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún Consejero pueda solicitar más de cuatro anualmente. En este último caso, la celebración del Pleno no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada. Si el Presidente no convocase el Pleno solicitado por el número de consejeros indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario General del Pleno a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente.

3. Fuera de dichos supuestos, el Pleno sólo podrá celebrar sesiones extraordinarias a petición del Consejo de Gobierno Insular o de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación. En la petición deberá figurar el orden del día que se propone para la sesión extraordinaria solicitada.

4.- Las sesiones podrán celebrarse en primera o segunda convocatoria. La segunda convocatoria será celebrada dos días después de la señalada para la primera o al día siguiente hábil si coincidiese en festivo. En este caso no será necesario el envío del orden del día, pero sí la notificación de su celebración en segunda convocatoria.

5.- Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de de dos días hábiles exigida legalmente. En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día la ratificación por el Pleno de la urgencia de la convocatoria. Si dicha urgencia no resultara apreciada por el Pleno, se levantará la sesión.

6.- Cualquiera que sea la clase de sesión, habrá de respetar el principio de unidad de acto y terminará el mismo día de su comienzo. Si éste terminare sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el Presidente podrá levantar la sesión. En este caso, los asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión. En todo caso, ninguna sesión tendrá una duración superior a ocho horas.

7.- Cada uno de los años que componen el mandato, el Pleno celebrará un debate sobre la orientación general de la política insular. Dicho debate se incluirá como un asunto en el orden del día del Pleno ordinario a celebrar en el mes de abril, previa consulta a la Junta de Portavoces, salvo aquel año del mandato en que hayan de celebrarse elecciones insulares, en cuyo caso tendrá lugar en el mes de febrero.

No obstante, la Presidencia, previa consulta y acuerdo de la Junta de Portavoces, podrá acordar la inclusión del debate sobre la orientación general de la política insular en uno de los plenos ordinarios a celebrar dentro del primer semestre de cada año, siempre y cuando no tenga lugar con posterioridad a la publicación en el BOE de la convocatoria de cualquier proceso electoral al Parlamento Europeo, Cortes Generales, Parlamento de Canarias, Corporaciones Municipales y Cabildos Insulares.

En el orden del día del mencionado pleno ordinario no podrán presentarse comparecencias, mociones, ruegos o preguntas por parte de los Grupos Políticos de la Corporación.

(...)

D) Modificación del artículo 47, añadiéndole un apartado 7, quedando dicho artículo 47 con la siguiente redacción:

Artículo 47.- 1. En el caso de que se promueva deliberación, corresponde al Presidente dirigir los debates y mantener el orden de los mismos, disponiendo lo que proceda para su normal desarrollo.

2. Antes de iniciarse el debate, cualquier Consejero podrá pedir que se examine una cuestión de orden invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama. No cabrá por este motivo debate alguno, debiendo acatarse la resolución que la Presidencia adopte a la vista de la alegación formulada.

3. Los Consejeros necesitarán, en todo caso, la venia del Presidente para hacer uso de la palabra.

4. Si el Presidente lo decidiera, para algún punto del Orden del Día, previa consulta con la Junta de Portavoces, se respetarán, estrictamente, las siguientes reglas:

Primera.- En el debate sólo intervendrán los Consejeros designados como Portavoces para cada asunto por el correspondiente Grupo, pudiendo ser designados varios Consejeros para intervenir en un mismo asunto, pero en este caso habrán de distribuirse el tiempo correspondiente al turno del Grupo Político de que se trate.

En el supuesto del Grupo Mixto, se procurará, oída la Junta de Portavoces, que tengan voz, al menos, un representante por cada una de las formaciones políticas que compitieron en las correspondientes elecciones y no forman Grupo Político por cualquier causa.

Segunda.- Cada turno tendrá como máximo la duración que fije la Junta de Portavoces, con carácter general, pudiendo ampliarse o disminuirse por la misma dicha duración en función del número de asuntos de cada Pleno y la trascendencia de los mismos, salvo que esté expresamente determinado en el régimen específico por este Reglamento.

Tercera.- La Presidencia podrá conceder, si así se solicita por cualquiera de los portavoces del Grupo, dos turnos de réplica que no podrán exceder de los tiempos máximos que se fijen al respecto.

Cuarta.- No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida cuando los Consejeros se desvíen notoriamente con disgresiones extrañas al asunto debatido o

vuelvan sobre lo ya discutido o aprobado. El Presidente podrá asimismo retirar el uso de la palabra a quien se excediera del tiempo fijado o profiriera expresiones susceptibles de alterar el orden del debate.

Quinta.- Los Consejeros que hayan consumido turnos podrán volver a usar de la palabra para rectificar concisamente y por una sola vez los hechos o conceptos que se le hubieran atribuido, así como corregir las alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes sobre la persona o la conducta de un miembro de la Corporación o de su Grupo. El Presidente apreciará si procede o no acceder a la pretendida rectificación.

No se podrá contestar a las alusiones sino en la misma sesión o en la siguiente.

Sexta.- El Presidente decidirá el momento en que el asunto se considere suficientemente discutido, cerrando el debate y sometiendo el asunto a votación, siempre que hubiera finalizado totalmente el turno correspondiente ya iniciado.

Séptima.- Sólo en los debates sobre asuntos a que se refiere el artículo 29.3 de este Reglamento, y en los de extraordinaria importancia, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, podrá aumentarse el tiempo a que se refiere la Regla Segunda.

5. En todos los debates plenarios, cualquiera que sea el carácter de la sesión y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado de este artículo, el orden de actuación de los distintos Grupos será el siguiente:

A) En primer lugar intervendrá el Portavoz del Grupo proponente o mocionante o el Consejero designado por aquél, el Presidente, Consejero de Área, Viceconsejero Insular, Consejero Delegado, Director Insular o Coordinador Técnico, según proceda, de acuerdo con la competencia material del Dictamen o Proposición.

B) Con posterioridad, intervendrán, sucesivamente, el Grupo Mixto y el resto de los Grupos por orden inverso al número de sus miembros, excepto el proponente. La Junta de Portavoces, a solicitud del Grupo Político mayoritario sin representación en el Consejo de Gobierno Insular, podrá acordar, para determinados debates, la inversión de dicho orden.

C) En caso de abrirse nuevo turno de intervenciones se procederá, nuevamente, conforme a los apartados anteriores.

D) El Presidente podrá intervenir en cualquier momento del debate.

E) Después de efectuada la votación sólo procederá una sucinta explicación del voto por cada Portavoz de Grupo, por el orden indicado en los apartados anteriores.

6. A) Régimen de debate en las mociones institucionales del Pleno incluidas con tal carácter en el orden del día.

En las mociones institucionales del Pleno incluidas con tal carácter en el orden del día por haberse consensuado las mismas con anterioridad a la convocatoria de la sesión, no se producirá ninguna intervención por parte de los Grupos Políticos con posterioridad a la lectura del acuerdo institucional por parte del Sr. Presidente.

No obstante lo anterior, el proponente inicial de la moción podrá someter la misma a debate cuando por circunstancias sobrevenidas con posterioridad al acuerdo alcanzado lo estime procedente, perdiendo en consecuencia su carácter de moción institucional.

B) Régimen de debate en las mociones institucionales del pleno que adquieren tal carácter de institucional, con posterioridad a la convocatoria de la sesión.

En las mociones institucionales del pleno en las que el consenso de los Grupos se alcance entre el momento de la convocatoria y la celebración de la sesión, no se producirán intervenciones posteriores a la lectura del acuerdo institucional por parte del Sr. Presidente.

Si la unanimidad de los Grupos se alcanzara como resultado del debate de la moción, el régimen del debate será el general de las mociones contemplado en el artículo 51.3 del presente Reglamento.

Asimismo se acuerda aplicar el mismo régimen a las mociones debatidas en el seno de las Comisiones Plenarias.

7. Régimen del debate sobre la orientación general de la política insular.

7.1. Se iniciará con una intervención de la Presidencia sobre la situación general de la isla y de las líneas maestras de su acción de Gobierno, sin limitación de tiempo alguna.

7.2. A continuación, cada uno de los Portavoces de los Grupos Políticos, y el/los consejero/s insular/es no adscrito/s, dispondrán de un primer turno de 15 minutos como máximo, interviniendo primero, en su caso, el/los consejero/s no adscrito/s y seguidamente los Portavoces de los Grupos Políticos por el orden de menor a mayor número de miembros, pudiendo compartir dicho tiempo máximo entre los distintos componentes de cada Grupo. Un segundo turno, de 5 minutos como máximo, y un tercer turno de 2 minutos como máximo, con la misma posibilidad de compartir el tiempo entre los componentes del Grupo.

7.3 A lo largo del debate, el Presidente podrá hacer uso de la palabra sin límite de tiempo.

7.4. Las propuestas de resolución serán presentadas por los Portavoces de los Grupos Políticos y, en su caso, por el/los consejero/s insular/es no adscrito/s, con antelación a la celebración de la propia sesión plenaria, fijando como día y hora límites para su entrada a través del Registro General del Pleno las 14:00 horas del día de la convocatoria de la sesión. A estos efectos, cada Grupo Político Insular y, en su caso, el/los consejero/s insular/es no adscrito/s, podrán presentar hasta un máximo de 10 propuestas de resolución que sean congruentes con los temas objeto del debate, sin que en ningún caso puedan ser admitidas aquellas que impliquen cuestiones de confianza o de censura encubierta, y debiendo estar plasmadas las mismas en el anverso de un folio, como extensión máxima de referencia, al objeto de permitir la agilidad en los debates y la votación.

Finalizado el debate, por el Presidente podrá disponerse la celebración de un receso para permitir consensuar o modificar los términos de algunas de las propuestas de resolución, solo si ello fuera necesario.

Dicho receso no podrá tener una duración superior a 10 minutos.

De tener lugar el receso, una vez reanudada la sesión, se procederá directamente por el Presidente a someter a votación las propuestas de resolución, no permitiéndose debate alguno.

7.5 El conjunto de propuestas de resolución de cada Grupo Político que hayan sido admitidas por los respectivos portavoces serán defendidas en una única intervención y por un tiempo máximo de 5 minutos.

7.6 Las propuestas de resolución serán votadas según el orden de presentación y conforme a los términos propuestos en ellas, sin que quepa sobre las mismas la formulación de enmiendas de clase alguna.

CUARTO: Aprobar la elaboración de un Texto Consolidado del Reglamento Orgánico que incluya las modificaciones aprobadas en el presente acuerdo, el cual que será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias, según lo previsto en el artículo 82.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, una vez producida la aprobación definitiva de las citadas modificaciones.

QUINTO: Someter de forma inmediata a información pública la presente aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos de que se inicie el cómputo del plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias, según preceptúa el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como, entender definitivamente aprobada la modificación y el Texto Refundido, si en el plazo de treinta días hábiles no fueran presentadas reclamaciones y/o sugerencias, tal y como prevé el apartado c), segundo párrafo, del citado artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, entrando en vigor la modificación y el texto, transcurridos quince días hábiles a partir de la publicación íntegra del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, según dispone el artículo 70.2 de la misma Ley.

DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que, el presente acuerdo no resulta susceptible de producir efectos jurídicos, siendo ineficaz, toda vez que el mismo requería para su adopción del voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, según lo previsto en el artículo 123.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, lo cual supone en la actual composición del Cabildo Insular de Tenerife, el voto favorable de quince (15) Consejeros Insulares, resultando que dicha mayoría no se produjo, por lo que deberá elevarse nuevamente al órgano plenario, para su aprobación inicial.

GABINETE DE LA PRESIDENCIA.

17.- Propuesta de modificación del Plan Anual Normativo para 2018 y de inicio de expediente para la modificación parcial del Reglamento de Distinciones Honoríficas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Vista la propuesta de modificación del Plan Anual Normativo para 2018 y de inicio de expediente para la modificación parcial del

Reglamento de Distinciones Honoríficas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y, teniendo en cuenta que:

Primero: Con ocasión del bicentenario de la creación de la Diócesis tinerfeña entre el 12 y el 27 de octubre de 2018, se producirá la próxima visita de la imagen de la Virgen de Candelaria a las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.

Segundo: La Isla de Tenerife tiene declarado como día festivo insular, el día 2 de febrero, fecha en que se celebra la festividad litúrgica de la Virgen de Candelaria, Patronato de Canarias, siendo éste un día muy especial y señalado para todos los tinerfeños y tinerfeñas, tanto para los que viven aquí como para los que viven fuera.

Tercero: Coincidiendo con la celebración del referido bicentenario, se estima procedente por esta Presidencia formular la presente Propuesta, puesto que al margen de las creencias o devociones religiosas, la Virgen de Candelaria es un símbolo de unión entre los tinerfeños, no solo de la simbología religiosa tradicional de la población tinerfeña, sino que además constituye un elemento que caracteriza su propia fisonomía cultural e histórica, porque así lo ha querido el consenso social desde tiempo inmemorial, en la medida en que, como hecho histórico, está referenciado en la historia de las islas a tiempos anteriores a la propia conquista.

Cuarto: Se trata por ello de un patrimonio general insular, con un gran arraigo popular y que trasciende de su mero carácter religioso, porque como dice la sentencia del Tribunal Constitucional 34/2011, de 28 de marzo, en estos casos ha de tomarse en consideración *"no tanto el origen del signo o símbolo como su percepción en el tiempo presente, pues en una sociedad en la que se ha producido un evidente proceso de secularización es indudable que muchos símbolos religiosos han pasado a ser, según el contexto concreto del caso, predominantemente culturales aunque esto no excluya que para los creyentes siga operando su significado religioso (...)* pues fácilmente se comprende que cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos".

Quinto: A mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal Constitucional 94/1985, de 29 de julio, sostiene que "no puede desconocerse que la materia sensible del símbolo (...) trasciende a sí misma para adquirir una relevante función significativa. Enriquecido con el transcurso del tiempo, el símbolo... acumula toda la carga histórica de una comunidad, todo un conjunto de significaciones que ejercen una función integradora y promueven una respuesta socioemocional, contribuyendo a la formación y mantenimiento de la conciencia comunitaria, y, en cuanto expresión externa de la peculiaridad de esa Comunidad, adquiere una cierta autonomía respecto de las significaciones simbolizadas, con las que es identificada; de aquí la protección dispensada a los símbolos... por los ordenamientos jurídicos» (F. 7).

Y continúa la Sentencia del Tribunal Constitucional 34/2011, de 28 de marzo, diciendo que "...la configuración de estos signos de identidad puede obedecer a múltiples factores y cuando una religión es mayoritaria en una

sociedad sus símbolos comparten la historia política y cultural de ésta, lo que origina que no pocos elementos representativos de los entes territoriales, corporaciones e instituciones públicas tengan una connotación religiosa. Esta es la razón por la que símbolos y atributos propios del Cristianismo figuran insertos en nuestro escudo nacional, en los de las banderas de varias Comunidades Autónomas y en los de numerosas provincias, ciudades y poblaciones; asimismo, el nombre de múltiples municipios e instituciones públicas trae causa de personas o hechos vinculados a la religión cristiana; y en variadas festividades, conmemoraciones o actuaciones institucionales resulta reconocible su procedencia religiosa".

Por ello, señala el Tribunal que "...es obvio que no basta con constatar el origen religioso de un signo identitario para que deba atribuírsele un significado actual que afecte a la neutralidad religiosa que a los poderes públicos impone el artículo 16.3 de la Constitución. La cuestión se centra en dilucidar, en cada caso, si ante el posible carácter polisémico de un signo de identidad, domina en él su significación religiosa en un grado que permita inferir razonablemente una adhesión del ente o institución a los postulados religiosos que el signo representa". Y sigue destacando la sentencia citada que "... todo signo identitario es el resultado de una convención social y tiene sentido en tanto se lo da el consenso colectivo; por tanto, no resulta suficiente que quien pida su supresión le atribuya un significado religioso incompatible con el deber de neutralidad religiosa, ya que sobre la valoración individual y subjetiva de su significado debe prevalecer la comúnmente aceptada, pues lo contrario supondría vaciar de contenido el sentido de los símbolos, que siempre es social".

Como conclusión, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 34/2011, de 28 de marzo, afirma que "... fácilmente se comprende que cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos".

Sexto: En virtud de todo lo expuesto, y atendiendo a la importancia histórica, antropológica y cultural que la Virgen de Candelaria representa por su carácter de signo de identidad tinerfeño, fruto del consenso colectivo, y coincidiendo con la celebración del bicentenario de la creación de la Diócesis tinerfeña en el mes de octubre de 2018, cuando se producirá la próxima visita de su imagen a las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, se quiere adoptar las medidas orientadas a posibilitar su nombramiento como Presidenta Honoraria y Perpetua del Cabildo de Tenerife.

Séptimo: El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife cuenta con un Reglamento de Distinciones Honoríficas en vigor, cuyo último texto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 39, de fecha 25 de febrero de 2008.

Octavo: También se hace necesario modificar el Plan Anual Normativo para 2018 para posibilitar la realización efectiva de la presente iniciativa.

Noveno: En cuanto al procedimiento interno de aprobación deben cumplirse las exigencias de los mencionados artículos 29.3 en relación con el 63 del Reglamento Orgánico, y por lo tanto:

- f) El Consejo de Gobierno Insular debe conocer la propuesta del Presidente o Consejero Insular del Área, y, si fuera aprobada como propuesta al Pleno, deberá remitirla al Secretario General del Pleno para la apertura de un plazo de diez días hábiles de exposición a efectos de presentación de enmiendas de adición, supresión o modificación por los Portavoces de los distintos grupos políticos, que podrá reducirse a la mitad o al doble cuando el Presidente lo decreta por razones justificadas, previa audiencia de la Junta de Portavoces.
- g) Finalizado dicho plazo el Secretario General del Pleno remitirá el expediente con las enmiendas presentadas a la Consejería del Área competente a los efectos de la convocatoria de la correspondiente Comisión Plenaria, que emitirá el Dictamen que proceda, resolviendo sobre las expresadas enmiendas.
- h) Aprobación por el Pleno de la Corporación, según lo previsto en los artículos 123.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 41.2.d) del vigente Reglamento Orgánico, previa propuesta del Consejo de Gobierno Insular.
- i) Sometimiento del expediente al trámite de información pública por plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, considerándose definitivamente aprobada si no las hubiera, o resolviéndose las mismas por el Pleno con el mismo quórum.
- j) Publicación del acuerdo de aprobación definitiva y del texto del Reglamento Orgánico modificado en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor.

Décimo: Con base en todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de febrero de 2018, y fuera del orden del día, adopta acuerdo por mayoría de los Consejeros presentes y con la abstención de Doña María Josefa Mesa Mora, aprobando la propuesta de la Presidencia, para que la misma sea elevada al Pleno corporativo, previa tramitación por el procedimiento agravado previsto en el artículo 63 del Reglamento Orgánico.

Undécimo: De conformidad con lo previsto en el artículo 63.1.B) del vigente Reglamento Orgánico, se da traslado de la propuesta a la Secretaría General del Pleno para que se proceda a la apertura de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES de exposición a efectos de presentación de enmiendas de los Portavoces de los distintos Grupos Políticos de la Corporación, cuyo plazo se inicia el día 7 de febrero de 2018 y finalizando el día 20 del mismo mes. En el mencionado plazo de exposición se presentan **DOS ENMIENDAS, una presentada por el Grupo Socialista con fecha 19 de febrero y número 124 en el registro de entrada del Registro General del Pleno (rectificada con fecha 20 de febrero) y otra por el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, con fecha 20 de febrero, y número 130 en el registro de entrada del Registro General del Pleno.**

La cuestión principal sobre la que se centran ambas enmiendas radica en el régimen de adopción de los acuerdos de inicio del expediente y de concesión de las distinciones previstas en el Reglamento, y en concreto, se

refiere a las mayorías necesarias y exigidas para la adopción de los mencionados acuerdos por el Pleno.

- Así en el **artículo 15** del vigente Reglamento de Distinciones Honoríficas se requiere para el inicio de los expedientes de otorgamiento de cualquiera de las distinciones previstas en la norma (excepción hecha de los títulos de Hijo Ilustre y Visitante Ilustre de la Isla) el acuerdo del Pleno adoptado por mayoría absoluta.

Con la enmienda presentada por el Grupo Socialista se propone que dicho acuerdo de inicio sea acordado por, en términos literales "**una mayoría reforzada de 2/3 del pleno**", para el supuesto de la distinción de la Presidencia Honorífica y Perpetua, manteniendo la mayoría absoluta para el resto de distinciones.

- Por su parte el **artículo 18** del mismo Reglamento exige el voto favorable de los dos tercios del número legal de miembros de la Corporación, para la concesión de cualquiera de las distinciones.

Con la enmienda presentada por el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC se propone que dicho acuerdo con carácter general sea adoptado por **la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.**

Duodécimo: A la vista de las enmiendas presentadas, con fecha 23 de febrero de 2018, la Secretaría General del Pleno, emite con carácter facultativo, informe sobre las mismas, y en particular sobre la posibilidad de establecer mayorías absolutas o reforzadas como quórum necesario para la votación en Pleno, tanto la iniciación de los expedientes de concesión de distinciones, como la concesión de dicha distinción, finalizada la tramitación del expedientes en que se concluye que:

- a) Según señala el Consejo de Estado en el Dictamen citado " *el artículo 47 de la LBRL regula uno de los aspectos esenciales del modelo de autonomía local garantizado en todo el Estado y define el modelo de democracia local. Ha establecido un sistema acabado de mayorías precisas para la adopción de acuerdos por las Corporaciones Locales en el que la regla general es la mayoría simple, completada (en aquel momento, antes de la modificación operada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre) por dos tipos de mayorías cualificadas: absoluta (aparatado 3) (Que ahora es el apartado 2), requerida en una relación no cerrada de supuestos, y la de dos tercios (suprimida en el año 2003), limitada a cuatro supuestos muy singularizados, en los que se ponen en juego aspectos constitutivos de la propia Corporación Local o elementos fundamentales de su estructura, de modo que su extensión a otros supuestos entrañaría un cambio en la concepción de la organización democrática de la institución: implicaría pasar de una democracia basada en el juego de las mayorías a una democracia de acuerdo, en expresiones de la STC 5/1981".*

- b) Según lo previsto en el artículo 47.1 y 123.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la regla general para la adopción de acuerdos en las Corporaciones Locales, es la mayoría simple.
- c) La mayoría absoluta podrá ser exigida para la adopción de acuerdos en los supuestos previstos en los artículos 47.2 y 123.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, citada.
- d) De conformidad con lo previsto en la letra o) del artículo 47.2 cabría la exigencia de mayoría absoluta en supuestos distintos a los enumerados en los apartados anteriores, siempre que una norma de rango legal, así lo establezca.
- e) Tras la reforma operada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, desaparece del texto legal cualquier previsión relativa a la necesidad de una mayoría reforzada de dos tercios del número de hecho o de derecho, para la adopción de acuerdos, sin que, por otra parte, la mencionada Ley habilite a que, por otra norma de rango legal, estatal o autonómica, pueda exigirse tal quórum reforzado de votación para la adopción de acuerdos, como sí ocurre con el supuesto de la mayoría absoluta, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior.

Por lo tanto, únicamente por ley estatal o autonómica podría extenderse la exigencia de la mayoría absoluta en la adopción de acuerdos, al margen de lo previsto en los artículos 47.2 y 123.2 de la Ley 7/1985, y en ningún caso, establecerse, ni siquiera por Ley, la exigencia de los dos tercios del número legal de miembros.

En el asunto que se informa, referido a la adopción de acuerdos en materia de distinciones honoríficas, no existe normativa estatal o autonómica de aplicación que establezca mayorías distintas para la adopción de acuerdos, distinta de la mayoría simple. Tampoco se pronuncia en dicho sentido la vigente Ley territorial 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

- f) En consecuencia, existiendo una reserva formal y material de Ley, no puede entenderse ajustada a Derecho una normativa reglamentaria local, que, sin habilitación legal alguna, exija mayorías distintas a las legalmente previstas, y por lo que al expediente que se informa se refiere, distinta la mayoría simple, prevista con carácter general.

Decimotercero: A la vista del informe emitido por la Secretaría General del Pleno, el Grupo Socialista en el desarrollo de la sesión ordinaria de la Comisión plenaria de Presidencia celebrada el día 26 de febrero de 2018, procede a retirar la enmienda presentada. Por su parte, el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC, modifica "in voce" la suya, en el sentido señalado en el mencionado informe, y por lo tanto, proponiendo la modificación de los artículos 15 y 18 del Reglamento de Distinciones Honoríficas, para exigir la mayoría simple, en ambos momentos procedimentales, tanto en la iniciación del expediente como en la concesión de la distinción, sin diferencia alguna por razón de la distinción honorífica de que se trate.

Asimismo, la Comisión dictamina favorablemente por mayoría la propuesta del Consejo de Gobierno, con la enmienda aprobada y proponiendo al Pleno la aprobación del expediente.

Con base en los antecedentes y consideraciones jurídicas que constan en el expediente, **EL PLENO**, por mayoría, por 15 votos a favor (10 CC-PNC +1 PSOE +4 PP), 5 abstenciones (5 PSOE) y 5 votos en contra (5 PODEMOS), **ADOPTA EL SIGUIENTE ACUERDO:**

Primero.- Aprobar la modificación del Plan Anual Normativo para 2018, al objeto de incluir la iniciativa de modificación parcial del Reglamento de Distinciones Honoríficas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Segundo.- Aprobar inicialmente la modificación parcial del Reglamento de Distinciones Honoríficas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, otorgando nueva redacción a los siguientes artículos:

Artículo 1º.- Con el fin de premiar merecimientos especiales, o por la prestación de servicios relevantes, trabajos o actos destacados que redunden en beneficio de la Isla de Tenerife, u otorgar una especial distinción a signos de identidad tinerfeños fruto del consenso colectivo, el Cabildo Insular podrá conceder, de conformidad con el procedimiento previsto en el presente Reglamento, las siguientes distinciones honoríficas:

- a) Medalla de Oro de la Isla.
- b) Medalla de Plata de la Isla.
- c) Medalla de Bronce de la Isla.
- d) Corbata de Honor de la Isla para Banderas o Estandartes.
- e) Título de Hijo/a Predilecto/a de la Isla.
- f) Título de Hijo/a Adoptivo/a de la Isla.
- g) Título de Presidente/a Honorario/a y/o Perpetuo/a del Excmo. Cabildo Insular.
- h) Título de Consejero/a Honorario/a del Excmo. Cabildo Insular.
- i) Título de Hijo/a Ilustre de la Isla.
- j) Título de Visitante Ilustre de la Isla.

Artículo 2º.- Añadir un tercer párrafo en los siguientes términos:

La distinción de Presidente/a Honorario/a y Perpetuo/a no se incluirá en el cómputo numérico que opera como límite máximo, previsto en el citado artículo 6 del presente Reglamento.

Artículo 3º.- Añadir un tercer párrafo en los siguientes términos:

La distinción de Presidente/a Honorario/a y Perpetuo/a representará la especial vinculación del mismo con la ciudadanía de la Isla de Tenerife y sus valores históricos, sociales, culturales y antropológicos.

Artículo 10º.- Añadir un apartado 2º:

El título de Presidente/a Honorario/a y Perpetuo/a se representará con un emblema consistente en un medallón similar al del Presidente/a Honorario/a, con la única variante de llevar en el anverso, en torno al escudo, la inscripción: Presidente/a Honorario/a y Perpetuo/a.

Artículo 15º.- El expediente para el otorgamiento de cualquiera de las distinciones previstas en el artículo 1º de este Reglamento, excepción hecha de los títulos de Hijo Ilustre y Visitante Ilustre de la Isla, se iniciará por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado por mayoría simple, y a propuesta de la Presidencia o de un número de Consejeros que, como mínimo, debe suponer la tercera parte de los miembros de aquélla.

Artículo 18º.- El Pleno, en votación secreta, y por mayoría simple, adoptará el acuerdo de concesión de cualquiera de las distinciones honoríficas previstas en el artículo 1º de este Reglamento, con las excepciones expresadas en el artículo 15.

Artículo 21.- Para la imposición del título de Presidente/a Honorario/a y Perpetuo/a, en atención a sus especiales características, habrá de estarse a lo que establezca en el acuerdo plenario de otorgamiento.

Tercero.- Someter el expediente a los trámites de información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días hábiles a contar a partir del día hábil siguiente al de la publicación del último de los anuncios de exposición en el Tablón de Edictos de esta Excm. Corporación, sede electrónica corporativa y en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Cuarto.- En el caso de que no fueran presentadas ninguna reclamación o sugerencia durante el período de información pública y el trámite de audiencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, en cuyo caso la modificación del Reglamento precitado entrará en vigor una vez que se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurra el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación, previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases del Régimen Local, para la posible impugnación por parte de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE.

18.- Propuesta relativa a la toma en consideración del proyecto de obra denominado Mejora de la intersección de la TF-64 con la TF-643 en El Médano, término municipal de Granadilla de Abona (C-802).

A la vista del expediente iniciado con motivo del proyecto de obra denominado "**MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MÉDANO**", término municipal de Granadilla de Abona, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Darío Caballero Gutiérrez, con un presupuesto de ejecución por contrata ascendente a la cantidad de 493.567,87 €, IGIC incluido, y un plazo de ejecución de OCHO (8) MESES, y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Director Insular de Fomento dictó con fecha 5 de abril de

2016 Propuesta de incoación de expediente, conforme al siguiente tenor literal:

"La Sra. Directora Insular de Carreteras aprobó con fecha 30 de diciembre de 2015 el documento contable en Fase ADOM, a favor del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Darío Caballero Gutiérrez, en concepto de los honorarios por la redacción del proyecto de obra denominado "Mejora de la intersección de la TF-64 con la TF-643 en El Médano", término municipal de Granadilla de Abona.

El Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad, con fecha 8 de marzo de 2016, emitió el siguiente informe de supervisión del referido documento técnico, en cumplimiento de lo preceptuado el art.125 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (TRLCSF):

"El proyecto "MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MÉDANO (T.M. DE GRANADILLA DE ABONA)" ha tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal y reglamentario así como la normativa técnica que resulta de aplicación, además de tener el contenido mínimo conforme a lo previsto en el artículo 123 del TRLCSF."

En la Memoria del citado documento técnico se hace constar lo siguiente:

"La carretera insular TF-64, en las proximidades de la población del Médano presenta una intersección con la carretera TF-643 en un tramo en curva de su trazado. Los movimientos de vehículos permitidos en este enlace presentan tanto giros a derechas como a izquierdas entre ambas vías. Dada la situación en curva del tramo y la elevada intensidad de tráfico de la TF-64, provoca situaciones de giros a izquierdas muy peligrosos lo que aumenta los tiempos de espera para realizar estos movimientos entre los usuarios.

También se ha constatado que numerosos vehículos utilizan el arcén existente en el tramo ascendente de la TF-64 para rebasar los vehículos detenidos a la espera de realizar la maniobra de giro a izquierdas, pudiendo provocar nuevas situaciones de riesgo.

Ante la peligrosa situación existente en esta intersección, el Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad del Cabildo Insular de Tenerife ha promovido la redacción del presente proyecto en aras de ejecutar una mejora en la intersección mencionada.



Ilustración.

Situación actual de la

Intersección entre la TF-64 y la TF-643

El objeto del presente proyecto es la definición, diseño, medición y presupuesto de las obras necesarias para la mejora de la intersección de las carreteras TF-64 con la TF-634 próximo al núcleo poblacional de El Médano.

Las principales características del proyecto a redactar se resumen a continuación:

SITUACIÓN DE LA OBRA: Intersección entre las carreteras TF-64 y TF-643 en El Médano. Termino municipal de Granadilla de Abona

TIPO DE PROYECTO: Modificación de Intersección. Actuación en carretera y márgenes

OBRAS A PROYECTAR:

- Movimiento de Tierras*
- Firmes*
- Drenaje Superficial*
- Canalizaciones*
- Señalización, Balizamiento y Defensas*
- Jardinería y Riegos*
- Desvíos de Tráfico*

La intersección existente entre las carreteras TF-64 y TF-643 presenta una elevada peligrosidad debida a la presencia de giros a la izquierda que se realizan, dada la elevada Intensidad de tráfico existente y el estar dispuesta la intersección en un tramo en curva de la carretera TF-64.

Es por ello que se redacta el presente proyecto denominado MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MÉDANO. T.M. DE GRANADILLA DE ABONA.”

Por su parte, la solución adoptada para resolver los giros a la izquierda, una vez estudiadas las posibles alternativas, es la siguiente:

“El proyecto de la Mejora de la Intersección entre la Carretera TF-64 y la TF-643 consiste en la transformación de la intersección existente, en una intersección regulada mediante glorieta de radio exterior de 20m con una sección transversal conformada por solo carril de 6m de ancho y arcenes interior y exterior de 1,5m, con la ejecución de una cuneta entre el límite de arcén exterior y el pie de talud con ancho de 1,2m y una profundidad de 15cm.

Los ramales que inciden en la glorieta modificará ligeramente su perfil longitudinal para suavizar y facilitar la incorporación y salida a la glorieta. La sección de calzada contemplada en estos ramales son de carriles de 3,5m y arcenes de 1,5m para la TF-64 y de carril de 3m y arcenes de 1,5m para la TF-643. También se adataran los peraltes de la glorieta y los ramales para ajustarlos en la medida de lo posible a las recomendaciones de proyectos de carreteras.

Se limitará la velocidad en estas zonas a 40 Km/h.

Para la ejecución de los trabajos se ha contemplado dos fases de desvíos de tráfico con un estrechamiento de los carriles existente y eliminación de los

arcenes en la TF-64 y la ampliación de la plataforma en el Ramal de San Isidro. El tráfico de la carretera TF-643, en el sentido hacia La Tejita, se desviará por el núcleo del Médano y el sentido contrario, hacia la TF-64, se reducirá el ancho de carril y se eliminará los arcenes, adaptando su situación en cada fase de desvíos. De esta manera se logra habilitar las zonas de obra en condiciones seguras.

El firme que se ejecutará en toda la actuación excepto en el sobreancho del desvío provisional del Ramal San Isidro esta compuesto por una sección tipo 221 del catalogo de secciones de firmes de la norma 6.1-I.C. definida de la siguiente manera:

- 25cm de Zahorra artificial
- Emulsión bituminosa en riego de imprimación C50BF4 IMP (1.2 kg/m²).
- Mezcla Bituminosa base tipo AC 32 base 50/70 G de 12 cm.
- 2 Emulsiones bituminosa en riego de adherencia C60B4 ADH (0.5 kg/m²).
- Mezcla Bituminosa intermedia tipo AC 22 bin 50/70 S de 8 cm.
- Emulsión bituminosa en riego de adherencia C60B4 ADH (0.5 kg/m²).
- Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 D de 5 cm.

En el pie del talud anexo al sentido ascendente del ramal de San Isidro, se revestirá de hormigón para conformar una cuneta de ancho variable, pero con profundidad mínima de 20cm para la recogida de las aguas superficiales que continuará en el margen de la glorieta del mismo lado en forma de cunetas de 1,35m de ancho y profundidad de 15cm hasta el pozo absorbente situado en la parte superior del jardín del sentido ascendente del Ramal Médano. También se revestirá la cuneta situada en el margen del sentido descendente del Ramal San Isidro.

Se ejecutara la señalización horizontal mediante líneas exteriores de circulación de 15cm de ancho, los de separación de sentidos de circulación de 10cm de ancho y se rellenará el interior de las isletas no ocupadas por acera tal y como se reflejan en el plano de señalización, Balizamiento y Defensa. También se implantará la señalización horizontal definida dicho plano. En los interiores de las isletas de los tres ramales se ejecutará unas islas interiores mediante la colocación de bordillos de hormigón y cuyo interior irá relleno por un enchado de piedra natural de tosca pumítica.

Se colocará en los laterales del Ramal de San Isidro y en los del Ramal de la Tejita barrera metálica con protección de motoristas tal y como se define en el plano de Señalización, Balizamiento y Defensa.

En el margen ascendente del Ramal del Médano se desplazará la línea de bloques de tosca pumítica para alinearlos con el nuevo ancho de la vía y se ajardinará el espacio detrás de la línea de bloques.

La isleta central de la glorieta vendrá delimitada por un bordillo achaflanado y el interior de la misma también se ajardinará y se replantarán los especímenes de palmera canaria existentes para dar mayor entidad a la glorieta. La última zona que se ajardinará será el espacio necesario para la

ejecución de los desvíos de tráfico en el Ramal de San Isidro y el límite de la cuneta del margen del sentido descendente.

En el jardín existente en el lado sur de la glorieta, es necesario adaptar la altura del bordillo existente.

Se instalarán canalizaciones para la conexión de la glorieta y el cruce de viales para la red de alumbrado público y para conectar las zonas ajardinadas con la red de Riego, mediante canalizaciones compuestas por 2 tubos de 110mm para la primero y de 2 tubos de 90 para la segunda. También se ejecutarán la demolición y nueva construcción de la un pozo de media tensión existentes, adaptándolo a la nueva situación de la glorieta. Conectará este nuevo sótano con la canalización de 2 tubos de 200mm existente y se realizará el cruce de vial de esta canalización desde el sótano hasta salvar el vial de la glorieta en dirección san isidro. De igual manera se dejarán previstos los cruces de canalizaciones de baja tensión compuestos por 2 tubos de 160mm.

La red de Riego se conectará a la red existente mediante un cabezal de riego donde se colocarán la llave de paso, contador, y sistemas necesarios para la programación de riegos de la red. También se ejecutará una conducción de riego compuesta por tubería de Polietileno de alta densidad de 40mm por todas las zonas ajardinadas, a la que se conectarán los aros con goteros para el riego de los especímenes plantados en estas zonas.

El ajardinamiento se hará mediante la plantación de flora autóctona según la medición del presupuesto con emplazamiento descrito por la dirección de obras y se colocará una capa tapizante compuestas por zonas de picón rojo/vitolado y zonas de jable pumítico. En los tramos afectados los la ejecución de canalizaciones de servicios, en el jardín donde se sitúa el Barco, se replantará la zona de césped afectados.

Dada el estado de deterioro que presenta el firme existente en la carretera del Médano, en el tramo comprendido entre el final de la obra en el ramal del Médano y la entrada al núcleo urbano, se realizará una rehabilitación superficial del firme mediante el fresado de una capa superficial de 13cm y la reposición del firme con similares materiales y espesores que las capas intermedia y de rodadura contempladas en el resto de la obra.

Esta actuación se acotará a la zona de carriles existentes, dado el correcto estado que presentan los arcones laterales.”

En el Anejo nº 5 “Bienes Afectados” se recogen las parcelas catastrales afectadas para la implantación de la infraestructura y las superficies requeridas para el dominio público.

Por la presente y en virtud de las atribuciones que me vienen conferidas por delegación de la Presidencia, como titular del Área de Presidencia, mediante Decreto del Excmo. Sr. Presidente de fecha 30 de julio de 2015, en materia de programación, planificación, ejecución, explotación, uso, defensa y policía en carreteras insulares, así como conservación y mejora del paisaje, en conexión con lo dispuesto en el art 10.1 b) y c) del Reglamento Orgánico de la Corporación Insular respecto de la iniciativa, impulso, dirección y coordinación de todas las actividades del Área en materia de Carreteras y Paisaje, vengo en PROPONER:

PRIMERO.- Ordenar la incoación de los trámites administrativos procedentes para la toma en consideración del proyecto de obra denominado "MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MÉDANO", término municipal de Granadilla de Abona, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Darío Caballero Gutiérrez, con presupuesto de ejecución por contrata ascendente a la cantidad de 491.413,67 €, incluido IGIC, y un plazo de ejecución de OCHO (8) MESES, así como iniciar el correspondiente procedimiento de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por el mismo, con el correspondiente trámite de exposición pública del referido documento técnico al objeto de que se puedan presentar las alegaciones que se estimen oportunas.

SEGUNDO.- Asimismo, ordeno la incoación del expediente administrativo de contratación que habrá de regir en la ejecución de las referidas obras y elevar el citado expediente a resolución del órgano de contratación competente, conforme a lo dispuesto en el art. 29.5 c) del Reglamento Orgánico de la Corporación Insular."

SEGUNDO.- Con fecha Registro de Entrada en el Cabildo Insular 10 de mayo de 2016, nº 62.736, se recibió oficio de la Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, al que se adjuntó:

- Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal con fecha 9 de mayo de 2016, respecto a la adecuación del referido proyecto al Planeamiento Municipal vigente, a los efectos previstos en el artículo 11 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en el que se indica: "*Teniendo en cuenta todo lo anterior y una vez analizado el trazado de la vía que se plantea en el proyecto "MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MÉDANO", el ámbito de intervención se ciñe al sistema viario del suelo rústico, cumpliendo con las determinaciones establecidas en el plan general.*"
- Informe urbanístico individualizado de las tres parcelas objeto de expropiación, de conformidad con el Planeamiento Municipal vigente, en los que consta que se ubican en suelo rústico, y en los que se indica que se encuentran dentro del radio de afección de las Servidumbres Aeronáuticas delimitadas en el Plan Director del Aeropuerto Tenerife Sur (Orden Fom/634/2002, de 14 de marzo, publicado en el B.O.E. nº 71 de fecha 23 de marzo de 2002.

TERCERO.- Con fecha Registro de Entrada en el Cabildo Insular 23 de junio de 2016, nº 82.993, se recibió oficio del Área de Infraestructura Hidráulica del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, en el que se traslada informe emitido con fecha 20 del mismo mes en sentido favorable-condicionado a la inclusión en el proyecto de obra de una solución para resolver el vertido de la cuneta de la margen derecha del ramal de la TF-64 desde San Isidro, y el vertido de la rejilla del ramal de la TF-64 desde El Médano.

CUARTO.- Consta el informe emitido con fecha 20 de junio de 2016 por la Unidad Orgánica de Suelo Rústico del Servicio Administrativo de Política Territorial, expediente de calificación territorial nº 100-2016:

-Que las actuaciones solicitadas afectarían a las ARH de Protección Ambiental 1 (Malpaíses y Llanos) y Protección Económica 3 del PIOT quedando remitida la regulación del uso de infraestructuras al que se vinculan al planeamiento urbanístico y/o territorial correspondiente. En ese sentido, se ha constatado que la glorieta se encuentra prevista en el PGO de Granadilla de Abona. Respecto a las intervenciones, el régimen de la ARH de Protección Ambiental 1 prohíbe todas sobre la red viaria y de acceso con la excepción de las de conservación y mejora de elementos existentes. Mientras, respecto a la ARH de Protección Económica 3 se establecen prohibiciones sobre la red de pistas y caminos sin que se prevean determinaciones con relación a las infraestructuras viarias de nivel superior como la de referencia.

-Que las actuaciones deberán ejecutarse teniendo en cuenta las determinaciones de integración paisajística, ambiental y funcional de viarios previstas en la Sección 2ª, Capítulo 3 del Título III del PIOT.

-Que según se desprende del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de Tenerife, parte de las actuaciones se localizan en Zona Turística del Litoral de Abona, Área de Expansión Urbana, dentro del Ámbito Particular de El Médano 11, vinculándose su destino al uso residencial sin que se encuentre prevista la glorieta en el modelo viario y de transporte de esta Zona Turística.

-Que según la capa "Carreteras competencia del Cabildo (2016)" del programa Mapa del que se dispone en estas oficinas las actuaciones afectan a las carreteras TF-64 (de Granadilla a El Médano) y TF 643 (de El Médano a Los Abrigos).

-Que según la capa "Red Básica General (PH-1991)" del programa Mapa del que se dispone en estas oficinas las actuaciones podrían afectar a conducciones de agua pudiendo precisarse de informe del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

-Que según el Plano nº 0-1 de Ordenación Clasificación y Categorización del Suelo de Granadilla de Abona, en el entorno de las actuaciones existen zonas de protección cautelar del Patrimonio Histórico pudiendo precisarse de informe del Servicio Administrativo de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife."

QUINTO.- Con fecha 21 de septiembre de 2016 se recibió oficio procedente del Servicio Administrativo de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico, en el que se comunica informe emitido por la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico el día 24 de agosto de 2016. A tenor del mismo, *"El proyecto no afecta a Bien de Interés Cultural declarado, ni con expediente incoado a efectos de su declaración, ni se inscribe en el entorno de protección de BIC alguno."* No obstante, se indica que se estima necesaria la realización de una prospección arqueológica efectuada por técnico cualificado y debidamente autorizado.

SEXTO.- Con fecha Registro de Entrada en el Cabildo Insular 10 de octubre de 2016, nº 124.996, se recibió oficio de la División de Integración Territorial, Coordinación de Seguridad de Aeropuertos de la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea, al que se adjunta Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres Aeronáuticas (expediente O16-0326), adoptado el día 30 de septiembre de 2016, en virtud del cual se acuerda *"AUTORIZAR la mejora de la intersección de la TF-64 con la TF-643 y el uso de las excavadoras."*

SÉPTIMO.- Con fecha 13 de octubre de 2017 se recibió oficio del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje del siguiente tenor literal:

El proyecto "MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MÉDANO (T.M. DE GRANADILLA DE ABONA)" entregado en el Registro de Entrada en el Cabildo el 3 de octubre de 2017 (nº 131.410), recoge las modificaciones solicitadas en su día por el Consejo Insular de Aguas, por el Servicio Administrativo de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico que estimaba necesaria una prospección arqueológica en la zona, el acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea autorizando dicho proyecto y la modificación de la clasificación del contratista según la normativa vigente.

Las modificaciones realizadas no afectan a los informes sectoriales tramitados, ya que recogen las modificaciones solicitados por estos.

Este documento anularía al documento presentado el 28 de diciembre de 2015 en el Registro General de Entrada del Cabildo (nº 153.775).

Además se informa que el proyecto en cuestión ha tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal y reglamentario así como la normativa técnica que resulta de aplicación, además de tener el contenido mínimo conforme a lo previsto en el artículo 123 del TRLCSP.

OCTAVO.- En el Anejo a la Memoria del meritado proyecto de obra nº 5 "Bienes Afectados", se describen los bienes de dominio privado cuya ocupación resulta necesaria y que se relacionan a continuación con indicación de la superficie afectada de conformidad al Plano 2.9 "Planta de bienes afectados":

Polígono	Parcela	Ref. Catastral	Aprovechamiento	Superficie afectada
3	111	38017A003001110000WY	Rústico	775,58 m ²
4	71	38017A004000710000WR	Rústico	320,92 m ²
4	102	38017A004001020000WD	Rústico	508,13 m ²

La ejecución de las referidas obras precisa ocupar bienes y terrenos, por lo que el proyecto de obra comprende la definición del trazado y la determinación de los mismos que son necesarios adquirir por el procedimiento expropiatorio.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras Canarias, recoge en su artículo 2 que "Las carreteras de Canarias se clasifican en regionales, insulares y municipales, según corresponda su titularidad a la Comunidad Autónoma, a los Cabildos Insulares o a los Ayuntamientos respectivamente."

Por su parte, el artículo 5 de la referida Ley establece "Las carreteras quedan bajo la exclusiva competencia y responsabilidad de cada organismo administrador correspondiéndole a éste su planificación, proyecto, construcción, conservación, mantenimiento, señalización, uso y explotación, así como, si fuese necesario, la ampliación del número de sus calzadas, acondicionamiento de trazado, ensanches de plataforma, mejoras de firme o ejecución de variantes."

SEGUNDO.- En el presente caso, la actuación se desarrolla en el ámbito de las carreteras TF-643 y TF-64, ostentando el Cabildo Insular de Tenerife la titularidad de ambas según el siguiente detalle:

- Carretera TF-643, de El Médano a Los Abrigos, anterior denominación TF-6214, al estar incluida en el Catálogo de la Red Insular de Carreteras.
- Carretera TF-64, de Granadilla a El Médano, anterior denominación TF-614, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 144/1997, de 11 de julio, de traspaso de servicios, medios personales y materiales y recursos al Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio de las competencias transferidas en materia de carreteras, figurando en el Anexo I "*Relación de carreteras que se transfieren*" del Acta de Entrega y recepción de los medios personales, materiales y recursos transferidos al Cabildo Insular de Tenerife en materia de carreteras, formalizada el día 29 de diciembre de 1997, como "*Carretera TF-614 de Granadilla al Médano*".

TERCERO.- El proyecto de obra denominado "*Mejora de la intersección de la TF-64 con la TF-643 en El Médano*", término municipal de Granadilla de Abona, contiene, desde el punto de vista formal, los documentos y especificaciones exigidas legalmente, en especial los señalados en el artículo 90 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CUARTO.- Una vez tomado en consideración y previo a su resolución definitiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el proyecto debe ser sometido al trámite de información pública. Al no señalar el citado artículo el plazo de la referida información pública, éste debe tener una duración no inferior a veinte días, conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

QUINTO.- El artículo 11.2 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que "*2. Las adquisiciones de bienes derivadas de expropiaciones forzosas se regirán por su normativa específica.*"

SEXTO.- La potestad expropiatoria le corresponde a la isla en su calidad de Administración Pública de carácter territorial y dentro de la esfera de sus competencias, según lo estipulado en el artículo 4.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SÉPTIMO.- Conforme establece el artículo 2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954 (en adelante, LEF), en concordancia con el artículo 3.4 de su Reglamento, le corresponde al Cabildo Insular en pleno adoptar los acuerdos en materia de expropiación que le sean conferidos por la normativa legal vigente.

OCTAVO.- El artículo 13 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, recientemente modificado por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales (BOC nº 2, del Lunes 5 de enero de

2015) determina, en su apartado 1º lo siguiente: *"La aprobación de los proyectos de carreteras implicará la declaración de utilidad pública y, en su caso, y motivadamente la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondiente a los fines de la expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres"*.

Por su parte el apartado 4º confiere específicamente a los cabildo insulares, la siguiente facultad: *"Los cabildos insulares podrán realizar la declaración de utilidad pública y, en su caso, de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de la expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres, en las carreteras de titularidad insular con los requisitos previstos en los apartados anteriores"*.

NOVENO.- Las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de expropiación, conforme estipula el apartado primero del artículo 3 de la LEF. Por su parte, en el apartado 2 se establece que la Administración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales.

En el presente caso se han identificado los propietarios de las tres parcelas objeto de expropiación de conformidad con la información obtenida a través de la Sede Electrónica del Catastro.

DÉCIMO.- Considerando que en el proyecto de obra objeto de aprobación se han contemplado las modificaciones solicitadas por el Área de Infraestructura Hidráulica del Consejo Insular de Aguas de Tenerife relativas al vertido de aguas, se entiende el carácter favorable del informe emitido.

UNDÉCIMO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 41.2 letra ac) del Reglamento Orgánico Corporativo (BOC nº 146 de 31 de julio de 2017), en conexión con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, modificado por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del territorio y de los Recursos Naturales, corresponde al Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife la declaración de utilidad pública de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de la expropiación en las carreteras de titularidad insular.

Por todo lo expuesto y de conformidad con el Dictamen de la Comisión Plenaria de Presidencia, el Pleno Corporativo, con 19 votos a favor (9 del Grupo Coalición Canaria, 5 del Grupo PSOE y 5 del Grupo Popular), 1 voto en contra del Grupo PSOE y 5 abstenciones del Grupo Podemos, adopta el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Tomar en consideración el proyecto de obra denominado **"MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MÉDANO"**, término municipal de Granadilla de Abona, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Darío Caballero Gutiérrez, con un presupuesto de ejecución por contrata ascendente a la cantidad de 493.567,87 €, IGIC incluido, y un plazo de ejecución de OCHO (8) MESES, a contar a partir del siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo.

SEGUNDO: Aprobar la siguiente relación previa, concreta e individualizada de los bienes y derechos cuya ocupación se considera necesaria:

Polígono	Parcela	Ref. Catastral	Aprovechamiento	Superficie afectada
3	111	38017A003001110000WY	Rústico	775,58 m ²
4	71	38017A004000710000WR	Rústico	320,92 m ²
4	102	38017A004001020000WD	Rústico	508,13 m ²

TERCERO: Hacer pública la expresada relación concreta e individualizada, mediante fijación de este anuncio en el Tablón de Anuncios de la Corporación Insular y en el del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, así como su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de **VEINTE (20) DÍAS**, al objeto de que se puedan formular cuantas alegaciones se consideren convenientes, aportando cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos en la relación que se hubiere hecho pública y su estado material y legal; así como formular las alegaciones, por razones de fondo o forma, sobre la procedencia de la necesidad de ocupación o disposición de los bienes.

A los efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan, considerándose aprobada definitivamente caso de no producirse alegaciones que supongan su modificación.

CUARTO.- Someter dicho proyecto de obra al trámite de exposición pública por plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, así como publicar la información relativa a dicha actuación en el Tablón de Anuncios del Cabildo Insular de Tenerife.

QUINTO: Considerar aprobado definitivamente el proyecto de referencia si durante el plazo establecido no se formulase objeción alguna, entendiéndose, conforme a la normativa legal vigente, la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO PÚBLICO.

19.- Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 1 del Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio 2018.

Visto dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Presidencia celebrada el día 26 de febrero de 2018, relativo a propuesta de aprobación del Expediente nº 1 de Modificación de Créditos dentro del Presupuesto de este Cabildo para el presente año una vez incorporada la enmienda presentada por el portavoz del grupo Coalición Canaria en el período de exposición del expediente a los portavoces de los Grupos Políticos; previos informes del Servicio de Presupuestos y Gasto Público y de la Intervención

C/ Las Macetas, s/n. Los Majuelos
Pabellón Insular Santiago Martín 3ª Planta
38108. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife

General, el Pleno, por mayoría, con quince (15) votos a favor de los Consejeros presentes de los Grupos Políticos Coalición Canaria-PNC (9) y Socialista (6), y diez (10) abstenciones de los Consejeros presentes de los Grupos Políticos Popular (5) y Podemos (5), acuerda:

PRIMERO: Corregir el error material detectado en la propuesta del Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de febrero pasado, de acuerdo al siguiente detalle:

Donde dice:

BAJAS DE GASTOS

Bajas por anulación

18.0431.1351.46240 **Subvenciones Ctes. Ayuntamientos/Protección Civil** 30.000,00
.../..

Debe decir:

BAJAS DE GASTOS

Bajas por anulación

18.0431.1351.48940 **Subvenciones Ctes. O.Inst.Sin Fin Lucro/Protección Civil** 30.000,00
.../..

SEGUNDO: Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1 de acuerdo con el siguiente detalle:

ALTAS DE GASTOS

Créditos extraordinarios

18.0431.1351.76240 Subvenciones Ayuntamientos/Protección Civil 30.000,00
(Py. 18/642.- Fortalecimiento Estruct.Municipales Protec.Civil)
18.0701.4632.60912 Infraestructuras/Investigación Científica,Tca.y Aplicada160.000,00
(Py. 18/643.- Cobertura TDT Zona de Anaga)
18.0202.1601.62600 Equipos Proceso Información/Alcantarillado 1.299,94
(Py. 18/0653.- Adquisición portátiles)
18.0901.4327.62210 Construcciones/Información y Promoc.Turística 7.299,38
(Py. 17/0999.- Instalac.Aparca-Bicicletas entorno Recinto Ferial)
18.0403.1723.61010 Terrenos y Bs.Naturales/Protec.y Mejora M.A. 18.101,21
(Py. 17/0866.- Sendero y Aparcamiento en núcleo de Masca)
18.0125.9333.62900 Otras Inversiones/Gestión del Patrimonio400.000,00
(Py. 18/656.- Andamios y Lona Serigrafiada Fachadas) **616.700,53**

Transferencia al alza:

18.0741.3423.44908 Subvenc.Ctes.IDECO S.A./Instalaciones Deportivas220.000,00
(Py. 17/1038- XII Edición Liga Promises de Fútbol 7)

TOTAL ALTAS

836.700,53

BAJAS DE GASTOS

Bajas por anulación

18.0431.1351.48940 Subvenciones Ctes. O.Inst.Sin Fin Lucro/Protección Civil 30.000,00
18.0701.4632.65000 Invers.Gest.O.Entes/Investigación Científica,Tca.y Aplicada160.000,00
(Py. 18/516.- Red de Autoprestación I)
18.0202.1601.22000 Ordinario no Inventariable/Alcantarillado 1.299,94

18.0901.4327.68220	Invers.Inmov. en Construc./Información y Prom.Turística	7.299,38
	(Py. 17/0999.- Instalac.Aparca-Bicicletas entorno Recinto Ferial)	
18.0403.1723.65000	Invers.Gestionadas O.Entes/Protec.y Mejora M.A.....	18.101,21
	(Py. 18/0599.- Pavimentación Pistas Los Dornajos y Los Partidos)	
18.0125.9333.63210	Construcciones/Gestión del Patrimonio.....	400.000,00
	(Py. 15/218.- Rehabilitación Edificio Anexo)	616.700,53

Transferencia a la baja:

18.0702.4633.74146	Subvenc.Capital PCTT/Instalaciones Deportivas.....	220.000,00
	(Py. 18/0477.- Edificio Multiempresas)	

TOTAL BAJAS

836.700,53

Este expediente se someterá a información pública por un periodo de QUINCE (15) DÍAS, de conformidad con lo previsto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 169.1 del citado Texto Refundido, entendiéndose definitivamente aprobado de no presentarse en dicho período reclamación o alegación alguna.

20.- Propuesta de corrección de error material detectado en el Anexo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio 2018.

Detectado error material en el Anexo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2018 "Subvenciones Nominativas", aprobado inicialmente mediante acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el "Proyecto de Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio 2018" y quedando definitivamente aprobado por acuerdo plenario de fecha 26 de enero de 2018, y teniendo en cuenta que:

Mediante el mencionado acuerdo plenario se aprueba el citado Anexo II de Subvenciones Nominativas, incluyendo, entre otras, y a propuesta del área de Deportes, las siguientes:

- Subvención nominativa a favor de la Asociación de Prensa Deportiva de Tenerife, por importe de 6.000,00 euros, con la finalidad de financiar los gastos derivados de la "Gala del Deporte".
- Subvención nominativa a favor de la Federación de Arrastre Canario, por importe de 20.000,00 euros, con la finalidad de financiar los gastos derivados de las "Pruebas de Arrastre".
- Subvención nominativa a favor de la Federación Tinerfeña de Fútbol, por importe de 9.000,00 euros, con la finalidad de financiar la actividad "Buen rollito y Difusión partidos internet".

En el referido Anexo II se especifica por error la aplicación presupuestaria 18.0741.3411.44908, como aplicación donde figura consignado el crédito necesario para la concesión de las subvenciones nominativas relacionadas anteriormente, siendo el subconcepto económico correcto el **48940** de

acuerdo con la naturaleza económica de los gastos, y tal y como figura en la propuesta remitida al efecto por el Área gestora del gasto.

Por lo expuesto, considerando lo previsto en el Art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y previo dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Presidencia, el Pleno, por mayoría, con dieciséis (16) votos a favor de los Consejeros presentes de los Grupos Políticos Coalición Canaria-PNC (10) y Socialista (6), cinco (5) abstenciones de los Consejeros presentes del Grupo Político Popular, y cinco (5) votos en contra de los Consejeros presentes del Grupo Político Podemos, acuerda corregir el Anexo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2018 "Subvenciones Nominativas", de acuerdo a lo siguiente:

Donde dice:

Partida	Objeto	Tercero	Importe
18.0741.3411. 44908	Gala del Deporte	Asoc.Prensa Deportiva de Tenerife	6.000,00
18.0741.3411. 44908	Pruebas de Arrastre	Federación de Arrastre Canario	20.000,00
18.0741.3411. 44908	Buen Rollito y Difusión partidos internet	Federación Tinerfeña de Fútbol	9.000,00

Debe decir:

Partida	Objeto	Tercero	Importe
18.0741.3411. 48940	Gala del Deporte	Asoc.Prensa Deportiva de Tenerife	6.000,00
18.0741.3411. 48940	Pruebas de Arrastre	Federación de Arrastre Canario	20.000,00
18.0741.3411. 48940	Buen Rollito y Difusión partidos internet	Federación Tinerfeña de Fútbol	9.000,00

21.- Propuesta de autorización de transferencia de crédito de operaciones de capital a operaciones corrientes.

Visto dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Presidencia celebrada el día 26 de febrero de 2018, relativo a autorización de transferencia de crédito de operaciones de capital a operaciones corrientes; previos informes del Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público y de la Intervención General, el Pleno, por mayoría, con diecinueve (19) votos a favor de los Consejeros presentes de los Grupos Políticos Coalición Canaria-PNC (8), Socialista (6) y Podemos (5), y cinco (5) abstenciones de los Consejeros presentes del Grupo Político Popular, acuerda autorizar las citadas transferencias de crédito de capital para financiar gastos corrientes, de conformidad con la Base 15ª, apartado 5º,

de las de Ejecución del Presupuesto, sin perjuicio de los trámites que posteriormente haya que realizar para hacer efectiva dicha transferencia, de acuerdo con el siguiente detalle:

Propuesta nº 1:

ALTA DE GASTOS

18.0741.3423.44908 Subvenc.Ctes.IDECO S.A./Instalaciones Deportivas 40.000,00
(Py. 16/0834.- Programa Tenerife+Azul)

BAJA DE GASTOS

18.0741.3423.74049 Subvenc.Capital IDECO S.A./Instalaciones Deportivas 40.000,00
(Py. 16/0756.- Programa Tenerife+Azul)

Propuesta nº 2:

ALTAS DE GASTOS

18.0741.3423.44908 Subvenc.Ctes.IDECO S.A./Instalaciones Deportivas160.000,00
(Py. 17/0172.- Promoción Instalaciones Deportivas)

18.0741.3423.44908 Subvenc.Ctes.IDECO S.A./Instalaciones Deportivas 30.000,00
(Py. 17/1038- XII Edición Liga Promises de Fútbol 7) 190.000,00

BAJA DE GASTOS

18.0741.3424.76240 Subvenc.Ayuntamientos/Instalaciones Deportivas190.000,00
(Py. 18/0397.- Remodelación Piscina de Santa Cruz)

22.- Propuesta de reconocimiento de créditos de pasados ejercicios.

Visto dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Presidencia, celebrada el día 26 de febrero de 2018, relativo a reconocimientos de créditos de pasados ejercicios, realizados por razones excepcionales debidamente justificadas, previo informe de la Intervención General, el PLENO, por mayoría, con dieciséis (16) votos a favor de los Consejeros presentes de los Grupos Políticos Coalición Canaria-PNC (10) y Socialista (6), y diez (10) votos en contra de los Consejeros presentes de los Grupos Políticos Popular (5) y Podemos (5), acuerda el reconocimiento y abono de los siguientes gastos a favor de las personas que a continuación se indican:

Nº FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	SERVICIO
PE20171274	Suscripción COSITALNETWORK	49,59	Consejo Gral. COSITAL	Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público
CL12170000830	Combustible vehículos del Servicio	39,00	DISA Red de servicios petrolíferos S.A.U.	Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio
		88,59		

ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL.

SERVICIO ADMINISTRATIVO POLÍTICA TERRITORIAL.

23.- Acuerdo a adoptar sobre el contenido vigente del Plan Insular de Ordenación de Tenerife, tras la derogación producida por la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en su DDÚnica.3).

Con relación a la Orden de 29 de enero de 2018 del Consejero Insular del Área de Política Territorial para que se lleve a cabo la emisión de los informes correspondientes, en relación al contenido del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) que ha de considerarse vigente, tras la derogación tácita de sus determinaciones efectuada por la Disposición Derogatoria Única. 3 de la Ley 4/2017, del Suelo y de Espacios Naturales de Canarias, se emite el presente en base a las **siguientes consideraciones:**

Primera.- En una primera aproximación al objeto del presente informe, es preciso abordar la cuestión relativa a la naturaleza jurídica de los instrumentos de ordenación, y por ende del PIOT, dejando sentado que nos encontramos ante normas jurídicas, disposiciones generales de carácter reglamentario. Así lo ha reconocido de manera constante la Jurisprudencia, si bien resaltando particularidades dentro de este carácter normativo.

En este sentido, ha de citarse la Sentencia del Tribunal Supremo 1527/2012, en cuyo FD 5º dispone que "la doctrina especializada y la jurisprudencia constante de esta Sala viene considerando que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística ostentan la naturaleza de disposiciones de carácter general porque tras su aprobación se incorporan al ordenamiento jurídico, su vigencia y su fuerza vinculante permanece de manera indefinida en el tiempo y se consolidan en cada acto de aplicación. También por su específica configuración legal, que expresamente les atribuye los principios de inderogabilidad singular, publicidad y jerarquía normativa, característicos de las disposiciones reglamentarias."

Segunda.- En el Preámbulo (XV) de la Ley 4/2017, de 13 julio, de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSCan), se recoge expresamente que "De otra parte, a la vista de la experiencia previa con la fijación de plazos obligatorios de adaptación, esta norma permite que la adecuación de los instrumentos de ordenación a esta ley se efectúe con ocasión de la primera revisión que se aborde, sin perjuicio, claro está, de la inmediata aplicación de aquella, en particular de las disposiciones sobre competencias, procedimientos y mecanismos de actuación. Asimismo, en aras de la certidumbre, la disposición derogatoria precisa las leyes y, en su caso, los preceptos legales que quedan derogados; igualmente, se recuerda la derogación de las normas reglamentarias, incluyendo las determinaciones de los planes que contradigan lo dispuesto por esta norma. Con la misma finalidad se demora la entrada en vigor de la ley durante el mes siguiente a su publicación.

Tercera.- La Disposición Derogatoria Única, (apartados segundo y tercero) de la Ley 4/2017, de 13 julio, de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, viene a establecer que:

" (...) 2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley. En particular, quedan derogados aquellos preceptos del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto

183/2004, de 21 de diciembre, y del Reglamento de procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, que se opongan a lo dispuesto en esta ley”.

“3. Igualmente, quedan derogadas cuantas determinaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley se contengan en los instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, en particular las determinaciones urbanísticas del planeamiento insular. En aras de la certidumbre jurídica, las administraciones en cada caso competentes adaptarán los instrumentos de ordenación a este mandato, **suprimiendo las determinaciones derogadas por esta ley”.**

En efecto, en su consideración de normas jurídicas, a los instrumentos de ordenación les resulta aplicable lo dispuesto en el propio Código Civil en su artículo 1 (apartado dos), al establecer que: *“Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior”.*

Amén de lo preceptuado en su artículo 2 (apartado segundo), respecto de las leyes que tienen una duración indefinida, al establecer que *“las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.”*

Tal como se deduce del citado texto legal, la derogación podrá ser expresa o tácita. Es expresa cuando la ley nueva deroga a la antigua precisamente porque así lo dispone (“expresamente”) y es tácita cuando la ley nueva se opone simplemente a la antigua.

La LSCan, en su Disposición Derogatoria Unica.3 establece un mandato legal dirigido a las Administraciones Públicas competentes y las faculta, por razón de seguridad jurídica, para declarar la supresión de las determinaciones de los Planes que consideren que se encuentran derogadas tácitamente por la ley.

Cuarta.- La Disposición Transitoria segunda de la LSCan, prevé además otro mandato, el de la adaptación a la nueva ley de los instrumentos de ordenación vigentes, así establece que *“Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de la presente ley y de su inmediata eficacia derogatoria, los instrumentos de ordenación vigentes en el momento de entrada en vigor de la misma se adaptarán a su contenido en la primera modificación sustancial plena de que sean objeto.*

Quinta.- A mayor abundamiento, el artículo 81.3 de la LSCan establece que:

*“ (...) 3. Todo instrumento de planeamiento responderá a los principios de mínimo contenido necesario y de máxima simplicidad, en cumplimiento de las determinaciones establecidas para los mismos por esta ley. **Serán nulas de pleno derecho cualquier determinación del planeamiento que exceda de este mandato”.***

El Plan Insular de Ordenación de Tenerife deberá entrar en el sistema de planeamiento configurado por la LSCan sin contradecir ninguna norma jurídica de superior jerarquía.

Sexta.- Resultando que la Unidad Orgánica Técnica de Ordenación del Territorio y Recursos Naturales, perteneciente al Área de Política Territorial, ha emitido informe con fecha de 29 de Enero de 2018, cuyo contenido literal se transcribe a continuación:

“La Disposición Derogatoria Única de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegido de Canarias (LSENPC), en su párrafo número 3, establece lo siguiente: “Igualmente, quedan derogadas cuantas determinaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley se contengan en los instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, en particular las determinaciones urbanísticas del planeamiento insular. En aras de la certidumbre jurídica, las administraciones en cada caso competentes adaptarán los instrumentos de ordenación a este mandato, suprimiendo las determinaciones derogadas por esta ley”. En cumplimiento del mandato establecido en esa disposición citada, es objeto del presente informe identificar con precisión aquellas determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) a fin de proponer al Pleno del Cabildo Insular que acuerde la supresión de las mismas del contenido del PIOT, garantizando de ese modo la necesaria certidumbre jurídica.

A. ASPECTOS GENERALES PREVIOS

1. Consideraciones preliminares y criterios generales

En el Preámbulo de la reciente LSENPC se dice que “es preciso racionalizar mediante una reordenación de las reglas y de los instrumentos de intervención sobre el suelo en aras de conseguir la claridad y la certidumbre, evitar duplicidades e incoherencias (es preciso aclarar los campos de acción del planeamiento insular y del plan general), eliminar la dispersión normativa (como sucede en las normas reguladoras del suelo rústico) y, también, actuar sobre los excesos regulatorios (introduciendo un principio de contención en las normas y en los planes)”¹. Más adelante se añade que “...esta norma incorpora el principio de contención. Se introduce la regla de que cada plan desarrolle las determinaciones que le corresponden de acuerdo con la ley, sin ir más allá de lo estrictamente necesario (criterio habitual en el Derecho europeo); declarando nulo de pleno derecho todo aquello en lo que exceda”². La última consideración relevante del Preámbulo se refiere al papel de las administraciones públicas canarias, desde “el criterio rector del reparto competencial que efectúa esta ley es la garantía de la autonomía de cada Administración pública para ejercer sus competencias sin injerencias indebidas de otras entidades públicas”³.

Desde este marco introductorio y justificativo ha de entenderse que la intención del legislador es deslindar lo mejor posible los contenidos de cada instrumento de ordenación en base al criterio del reparto competencial

¹ Epígrafe III del Preámbulo.

² Epígrafe IX del Preámbulo.

³ Epígrafe XIV del Preámbulo.

(cuestión distinta es que lo consiga en el articulado). Podría afirmarse que cada Plan sólo puede establecer contenidos sustantivos sobre los que tenga título competencial la administración que lo formula y, además y justamente por la misma razón, lo aprueba definitivamente. En el caso de los planes que formula y aprueba el Cabildo, todo su contenido debe estar justificado en razón de la competencia insular sobre la materia. Naturalmente, si en la relación de contenidos de un instrumento que formula el Cabildo se deja claro cualquiera de ellos, nada hay que discutir. Sin embargo, en esos preceptos⁴ no está todo lo claro que hubiera sido deseable en qué consiste concretamente cada uno de los epígrafes que se relacionan como contenido de dichos planes. Se entiende que, en el marco del preámbulo (y sin perjuicio de aplicar otros criterios complementarios), al concretar cada uno de estos contenidos ha de interpretarse su alcance y extensión desde un doble criterio: que sea claramente justificable la competencia del Cabildo para ordenar el aspecto de que se trate (lo cual equivale a que tenga clara relevancia insular) y, de otra parte, que la ordenación de dicho aspecto por el Cabildo no suponga invadir o limitar⁵ la competencia municipal en dicha materia.

2. Criterios para determinar la contradicción con la Ley de las determinaciones del PIOT

Si bien es obvio que la entrada en vigor de la LSENPC ha derogado todas las determinaciones del PIOT que son contrarias a la misma, no es fácil pronunciarse respecto de cada una de las disposiciones concretas que conforman el contenido sustantivo del PIOT en el sentido de si contradice la Ley. La conclusión inversa es siempre más sencilla: obviamente, si una determinación del PIOT vigente puede encuadrarse entre las relacionadas en los artículos 96, 97, 98, 99 y 100 no ha quedado derogada porque forma parte del contenido que la nueva Ley atribuye a los Planes Insulares. Sin embargo, la ambigüedad en la definición de muchos de los contenidos hace que la aplicación de este criterio (en este caso para verificar qué determinaciones no han sido derogadas) no sea inmediata sino que exija una reflexión y justificación, sujeta necesariamente a interpretaciones. Por ejemplo, uno de los contenidos del Plan Insular (artículo 96.2f) es la "determinación de los suelos que deban preservarse del proceso urbanizador". En base a esta norma podría sostenerse que el Plan Insular puede clasificar (o "pre-clasificar") si se prefiere la totalidad del suelo rústico de la Isla correspondiente, limitando la capacidad municipal de delimitar los suelos urbanos y urbanizables a los vacíos que deje. Esta interpretación –en principio no contradictoria con lo señalado en ese artículo implicaría vaciar de contenido la competencia urbanística municipal (podría llegarse a limitar ésta desde el PIO a la ordenación de los suelos urbanos consolidados) y por tanto, desde una óptica más general y sistémica, ha de entenderse que contradice la Ley. Volviendo al criterio general expuesto en el epígrafe 1, a este respecto concreto habría que interpretar que el PIO puede y debe, ciertamente, determinar los suelos que deben preservarse de

4 Artículos 96 a 100 para el Plan Insular; artículos 106 a 110 para los Planes y Normas de ENP; artículos 119 y 120 para los planes territoriales; y artículo 125 sobre los Proyectos de Interés Insular.

5 Se podría admitir excepcionalmente la capacidad de limitar a través de un plan formulado por el Cabildo el ejercicio de la competencia municipal de ordenación siempre que la necesidad de esa limitación estuviera muy justificada por motivos insulares.

la urbanización (y, por tanto adquirir la clasificación de rústicos), pero sólo de aquéllos cuya preservación urbanizadora se justifica en razones de índole insular (y, en concreto, las que se relacionan el siguiente artículo 99). En todo caso, sin entrar aquí en los casos concretos, lo importante es resaltar que un segundo criterio para la aplicación de la derogación es verificar si cada determinación concreta del PIOT queda comprendida en el contenido que para el mismo establece la LSENPC, interpretando cada uno de estos preceptos en congruencia con el resto de criterios y, sobre todo, con los generales.

3. Criterios para la determinación de las disposiciones urbanísticas del PIOT

La citada Disposición Derogatoria única de la LSENPC deroga, como es evidente, todas las disposiciones del PIOT contrarias a la Ley pero remarca que, en especial, las urbanísticas. Ahora bien, la Ley no precisa cómo discernir si una determinación concreta es o no de naturaleza urbanística. Parece razonable entender como determinaciones urbanísticas las que constituyen la ordenación urbanística, la cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 135 se desarrolla en dos niveles diferentes: la ordenación estructural y la ordenación pormenorizada. Así, en una primera aproximación cabría concluir que al menos todas las determinaciones del PIOT cuyo alcance y contenido se correspondiese con alguno de los epígrafes definidos en los artículos 136 (ordenación urbanística estructural) y 137 (ordenación urbanística pormenorizada) habrían de entenderse derogadas. Ahora bien, como analizaremos a continuación, dicha conclusión no es en absoluto acertada.

3.1. La clasificación y categorización de suelo

Las determinaciones de clasificación y categorización de suelo se materializan en delimitaciones gráficas en planos, consistiendo en la división del territorio objeto de ordenación en recintos, asignando a cada uno de ellos una determinada clase y categoría de las previstas en la LSENPC. Ciertamente, esta determinación es y siempre ha sido propia y exclusiva de los planes generales (entre los instrumentos de planeamiento urbanístico). Sin embargo, a pesar de ser una determinación urbanística, la Ley obliga a que sea establecida en el ámbito de los Espacios Naturales Protegidos por los correspondientes planes, los cuales tienen el carácter de instrumentos de ordenación ambiental y no instrumentos de ordenación urbanística (artículo 83).

También cabe sostener que los Planes Territoriales (en particular, los parciales) necesariamente deben establecer la clasificación de suelo de sus ámbitos de ordenación toda vez que la LSENPC los concibe como instrumentos suficientes para legitimar la ejecución y, en tal caso, han de contener la ordenación pormenorizada precisa; no parece lógico que en un ámbito ordenado por un Plan Territorial, éste establezca determinaciones de ordenación pormenorizada sin asignar también la clase y categoría de suelo, que es la condición básica y previa para la fijación de aquellas.

Por último, y aunque no queda del todo claro en el artículo 25, también parece que los Proyectos de Interés Insular o Autonómico podrían establecer la clase y categoría de suelo de los ámbitos sobre los que se formulan o, al menos, imponer al planeamiento general la obligación de

modificar la clase y categoría vigentes. Así, por ejemplo, la implantación mediante un Proyecto Insular de un uso prohibido por Ley en la categoría de suelo vigente en el PGO obligaría a establecer una categoría distinta.

El breve repaso de los párrafos anteriores muestra cómo la propia Ley prevé que instrumentos que no son de ordenación urbanística puedan e incluso deban establecer determinaciones de clasificación y categorización de suelo que son ciertamente urbanísticas. En el caso del Plan Insular de Ordenación (PIO) resulta que la LSENPC prevé al menos cuatro tipos de determinaciones propias de su contenido a las que significativamente llama sobre régimen urbanístico del suelo. En el artículo 99 se señala que "los planes insulares de ordenación delimitarán las siguientes zonas del territorio de cada isla: a) Las que deban preservarse del proceso urbanizador y, en su caso, edificatorio, porque su transformación sería incompatible con el desarrollo sostenible de la isla; b) Las que deben destinarse a usos del sector primario, en especial los agrarios, forestales o extractivos; c) Las que deben preservarse del desarrollo urbanístico por su valor agrícola existente o potencial, o por su valor paisajístico o patrimonial relevante; d) las que deban ser excluidas del proceso de urbanización y edificación, en prevención de riesgos sísmicos, geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios forestales".

Estas determinaciones suponen la delimitación de recintos a los que se asigna el régimen urbanístico del suelo rústico, porque ésta es la clase de suelo que corresponde a los terrenos que han de ser excluidos del proceso urbanizador. Pero es que, además, si el PIO puede (y debe) delimitar los ámbitos que deben destinarse a usos agrarios, forestales o extractivos, o que deben preservarse por sus valores paisajísticos, la LSENPC está diciendo que puede delimitar ámbitos a los que estaría asignando el régimen urbanísticos de las categorías de suelo rústico de protección agraria, de protección forestal, de protección minera o de protección paisajística. Es decir, estas determinaciones que la Ley atribuye expresamente al PIO se corresponden exactamente con las de clasificación y categorización de suelo de los planes generales. Por tanto, ha de empezar a cuestionarse que toda determinación urbanística del planeamiento insular ha quedado derogada por la LSENPC.

Podría plantearse que aunque el PIO puede delimitar recintos precisos en el mapa de la isla a los que les establece el régimen urbanístico de una categoría de suelo rústico concreta, no puede establecer explícitamente dicha categorización. Vendría a ser, por ejemplo, que el PIO delimitara un ámbito sobre el que establece que debe ser preservado por motivos de protección paisajística y, consiguientemente, regula con las pertinentes condiciones de admisibilidad (y prohibición) de usos e intervenciones que, además, son congruentes con el régimen que la Ley asigna al Suelo Rústico de Protección Paisajística. Pero, aun así, el Plan Insular no dice expresamente que ese ámbito concreto queda categorizado como SRPP, sino que remite al Plan General a que materialice esa categorización concreta (pudiendo éste reajustando la delimitación geográfica). Esta solución no deja de ser un artificio formal, pues lo cierto es que, dado que la LSENPC obliga a que todas las determinaciones del PIO tengan carácter vinculante, categorice expresamente o no el PIO ámbitos concretos, lo

cierto es que éstos quedan sometidos al mismo régimen urbanístico que si estuvieran categorizados por el PGO.

Más relevante parece discutir otras dos cuestiones. La primera si el PIO puede ejercer la capacidad de delimitar "ámbitos que deban quedar excluidos del proceso urbanizador" de forma exhaustiva; es decir, de modo tal que el Plan General de un municipio no tenga prácticamente margen de decisión en la clasificación del suelo. Por expresarlo de la forma más extrema, imaginemos que un Plan Insular delimita como terrenos a preservar de la urbanización la totalidad de la isla salvo los suelos consolidados por la urbanización y/o la edificación, así como aquellos ámbitos vacantes pegados a algunos núcleos. Resultaría claro que, con esta técnica, el Cabildo estaría prácticamente definiendo a cada Ayuntamiento cuáles son los terrenos rústicos, urbanizables y urbanos de su municipio, vaciando de contenido la competencia urbanística de clasificación (y categorización) de suelo. Para evitar lo que claramente es contrario al espíritu de la LSENPC, ha de interpretarse que la delimitación de los ámbitos previstos en el artículo 99 debe estar justificada en el interés insular. Así, por ejemplo, el Cabildo puede delimitar zonas del territorio que deban destinarse a usos agrarios cuando la importancia de las mismas se justifica (expresamente) desde el interés insular; pero ello no implica que el Ayuntamiento no pueda delimitar otros ámbitos que, a la escala municipal, también deban destinarse a estos usos. En otras palabras, el Cabildo en el PIO puede clasificar y categorizar suelo rústico (explícita o implícitamente) pero no puede llevar esta competencia al extremo de agotar el ejercicio de la misma por el Ayuntamiento.

A este respecto, ha de matizarse que la delimitación de las zonas a que se refiere el artículo 99 no vale para todas las categorías de suelo rústico que establece la LSENPC. Así parece razonable que el PIO puede delimitar zonas equivalentes a ámbitos rústicos adscritos a cualquiera de las categorías de protección ambiental, en razón de las exigencias del desarrollo sostenible. Asimismo, también podrían delimitarse zonas adscribibles a las categorías de suelo rústico de protección agraria, forestal, hidrológica y minera, como ya se ha comentado. La delimitación de ámbitos equivalentes a suelo rústico de protección de infraestructuras sólo sería admisible para garantizar la funcionalidad y protección de infraestructuras y equipamientos de carácter insular. Por último, ha de entenderse que el PIO no puede delimitar zonas que correspondan a las siguientes categorías de suelo rústico:

- a) De asentamiento, tanto rural como agrícola, porque la LSENPC sólo permite la "concreción de los criterios legales para la identificación y delimitación de los asentamientos rurales y agrícolas" pero no la delimitación de estos.
- b) Suelo rústico común, ya que, atendiendo a su definición legal, no parece que pueda justificarse en motivos de interés insular o, al menos, no queda incluido en ninguno de los supuestos del artículo 99.

La segunda cuestión relevante sería si sobre esos ámbitos delimitados por el PIO en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99 LSENPC se puede llegar a establecer una regulación con el mismo alcance y contenido que la que establece el PGO sobre las distintas categorías de suelo rústico. Este aspecto se trata en el epígrafe 3.8.

Por último, en relación a la clasificación y categorización del suelo, entendemos que con carácter general el Plan Insular no puede delimitar ámbitos a los que asigne las clases de suelo urbanizable o urbano. Puede admitirse que el PIO pueda y deba definir el sistema de núcleos urbanos, como uno de los componentes básicos de los sistemas territoriales equilibrados de la isla, que es una de las determinaciones de ordenación señaladas en el artículo 96.2. Ahora bien, esta determinación no puede entenderse más allá de unos esquemas básicos sin que en ningún caso se traduzcan en delimitaciones precisas de ámbitos espaciales. También sería admisible incluir en el PIO algunas normas mínimas para garantizar que el PGO, al clasificar suelo urbano y urbanizable no contradiga el sistema territorial equilibrado de núcleos urbanos definido de forma esquemática a escala insular.

No obstante, debe concluirse que el PIO puede y debe establecer la clasificación de suelo urbano o de suelo urbanizable sobre aquellos ámbitos que delimite expresamente como reservas para actividades que sean estratégicas para el desarrollo insular (letra g) del artículo 96.2) y que, obviamente, sean ámbitos a los que les correspondan estas clases de suelo. Así, por ejemplo, el Plan Insular está legitimado para delimitar un polígono industrial insular y establecer sobre él mismo todas las determinaciones de ordenación necesarias para su directa ejecución (o remitir éstas a un Plan Territorial Parcial); parece lógico que ello supone la posibilidad de clasificarlo como suelo urbanizable (o urbano).

3.2. La delimitación de las áreas, sectores y ámbitos cuya ordenación pormenorizada se remita al planeamiento urbanístico de desarrollo

Esta determinación urbanística estructural no encuentra amparo en ninguno de los contenidos señalados en los artículos 96 y siguientes LSENPC; por tanto, debemos concluir que si alguna disposición del PIOT establece la obligación de formular un instrumento de planeamiento de desarrollo urbanístico sobre algún ámbito (sea territorial o sectorial), la misma ha sido derogada. En base al criterio general del legislador de deslindar las competencias insulares de ordenación de las municipales, esta conclusión tiene lógica; carecería en efecto de sentido que la eficacia ejecutiva de una ordenación del PIOT requiriera de la formulación de un plan urbanístico que estableciese la ordenación pormenorizada. De otra parte, hay que recordar que la intención del legislador es que la ordenación del PIOT sea, en su mayor parte, de directa aplicación (artículo 101.1b), limitando a supuestos concretos y casi tasados la posibilidad de desarrollo de sus determinaciones, que siempre se llevará a cabo mediante planes territoriales, nunca urbanísticos.

3.3. La delimitación de los suelos urbanos consolidados y no consolidados y urbanizables

Esta determinación hay que entenderla referida a la categorización de estas dos clases de suelo, reforzando la idea ya señalada en el epígrafe 3.1 de que la delimitación de suelos urbanos y urbanizables es del ámbito competencial exclusivo de lo urbanístico (no tanto así los rústicos, como ya se ha expuesto). Por tanto, ha de concluirse que cualquier determinación del PIOT que suponga imponer o incluso condicionar la clasificación y categorización de los suelos urbanos o urbanizables ha de tener una

justificación muy evidente desde la óptica insular para no considerar que ha sido derogada por la LSENPC (por ejemplo, como ya se ha comentado en el epígrafe 3.1, la delimitación de un polígono industrial de ámbito insular).

3.4. La determinación de los sistemas generales y otros elementos estructurantes

La definición y ordenación de los elementos con capacidad estructurante del territorio (equipamientos e infraestructuras, en particular) es una determinación que tiene naturaleza territorial o urbanística según el elemento estructurante tenga o no carácter insular. Dicho de otra forma, el Plan Insular puede y debe identificar todos aquellos elementos a los que otorgue (motivadamente) el carácter estructurante insular. Además, el PIO puede ordenar pormenorizadamente (hasta el grado suficiente para legitimar los actos de ejecución) cada uno de estos elementos o bien remitir su ordenación a un plan territorial especial (artículos 98.2 y 120.1).

Se vuelve a confirmar en cuanto a esta determinación, el criterio general del legislador de deslindar las competencias insulares y municipales. Los sistemas generales y elementos estructurantes insulares no pueden ser definidos ni ordenados por el planeamiento urbanístico; respecto de cada uno de ellos, el Plan General ha de limitarse a recoger las determinaciones que establezca el PIO o, en su caso, el Plan Territorial Especial correspondiente. Pero, a la inversa, el Plan Insular no puede establecer determinaciones que impongan o condicionen la delimitación y ordenación por los Ayuntamientos de equipamientos o infraestructuras que no estén definidos como insulares. Si tal hiciera, estaría conteniendo determinaciones urbanísticas no amparadas expresamente en los artículos que regulan su contenido y, consecuentemente, habrían quedado derogadas a la entrada en vigor de la Ley.

3.5. Definiciones de los parámetros de la edificación y de usos que sean necesarios para la ordenación

Este tipo de determinaciones no formaba parte de la ordenación urbanística (ni estructural ni pormenorizada) hasta la entrada en vigor de la Ley 14/2014 que las introdujo (y la reciente LSENPC las ha mantenido). De modo que, desde enero de 2015, las definiciones de los parámetros reguladores de la edificación (por ejemplo, cómo se mide la superficie edificable) o de los usos pasan a considerarse determinaciones urbanísticas y, por ende, no podrían formar parte del contenido del planeamiento insular. Ha de señalarse que con este precepto (artículo 136 A.e), la Ley está admitiendo que cada Plan General defina las definiciones de los parámetros reguladores de la edificación y de los usos en su término municipal. Dicho de otra forma, se está legitimando, por ejemplo, que la forma de medir la superficie edificable o las alturas en un municipio sea distinta de la de otro, o que un mismo uso sea definido de una manera en un municipio y de otra en el vecino. Estos aspectos, en el marco legal anterior, podrían haber sido regulados uniformemente para todo el archipiélago a través de las Normas Técnicas, pero tal contenido ya no aparece previsto en la actual regulación de ese instrumento (artículo 141).

A pesar de lo expuesto, se entiende que los instrumentos de planeamiento insular deben poder contener las definiciones de los usos y actividades que les sean necesarias para su regulación sustantiva. Si bien

en ninguno de los artículos de la LSCan dedicados a señalar el contenido del Plan Insular se indica que éste pueda establecer normas de regulación de los usos y actividades en las distintas partes del territorio, hay varios argumentos de la Ley que llevan a concluir que dicho contenido, si bien con limitaciones, sí es propio de la competencia del Plan Insular:

- a) El artículo 96.2.1, señala como uno de los contenidos del PIO, el “establecimiento de criterios para homogeneizar los usos en las diferentes categorías de suelo rústico”. Aunque no queda claro que entienda el legislador por “homogeneización” de los usos del suelo rústico, lo que sí puede convenirse es que el contenido de las mismas implica desarrollar “definiciones de usos”.
- b) La Disposición Transitoria Quinta prevé también que, en tanto se proceda a la adaptación del plan insular a la ley, los cabildos podrán aprobar ordenanzas provisionales insulares fijando los criterios de homogeneización de los usos del suelo rústico según sus categorías.
- c) Al regular la autorización en suelo rústico de actos y usos no ordinarios, la Ley establece que debe informar el Cabildo “sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular”, lo cual implica que sobre estos usos el planeamiento insular puede contener normas sustantivas en cuanto a su admisibilidad en el territorio

Así pues, cabe sostener que el Plan Insular puede contener determinaciones de ordenación sobre los usos (en el epígrafe 3.8 se discuten el alcance y límites de tales determinaciones) y, por tanto, puede contener las definiciones de usos y actividades necesarias para establecer tales determinaciones, sin perjuicio de que dichas definiciones no sean vinculantes para el planeamiento urbanístico.

Con un razonamiento análogo, ha de concluirse que los instrumentos de planeamiento insular sólo pueden incluir definiciones de los parámetros reguladores de la edificación si establecen determinaciones reguladoras de la edificación. Ahora bien, estas determinaciones sólo tienen sentido cuando el Plan está ordenando pormenorizadamente un ámbito o elemento.

3.6. Determinaciones de protección patrimonial

Al igual que en el caso de los sistemas generales, la identificación de elementos con valores singulares (arquitectónicos, históricos, culturales o paisajísticos) y el establecimiento de disposiciones de protección (sobre cada uno de ellos o agrupadas por categorías), pueden ser determinaciones territoriales si tales valores tienen relevancia insular. El artículo 96.2.e establece que es contenido del PIO la “identificación, ordenación y evaluación de los paisajes representativos de la isla, a fin de preservar sus valores naturales, patrimoniales, culturales, sociales y económicos”. Ciertamente, parece lógico que este contenido se amplíe a cualesquiera otros elementos –no sólo paisajes– que también son representativos de la isla (conjuntos históricos, zonas arqueológicas, edificios singulares, etc).

Sin embargo, lo que no podría hacer el planeamiento insular, es imponer la protección de elementos cuyos valores no alcancen tal relevancia insular ni tampoco condicionar la competencia municipal para decidir cuáles

son esos elementos a proteger ni las determinaciones concretas con las cuales establece la protección de los mismos.

3.7. Determinaciones de ordenación en suelo urbano y urbanizable

En el artículo 136.B y en el artículo 137.B la LSENPC define el contenido de la ordenación estructural y pormenorizada en suelo urbano y urbanizable. Queda claro que todas esas determinaciones son de naturaleza urbanística y por tanto, con carácter general, no son propias de los Planes Insulares. Sólo podrían admitirse (no entenderse derogadas) sobre aquellos ámbitos delimitados por ser estratégicos desde la óptica insular.

3.8. Determinaciones de ordenación en suelo rústico

Siguiendo el criterio de la anterior Ley del Territorio, la LSENPC considera que sólo hay ordenación urbanística pormenorizada en suelo rústico en las categorías de los asentamientos. En las restantes categorías la Ley sólo menciona las determinaciones de ordenación estructural que consisten en la determinación de los usos genéricos atribuibles a cada categoría. La Ley, sin embargo, no define lo que entiende por usos genéricos pero, en todo caso, ha de concluirse que esta determinación no puede consistir en establecer las condiciones de admisibilidad sobre una relación suficientemente exhaustiva de modo que se entienda suficiente para legitimar los actos de ejecución (ordenación pormenorizada).

Ahora bien, al regular los procedimientos de autorización de actos y usos en suelo rústico, la LSENPC distingue entre los que tengan cobertura en el planeamiento y los que no. A estos efectos, el legislador entiende que un uso tiene cobertura en el planeamiento cuando cuenta con determinaciones con el grado de precisión suficiente para permitir su ejecución. Dado que tal es justamente la definición de ordenación pormenorizada, ha de concluirse que la Ley prevé que se pueda establecer dicha ordenación pormenorizada sobre todas las categorías de suelo rústico, por más que no la contemple en el artículo 137. Esa ordenación pormenorizada, de otra parte, puede ser contenido propio de los planes urbanísticos, pues el artículo 76 señala que los planes que den cobertura a usos en suelo rústico deben contar con informe favorable del Cabildo, lo que hace pensar que se trata de planes elaborados por los ayuntamientos. Ha de concluirse, por tanto, que sí cabe ordenación pormenorizada en suelo rústico.

Ahora bien, como es lógico, la LSENPC tampoco establece claramente el contenido de las determinaciones que constituirían la ordenación pormenorizada en suelo rústico. No obstante, al definir el contenido de los planes y normas de los espacios naturales protegidos señala que regularán el régimen de usos e intervenciones sobre cada uno de los ámbitos resultantes de su ordenación, distinguiendo entre usos permitidos, prohibidos y autorizables. Se trata del tradicional sistema de ordenación de los usos (no de los genéricos) en suelo rústico que vienen haciendo también los planes generales: para cada ámbito diferenciado de ordenación (sean recintos con igual categoría o de menor entidad) se aporta una relación lo más exhaustiva posible de usos (e intervenciones) pronunciándose específicamente sobre la admisibilidad de cada uno de ellos. La cuestión es si este contenido de ordenación puede formar parte del Plan Insular. De entrada queda claro que no son determinaciones limitadas solo a los

instrumentos urbanísticos, toda vez que la Ley prevé que en el ámbito de los ENP las contengan los planes de ordenación de los mismos. Pero es que, siguiendo el criterio de que el legislador ha pretendido deslindar las competencias de ordenación, hay dos argumentos para defender que estas determinaciones pueden ir en los PIO:

- a) En primer lugar, las que independientemente de la categoría del suelo rústico, se refieren a usos cuya autorización requiere de informe del Cabildo sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular (usos no ordinarios en suelo rústico). Del propio texto legal resulta con claridad que el Cabildo es competente para prohibir cada uno de estos usos en partes concretas de la isla. Ahora bien, si puede eso, con mayor razón tiene que entenderse que puede establecer normas sustantivas de regulación que no sólo se limiten a prohibir, sino a señalar condiciones concretas para la implantación de esos usos en el territorio.
- b) En segundo lugar, la LSENPC encomienda al PIO (en gran medida como consecuencia de su carácter de PORN) establecer las limitaciones que correspondan sobre los espacios y elementos significativos del patrimonio natural de la Isla. Ello implica que en determinados ámbitos de la isla es necesario que el PIOT regule con el nivel detallado propio de la ordenación pormenorizada las condiciones de admisibilidad de los usos e intervenciones, incluso de aquéllos que son ordinarios.
- c) En tercer lugar, la LSENPC prevé que el PIO delimite ámbitos que deben destinarse a usos del sector primario. Obviamente, tales delimitaciones deben justificarse también por su relevancia insular; una vez verificada tal condición, parece obligado que para que dichas reservas sean efectivas (y atendiendo al criterio del legislador de que los planes tengan carácter finalista) el mismo PIO debe poder regular las condiciones de admisibilidad de los usos, al nivel habitual de pormenorización.

Así pues, debe concluirse que el Plan Insular puede establecer condiciones de regulación de los usos cuya autorización compete al Cabildo sin referencias territoriales (asimismo, en tanto no se adapten los PIO este contenido puede ser incorporado en la Ordenanza Insular prevista en la Transitoria Quinta). Pero también puede establecer determinaciones pormenorizadas de admisibilidad de cualesquiera usos (basándose en una lista exhaustiva propia) en aquellos ámbitos que haya delimitado justificando su relevancia insular; estos ámbitos pueden ser los delimitados por el PORN por su importancia natural (a este asunto se dedica el epígrafe 4) como las reservas en suelo rústico por motivos estratégicos insulares. Por tanto, se entiende que el PIOT puede incluir determinaciones de ordenación, incluso pormenorizada, en suelo rústico (y en concreto sobre la regulación y admisibilidad de los usos) siempre que se justifique en base a los supuestos anteriores; en caso contrario estarían derogadas. De otra parte, es obvio que tales determinaciones serían vinculantes y, por tanto, no podrían ser alteradas por los Ayuntamientos en los planes municipales.

3.9. Condiciones complementarias para la implantación en suelo rústico de usos no ordinarios

La última de las determinaciones de ordenación urbanística estructural que se recoge en el artículo 136 parece una adaptación de la antigua disposición sobre las condiciones que podía establecer el Plan General sobre los Proyectos de Actuación Territorial (PAT) que pudieran plantearse en el suelo rústico del término municipal. Del mismo modo que la aprobación de los PAT no era competencia municipal pero el TRLOTENC permitía que desde los planes generales se les impusieran condiciones, ahora las iniciativas de usos y actividades no ordinarias en suelo rústico tampoco pueden ser resueltas de forma autónoma por los Ayuntamientos (requieren la previa valoración del Cabildo), pero éstos sí pueden contemplar en sus planes urbanísticos determinaciones que garanticen su integración en el modelo de ordenación municipal e incluso, motivadamente, prohibir determinados usos en determinadas partes del territorio.

Así pues, estas determinaciones, por su propia naturaleza, sólo pueden estar contenidas en los planes generales municipales y, por tanto, no forman parte del contenido del PIOT. Sin embargo, determinaciones de contenido muy similar sí pueden y deben formar parte del PIOT y, por tanto, no habrían de calificarse como urbanísticas. Nos referimos a aquéllas mediante las cuales se establecen las condiciones de los usos y actividades no ordinarias para implantarse en las distintas partes del territorio insular. Es decir, las normas sustantivas de regulación de esos usos a las que ya aludimos en el epígrafe anterior.

3.10. Determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada

A diferencia de lo que se ha hecho respecto de las determinaciones urbanísticas estructurales, entendemos que no es necesario revisar individualmente cada una de las determinaciones urbanísticas pormenorizadas relacionadas en el artículo 137 para alcanzar las conclusiones pertinentes sobre la posibilidad de que las mismas estén contenidas en el Plan Insular. Sin entrar en detalle, dejemos sentado que las distintas determinaciones de ese artículo encuentran su ámbito de aplicación normal en los suelos urbanos y urbanizables (ordenados): consisten en la definición de alineaciones y con ellas de la trama urbana, en la asignación de condiciones de edificación y de admisibilidad de usos, la asignación de aprovechamientos y, finalmente, las previsiones de programación y gestión urbanística. Son las necesarias para poder llevar a cabo la ejecución, para que un proyecto que requiere autorización esté legitimado por el planeamiento.

En el marco de la antigua legislación, se entendía que ni el PIO ni los planes territoriales debían contener este tipo de determinaciones⁶. Ello suponía que, por ejemplo, las actuaciones estratégicas definidas por los instrumentos de planeamiento insular, para ser ejecutadas, requerían incorporarse a los planes urbanísticos correspondientes, con la consiguiente limitación a la capacidad de acción de los Cabildos. La Ley 14/2014, sin llegar a mencionar explícitamente el término "ordenación pormenorizada", admitió que los instrumentos insulares podían legitimar directamente la ejecución de las infraestructuras y sistemas generales insulares, ante la

⁶ Estrictamente el TRLOTENC no prohibía que tales planes tuvieran determinaciones de ordenación pormenorizada, pero tal fue en la práctica el criterio que se impuso desde la COTMAC.

evidente necesidad de que los Cabildos pudieran realizar dichas obras sin necesidad de incorporarlas en los planes municipales.

Como ya hemos dicho repetidas veces, el espíritu de la nueva Ley es deslindar claramente las competencias insulares y municipales de modo que los Cabildos puedan ordenar los ámbitos y elementos de relevancia insular hasta el grado de detalle necesario para legitimar la ejecución. De hecho, esta intención queda reflejada en la disposición (artículo 101.1.b) que establece que las determinaciones del PIO serán siempre de directa aplicación⁷. Así, queda fuera de toda duda de la lectura del artículo 98, que el PIO puede establecer sobre los sistemas generales y equipamientos estructurantes insulares todas las determinaciones de ordenación necesarias para proceder directamente a su implantación. Dicho en otras palabras, exactamente las mismas que un Plan General puede establecer sobre un sistema general municipal para legitimar su ejecución; es decir, cualquiera de las de ordenación pormenorizada.

Pero, de otra parte, uno de los contenidos del Plan Insular de Ordenación es la determinación de las reservas de suelo necesarias para determinadas actividades estratégicas para el desarrollo insular. Delimitar ámbitos concretos de la isla con el carácter de reservas estratégicas ha de estar obviamente muy justificado por el PIO desde la óptica insular pero, una vez cumplido ese requisito, es claro que la Ley prevé que el propio plan insular (o un plan territorial parcial) establezca todas las determinaciones de ordenación necesarias, sin limitaciones en cuanto al grado de pormenorización de las mismas. El ejemplo más claro es seguramente la delimitación de un polígono industrial insular, como en el caso de Tenerife, es (aunque sea mucho más) la Plataforma Logística del Sur. Que estos ámbitos de interés insular pueden ser ordenados hasta el detalle necesario para legitimar la ejecución queda claro en la Ley, en primer lugar, porque pasan a considerarse "sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés supramunicipal" y, en segundo lugar, porque como tales la Ley prevé que sean ordenados directamente por el PIO o remitidos a planeamiento territorial.

Así pues, ha de concluirse que el Plan Insular puede contener determinaciones con idéntico contenido a las que en el planeamiento urbanístico se denominan de ordenación pormenorizada (y que, en todo caso, sean las necesarias para legitimar la ejecución sin necesidad de recogerse en ningún instrumento de planeamiento municipal), pero sólo sobre aquellos ámbitos de la isla delimitados expresa y motivadamente por ser de relevancia estratégica insular. En el resto del territorio el PIO no podría contener ese tipo de determinaciones y, de contenerlas, estarían derogadas.

3.11. Conclusiones: ¿puede tener el PIO determinaciones urbanísticas?

Una primera y fácil respuesta sería decir que no, porque una determinación que esté en el PIO, por el simple hecho de ser parte de su contenido dispositivo, deja de calificarse como urbanística. Ahora bien, esta

⁷ Aunque, como discutimos en el epígrafe 5, ese "directa aplicación" ha de entenderse con ciertas reservas.

afirmación puede tener cierta consistencia taxonómica⁸, pero no resuelve nada en la práctica. Por eso, independientemente de que se califiquen o no como urbanísticas, lo que nos interesa dilucidar es si el Plan Insular de Ordenación puede contener determinaciones cuyo contenido sea el mismo que las relacionadas por la LSENPC en los artículos 136 y 137.

Formulada así la cuestión, la respuesta debe ser necesariamente afirmativa, en primer lugar, referida a aquellos ámbitos del territorio delimitados y definidos en el PIOT por ser de relevancia insular. ¿Cuáles son estos ámbitos? En principio los espacios y elementos significativos del patrimonio natural de la Isla, las reservas de suelo necesarias para actividades estratégicas y los sistemas generales y equipamientos estructurantes insulares.

Sobre estos ámbitos el PIO puede establecer cuantas determinaciones de ordenación considere necesarias, incluyendo las equivalentes a las urbanísticas pormenorizadas cuando se prevea la ejecución. Pero no sólo eso, la potestad de planeamiento (es decir, la capacidad de establecer determinaciones concretas de ordenación, llamémosles urbanísticas o no) radica en el instrumento de ordenación insular y, por tanto, dichas determinaciones justificadas por su relevancia insular habrán de ser necesariamente recogidas por los instrumentos de planeamiento urbanístico⁹¹⁰.

No se oculta que esta interpretación supone entender que hay partes del territorio insular que la Ley detrae de la competencia de ordenación municipal. Obviamente, para no devaluar las competencias municipales estos ámbitos no sólo deben estar justificados en cuanto a su relevancia insular sino, además, ser proporcionados a la dimensión de la Isla, dejando espacio suficiente para que los ayuntamientos puedan ejercer la ordenación de sus términos municipales¹¹.

Pero, además de poder establecer determinaciones urbanísticas (o de contenido idéntico a las de los planes urbanísticos) sobre los ámbitos de relevancia insular, ha de concluirse que al menos el PIO puede establecer dos tipos de determinaciones que también tienen los planes urbanísticos:

- a) Las condiciones sectoriales y de admisibilidad sobre usos y actividades no ordinarios en suelo rústico, que serán de aplicación en la emisión de los informes del Cabildo sobre dichos usos.

⁸ Venía a ser el criterio del TRLOTENC (y tal vez siga siéndolo en la nueva Ley): una determinación es de ordenación urbanística porque forma parte del contenido de ordenación de un instrumento urbanístico; una determinación es de ordenación urbanística porque forma parte del contenido de ordenación de un instrumento territorial.

⁹ La Ley admite que los planes generales reajusten las delimitaciones gráficas de las determinaciones del PIO, pero ello no contradice la tesis básica de que la potestad de planeamiento radica en el instrumento insular.

¹⁰ En cierto modo sería equivalente a lo que señalaba el antiguo artículo 22.5 del TRLOTENC de que los planes urbanísticos habían de recoger las determinaciones que hubieran establecido los Planes de los ENP.

¹¹ Por ejemplo, el artículo 96.2.f) dice que es contenido del PIO la "determinación de los suelos que deben preservarse del proceso urbanizador". Una interpretación abusiva llevaría a defender que desde el PIO se puede "clasificar" la totalidad del suelo rústico de una isla, de modo que se predefinan los límites estrictos de expansión de los núcleos urbanos existentes (los únicos suelos que no se determinan que han de preservarse del proceso urbanizador).

- b) Las definiciones de los usos (y de los parámetros de la edificación) que sean necesarios para establecer determinaciones de ordenación sobre los mismos (sean sectoriales o de admisibilidad). Estas definiciones sólo podrán tener carácter vinculante cuando las determinaciones que se apoyan en las mismas sean competencia propias del Plan Insular; en el resto de usos, tendrán un carácter de referencia y, si están de acuerdo los Ayuntamientos, pueden ser la base para establecer los criterios para homogeneizar los usos en las diferentes categorías de suelo rústico (artículo 96.2.i).

Cualquier otra determinación del PIOT cuyo contenido sea equivalente a cualquiera de las relacionadas en los artículos 136 y 137 debe entenderse que, al no estar permitida por la Ley y ser de naturaleza urbanística, ha quedado derogada con la entrada en vigor de la LSENPC.

4. Criterios derivados de la naturaleza de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

El Plan Insular de Ordenación de Tenerife, desde su aprobación definitiva en 2002, tiene el carácter de plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) porque así lo exigía el TRLOTENC. La nueva Ley no exige que el PIO tenga el carácter de PORN pero sí lo permite. Por ello, hay que entender que las determinaciones del PIOT vigente que sean propias de su carácter de plan de ordenación de los recursos naturales quedan amparadas por el artículo 94.3 y, por tanto, no han sido derogadas.

El contenido PORN del PIOT vigente responde a lo dispuesto en el Decreto 6/1997, de 21 enero, por el que se fijan las directrices formales para la elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Dicho Decreto no ha sido expresamente derogado; no obstante:

- a) El citado Decreto se elaboró para desarrollar la Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias, la cual sí fue derogada con la promulgación del TRLOTENC.
- b) El artículo 18.1 TRLOTENC establecía expresamente el contenido que debían incorporar los Planes Insulares para alcanzar su función de planes de ordenación de los recursos naturales. Ese contenido no era el mismo que el establecido en el Decreto 6/1997, luego ha de entenderse que lo estaba derogando (dicho de otra forma, a partir de la entrada en vigor del TRLOTENC el contenido PORN que debían tener los Planes Insulares debía ser el del artículo 18.1 no el del Decreto 6/1997).
- c) Pero es que además, desde su entrada en vigor, se han producido modificaciones al TRLOTENC en lo referente al contenido de ordenación de los recursos naturales que ha de tener el PIO. Las últimas modificaciones al respecto fueron introducidas por la Ley 14/2014. Así, el artículo 18.1 pasó a decir que los Planes Insulares "establecerán además la regulación de los recursos naturales insulares, teniendo en este ámbito el carácter de planes de ordenación de los recursos naturales, en los términos establecidos por la legislación básica estatal", y el artículo 19.2 señala que uno de los contenidos de los PIO es "la protección ambiental del territorio insular con el contenido propio de los planes de ordenación de los recursos naturales establecido por la legislación básica estatal".

d) Por último, el artículo 94.3 LSENPC, al señalar que los planes insulares podrán tener el carácter de PORN, añade que, “en los términos, con las determinaciones y el alcance establecidos por la legislación básica estatal” (artículo 20 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad).

Por tanto, ya desde la aprobación del TRLOTENC los requisitos que debía cumplir un Plan Insular para tener el contenido PORN no eran los exigidos por el Decreto 6/1997; dicho en otras palabras, un PIO que se aprobara a partir del año 2000 cumpliendo el contenido que le exigía el TRLOTENC, pero no el del Decreto 6/1997, debía considerarse que tenía el carácter de PORN. Por tanto, es obligado concluir que, aunque no expresamente, el Decreto 6/1997 fue derogado con la entrada en vigor del TRLOTENC (o, si se prefiere, perdió su eficacia normativa). La entrada en vigor de la reciente LSENPC no hace sino confirmar la misma conclusión, ya que el legislador, para que un PIO tenga el carácter de PORN, sólo exige que cumpla lo establecido en la legislación básica.

No obstante, del contenido que exigía el Decreto 6/1997 a los PIO para tener el carácter de PORN, la LSENPC mantiene (aunque ligeramente modificada) la exigencia de la zonificación. En efecto, el artículo 178 dice que “en la elaboración de los planes de ordenación de los recursos naturales se establecerán las siguientes zonas ...”¹² La zonificación es una técnica consistente en la división del ámbito objeto de ordenación en recintos con la asignación a cada uno de ellos de la correspondiente zona. En el Decreto 6/1997, se establecía que para cada zona se debía establecer la compatibilidad o incompatibilidad de los distintos usos y actividades¹³; por tanto, la división del territorio resultante de la zonificación se convertía en una determinación de ordenación toda vez que, sobre cada parte de la isla se señalaban los usos permitidos y prohibidos. Esta exigencia de contenido PORN del Decreto 6/1997 se verifica en el PIOT vigente mediante la división de la totalidad de la Isla en Áreas de Regulación Homogénea (cada ARH corresponde a una de las zonas del Decreto) y el establecimiento para cada una de ellas de un “régimen básico de usos e intervenciones” (Capítulo 3 del Título II de las Normas).

Ahora bien, la LSENPC, aunque mantiene la exigencia de dividir el ámbito del PORN (en este caso la totalidad de la Isla) en zonas, suprime la exigencia de establecer sobre cada una la compatibilidad o incompatibilidad de usos y actividades. En otras palabras, la reciente Ley (como ya antes la 14/2014) dejan de exigir que el PIO para tener el carácter de PIOT haya de establecer los regímenes básicos de usos e intervenciones sobre la totalidad del territorio insular. Consecuentemente, la zonificación exigida en el artículo 178 pasa a tener alcance informativo de diagnóstico del PORN, no dispositivo. Alcance éste sin duda fundamental (imprescindible incluso) para poder delimitar los ámbitos sobre los que el PIO tiene la competencia de ordenación (muy en especial, los espacios y elementos significativos del patrimonio natural de la Isla).

¹² Este artículo es copia literal de la Disposición Adicional Octava de la Ley 14/2014, la cual, a su vez, copiaba el artículo 8 del Decreto 6/1997 agrupando las zonas C y D de éste en una única zona C.

¹³ Artículo 9. Matriz de usos.

Por tanto, ha de entenderse que la división de la Isla en Áreas de Regulación Homogénea es un contenido válido del PIOT entendiéndola como la zonificación exigida en el artículo 178, con alcance de diagnóstico propio del contenido PORN. En cambio, las ARH sólo podrán considerarse ámbitos de ordenación (y, por tanto, contar con normas que establezcan el régimen básico de usos e intervenciones) cuando se correspondan con ámbitos cuya delimitación y ordenación compete al Cabildo por ser de relevancia insular, tal como se ha justificado en el epígrafe anterior.

5.Criterios derivados del carácter de directa aplicación de las determinaciones del PIO

El artículo 97.1 LSENPC establece que las determinaciones de los planes insulares serán de aplicación directa, sin perjuicio de su desarrollo por otros instrumentos de ordenación¹⁴; sin embargo, no aclara qué debe entenderse por "directa aplicación". La distinción del alcance de las determinaciones de los instrumentos de ordenación había sido introducida en la legislación canaria por el TRLOTENC; en el artículo 15, al regular las determinaciones de las Directrices de Ordenación, se señalaba que éstas, respecto de cada determinación, habían de precisar el carácter de la misma, distinguiendo entre:

- a) Normas de aplicación directa, de inmediato y obligado cumplimiento por las Administraciones y los particulares.
- b) Normas directivas, de obligado cumplimiento por la Administración y los particulares y cuya aplicación requiere su previo desarrollo por el pertinente instrumento de ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística o, en su caso, disposición administrativa.
- c) Recomendaciones, que tendrán carácter orientativo para las Administraciones y los particulares y que cuando no sean asumidas deberán ser objeto de expresa justificación.

Si bien esta clasificación y estas definiciones han quedado derogadas, ha de entenderse que, toda vez que coincide con la doctrina, es a la luz de las mismas como debe interpretarse el precepto de la LSENPC al respecto. De hecho, la nueva disposición es justamente la corrección de los correspondientes artículos del TRLOTENC en los que se obligaba a que Directrices y Planes Insulares precisaran el carácter (aplicación directa, directiva o recomendación) de cada una de sus determinaciones.

Por tanto, en primer lugar, hemos de entender que la nueva Ley prohíbe que el PIO contenga recomendaciones. De otra parte, no se prohíbe expresamente que existan determinaciones del PIO que requieran ser desarrolladas por otros instrumentos de planeamiento, pero parece claro que tal tipo de contenidos no es del gusto del legislador, como se desprende tanto de la expresión permisiva ("sin perjuicio"), de la prohibición de incluir tales determinaciones en la Normativa¹⁵ y de las fuertes y nuevas

¹⁴ El artículo 101.1.b) establece que en la Normativa se contendrán únicamente determinaciones que sean de directa aplicación.

¹⁵ Lo que no deja de ser un contrasentido porque la determinación mediante la cual se establece que, por ejemplo, debe formularse un plan territorial parcial tiene alcance dispositivo y, por tanto, debe ir en las Normas del Plan.

limitaciones a formular planes territoriales (tanto parciales como especiales) para el desarrollo de la ordenación del PIO. En todo caso, en relación a la incorporación en el contenido del Plan Insular de determinaciones directivas (que requieren desarrollo), entendemos que debe concluirse lo siguiente:

- a) Solo sería lícito remitir la ordenación de ámbitos territoriales o de aspectos sectoriales cuya competencia de ordenación haya sido atribuida por la Ley al propio PIO.
- b) La remisión del desarrollo de la ordenación ha de ser siempre a instrumentos de ordenación insular, básicamente planes territoriales parciales o especiales. En ningún caso cabe que el PIO imponga a los planes urbanísticos el desarrollo de su ordenación.
- c) Por último, al remitir a planeamiento de desarrollo ámbitos territoriales o aspectos sectoriales debe justificarse expresamente que se cumplen las condiciones de los artículos 119 y 120 LSENPC.

Ha de señalarse que estos criterios en cuanto al alcance del PIO son congruentes con el espíritu de la nueva Ley en el sentido, ya señalado, de deslindar radicalmente las competencias de ordenación del Cabildo de las de los Ayuntamientos. Ciertamente, si el Cabildo sólo puede ordenar lo que tiene clara relevancia insular, no tendría sentido que impusiese a los Ayuntamientos normas directivas para la ordenación del resto del territorio insular. Ahora bien, conviene destacar a la vez que este principio que subyace en la estructura de la nueva Ley es frontalmente contraria a la del PIO de Tenerife, que se concibió como un plan eminentemente directivo, cuyas determinaciones adquirirían alcance operativo (aplicación directa) a través, muy especialmente, de los planes generales municipales. Por tanto, si bien el objeto de este informe es identificar aquellas determinaciones del PIOT que contradicen directamente la LSENPC (y, por tanto, han quedado derogadas), no ha de olvidarse que la nueva Ley cuestiona radicalmente el Plan Insular en su conjunto, lo que obliga a corto plazo a una revisión global del mismo.

A la vista de lo expuesto, y dado que cada una de las determinaciones del PIOT (contenidas en los tres volúmenes de sus Normas) tiene asignado uno de los tres caracteres que establecía el artículo 15 del TRLOTENC (y, además, un cuarto identificado con la letra E y referido a los textos de naturaleza explicativa), los criterios que se entiende que han de seguirse a efectos de la aplicación del artículo 97.1 LSENPC son los siguientes:

- a) Los párrafos de las Normas que tengan asignado el carácter explicativo (E) sólo se mantendrán cuando se trate de definiciones o textos necesarios que, aun careciendo de alcance dispositivo en sí mismos, sean necesarios para la aplicación de otras determinaciones del PIOT; en estos casos se mantendrá la letra E.
- b) Los párrafos de las Normas que tengan asignado el carácter explicativo (E) y no estén comprendidos en el supuesto de la letra a) anterior, se entenderán derogados en cuanto a preceptos normativos y, por tanto, se suprimirán de los volúmenes de las Normas del PIOT, sin perjuicio de que, en su caso, sean incorporados en otros documentos del PIOT (preferentemente la Memoria).

- c) Los párrafos de las Normas que tengan asignado el carácter de recomendación (R) se entenderán derogados como regla general. No obstante, si de la lectura del texto se desprende que la disposición tiene alcance operativo, se entenderá que es de aplicación directa y se mantendrá.
- d) Los párrafos de las Normas que tengan asignado el carácter de norma directiva (D) se analizarán en función tanto del contenido de la ordenación a desarrollar como del instrumento al cual se remite. Todas aquellas disposiciones que remitan la ordenación de ámbitos territoriales o aspectos sectoriales que en el marco de la nueva Ley no sean competencia insular se entenderán derogadas. Así mismo, se entenderán derogadas todas aquellas disposiciones directivas que sean instrucciones al planeamiento urbanístico municipal.
- e) Los párrafos de las Normas que tengan asignado el carácter de norma directiva (D) y que no estén derogados al no comprenderse en los supuestos de la letra d) anterior, se mantendrán como determinaciones directivas del PIOT pero, en cumplimiento del artículo 101.1.b) LSCan se suprimirán de las Normas y se incorporarán en otros documentos del PIOT.
- f) Por último, los párrafos de las Normas que tengan asignado el carácter de norma de aplicación directa (AD) se entenderá, en principio, que no son objeto de derogación por este criterio. No obstante, si de la lectura del texto se desprende que el alcance de la disposición no es de aplicación directa se aplicará el criterio correspondiente al supuesto de que se trate.

B. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES DEL PIOT

1. Título I: Disposiciones Generales

1.1. Capítulo 1: Disposiciones preliminares; Sección 1ª: Naturaleza, ámbito y alcance del PIOT

Esta sección primera comprende los preceptos genéricos que tienen todos los instrumentos de planeamiento y, a este respecto, no queda afectado por la derogación genérica derivada de la LSENPC. No obstante, toda vez que ha cambiado el marco legal, hay determinados textos que han de entenderse no meramente derogados, sino sustituidos en base a las nuevas referencias. Se pasa a continuación al análisis de los 6 artículos que componen esta sección.

- **Art. 1.1.1.1. Naturaleza y régimen jurídico:** Se define qué es el Plan Insular de Ordenación de Tenerife. Al margen de que la definición debería ajustarse a la nueva redacción de la LSENPC, lo único que es claramente contrario a ésta en el primer punto es predicar que el PIOT es un instrumento básico de planificación urbanística; ha de entenderse, por tanto, que la palabra "urbanística" ha de suprimirse por estar derogada. En el punto 2, ha quedado derogada la frase que dice que "el régimen jurídico del PIOT viene establecido por el Decreto Legislativo 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante TRLOTENC)", ya que la mención al antiguo

TRLOTENC debe ser sustituida por la Ley 4/2017 del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC). De otra parte, al final del párrafo, convendría añadir que la entrada en vigor de esta Ley ha supuesto la derogación de diversas disposiciones del documento aprobado definitivamente el 4 de marzo de 2011.

- **Art. 1.1.1.2. Vigencia y revisión:** Los párrafos 1 y 2 de este artículo no resultan incompatibles con las disposiciones de la LSENPC. El párrafo 3 obliga a la revisión del PIOT en un plazo de diez años (o bien antes en base a determinadas circunstancias). Ahora bien, la LSENPC ha suprimido el término de revisión¹⁶ y de la lectura de la Sección 3ª del Capítulo VIII del Título 3 pareciera que no es la intención del legislador que los planes establezcan plazos para “la reconsideración integral de sus modelos de ordenación”. Más bien, tal como se establece en el artículo 158, pareciera que el criterio del legislador es obligar a un seguimiento continuado de los efectos ambientales y territoriales derivados de la aplicación y ejecución del Plan, que se concretaría en informes cada cuatro años. Lógicamente, de estos informes deberían derivarse, en su caso, las conclusiones sobre modificaciones parciales de la ordenación o incluso la reconsideración integral del modelo. No obstante, si bien hay elementos para considerar que este punto 3 del artículo 1.1.1.2 podría no ser compatible con la LSENPC, dado que no hay una contradicción expresa se entiende que no está derogado, si bien convendría modificar su redacción sustituyendo la expresión “El PIOT se revisará en un plazo ...” por “La ordenación del PIOT será objeto de reconsideración integral en un plazo ...”
- **Art. 1.1.1.3. Ámbito territorial:** El artículo 94.1 de la Ley establece que “los planes insulares de ordenación constituyen el instrumento general de ordenación de los recursos naturales y del territorio de las islas ...”; así pues, el ámbito territorial del PIOT es la totalidad del territorio de la Isla. En este artículo, al territorio de la isla se le añade las “aguas circundantes hasta la cota batimétrica de 300 metros”. Tal como está redactado, la franja marina circundante no forma parte del territorio insular (se suma a éste mediante la conjunción y) y, entendido así, hay que concluir que se está ampliando el ámbito de ordenación más allá de lo permitido por la Ley. Cuestión distinta sería que se entendiera que el territorio de la isla de Tenerife comprende también una franja marina circundante, interpretación que cabría mantener pero no con la redacción actual del artículo. En consecuencia, se entiende que queda derogada de este artículo la referencia a las aguas circundantes, resultando el siguiente texto: “El ámbito territorial del PIOT es la totalidad del territorio de la isla de Tenerife”.
- **Art. 1.1.1.4. Ámbito competencial y finalidad del PIOT:** Por lo ya señalado en relación al artículo 1.1.1.1, debe suprimirse la palabra “urbanística” del punto 1. El resto de ese párrafo, así como el del punto 2 se entiende que no contradicen la LSENPC.
- **Art. 1.1.1.5. El PIOT en el marco del sistema de planeamiento:** El primer párrafo no tiene alcance dispositivo, además de ser muy

¹⁶ Lo que en el anterior marco legal se denominaba “revisión” ahora pasa a ser el primer supuesto de la “modificación sustancial” (reconsideración integral del modelo de ordenación).

discutible que pueda mantenerse en el actual marco legal. En cualquier caso, dado que este texto explicativo no es necesario para la aplicación de ningún precepto dispositivo, ha de entenderse derogado y debe suprimirse de las Normas. El segundo párrafo pone de manifiesto la contradicción básica entre la concepción del PIOT y la de la Ley a la que ya se ha hecho referencia en el epígrafe 5 de la parte A de este informe-propuesta. En cualquier caso, su carácter explicativo y que no se requiera para la aplicación de otras disposiciones, obligan a suprimirlo de las Normas, sin que sea necesario entrar a una discusión de fondo. Por último, el párrafo 3 establece que cada disposición de las Normas va acompañada de una clave que aclara su alcance (aplicación directa, directiva, recomendación y explicativa). Toda vez que el artículo 101 limita el contenido de las Normas a determinaciones de directa aplicación, habrán de suprimirse todas las claves (pues todas pasarían a ser AD) y, congruentemente, también este párrafo. Así pues, este artículo en su totalidad ha quedado derogado y debe ser suprimido.

- **Art. 1.1.1.6. Desarrollo, ejecución y gestión del PIOT:** Si bien el contenido de este artículo podría discutirse en el marco de la nueva concepción legal de las relaciones entre las competencias sobre el territorio de las distintas administraciones, lo cierto es que su redacción es lo suficientemente genérica como para que no pueda concluirse que existen contradicciones expresas con la LSENPC. En consecuencia, se entiende que no ha sido derogado y puede mantenerse en su actual redacción.

1.2. Capítulo 1: Disposiciones preliminares; Sección 2ª: Contenido del PIOT

Esta sección segunda relaciona los documentos que componen el PIOT y regula el alcance de cada uno de ellos. Todos los artículos y párrafos de esta sección tienen carácter explicativo (E) sin que sean necesarios para la aplicación de ningún precepto dispositivo de las Normas. En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 101.1.b) LSENPC deben desplazarse desde las Normas a otros documentos del PIOT (preferentemente a la Memoria) como descripción ordenada y sistemática del contenido del Plan.

1.3. Capítulo 1: Disposiciones preliminares; Sección 3ª: Adaptación del planeamiento y disposiciones de directa aplicación del Plan

Esta sección 3ª queda profundamente afectada como consecuencia de la nueva concepción legal del sistema de planeamiento y, en particular, del deslinde competencial entre el territorial y el urbanístico. Se pasa a continuación al análisis de los 4 artículos que componen esta sección.

- **Art. 1.1.3.1. Adaptación de los instrumentos de ordenación y ejecución vigentes:** Este primer artículo no contradice la LSENPC, si bien debe interpretarse en el marco del artículo 167; es decir, la entrada en vigor del PIOT supone que los planes urbanísticos deben adaptarse al mismo, pero no han de hacerlo hasta que lleven a cabo la primera modificación sustancial.
- **Art. 1.1.3.2. Disposiciones sectoriales de aplicación directa:** El primer párrafo es obvio y, por tanto, no puede ser contrario a la Ley:

todo acto del suelo o intervención debe cumplir aquellas disposiciones del PIOT que sean de aplicación directa sobre dicho acto de uso del suelo o de intervención. Cuestión distinta es que varias de las disposiciones sectoriales del PIOT puedan haber quedado derogadas por la Ley. En cuanto al segundo párrafo, tiene por objeto posibilitar la aplicación objetiva de tales disposiciones del PIOT, estableciendo, solo a esos efectos, la validez de las definiciones de los usos e intervenciones del capítulo 4 de este Título I. Consiguientemente, no se considera que este artículo haya quedado derogado, por lo que debe mantenerse en su integridad.

– **Art. 1.1.3.3. Disposiciones territoriales de aplicación directa:**

Este artículo prohíbe la ejecución de actos de usos del suelo o intervenciones prohibidos por el PIOT en tanto no se adapte el planeamiento municipal. Tal como está redactado presenta varias contradicciones con la nueva Ley:

- a) Si un uso o una intervención está prohibido por el PIOT sobre un terreno (y siempre que el PIOT sea competente para prohibirlo) es una norma de aplicación directa que ha de cumplirse tanto si el plan municipal está adaptado al PIOT como si no. Por tanto, no debe vincularse esta prohibición a si el plan municipal está o no adaptado. De hecho, si el PIOT prohíbe un uso concreto en un ámbito determinado, el Plan General necesariamente debe prohibirlo.
- b) En el PIOT actual, se prevé que los planes urbanísticos readscriban ARH a categorías distintas de las delimitadas en el plano de Distribución Básica de los Usos. Tal mecánica de readscripción no es compatible con la LSENPC, tal como se justifica en el epígrafe 2.x; no obstante, sí es posible que el plan municipal ajuste los límites de las ARH (no que las readscriba) de modo que un terreno concreto que en el plano del PIOT esté en un ARH pase a estar en otra. Consiguientemente, ha de tenerse en cuenta esta circunstancia en la aplicación de las prohibiciones de usos.

De acuerdo a lo expuesto, para ser compatible con la LSENPC se propone la siguiente redacción para este artículo 1.1.3.3: “No se autorizará la ejecución de actos de uso del suelo o intervenciones en terrenos que, en el plano de Distribución Básica de los Usos del PIOT, se encuentren incluidos en una categoría de Área de Regulación Homogénea en la que tal uso o intervención resulte incompatible, salvo las expresamente permitidas por el planeamiento vigente en suelo clasificado como urbano o urbanizable con Plan Parcial vigente, siempre que no afecte a un Espacio Natural Protegido”.

– **Art. 1.1.3.4. Disposiciones de aplicación directa sobre el planeamiento según su situación jurídico-urbanística:**

- a) El primer párrafo establece la reclasificación como suelo rústico de protección territorial de los terrenos que, a la entrada en vigor del PIOT, estuvieran clasificados como suelo urbanizable no programado o apto para urbanizar. El PIOT establecía esta determinación porque el artículo 19 del TRLOTENC vigente en el momento de su aprobación definitiva establecía en su letra b) que los planes insulares podrían reclasificar como suelo rústico los terrenos que tengan la clasificación

de suelo urbanizable cuando así lo exija el desarrollo sostenible de los recursos naturales o el modelo territorial. Ahora bien, este contenido facultativo de los PIO fue suprimido por la Ley 14/2014 y, desde luego, tampoco se contempla en el contenido propio de los planes insulares en la reciente LSENPC. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.3¹⁷, ha de entenderse que los Planes Insulares no están habilitados para proceder a la reclasificación directa de terrenos a rústicos y, por tanto, ha de entenderse que este párrafo ha quedado derogado. Pero, al margen de ello, esta disposición es superflua con la nueva Ley. En primer lugar porque el Suelo Rústico de Protección Territorial ha sido suprimido y, en segundo, porque ya la LSENPC, en su disposición transitoria primera, reclasifica los suelos urbanizable no programados (lo que, además, viene a apuntar que la reclasificación es competencia de Ley y no del PIOT).

- b) El segundo párrafo establece también una reclasificación urbanística, esta vez sobre los sectores de suelo urbanizable turístico, según estuvieran o no "en plazo". Cabe plantear por tanto la misma conclusión que en la letra anterior y entender que está también derogado. Además, al igual que en el caso anterior, la derogación de este párrafo tampoco supone ningún efecto práctico, toda vez que las reclasificaciones que establecía el PIOT vienen a ser las mismas que las que produce la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 19/2003 (Directrices) que no ha sido derogada.
- c) Los párrafos tercero y cuarto, una vez derogados los dos anteriores, carecen de sentido, por lo que también han de suprimirse.

1.4. Capítulo 2: Criterios para la elaboración de los instrumentos de planeamiento

Este capítulo tiene por objeto regular el contenido de los distintos instrumentos de planeamiento a través de los cuales se desarrolla la ordenación del PIOT así como establecer la formulación de planes concretos. Las disposiciones sobre el contenido tienen en su mayoría el carácter de recomendaciones, por lo que no podrían incluirse en las Normas; pero, además, es discutible que el PIOT pueda establecer los contenidos que han de tener instrumentos de planeamiento. De otro lado, las disposiciones que establecen la formulación de concretos instrumentos de planeamiento tienen obviamente el carácter de normas directivas y, por tanto, no deben tampoco incluirse en el volumen de las Normas, debiéndose desplazar a otros documentos del PIOT. No obstante, a continuación se pasa a revisar su contenido en mayor detalle.

— **Art. 1.2.1.1. Contenido de este capítulo:** Este artículo es explicativo en su totalidad, sin que sea necesario para la aplicación de las disposiciones que siguen, aun cuando se mantuvieran. Por tanto, se entiende que debe suprimirse.

¹⁷ Todo instrumento de planeamiento responderá a los principios de mínimo contenido necesario y de máxima simplicidad, en cumplimiento de las determinaciones establecidas para los mismos por esta Ley. Serán nulas de pleno derecho cualquier determinación del planeamiento que exceda de este mandato.

- **Art. 1.2.1.2. Evaluación de alternativas y contenido ambiental del planeamiento:** Este artículo tiene el carácter de recomendaciones, por lo cual no puede formar parte de las determinaciones del PIOT. Pero, además de ello, se refiere a aspectos sobre los que el PIO carece de competencias: regular cómo debe elaborarse la evaluación ambiental de alternativas o aspectos análogos.
- **Art. 1.2.2.1. Tipos de instrumentos de ordenación de los Recursos Naturales:** Este artículo se entiende que ha derogado en su totalidad porque:
- a) En su primer párrafo, clasifica los tipos de instrumentos de ordenación de los recursos, lo cual, no solo no se ajusta al actual marco legal, sino que tampoco forma parte del ámbito competencial del PIO (además, tiene carácter explicativo).
 - b) El segundo párrafo establece que el PIOT tiene el carácter de PORN en el ámbito insular, lo cual ya está dicho en el artículo 1.1.1.1. Pero, de otra parte, recomienda que la ordenación de las aguas circundantes se desarrolle a través del correspondiente PORN del medio marino. Ahora bien, si como ya se ha concluido el ámbito del PIOT es la isla¹⁸, el PIOT está remitiendo a ese PORN la ordenación de un ámbito que queda al exterior del mismo, lo cual obviamente no forma parte de sus competencias. Así pues, se entiende que este párrafo ha sido derogado.
 - c) El tercer párrafo señala que se podrán formular Planes Territoriales Especiales de Ordenación para la ordenación de uno o varios recursos naturales. Sin embargo, la nueva Ley no admite que los Planes Territoriales Especiales tengan este objeto. De otra parte, se trata de una disposición con carácter de recomendación. Así pues, por estos motivos, se entiende que ha quedado derogada.
- **Art. 1.2.2.2. Contenido de los instrumentos de Ordenación de los Recursos Naturales:** Este artículo expone, con carácter indicativo, el contenido que habrían de tener los instrumentos de ordenación de los recursos naturales. Como ya hemos señalado, no compete al PIOT regular los contenidos de ningún instrumento de ordenación (ni siquiera con carácter de recomendación), por lo que debe entenderse que este artículo ha sido derogado en su totalidad.
- **Art. 1.2.2.3. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Medio Marino:** Este artículo expone, con carácter indicativo, la finalidad y ciertos criterios sobre el contenido que habría de tener el PORN del medio marino. Como ya se ha señalado en relación al segundo párrafo del artículo 1.2.2.1, no compete al PIOT regular un instrumento que ordena un ámbito externo al de la isla. En consecuencia, este artículo debe entenderse derogado.
- **Sección 3ª del capítulo 2 del Título I. Planes Territoriales Especiales de Ordenación de Actividades Económicas:** El PIOT

¹⁸ Independientemente de las discusiones recientes, la palabra isla se define como “porción de tierra rodeada de agua por todas partes”. Por otra parte, recurriendo a la Ley de Costas podemos entender que la “tierra” puede extenderse como máximo hasta incluir la “zona marítimo-terrestre” (que participa de ambas naturalezas). Es decir, la línea de bajamar escorada definiría el borde de la isla.

vigente prevé la formulación de los que denomina PTEOAE para ordenar actividades económicas con relevancia sobre el uso del territorio o de los recursos. Salvo el párrafo 1 del artículo 1.2.3.3, que es en el que se relacionan los 7 PTEOAE previstos y que tiene carácter de norma directiva, el resto del contenido de esta sección son recomendaciones o explicaciones, lo que, ya por sí solo, obliga a que se suprima de las Normas del PIOT en virtud del artículo 101.1 de LSENPC. Resuelta la cuestión formal que implica la supresión de la sección completa de las Normas del PIOT, ha de discutirse sobre el fondo de la misma.

La ordenación de actividades económicas como tales, por más que tengan relevancia sobre el territorio, no puede ser materia de un Plan Territorial Especial, toda vez que el artículo 120 LSENPC limita el objeto de éstos a asuntos concretos entre los que no están aquéllas. Distinto es que algunos de los planes territoriales especiales previstos por el PIOT puedan ser admisibles bien porque en realidad tengan por objeto la ordenación de infraestructuras o equipamientos de ámbito supramunicipal (por ejemplo el PTE de ordenación de residuos o el PTE de ordenación de la actividad industrial) o bien porque así vengan establecidos en legislación sectorial (por ejemplo, el PTE de ordenación turística o el PTE de grandes equipamientos comerciales y de ocio).

Así, si el PIOT solo puede remitir la ordenación de actividades económicas a planes especiales cuando se trata de definir y ordenar infraestructuras y equipamientos vinculados o cuando lo ordena una Ley sectorial, parece claro que la ordenación de las actividades en sí mismas (ganadería, agricultura, caza, las tres para las que se prevé un PTE) no puede remitirse. Pero además, para que la ordenación de las actividades (económicas o no) pudiera llevarse a cabo directamente por el PIOT las mismas habrían de corresponder a usos sobre los que el Cabildo tuviera título habilitante; es decir, nunca sobre usos ordinarios.

En base a lo anterior, se pasa a concretar la propuesta detallada para cada una de las disposiciones:

- a) El artículo 1.2.3.1. debe entenderse derogado porque, como ya se ha dicho, no cabe formular planes territoriales especiales para ordenar sectores de actividad.
- b) El artículo 1.2.3.2. regula los contenidos de los Planes Territoriales objeto de la sección. El PIOT no puede regular los contenidos de instrumentos de planeamiento, por lo que también este artículo debe entenderse derogado.
- c) El artículo 1.2.3.3, en su párrafo 1, relaciona los siete planes territoriales especiales de actividades económicas. De ellos, los tres primeros (de la actividad agrícola, de la actividad ganadera y de la caza) deben entenderse derogados. El párrafo 2 está también derogado, toda vez que no pueden formularse PTEO no previstos expresamente en el PIOT. El resto de párrafos de este artículo son compatibles con la nueva Ley. En todo caso, al tratarse de contenidos directivos, los que no hayan quedado derogados deberán suprimirse de las Normas y pasarse al Programa de Actuación.

- **Sección 4ª del capítulo 2 del Título I. Instrumentos de Ordenación que afecten Áreas Naturales de Interés Insular:** El objeto de esta sección es aportar con carácter indicativo el contenido que deben cubrir los instrumentos que establezcan la ordenación de áreas naturales de interés insular. Tal como ya se ha justificado en el anterior epígrafe 1.4, no compete al PIOT regular los contenidos de ningún instrumento de ordenación (ni siquiera con carácter de recomendación), por lo que debe entenderse que esta sección ha quedado derogada en su totalidad.
- **Sección 5ª del capítulo 2 del Título I. Planes Territoriales Especiales de Ordenación de Infraestructuras y de Usos Dotacionales:** El PIOT vigente prevé la formulación de los que denomina PTEOID con la finalidad de planificar, completando sus determinaciones, redes concretas de infraestructuras o usos dotacionales. A diferencia de los PTEOAE, la Ley sí permite ordenar a través de planes territoriales especiales infraestructuras y/o equipamientos, siempre que sean de relevancia insular. Sin embargo, como en las restantes de este capítulo, casi todo el contenido de esta sección lo forman recomendaciones sobre el contenido de estos planos que, tanto por su carácter como por su objeto, han quedado derogados por la nueva Ley. Por otro lado, el artículo 1.2.5.3 tiene carácter de normas directivas que establecen los PTEOID que deben formularse y condiciones sobre los mismos; como ya se ha señalado en el epígrafe 5 de la parte A de este informe-propuesta, estas disposiciones deben desplazarse de las Normas a otros documentos del PIOT.
- **Art. 1.2.6.1. Definición de los planes territoriales parciales:** Este artículo comprende tres párrafos con distinto contenido y carácter normativo:
 - a) En su primer párrafo, define los planes territoriales parciales. Si bien la definición es compatible con la establecida en la Ley, es obvio que no compete al PIOT hacerla. De otra parte, este párrafo tiene carácter explicativo, por lo que no puede estar en la Normas.
 - b) El segundo párrafo, con carácter de norma de aplicación directa (aunque por su contenido no lo es), relaciona los ámbitos territoriales sobre los que podrían formularse planes territoriales parciales. Ahora bien, de acuerdo al artículo 119.2 LSENPC el Plan Insular debe delimitar los ámbitos territoriales cuya ordenación remite a plan territorial parcial, por lo que no cabe otorgar una remisión potestativa. En todo caso, tal como ya se ha señalado, este párrafo no debe constar en las Normas porque la relación de los planes territoriales parciales a formular (y, de las condiciones particulares que se le pudieran imponer a cada uno de ellos) tiene el carácter de norma directiva.
 - c) El tercer párrafo tiene el carácter de recomendación, lo cual ya es motivo suficiente para entender que no debe mantenerse en las Normas. Pero además, si atendemos a su objeto que no es otro que el establecer el contenido mínimo que deben tener dos tipos concretos de planes territoriales parciales (los comarcales y los litorales), ha de concluirse, toda vez que podrían tener el carácter de

normas directivas, que deberían desplazarse a otros documentos del PIOT.

- **Art. 1.2.6.2. Planes Territoriales Parciales Comarcales:** El PIOT establece que se formulen planes territoriales parciales sobre el ámbito completo de cada una de las comarcas que define, salvo las de Anaga, Teno y el Macizo Central. Estos planes tienen por finalidad el desarrollo del Modelo Insular de Ordenación, estableciendo directrices de coordinación territorial y estableciendo un modelo equilibrado de distribución de infraestructuras y equipamientos comarcales. Tal como están concebidos en el PIOT, estos planes se configuran como instrumentos intermedios entre los esquemas básicos de distribución de usos y calificación de infraestructuras y equipamientos y la ordenación urbanística, con un ámbito territorial exhaustivo. Por eso, no puede sostenerse que estén amparados en el artículo 119 LSENPC, toda vez que ello equivaldría a legitimar la potestad del Cabildo para ordenar la totalidad de la Isla. Ciertamente, una comarca no se corresponde con una “parte singular y concreta” del territorio, que son los ámbitos que pueden ordenarse a través de los planes territoriales parciales. Por tanto, ha de entenderse que la LSENPC impide la formulación de PTP de ámbito comarcal y, consiguientemente, ha derogado este artículo en su totalidad.
- **Art. 1.2.6.3. Planes Territoriales Parciales de Ordenación del Litoral:** El PIOT establece que se formulen 10 planes territoriales parciales que cubren la totalidad del ámbito litoral de la Isla, salvo el tramo de la costa sur metropolitana. Surge también la duda de si en el marco de la nueva Ley cabe remitir la ordenación de casi toda la franja costera insular. A diferencia de las comarcas, los ámbitos costeros sí pueden entenderse como “partes singulares y concretas” del territorio. La cuestión radica en si la ordenación de sus usos tiene trascendencia insular. Se entiende que, sin perjuicio de posteriores reflexiones sobre el asunto, no puede negarse taxativamente esa relevancia insular, aunque solo fuera por la importancia intrínseca de las características naturales y/o funcionales del litoral. Así pues, si bien no estamos en condiciones de afirmar que este tipo de planes previstos por el PIOT estén claramente amparados por la LSENPC, tampoco cabe concluir con la suficiente seguridad que son incompatibles con ésta, razón por la que no puede entenderse que esta determinación del PIOT haya quedado derogada. No obstante, este artículo debe desplazarse de las Normas, toda vez que su objeto tiene carácter de normas directivas, al definir los ámbitos que remite a estos planes territoriales y establecer las condiciones particulares que deben cumplir.
- **Art. 1.2.6.4. Formulación de los Planes Territoriales Parciales de Ordenación:** Este artículo se limita a señalar que los PTP han de ser formulados por el Cabildo, que es algo que no compete decir al PIOT (además de ser superfluo). Por otra parte, se le asigna el carácter de recomendación (lo cual tampoco es del todo congruente). Así pues, se entiende que ha quedado derogado.

1.5. Capítulo 3: Programación de las actuaciones sobre el territorio y sobre los recursos

En este capítulo se explica cómo deben llevarse a cabo las actuaciones que inciden en la transformación y uso del territorio y de los recursos, en desarrollo del PIOT o de otros planes. Este contenido, además de excesivamente genérico carece de cualquier alcance normativo, lo cual implica que debe suprimirse en su totalidad de las Normas del PIOT y, en todo caso, incluirse en otro documento del PIOT.

1.6. Capítulo 4: Definiciones normativas básicas

Este capítulo tiene por objeto la clasificación y definición de los usos e intervenciones. Tal contenido encaja plenamente con las determinaciones urbanísticas de ordenación estructural relacionadas en el artículo 136.A.e) de la LSENPC y, como ya concluimos en el epígrafe 3.5 de la parte A de este informe-propuesta, a pesar de ser determinaciones urbanísticas, es un contenido lícito de los Planes Insulares.

La legitimidad de estas definiciones estriba en que son necesarias para la regulación sustantiva que hace el PIOT sobre usos, actividades e intervenciones. Bien es cierto que la clasificación y definiciones de usos e intervenciones es exhaustiva, incluyendo tanto aquéllos sobre los que es competente para regular como aquéllos sobre los que no. Pero se entiende que, siempre que la clasificación y las definiciones no sean vinculantes sobre otras administraciones, esta exhaustividad no es contraria a la Ley, toda vez que contribuye a una mejor aplicación de las normas sustantivas del PIOT.

Así pues, debe concluirse que, en su conjunto, este capítulo es compatible con la LSENPC. Ello no obstante, se entiende que su alcance ha quedado modificado, ya que no puede operar sobre planes urbanísticos, sino limitarse a la aplicación del PIOT y de sus planes de desarrollo, así como a los actos propios de la Corporación Insular. Lo anterior afecta a los siguientes preceptos de este capítulo:

- **Art. 1.4.1.1. La ordenación de los usos por el planeamiento:** El contenido de este artículo tiene en su totalidad carácter explicativo, sin que sea necesario para la aplicación de las restantes disposiciones. Además, al referirse a las diferentes figuras de planeamiento, pudiera dar a entender que se pretende que los planes urbanísticos respeten estas definiciones. Así pues, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado.
- **Art. 1.4.1.2. Conceptos de uso, actividades, intervenciones y ámbitos territoriales:** Los tres primeros párrafos establecen las definiciones, respectivamente, de los conceptos de uso, actividad e intervención, que se requieren para la regulación del PIOT; consecuentemente, se entiende que los mismos son compatibles con la Ley. El párrafo 4 debe suprimirse porque remite a la sección 4ª de este capítulo, la cual no existe. Por último, el párrafo 5 explica innecesariamente en qué consisten las determinaciones del planeamiento sobre los usos; además, aplica su contenido a todos los instrumentos de planeamiento, incluyendo los urbanísticos. Por tanto, también ha quedado derogado.
- **Art. 1.4.1.3. Clasificación de los usos:**

- a) El párrafo 1 define el primer nivel de clasificación; pese a su carácter explicativo, se entiende necesario para entender y aplicar la clasificación y definiciones de las secciones siguientes.
- b) El párrafo 2 explica cómo se hacen los niveles de la clasificación de usos; pese a su carácter explicativo, se también entiende necesario para entender y aplicar la clasificación y definiciones de las secciones siguientes. No obstante, la última frase del párrafo (“Una clasificación que debe ser enriquecida y completada por las figuras de planeamiento de ámbito inferior al insular y sectoriales”) supone dar un alcance a la clasificación y definiciones de usos que excede del permitido; en consecuencia, se entiende derogada y deberá suprimirse.
- c) El párrafo 3 también es explicativo, pero igualmente se entiende necesario para conocer el alcance de la clasificación y definiciones de los usos. A este respecto, y en congruencia con lo ya expuesto, debe suprimirse la última parte del párrafo (“así como el contenido que sobre los mismos deben alcanzar las distintas figuras del sistema de planeamiento”).
- d) El párrafo 4, con el carácter de norma directiva, si bien dice que los restantes instrumentos de planeamiento (incluyendo los urbanísticos) “podrán establecer la sistemática (de clasificación y definiciones de los usos) más adecuada a sus fines específicos”, luego señala una serie de condiciones a cómo ha de hacerlo, para lo cual el PIOT no es competente. En consecuencia, se entiende que este párrafo ha quedado derogado en su totalidad.
- e) El párrafo 5 (que erróneamente se numera como 4) tiene un carácter explicativo, sin que sea necesario para la aplicación del contenido normativo; por ello, se entiende que está derogado.

2. Título II: Disposiciones Territoriales

2.1. Consideraciones generales sobre la adecuación de las Disposiciones Territoriales a la LSENPC

El PIOT define el Modelo de Ordenación Insular y los Modelos de Ordenación Comarcal de las 11 comarcas en que divide la Isla. Cada uno de estos modelos consiste en un esquema sintético y abstracto de la propuesta de estructuración territorial, mediante la descripción de sus cuatro elementos constitutivos: la distribución básica de los usos, el sistema de núcleos urbanos y rurales, las infraestructuras básicas (especialmente la red viaria) y los equipamientos insulares. Todas las disposiciones a través de las cuales se establece el Modelo de Ordenación Insular y los Modelos de Ordenación Comarcal tienen el carácter de directrices de ordenación, sin alcance directo sobre actos de uso del suelo o intervenciones, pero vinculantes para la Administración Pública en el ejercicio de sus políticas sobre el territorio (entre ellas las de planificación territorial y urbanística). Por eso, para que los modelos de ordenación adquirieran efectividad práctica, el PIOT establecía que todo planeamiento –y muy en particular los planes generales municipales– habían de desarrollarlos y concretarlos a través de sus determinaciones, entre ellas las urbanísticas.

El artículo 94.2 de la LSENPC señala que los Planes Insulares tienen por objeto la ordenación estructural del espacio insular, definiendo el modelo de organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible. En el artículo 95.1 se afirma que uno de los fines fundamentales de los planes insulares es propiciar el desarrollo sostenible de la isla, a través de la distribución equilibrada de los usos y la previsión de los sistemas generales y equipamientos supramunicipales. Por último, en el artículo 96.2 se considera una determinación de ordenación de los PIO la "definición de sistemas territoriales equilibrados y eficientemente articulados, favoreciendo el desarrollo de nuevas centralidades que aumenten la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios con el objetivo de disminuir la movilidad". Pues bien, todos estos objetos, fines y contenidos se resuelven en el PIOT vigente a través del Modelo de Ordenación, a escala insular y comarcal por lo que cabría defender que la definición del mismo es compatible con la nueva Ley.

Sin embargo, de otra parte, como ya hemos repetido a lo largo de este informe-propuesta, la Ley niega la concepción de los planes municipales como figuras que desarrollan el Modelo de Ordenación Insular; de hecho, todas las determinaciones normativas del PIOT tienen que ser de aplicación directa, y en caso de remitirse el desarrollo de algunos contenidos a otros planes, ha de ser a los territoriales (parciales o especiales), no a los urbanísticos. Hay pues que entender que cuando el legislador señala que compete al PIOT establecer el modelo de organización y uso del territorio insular para garantizar el desarrollo sostenible, considera que éste se puede definir mediante la concreción finalista de elementos de relevancia insular en sí mismos, sin necesidad de establecer directrices sobre el resto del territorio.

De la interpretación anterior –que compatibiliza las referencias de la Ley al modelo insular con las limitaciones que establece a las determinaciones de los planes insulares– resultaría que un PIO puede (y debe) definir el modelo de ordenación insular, pero no de la forma en que lo ha hecho el PIOT. El modelo insular del Plan Insular no puede ser un esquema abstracto que, para ser efectivo, requiera desarrollarse a través del planeamiento municipal, vinculando y condicionando las determinaciones de éste. Por tanto, como el Modelo de Ordenación del PIOT (tanto el insular como los comarcales) responde a esta concepción, podría concluirse que todo él (todas las disposiciones territoriales del Título II de las Normas) ha quedado derogado por incompatibilidad básica con la nueva Ley. Pero tal conclusión sería demasiado tajante. Es verdad que la concepción de Plan Insular que presidió la formulación del vigente es esencialmente incompatible con la que establece la nueva Ley lo que aconseja que el Cabildo se plantee formular un nuevo PIOT; sin embargo, ello no implica que todas las disposiciones territoriales hayan sido derogadas por la LSENPC. De hecho, aunque el Modelo de Ordenación del PIOT no responde al que prevé la Ley, sí contiene determinaciones más o menos equivalentes a las que ésta establece.

A continuación, se procede a repasar, de forma genérica, las determinaciones mediante las que el PIOT define los cuatro elementos constitutivos del modelo de ordenación insular y de los comarcales:

- a) La distribución básica de los usos se concreta en una división exhaustiva del territorio insular en Áreas de Regulación Homogénea (ARH), asignando a cada categoría de ellas un régimen básico de usos e intervenciones. Tal como está configurado este elemento del modelo, vincula al planeamiento urbanístico, tanto en la clasificación y categorización de suelo como en el establecimiento de las condiciones de admisibilidad de usos e intervenciones (en particular, en el suelo rústico). Como ya se ha expuesto en la parte A de este informe-propuesta, el PIOT no es competente para establecer con carácter exhaustivo ninguno de los dos tipos de determinaciones. Tan sólo puede delimitar para establecer determinaciones de ordenación aquellas áreas con relevancia insular. Bajo este criterio básico, en el epígrafe 2.4 de este informe-propuesta dedicado a las disposiciones sobre las ARH se discute, respecto de cada una de ellas, su compatibilidad con la Ley.
- b) El sistema de núcleos urbanos principales se resuelve en el PIOT vigente mediante dos tipos de determinaciones directivas. Por un lado se relacionan los distintos núcleos clasificándolos según los niveles que establecían las Directrices de Ordenación General (derogadas). Esta determinación, más allá de una mera jerarquización de la red de núcleos existentes en cada comarca, carecía en realidad de consecuencias concretas, por lo cual no tiene encaje en las Normas, de acuerdo a la nueva Ley. De otra parte, respecto de cada uno de los núcleos urbanos de cada comarca se señalaban criterios generales de ordenación e intervención que, obviamente, debían implementarse a través de los planes urbanísticos e incluso de actuaciones municipales. Está claro que este tipo de determinaciones (que además son obviamente directivas) no se justifican en razón de su relevancia insular y, por tanto, son contrarias a las competencias que la LSENPC atribuye a los PIO. Habrán, por tanto, de suprimirse de las Normas, sin perjuicio de que puedan incorporarse en otros documentos del PIOT, tal como se expone más adelante.
- c) El modelo viario y de transportes consiste en la definición de la red de carreteras insulares (y comarcales) y en el señalamiento de condiciones de ordenación respecto de cada uno de estos elementos viarios. En este caso, es evidente que lo que está haciendo el PIOT queda amparado por la nueva Ley toda vez que no es otra cosa que definir las infraestructuras de transporte de interés supralocal (artículo 98.1.a). De otra parte, las condiciones que se señalan sobre cada viario con el carácter de normas directivas a los planes territoriales especiales que desarrollen su ordenación deben trasladarse de las Normas.
- d) Las restantes infraestructuras, al igual que las viarias, se definen las de primer nivel, y se establecen condiciones para desarrollar su ordenación a través de planes territoriales especiales. Se entiende que ambos tipos de determinaciones son compatibles con la LSENPC, si bien las segundas deben desplazarse de las Normas a otros documentos del PIOT.

e) Los equipamientos supramunicipales, el PIOT identifica y establece determinaciones de ordenación sobre algunos de estos equipamientos estructurantes a escala insular o comarcal. No obstante, el concepto de equipamiento supramunicipal del PIOT es más restrictivo que el de la Ley, ya que no incluye, por ejemplo, los polígonos industriales supramunicipales, los grandes centros comerciales y los grandes centros de ocio. La definición y ordenación de estos “equipamientos insulares” (en la terminología legal) era remitida por el PIOT a planes territoriales especiales que, como ya se ha expuesto en el anterior epígrafe 1.4, son compatibles con la Ley, si bien deben desplazarse de las Normas a otros documentos del PIOT.

A la vista de lo expuesto, parece claro que este Título II en su conjunto ha sufrido una profunda modificación como resultado de la entrada en vigor de la nueva Ley. En cuanto a su carácter de Normas ha quedado derogado en su mayor parte, ya que sólo podrán mantenerse aquellos preceptos que se refieran a la definición u ordenación de elementos o ámbitos territoriales de relevancia insular. De otra parte, las determinaciones cuyo objeto era establecer condiciones para los planes territoriales que habrían de desarrollar la ordenación de elementos constitutivos del Modelo de Ordenación Insular han de suprimirse de este Título de las Normas pero no quedan derogadas, sino que deben desplazarse a otros documentos del PIOT. Finalmente, el resto de determinaciones que se refieren a elementos o ámbitos territoriales que no pueden considerarse de relevancia insular (en particular los criterios de ordenación del sistema de núcleos urbanos) han quedado derogados en cuanto a su alcance dispositivo; no obstante, se entiende que deben pasarse a la Memoria de Ordenación, como explicación de la propuesta de ordenación que propone el PIOT, a fin de que pueda ser considerada por las distintas administraciones públicas en sus planes y actuaciones (pese a no ser vinculantes).

2.2. Secciones 1ª y 2ª del Capítulo 1: Aspectos generales del Modelo de Ordenación Territorial

- **Art. 2.1.1.1. Concepto de Modelo de Ordenación Territorial:** Este artículo define lo que el PIOT entiende por Modelo de Ordenación Territorial, y esa definición, al no entrar en detalles, no puede entenderse contraria a la LSENPC, ni siquiera cuando se señala de forma genérica que “los planes que concreten la ordenación y los procesos de actuación sobre el territorio, deberán propiciar que la realidad territorial tienda progresivamente hacia dicho Modelo”. De otra parte, si bien el carácter de este artículo es explicativo, se entiende que es necesario para poder aplicar el Título II.
- **Art. 2.1.1.2. Características del Modelo de Ordenación Territorial del PIOT:** Este artículo consta de cinco párrafos, todos ellos de carácter explicativo pero que se consideran necesarios para poder aplicar las disposiciones territoriales. A continuación, se pasan a valorar la compatibilidad de cada uno de los párrafos con la nueva Ley:
 - a) El párrafo 1 establece la naturaleza esquemática del Modelo y que sus determinaciones son las que estrictamente tienen carácter estructurante a nivel insular. Aunque no todas tienen realmente

carácter estructurante insular, esta afirmación es plenamente compatible con la LSENPC.

- b) El párrafo 2 define los cuatro componentes del Modelo y repite que tienen capacidad estructurante insular. Puede concluirse, por tanto, que tampoco es incompatible con la LSENPC.
- c) El párrafo 3 establece que los cuatro componentes responden al Sistema Territorial instaurado por las Directrices de Ordenación General de Canarias. Toda vez que estas Directrices han sido derogadas, hay que entender que también ha quedado derogada esta frase. El resto del párrafo, que enlaza los componentes del Modelo del PIOT con los sistemas territoriales de las Directrices hay que entenderlo asimismo derogado.
- d) El párrafo 4 declara que el Modelo de Ordenación Territorial del PIOT es de naturaleza abstracta, sin que sus trazados definan límites precisos. Podría admitirse este carácter abstracto siempre que su concreción fuera a través de planes territoriales, pero difícilmente cabría que la totalidad de las determinaciones gráficas del PIOT requirieran desarrollo ya que ello implicaría casi obligadamente que fueran los planes municipales los que lo hicieran. Por ello, se considera que este párrafo ha quedado derogado, lo cual, de otra parte, carece de efectos prácticos al tratarse de un texto de carácter explicativo.
- e) El párrafo 5 declara que el Modelo de Ordenación Territorial del PIOT es, además, flexible, global y abierto. Dado el carácter genérico con que se define cada una de estas cualidades, se entiende que no hay contradicción con la LSENPC.

— **Art. 2.1.1.3. Los niveles del Modelo de Ordenación Territorial en el PIOT:** Este artículo se limita a exponer que el Modelo de Ordenación Territorial se establece en el PIOT en dos niveles: el insular y el comarcal. En nada se contradice la nueva Ley distinguiendo entre elementos insulares y comarcales, ya que estos últimos son también supramunicipales y, por tanto, de relevancia insular. De otra parte, pese al carácter explicativo de este artículo, se entiende que es necesario para poder aplicar las disposiciones territoriales de este Título II.

— **Art. 2.1.1.4. La estructura comarcal del PIOT:** Este artículo es una mera justificación de la división que hace el PIOT de la isla en comarcas; su carácter explicativo, a diferencia del de los anteriores artículos, no es necesario para la aplicación de las disposiciones sustantivas, por lo que se entiende que debe suprimirse de las Normas y desplazarse a otros documentos del PIOT.

— **Art. 2.1.1.5. Contenido y alcance operativo del Modelo de Ordenación Territorial:** Este artículo regula el alcance del Modelo y cómo debe ser desarrollado por todos los planes y programas con incidencia territorial y, en particular, por los planes urbanísticos. Como ya se ha argumentado en el epígrafe 2.1 anterior, en este asunto radica una de las contradicciones fundamentales del PIOT con la LSENPC, por lo que se entiende que el artículo ha quedado derogado en su totalidad.

– **Art. 2.1.2.1. Los submodelos de ordenación territorial:** Este artículo define los cuatro elementos que conforman el Modelo de Ordenación Territorial, y consta de tres párrafos que pasan a valorarse individualizadamente en cuanto a su compatibilidad con la LSENPC:

a) El párrafo 1 define los cuatro componentes. Tal como se ha argumentado en el anterior epígrafe 2.1, sin perjuicio de que se mantengan los cuatro submodelos en la descripción de la Memoria, como disposiciones normativas no tiene cabida la definición de los núcleos urbanos principales y la distribución básica de los usos debe limitarse a la delimitación de aquellas áreas de relevancia insular. Las infraestructuras básicas (viarias y otras) así como los equipamientos insulares sí son determinaciones propias del PIOT en el nuevo marco legal. En consecuencia, deberá modificarse este párrafo, suprimiendo los núcleos urbanos principales y modificando la exposición vinculada a la distribución básica de los usos. De otra parte, pese a su carácter explicativo, se entiende que este párrafo es necesario para la correcta aplicación de las disposiciones territoriales.

b) El párrafo 2 vincula los componentes del Modelo de Ordenación Territorial a las Directrices de Ordenación General; dado que las Directrices han sido derogadas, también este artículo.

c) El tercer párrafo viene a decir lo mismo que el párrafo 4 del artículo 2.1.1.2, y como ya se ha justificado, debe entenderse derogado.

– **Art. 2.1.2.2. La distribución básica de los usos:** Este artículo comprende dos párrafos de carácter claramente explicativo. En el primero de ellos se señala que la propuesta de ordenación del PIOT a este respecto consiste en la división de la totalidad de la isla en ámbitos territoriales, cada uno con un destino principal y un régimen complementario de usos e intervenciones. Como ya se ha expuesto anteriormente, se entiende que la nueva Ley no permite que el PIOT asigne regímenes de usos (aún básicos) a la totalidad de la isla, sino que debe limitarse a aquellos ámbitos de relevancia insular y, en su caso, a localizar aquellos usos de nivel estructurante insular. Por tanto, hay que entender que el contenido de este artículo (así como parte de la regulación a que remite del capítulo 3) no es completamente compatible con la LSENPC. Si a ello se suma que los dos párrafos tienen carácter explicativo, se entiende conveniente suprimir el artículo de las Normas y, debidamente corregido, desplazarlo a otros documentos del PIOT.

– **Art. 2.1.2.3. Los núcleos urbanos principales:** Este artículo explica la propuesta del PIOT sobre el sistema de núcleos urbanos, que consiste en relacionar en cada comarca cuáles son, clasificándolos en tres niveles (en los términos establecidos por las derogadas Directrices de Ordenación General), y señalar las condiciones que deben respetar para su ordenación los instrumentos de desarrollo del PIOT. La identificación e incluso clasificación jerárquica de los núcleos podría ser una determinación admisible del PIOT (amparada por el contenido enunciado en la letra e) del artículo 96.2), pero no con alcance normativo, toda vez que no parece que la Ley permita que el planeamiento insular establezca disposiciones vinculantes sobre la ordenación de los ámbitos residenciales. Menos dudas plantea concluir

que el PIOT no está legitimado para establecer condiciones para la ordenación de los núcleos urbanos¹⁹, que es claramente competencia de los planes urbanísticos municipales. En consecuencia, se considera que este artículo debe suprimirse de las Normas y, debidamente corregido, desplazarlo a otros documentos del PIOT.

- **Art. 2.1.2.4. Las redes básicas de infraestructuras:** Este artículo explica cómo el PIOT define y ordena (o remite la ordenación a planes territoriales) las redes básicas de infraestructuras, que son uno de los componentes del Modelo de Ordenación Territorial propuesto. Como ya se ha argumentado, las determinaciones del PIOT a este respecto se encuentran plenamente amparadas por la nueva Ley, por lo que este artículo es compatible con la misma. Pese a su carácter explicativo, se entiende que debe mantenerse por ser necesario para la aplicación de las disposiciones sustantivas.
- **Art. 2.1.2.5. Los equipamientos insulares:** Este artículo explica cómo el PIOT define y ordena (o remite la ordenación a planes territoriales) “aquellos elementos dotacionales que, en razón del ámbito (insular o comarcal) al que sirven, adquieren capacidad estructurante propia de la escala del PIOT”. Como ya se ha argumentado, las determinaciones del PIOT a este respecto se encuentran plenamente amparadas por la nueva Ley, por lo que este artículo es compatible con la misma. Pese a su carácter explicativo, se entiende que debe mantenerse por ser necesario para la aplicación de las disposiciones sustantivas.

2.3. Sección 3ª del Capítulo 1 y Capítulo 2: Los Modelos de Ordenación Insular y comarcales

La Sección 3ª del capítulo 1 está dedicada a la descripción del Modelo de Ordenación Insular propuesto por el PIOT; las 11 secciones que componen el capítulo 2 tienen por contenido la descripción de los modelos de ordenación comarcal de cada una de las 11 comarcas en que el PIOT divide la Isla. Todas estas secciones tienen la misma estructura de contenido: hay cinco artículos dedicados cada uno a uno de los componentes del modelo de ordenación (distribución básica de los usos, sistema de núcleos urbanos, infraestructuras, modelo viario y de transportes, y equipamientos) y, en las secciones comarcales, uno primero de consideraciones previas y uno final de criterios de actuación. Desde el punto de vista de la adecuación de los contenidos a la LSENPC, dado que la conclusión respecto de cada uno de los artículos es válida para todos los demás artículos equivalentes, se pasa a continuación a hacer el análisis detallado teniendo en cuenta las consideraciones generales expuestas en el anterior epígrafe 2.1:

- a) Los artículos titulados “consideraciones previas” (sólo en los modelos comarcales) tienen un marcado carácter explicativo, sin que en absoluto sean necesarios para la aplicación de las Normas. En

¹⁹ Salvo aquellos no residenciales delimitados como polígonos industriales, terciarios o de ocio, de relevancia insular.

consecuencia, deben desplazarse de las Normas a otros documentos del PIOT.

- b) Los artículos dedicados a la "distribución básica de los usos" tienen carácter directivo en forma de instrucciones (excesivamente genéricas, en todo caso) a ser tenidas en cuenta por los planes generales en la ordenación de los municipios de cada comarca. Toda vez que, como ya se ha señalado repetidamente, en el nuevo marco legal no puede el Plan Insular imponer la concreción de sus determinaciones a los planes urbanísticos, hay que entender que estos artículos deben desplazarse de las Normas a otros documentos del PIOT.
- c) Los artículos sobre "el sistema de núcleos urbanos" comprenden determinaciones que, además de ser directrices al planeamiento urbanístico, no se justifican en razón de su relevancia insular y, por tanto, son contrarias a las competencias que la LSENPC atribuye a los PIO. Han de entenderse, por tanto, derogados, al menos en su alcance normativo. No obstante, se entiende que cabe incorporarlos en otro documento como descripción de la propuesta de ordenación del PIOT.
- d) Los artículos cuyo objeto son "las infraestructuras" (tanto los dedicados a las básicas como los que tratan sobre el modelo viario y de transportes) tienen dos tipos de contenidos: por un lado la definición de las infraestructuras que, en la terminología de la nueva Ley, tendrían el carácter de sistemas generales insulares; y, por otro, el señalamiento de instrucciones directivas, bien para los instrumentos que desarrollen la ordenación (planes territoriales) bien para las actuaciones que pudieran acometerse sobre cada una de ellas. Ambos tipos de determinaciones son compatibles con la nueva Ley. No obstante, se entiende que las de naturaleza directiva no deben contenerse en las Normas. En cuanto a la definición de las infraestructuras que el PIOT "califica" como sistemas generales, sería más operativo que se relacionaran en el artículo 2.1.2.4, en el que, además, se indicara el plano en el cual se recogen.
- e) Respecto de los artículos cuyo objeto son "los equipamientos" ha de llegarse a las mismas conclusiones que sobre las infraestructuras: que ambos tipos de determinaciones son compatibles con la nueva Ley, pero que se entiende que las de naturaleza directiva deben desplazarse al Programa y la relación de los equipamientos calificados como sistemas generales insulares debería pasarse al artículo 2.1.2.5, en el que, además, se indicara el plano en el cual se recogen.

Finalmente, los artículos denominados "criterios de actuación" consisten en directrices para las políticas sectoriales en cada ámbito comarcal, que por su carácter no deben estar en las Normas sino desplazarse a otros documentos del PIOT.

Como resumen del análisis detallado, se concluye que la casi totalidad de los contenidos de la Sección 3ª y del capítulo 3 ha de suprimirse, ya que, de acuerdo a la nueva Ley, no pueden estar en las Normas. La excepción son las relaciones de infraestructuras y

equipamientos insulares que se recomienda que se desplacen a los artículos correspondientes de la Sección 2ª del capítulo 1. De otra parte, la mayoría de las disposiciones de carácter directivo pueden mantenerse pero desplazándose de las Normas a otros documentos del PIOT para, sin efectos vinculantes, describir de forma integral la propuesta de ordenación del Plan Insular.

2.4. Sección 1ª del Capítulo 3: Generalidades (de las Áreas de Regulación Homogénea)

— **Art. 2.3.1.1. Definición:** Este artículo consta de dos párrafos, que a pesar de tener ambos carácter explicativo, se consideran necesarios para la correcta aplicación de las disposiciones normativas:

- a) El párrafo 1 establece que el “modelo de distribución de usos del PIOT” se define mediante la división del territorio en ámbitos de ordenación con suficiente homogeneidad interna. Dado su carácter genérico, se entiende que este párrafo no es incompatible con la LSENPC.
- b) El párrafo 2 define las ARH como categorías de igual régimen básico de regulación de usos y remite su delimitación a los correspondientes planos de ordenación del PIOT. Ahora bien, en el nuevo marco legal, habría de decir que las ARH son las categorías de igual régimen básico de usos correspondientes a ámbitos delimitados en atención a su relevancia insular en la definición del modelo de ordenación territorial. Con tal corrección se entiende compatible con la LSENPC.

— **Art. 2.3.1.2. Clasificación de las Áreas de Regulación Homogénea:** Este artículo, pese a su carácter explicativo, se entiende necesario para la correcta aplicación de las disposiciones de este capítulo, siempre que se introduzcan las correcciones que se señalan a continuación:

- a) El párrafo 1 se considera compatible con la nueva Ley.
- b) El párrafo 2, al hacer referencia al TRLOTENC que ha sido derogado, se entiende también derogado, además de que su contenido no es necesario para la aplicación de las normas.
- c) El párrafo 3 relaciona las distintas ARH que establece el PIOT:
 - Las ARH de protección ambiental (que, a su vez, son las zonas A y B1 del PORN): se entiende que se corresponden con “los espacios y los elementos significativos del patrimonio natural de la isla”, que según la Ley deben ser identificados (delimitados) por el PIOT y ordenados (preservados de la urbanización). Como ya se ha argumentado en el epígrafe 3.11 de la parte A de este informe-propuesta, estos ámbitos pueden ser delimitados y ordenados con todo el detalle que se quiera por el PIOT, por lo que ha de concluirse que las ARH de protección ambiental son compatibles con la nueva Ley.
 - Las ARH de protección económica (zonas B2 del PORN): el artículo 99.1 LSENPC ordena a los planes insulares que delimiten las zonas “que deban destinarse a usos del sector primario, en especial los agrarios, forestales o extractivos” (b) y “las que

deban preservarse del desarrollo urbanístico por su valor agrícola existente o potencial” (c). Las definiciones de las ARH de protección económica son congruentes con estos preceptos, por lo que debe entenderse que la delimitación de las mismas no es incompatible con la nueva Ley, sin perjuicio de que, en una posterior modificación del PIOT, hubiera que revisarlas. Cuestión distinta es si el contenido normativo sobre estas ARH se ajusta a la Ley, asunto que se trata más adelante.

- Las ARH de protección territorial: La propia definición que de estas ARH se hace en el artículo 2.3.7.1 deja claro que los terrenos que el PIOT adscribe a esta categoría no se delimitan en razón de su relevancia insular, sino que son justamente los que no cabe adscribir a ninguna otra ARH. En consecuencia, ha de concluirse que esta categoría de ARH –así como la delimitación de los ámbitos adscritos y el establecimiento de regímenes básicos de usos sobre los mismos– es incompatible con la LSENPC y, por lo tanto está derogada.
- Las ARH de interés estratégico: Según se definen en el artículo 2.3.8.1, en estas ARH “se incluyen los ámbitos que ostentan un papel estratégico en el Modelo de Ordenación Territorial del PIOT, por estar destinados a equipamientos o infraestructuras de nivel de servicio insular”. Así pues, estamos ante ámbitos con la consideración de sistemas generales insulares y, por tanto, su delimitación y ordenación por el PIOT es plenamente compatible con la LSENPC.
- Las ARH urbanas: el PIOT adscribe a estas ARH los terrenos en los que se debe consolidar el sistema de núcleos urbanos principales de la Isla. Como ya se ha argumentado en la parte A de este informe, así como en el epígrafe 2.1 de esta parte B en referencia al sistema de núcleos urbanos como componente del Modelo de Ordenación Territorial, la nueva Ley no habilita al planeamiento insular para condicionar la clasificación de los suelos urbanos o urbanizables por los planes urbanísticos, que es, al fin y al cabo, el objeto de estas ARH. Así pues, ha de concluirse que esta categoría de ARH –la delimitación de los ámbitos adscritos y la regulación normativa vinculada – no es compatible con la LSENPC y, por lo tanto está derogada.
- Las ARH de expansión urbana: el PIOT adscribe a estas ARH los terrenos donde deben ubicarse preferentemente las operaciones de expansión de los núcleos que conforman el sistema de núcleos urbanos del Modelo de Ordenación Territorial. Las consideraciones expuestas para las ARH urbanas son igualmente aplicables a las de expansión urbana. Así pues, ha de concluirse que esta categoría de ARH –la delimitación de los ámbitos adscritos y la regulación normativa vinculada– no es compatible con la LSENPC y, por lo tanto está derogada.

Así pues, el párrafo 3 del artículo 2.3.1.2. debe mantenerse porque, pese a ser explicativo, es necesario para aplicación de las disposiciones normativas, pero han de suprimirse las categorías de ARH de protección territorial, urbanas y de expansión urbana.

- **Art. 2.3.1.3. Contenido de las determinaciones del PIOT sobre las ARH:** Este artículo se limita a relacionar los distintos contenidos que el PIOT establece sobre cada una de las ARH en las siguientes secciones de este capítulo. Todos los párrafos del mismo tienen carácter explicativo y no son imprescindibles para la aplicación de los preceptos normativos posteriores. Además, algunos de los textos (en particular el párrafo 6) resultan de dudosa compatibilidad con los criterios de la LSENPC sobre el alcance del PIOT y su relación con el planeamiento urbanístico. En consecuencia, se entiende que este artículo ha sido derogado en su totalidad.
- **Art. 2.3.1.4. Alcance de esta normativa:** En este artículo se regula la forma en que los planes debían desarrollar sus propuestas de ordenación por referencia a las ARH del PIOT y, en caso de divergencia, cómo habrían de justificarlas mediante las pertinentes “readscripciones”. Como ya se ha señalado repetidamente, la LSENPC no permite que el PIOT se desarrolle a través del planeamiento municipal, por lo que hay una incompatibilidad fundamental entre el nuevo marco legal y este artículo que ha de entenderse derogado. Esto implica que las delimitaciones de las ARH así como sus regímenes normativos han de entenderse de aplicación directa y, por tanto, vinculantes para el planeamiento municipal, sin perjuicio que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99.2 de la nueva Ley, los planes generales puedan reajustar el alcance y los límites de las ARH, con el fin de corregir situaciones que pudieran resultar contradictorias, justificándolo en la memoria de ese instrumento.

2.5. Secciones 2ª, 3ª y 4ª del Capítulo 3: Áreas de Protección Ambiental

Como ya se ha señalado, las ARH de protección ambiental delimitadas por el PIOT (tantos las 1, 2 y 3, salvo las marinas) pueden considerarse, en el marco de la nueva Ley, como las que deben preservarse de la urbanización por sus altos valores naturales. De hecho, la gran parte de la superficie de estos recintos está sometida a regímenes legales de protección natural (ENP y/o ZEC). Así pues, sobre estos ámbitos el PIO puede establecer cuantas determinaciones de ordenación considere necesarias. Las que contiene el PIOT son fundamentalmente las que establecen el régimen básico de los usos e intervenciones, consistentes en señalar usos principales, secundarios e incompatibles como base para el desarrollo por el planeamiento (sea el de espacios naturales o el urbanístico). En el nuevo marco legal, como ya se ha dicho, no cabe la remisión para que este régimen básico sea desarrollado por los planes urbanísticos. En coherencia con lo expuesto:

- **Art. 2.3.2.1. Definición:** Este artículo se limita a definir cuáles son las ARH de protección ambiental 1 y las cuatro subcategorías que comprenden. Si bien por su contenido los dos párrafos que lo conforman tienen carácter explicativo²⁰, se entiende que deben mantenerse por ser textos necesarios para la correcta aplicación de las normas sustantivas de esta sección.

²⁰ Aunque se les asigna la clave D de norma directiva.

- **Art. 2.3.2.2. Criterios de delimitación:** Este artículo establece los criterios con los que el planeamiento debe delimitar, con base en los recintos del plano de distribución básica de los usos del PIOT, cada una de las ARH de protección ambiental 1. Tal como está redactado, es incompatible con la LSENPC. Podría sostenerse que cabría mantener su contenido interpretándolo como los criterios con los que los planes generales deben justificar los reajustes que pudieran hacer de los recintos de estas ARH delimitados por el PIOT, de acuerdo a lo señalado en el artículo 99.2 LSENPC. Ahora bien, dicha interpretación exigiría, además de varias supresiones de frases, modificar la redacción del párrafo 1, alteraciones al contenido que se entienden que van más allá del alcance de esta propuesta²¹. En consecuencia, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.
- **Art. 2.3.2.3. Objetivos:** Este artículo enuncia los objetivos que se plantean en la delimitación y ordenación de las ARH de protección ambiental 1, contenido que no tiene carácter de aplicación directa (ni siquiera de norma directiva, como se indica) sino explicativo o justificativo. Por tanto, se entiende que debe trasladarse de las Normas a otros documentos del PIOT.
- **Art. 2.3.2.4. Criterios para el desarrollo de la ordenación:** Este artículo señala las disposiciones que debe contener el planeamiento que establezca la ordenación de los terrenos adscritos a estas ARH, en desarrollo del régimen básico de esta sección. Como ya se ha dicho, no cabe exigir al planeamiento (en particular al urbanístico) que desarrolle el régimen normativo del PIOT. Pero además, tampoco podrían imponerse las determinaciones que dicho planeamiento ha de contener al respecto. En consecuencia, se entiende que este artículo ha quedado derogado.
- **Art. 2.3.2.5. Régimen básico de los usos e intervenciones:** Este artículo es el fundamental de la sección y, como ya se ha dicho, su contenido puede mantenerse entendiéndolo como normas de aplicación directa. Ello supone suprimir de los textos toda referencia al planeamiento de desarrollo. Así pues, habría que introducir los siguientes cambios de redacción de los párrafos de este artículo:
- a) El párrafo 1 ha de decir: “El uso principal en todos los ámbitos adscritos a estas categorías de ARH es el de conservación, orientado preferentemente hacia la preservación natural”.
 - b) El párrafo 2 ha de decir: “Serán usos secundarios los comprendidos en los siguientes grupos de usos genéricos”, y a continuación los textos actuales de los dos guiones.
 - c) El párrafo 3 se mantiene en su redacción actual..
 - d) El párrafo 4 ha de decir: “Se prohíbe toda intervención que pudiera suponer alteraciones del relieve original del terreno, de los ecosistemas asociados al mismo o degradación de sus valores naturales. En el caso de los barrancos, además, todas aquellas que pudieran producir disminución de sus caudales o deterioro de la

²¹ Que se limita a identificar las disposiciones del PIOT que han quedado suprimidas por la LSENPC.

calidad de sus aguas. En todo caso se prohíben específicamente las siguientes intervenciones”, y a continuación los textos actuales de los seis guiones.

- **Art. 2.3.2.6. Criterios de gestión:** Este artículo es una mera recomendación a las administraciones para que velen por la protección de los valores de las ARH de protección ambiental 1. Dado su carácter ha de suprimirse de las Normas, sin perjuicio de que se incorpore en otro documento del PIOT.
- **Art. 2.3.3.1. Definición:** Al igual que el 2.3.2.1, este artículo se limita a definir cuáles son las ARH de protección ambiental 2 y las dos subcategorías que comprenden. Si bien por su contenido los dos párrafos que lo conforman tienen carácter explicativo, se entiende que deben mantenerse por ser textos necesarios para la correcta aplicación de las normas sustantivas de esta sección.
- **Art. 2.3.3.2. Criterios de delimitación:** Cabe repetir lo ya expuesto en relación al artículo 2.3.2.2. Así pues, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.
- **Art. 2.3.3.3. Objetivos:** Este artículo enuncia los objetivos que se plantean en la delimitación y ordenación de las ARH de protección ambiental 2, contenido que no tiene carácter de aplicación directa (ni siquiera de norma directiva, como se indica) sino explicativo o justificativo. Por tanto, se entiende que debe suprimirse de las Normas, sin perjuicio de que se traslade a otro documento del PIOT.
- **Art. 2.3.3.4. Criterios para el desarrollo de la ordenación:** Este artículo señala las disposiciones que debe contener el planeamiento que establezca la ordenación de los terrenos adscritos a estas ARH, en desarrollo del régimen básico de esta sección. Como ya se ha dicho, no cabe exigir al planeamiento (en particular al urbanístico) que desarrolle el régimen normativo del PIOT. Pero además, tampoco podrían imponerse las determinaciones que dicho planeamiento ha de contener al respecto. En consecuencia, se entiende que este artículo ha quedado derogado.
- **Art. 2.3.3.5. Régimen básico de los usos e intervenciones:** Este artículo es el fundamental de la sección y, como ya se ha dicho, su contenido puede mantenerse entendiéndolo como normas de aplicación directa. Ello supone suprimir de los textos toda referencia al planeamiento de desarrollo. Así pues, habría que introducir los cambios de redacción procedentes en los párrafos de este artículo tal como se ha señalado en relación al artículo 2.3.2.5.
- **Art. 2.3.3.6. Criterios de gestión:** Este artículo es una mera recomendación a las administraciones para que velen por la protección de los valores de las ARH de protección ambiental 2. Dado su carácter ha de suprimirse de las Normas, sin perjuicio de que se incorpore en otro documento del PIOT.
- **Art. 2.3.4.1. Definición:** Al igual que el 2.3.2.1, este artículo se limita a definir cuáles son las ARH de protección ambiental 3, estableciendo una división en dos categorías: costeras y marinas. Tal como se ha

señalado en relación con el artículo 1.1.1.3, deben suprimirse las ARH marinas. En consecuencia, pese a su carácter explicativo y debido a que se trata de un texto necesario para la correcta aplicación de las normas sustantivas, el párrafo 1 ha de mantenerse, mientras que el párrafo 2 debe cambiar su redacción por la siguiente: "Las ARH de protección ambiental 3 quedan conformadas por una sola categoría, denominada áreas costeras, que corresponden a la franja terrestre en la que la influencia marina define directamente las características ecológicas del territorio".

- **Art. 2.3.4.2. Criterios de delimitación:** Cabe repetir lo ya expuesto en relación al artículo 2.3.2.2. Así pues, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.
- **Art. 2.3.4.3. Objetivos:** Este artículo enuncia los objetivos que se plantean en la delimitación y ordenación de las ARH de protección ambiental 3, contenido que no tiene carácter de aplicación directa (ni siquiera de norma directiva, como se indica) sino explicativo o justificativo. Por tanto, se entiende que debe suprimirse de las Normas, sin perjuicio que se traslade a otro documento del PIOT.
- **Art. 2.3.4.4. Criterios para el desarrollo de la ordenación:** Este artículo, en relación a las áreas costeras, se limita a establecer la obligatoriedad de desarrollar la ordenación de las mismas mediante los planes territoriales parciales de ordenación del litoral. Toda vez que la remisión a estos planes no se ha entendido incompatible con la nueva Ley, en principio cabría admitirse el contenido de este artículo. No obstante:
 - a) El párrafo 1 es una mera justificación sobre la necesidad de ordenar detalladamente los espacios litorales, sin contenido normativo concreto. Por tanto, se entiende que debe suprimirse de las Normas y, en todo caso, trasladarse a otro documento del PIOT.
 - b) El párrafo 2 establece la obligatoriedad de formular los PTO de ordenación litoral, limitando usos e intervenciones en tanto éstos no estén aprobados. Tiene pues un carácter normativo claro y, por tanto, se entiende que puede mantenerse.
 - c) El párrafo 3 se entiende derogado, toda vez que se refiere a las áreas marinas.
 - d) El párrafo 4 se entiende derogado porque también se refiere a las áreas marinas.
 - e) El contenido de los párrafo 5, 6, 7 y 8 tiene el carácter de instrucciones a los planes de desarrollo por lo que se considera que no tiene cabida en las Normas y debería, en todo caso, trasladarse a otro documento del PIOT.
 - f) El párrafo 9 se limita a una referencia a la Ley de Costas que (además de ser obsoleta) es redundante, por lo que se entiende que debe suprimirse de las Normas.
- **Art. 2.3.4.5. Régimen básico de los usos e intervenciones:** Este artículo es el fundamental de la sección y, como ya se ha dicho, su contenido puede mantenerse entendiéndolo como normas de aplicación

directa. Ello supone suprimir de los textos toda referencia al planeamiento de desarrollo. Así pues, habría que introducir los cambios de redacción procedentes en los párrafos de este artículo tal como se ha señalado en relación al artículo 2.3.2.5.

- **Art. 2.3.4.6. Criterios de gestión:** Este artículo es una mera recomendación a las administraciones para que velen por la protección de los valores de las ARH de protección ambiental 2. Dado su carácter ha de suprimirse de las Normas, sin perjuicio de que se incorpore en otro documento del PIOT.

2.6. Secciones 5ª y 6ª del Capítulo 3: Áreas de Protección Económica

Como ya se ha expuesto en el epígrafe 2.4 al valorar el artículo 2.3.1.2, las definiciones que el PIOT establece de las ARH de Protección Económica son congruentes con las letras b) y c) del artículo 99.1 LSENPC, por lo que debe entenderse que la delimitación de las mismas no es incompatible con la nueva Ley. En cambio, también puede afirmarse que las ARH de protección económica delimitadas por el PIOT, atendiendo a su justificación y a la extensión de los recintos (que cubren la mayor parte de la superficie insular de medianías y costa), no se corresponden con las reservas estratégicas necesarias para la actividad agropecuaria, a las que se refiere el artículo 96.2.g) de la nueva Ley. Por tanto, si bien no se puede sostener que las ARH de protección económica contradigan directamente la LSENPC y, por tanto, han de mantenerse vigentes, se ha de ser consciente que ello implica que sus delimitaciones pasan a ser vinculantes, lo que supondrá un fuerte condicionamiento a la potestad municipal de clasificación del suelo rústico que, probablemente, no se encuentra amparada en la relevancia insular del destino agrario de muchos de los recintos del plano del PIOT. Por tanto, si bien la Disposición Derogatoria de la Ley no autoriza a entender que las ARH de protección económica han quedado derogadas, conviene resaltar la urgencia de proceder a la revisión de sus delimitaciones en el marco de la nueva Ley. Expuestas las anteriores consideraciones, se pasa a valorar la compatibilidad de cada artículo de esta sección con la Ley.

- **Art. 2.3.5.1. Definición:** Este artículo se limita a definir cuáles son las ARH de protección económica 1 y 2. Si bien por su contenido los dos párrafos que lo conforman tienen carácter explicativo²², se entiende que deben mantenerse por ser textos necesarios para la correcta aplicación de las normas sustantivas de esta sección.
- **Art. 2.3.5.2. Criterios de delimitación:** Este artículo establece los criterios con los que el planeamiento debe delimitar, con base en los recintos del plano de distribución básica de los usos del PIOT, cada una de las ARH de protección económica 1 o 2. Tal como está redactado, es incompatible con la LSENPC. Podría sostenerse que cabría mantener su contenido interpretándolo como los criterios con los que los planes generales deben justificar los reajustes que pudieran hacer de los recintos de estas ARH delimitados por el PIOT, de acuerdo a lo señalado en el artículo 99.2 LSENPC. Ahora bien, dicha interpretación exigiría, además de varias supresiones de frases, modificar la redacción del

²² Aunque se les asigna la clave D de norma directiva.

párrafo 1, alteraciones al contenido que se entienden que van más allá del alcance de esta propuesta²³. En consecuencia, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.

- **Art. 2.3.5.3. Objetivos:** Este artículo enuncia los objetivos que se plantean en la delimitación y ordenación de las ARH de protección económica 1 y 2, contenido que no tiene carácter de aplicación directa (ni siquiera de norma directiva, como se indica) sino explicativo o justificativo. Por tanto, se entiende que debe trasladarse de las Normas a otros documentos del PIOT.
- **Art. 2.3.5.4. Criterios para el desarrollo de la ordenación:** Este artículo señala las disposiciones que debe contener el planeamiento que establezca la ordenación de los terrenos adscritos a estas ARH, en desarrollo del régimen básico de esta sección. Como ya se ha dicho, no cabe exigir al planeamiento (en particular al urbanístico) que desarrolle el régimen normativo del PIOT. Pero además, tampoco podrían imponerse las determinaciones que dicho planeamiento ha de contener al respecto. En consecuencia, se entiende que este artículo ha quedado derogado.
- **Art. 2.3.5.5. Régimen básico de los usos e intervenciones:** Si bien la delimitación de los recintos que se califican como ARH de protección económica encuentra amparo en la nueva Ley, dado que los mismos han de ser categorizados como suelos rústicos de protección agraria, se entiende que no procede que el PIOT establezca ningún régimen básico de usos a ser desarrollado por los planes municipales (o de ENP). Tan sólo cabría admitir esa regulación sobre los usos e intervenciones en aquellos ámbitos que hubieran sido delimitados como reservas estratégicas agrarias, en razón de su relevancia insular, como puede sostenerse para las ARH ambientales pero no para éstas. De otra parte, el régimen básico de los usos e intervenciones viene ya establecido por la Ley, En consecuencia, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado.
- **Art. 2.3.5.6. Criterios de gestión:** Este artículo comprende recomendaciones a las administraciones sobre sus políticas de actuación en las ARH de protección económica 1 y 2. Dado su carácter ha de suprimirse de las Normas, sin perjuicio de incorporarlo en otro documento del PIOT.
- **Art. 2.3.6.1. Definición:** Al igual que el 2.3.5.1, este artículo se limita a definir cuáles son las ARH de protección económica 3. Si bien por su contenido tiene carácter explicativo, se entiende que debe mantenerse por ser necesario para la correcta aplicación de las normas sustantivas de esta sección.
- **Art. 2.3.6.2. Criterios de delimitación:** Cabe repetir lo ya expuesto en relación al artículo 2.3.5.2. Así pues, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.
- **Art. 2.3.6.3. Objetivos:** Este artículo enuncia los objetivos que se plantean en la delimitación y ordenación de las ARH de protección

²³ Que se limita a identificar las disposiciones del PIOT que han quedado suprimidas por la LSENPC.

económica 3, contenido que no tiene carácter de aplicación directa (ni siquiera de norma directiva, como se indica) sino explicativo o justificativo. Por tanto, se entiende que debe suprimirse de las Normas, sin perjuicio que se traslade a otro documento del PIOT.

- **Art. 2.3.6.4. Criterios para el desarrollo de la ordenación:** Este artículo señala las disposiciones que debe contener el planeamiento que establezca la ordenación de los terrenos adscritos a estas ARH, en desarrollo del régimen básico de esta sección. Como ya se ha dicho, no cabe exigir al planeamiento (en particular al urbanístico) que desarrolle el régimen normativo del PIOT. Pero además, tampoco podrían imponerse las determinaciones que dicho planeamiento ha de contener al respecto. En consecuencia, se entiende que este artículo ha quedado derogado.
- **Art. 2.3.6.5. Régimen básico de los usos e intervenciones:** Cabe repetir en relación a este artículo lo ya dicho sobre el 2.3.5.5. Ha de entenderse, por tanto, que ha quedado derogado.
- **Art. 2.3.6.6. Criterios de gestión:** Cabe repetir lo ya dicho respecto del artículo 2.3.5.6. Por tanto, ha de suprimirse de las Normas, sin perjuicio de que se incorpore en otro documento del PIOT.

Analizados los artículos que conforman las secciones 5ª y 6ª, resulta que, en la práctica, ha de suprimirse por completo el régimen normativo de las ARH de Protección Económica, aunque se mantenga el plano en el que se delimitan los recintos adscritos a estas ARH. Ello significa que las delimitaciones del PIOT de los terrenos de protección económica son ahora vinculantes (sin perjuicio de los ajustes que puedan admitirse en los trazados) y, por tanto, los restantes instrumentos de planeamiento –y muy en especial los planes generales municipales– vendrán obligados a categorizarlos como suelos rústicos de protección agraria. Ahora bien, el establecimiento de los correspondientes regímenes normativos sobre los usos y las intervenciones corresponderá a cada plan, cumpliendo el básico señalado en la propia LSENPC.

2.7. Sección 7ª del Capítulo 3: Áreas de Protección Territorial

Las áreas de protección territorial delimitadas por el PIOT comprenden “los terrenos que en el modelo de ordenación territorial no ostentan una vocación específica que exija la protección de sus valores naturales o productivos, ni forman parte del sistema de núcleos urbanos o de equipamientos insulares ...”. De esta definición (artículo 2.3.7.1) resulta con absoluta claridad que la delimitación de estos recintos no está amparada por la Ley, ya no sólo por no estar comprendida en ninguna de las determinaciones que se señalan expresamente como contenido de los PIO, sino, sobre todo, por ser ámbitos que no se justifican en razones de relevancia insular. De hecho, toda vez que en la metodología de elaboración del PIOT se planteó la división exhaustiva de la Isla en ARH, las de Protección Territorial fueron justamente aquéllas residuales, las que no obedecían a ninguna finalidad concreta de ordenación.

Por tanto, se entiende que la entrada en vigor de la LSENPC ha supuesto la derogación de las delimitaciones de las ARH de Protección Territorial del PIOT (plano de distribución de los usos) y consiguientemente

también de la totalidad de la sección 7ª del Capítulo 3 del Título II de las Normas, dedicadas justamente a la regulación de los terrenos adscritos a estas ARH.

2.8. Sección 8ª del Capítulo 3: Áreas de Interés Estratégico

Las áreas de interés estratégico se corresponden con los ámbitos que ostentan un papel estratégico en el Modelo de Ordenación Territorial del PIOT, por estar destinados a albergar equipamientos o infraestructuras de nivel de servicio insular. Así pues, la delimitación y el establecimiento de cuantas determinaciones de ordenación sean necesarias y/o convenientes está plenamente amparado por la nueva Ley (artículo 96.2.e: "Determinación y localización de los sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés supramunicipal").

No obstante, ha de verificarse que todos los ámbitos adscritos a estas ARH corresponden efectivamente con sistemas generales y/o equipamientos estructurantes supramunicipales, según los define la LSENPC (artículo 98). A estos efectos, debe tenerse en cuenta que existe una estrecha relación entre las ARH de Interés Estratégico y los ámbitos de las Operaciones Singulares Estructurantes (OSE). Así, los seis recintos delimitados como ARH de Interés Estratégico presentan las siguientes correspondencias:

- a) El del Aeropuerto Tenerife Norte es casi coincidente con el ámbito de la OSE "Aeropuerto de Los Rodeos y Entorno" (hay unas pequeñas partes de la OSE que están adscritas a ARH urbanas).
- b) El del Puerto de Santa Cruz ocupa la parte central de la OSE "Puerto y Frente Marítimo de Santa Cruz-El Rosario" (los extremos Norte y Sur de esa OSE están adscritos a otras ARH).
- c) El del Complejo Ambiental de residuos de Arico se corresponde exactamente con el ámbito de la OSE del mismo nombre.
- d) El que comprende el Aeropuerto del Sur y su entorno junto con el Polígono Industrial de Granadilla y el Puerto queda incluido dentro del ámbito de la OSE "Plataforma Logística del Sur de Tenerife", ocupando la casi totalidad de su superficie.
- e) El que comprende los terrenos por debajo de la TF-47 entre los núcleos de Playa de San Juan y Alcalá es casi coincidente con el ámbito de la OSE "Puerto y Centro de Servicios de Fonsalía".
- f) El último recinto adscrito a las ARH de Interés Estratégico no se corresponde con el ámbito de ninguna OSE, sino con el "Complejo Insular de Deportes del Motor", calificado como sistema general deportivo insular en el artículo 2.1.3.5 y recogido en el plano del Modelo de Ordenación Territorial con el número 14.

Así pues, todos los recintos adscritos a ARH de Interés Estratégico se corresponden con lo que en la terminología de la nueva Ley se consideran sistemas generales supramunicipales y, por tanto, son compatibles con aquélla. A partir de esta compatibilidad general, se procede a continuación a revisar cada una de las disposiciones contenidas en esta Sección de las Normas:

— **Art. 2.3.8.1. Definición:** Este artículo se limita a definir las ARH de interés estratégico y a señalar que las que coinciden con OSEs tienen

establecidas sus condiciones de desarrollo en el capítulo 4. Si bien tiene carácter explicativo, se entiende que debe mantenerse por tratarse de textos necesarios para la correcta aplicación de las normas sustantivas de esta sección.

- **Art. 2.3.8.2. Criterios de delimitación:** Este artículo establece los criterios con los que el planeamiento de desarrollo debe delimitar, en desarrollo de los recintos del plano de distribución básica de los usos del PIOT, cada una de las distintas subcategorías de las ARH de protección ambiental 1. Tal como está redactado, es incompatible con la LSENPC. Podría sostenerse que cabría mantener su contenido interpretándolo como los criterios con los que los planes generales deben justificar los reajustes que pudieran hacer de los recintos de estas ARH delimitados por el PIOT, de acuerdo a lo señalado en el artículo 99.2 LSENPC. Ahora bien, dicha interpretación exigiría, además de varias supresiones de frases, modificar la redacción del párrafo 1, alteraciones al contenido que se entienden que van más allá del alcance de esta propuesta. En consecuencia, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.
- **Art. 2.3.8.3. Objetivos:** Este artículo enuncia los objetivos que se plantean en la delimitación y ordenación de las ARH de interés estratégico, contenido que no tiene carácter de aplicación directa (ni siquiera de norma directiva, como se indica) sino explicativo o justificativo. Por tanto, se entiende que debe suprimirse de las Normas, sin perjuicio que se traslade a otro documento del PIOT.
- **Art. 2.3.8.4. Criterios para el desarrollo de la ordenación:** Este artículo se limita a señalar que en las ARH de interés estratégico que coincidan con OSE la ordenación debe desarrollarse a través de los planes territoriales correspondientes de acuerdo con las condiciones establecidas en el capítulo 4. Esta determinación es compatible con la nueva Ley (que admite que el PIO remita la ordenación de los sistemas generales) por lo que, a pesar de ser reiterativa con lo ya dicho en el párrafo 2 del artículo 2.3.8.1, debe mantenerse.
- **Art. 2.3.8.5. Régimen básico de los usos e intervenciones:** A diferencia de los artículos equivalentes de las ARH previas, en éstas el PIOT simplemente establece una prohibición genérica (con excepciones precisas) de actuaciones hasta que se formulen los planes territoriales. Se entiende que es una regulación de aplicación directa (aunque tenga la clave D) y compatible con la LSENPC, por lo que debe mantenerse en su redacción actual.
- **Art. 2.3.8.6. Criterios de gestión:** Este artículo es una mera recomendación a las administraciones para que velen por la preservación de estas ARH y para que asuman el impulso de su desarrollo. Dado que carece de contenido dispositivo concreto, se entiende que ha de suprimirse de las Normas, sin perjuicio de que se incorpore a otro documento del PIOT.

2.9. Sección 9ª del Capítulo 3: Áreas Urbanas

Las áreas urbanas se corresponden con los terrenos en cuyo interior ha de consolidarse el sistema de núcleos urbanos principales. La finalidad

básica de la delimitación por el PIOT de estas ARH era establecer directrices para la clasificación de suelo urbano y urbanizable. Es claro que en el marco de la LSENPC no cabe con carácter general y exhaustivo delimitar desde el Plan Insular los terrenos que han de ser urbanos o urbanizables ni establecer instrucciones que el planeamiento municipal debe observar en estas clasificaciones urbanísticas. Ello no obstante, sí sería admisible (y compatible con la Ley) la delimitación de ámbitos concretos, correspondientes a actuales ARH urbanas que se justifiquen por su relevancia insular; estos ámbitos habrían de corresponder en principio a las reservas turísticas, industriales o dotacionales que se consideren estratégicas, pero no a núcleos residenciales. Ahora bien, estos ámbitos de carácter urbano y relevancia insular vienen delimitados en otras determinaciones del PIOT (que corresponden al Título III de las Normas y planos vinculados), por lo que no es necesario mantener su calificación como ARH urbanas²⁴. Además, mantener como ARH urbanas aquellos recintos no residenciales y de relevancia insular carecería de efectos reales porque el régimen normativo de esta Sección quedaría igualmente derogado, toda vez que no procede que el PIOT contenga directrices sobre clasificación del suelo (de otra parte, si fueran de interés insular, la ordenación habría de corresponder a instrumentos de planeamiento territorial y no urbanístico, con lo cual tampoco procederían las actuales normas).

Por tanto, se entiende que la entrada en vigor de la LSENPC ha supuesto la derogación de las delimitaciones de las ARH urbanas del PIOT (plano de distribución de los usos) y consiguientemente también de la totalidad de la sección 9ª del Capítulo 3 del Título II de las Normas.

2.10. Sección 10ª del Capítulo 3: Áreas de expansión urbana

El PIOT adscribe a esta categoría de ARH "los ámbitos donde deben ubicarse preferentemente las operaciones de expansión de los núcleos que conforman el sistema de núcleos urbanos del Modelo de Ordenación Territorial, a partir del momento en que se hagan insuficientes las áreas urbanas delimitadas". Si la nueva Ley no ampara que el Plan Insular delimite las áreas urbanas, por las mismas razones tampoco puede condicionar al planeamiento municipal los terrenos a los que debe dirigir sus crecimientos una vez agotadas aquéllas. En este caso, además, todos los recintos se vinculan a núcleos residenciales, lo que cuestiona aún más su validez como determinación insular.

Por tanto, se entiende que la entrada en vigor de la LSENPC ha supuesto la derogación de las delimitaciones de las ARH de expansión urbana del PIOT (plano de distribución de los usos) y consiguientemente también de la totalidad de la sección 10ª del Capítulo 3 del Título II de las Normas.

2.11. Sección 11ª del Capítulo 3: Matriz de Usos

Esta sección consiste en una tabla distribuida en tres páginas más una cuarta de observaciones. Las filas de la tabla corresponden a los distintos usos definidos por el PIOT en el capítulo IV del Título I de las

²⁴ Por ejemplo, el polígono industrial de Güímar se delimita como polígono industrial insular, no siendo necesario que se considere también ARH urbana.

Normas. Las columnas corresponden a cada una de las categorías de ARH establecidas por el PIOT. De tal modo, en cada celda se indica el régimen básico de admisibilidad de cada uso en cada una de las ARH. A estos efectos, se señalan cinco tipos de regímenes básicos: principal, secundario, incompatible, regulación remitida y no corresponde. Esta tabla se daba cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del Decreto 6/1997, de 21 de enero, por el que se fijan las directrices formales para la elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. En esa norma se señalaba que "una vez definida la zonificación ... se relacionará cada una de las zonas con distintos usos y actividades, determinando a través de una matriz de usos su compatibilidad o incompatibilidad con el fin de evitar la alteración de los recursos naturales". Tal como se ha concluido en el epígrafe 4 de la parte A de este Informe-Propuesta, Por tanto, es obligado concluir que, aunque no expresamente, dicho Decreto ha de considerarse derogado y, por tanto, no es obligatorio que el PIOT, en su calidad de PORN, contenga esta matriz de usos.

Ahora bien, que no sea obligatoria no significa que la matriz esté derogada; se pasa a continuación a valorar su compatibilidad con la LSENPC:

- a) Al haber quedado derogados los regímenes de las ARH de protección económica, protección territorial, urbanas y expansión urbana, han de suprimirse consecuentemente las respectivas columnas de la tabla, quedando en principio solamente 4 columnas (las de las tres ARH de protección ambiental y la ARH de Interés estratégico).
- b) De otra parte, han de suprimirse las celdas en las que se asigna el régimen de regulación remitida al uso correspondiente (salvo que haya previsto un plan territorial).

Las consideraciones anteriores implican que de las 561 celdas que tiene la actual matriz podrían mantenerse con contenido sustantivo vigente 95, apenas el 17%. Reducir a tan mínimo contenido la matriz hace que ésta pierda su sentido original. A ello hay que añadir que el contenido normativo de la matriz es redundante, toda vez que no es sino una simplificación esquemática y mnemotécnica de la regulación que se recoge en la sección del ARH correspondiente. Teniendo en cuenta todo ello, se entiende que lo procedente es desplazarla de las Normas.

2.12. Capítulo 4: Las Operaciones Singulares Estructurantes (OSE)

Las Operaciones Singulares Estructurantes (OSE) definidas por el PIOT consisten en ámbitos concretos de la Isla en las que se plantea la ejecución de un conjunto de actuaciones para la consolidación de elementos que se consideran fundamentales en la articulación del Modelo de Ordenación Territorial. De acuerdo con la definición genérica que establece el PIOT no cabe discutir que es perfectamente compatible con la LSENPC que el planeamiento insular defina este tipo de elementos y proponga su ejecución. No obstante, ha de verificarse si en cada una de las 11 OSE concretas que define el PIOT se cumplen los requisitos genéricos de la definición. Así, se entiende que cada OSE debe tener por objeto la consolidación de sistemas generales o equipamientos estructurantes

supramunicipales y, por tanto, estar incluida en alguno de los elementos relacionados en el párrafo 1 del artículo 98 de la Ley. A continuación se procede a revisarlas individualizadamente:

1. Frente Marítimo de Santa Cruz-El Rosario: El objetivo de esta OSE es el reacondicionamiento del frente marítimo del área metropolitana, potenciando su carácter de equipamiento urbano y los usos recreativos ligados al litoral (artículo 2.4.2.1.1). Ciertamente, la presencia del Puerto de Santa Cruz y la previsión de usos de naturaleza dotacional y recreativa, hacen que no pueda entenderse que la Operación sale de las competencias del Cabildo.
2. Plataforma Logística del Sur de Tenerife: Esta Operación es la que más claramente responde a las competencias del Plan Insular en el marco de la nueva Ley. Los usos de la misma comprenden el aeropuerto del SUR (y los vinculados al mismo), el nuevo Puerto Insular de Granadilla y el polígono industrial de mayor relevancia de la Isla. Es por tanto incuestionable su plena compatibilidad.
3. Puerto y polígono de servicios de Fonsalía: Vinculado al futuro puerto de conexión con las islas occidentales, el objetivo de esta Operación es consolidar el ámbito de servicios al mismo y, aprovechando esta centralidad, generar un núcleo de servicios que cualifique el ámbito comarcal. También en este caso nos encontramos dentro de los supuestos relacionados en la Ley por lo que ha de concluirse que esta OSE es compatible con la misma.
4. Aeropuerto de Los Rodeos y entorno: Aunque menos ambiciosa que la segunda, esta OSE corresponde también a una infraestructura de indudable nivel supramunicipal y, por lo tanto, también ha de concluirse que es compatible con la nueva Ley. No obstante, al igual que se señaló en relación a la OSE del Frente Marítimo de Santa Cruz-El Rosario, podría cuestionarse la extensión del ámbito territorial, y en especial los suelos vinculados a los caminos de San Lázaro y de la Villa, muy consolidados con usos residenciales. En todo caso, ha de repetirse lo ya dicho respecto en el punto 1: la posible modificación del ámbito de esta OSE debe resolverse en otro procedimiento.
5. Estructuración urbana del entorno de Cabo Blanco: Esta Operación pretendía dar acogida a las intensas necesidades de crecimiento residencial que se están produciendo en la zona, de forma ordenada y con visión de conjunto, mediante la configuración de un núcleo capaz de insertar ordenadamente las demandas residenciales y de ser centro de servicios y actividad urbana de las comarcas de Abona y del suroeste. Se trata pues de una actuación de naturaleza residencial, con importante dirección pública (vivienda social). Sin perjuicio de las consideraciones que puedan hacerse sobre la relevancia insular de la demanda residencial en el Sur, no puede sostenerse que la nueva Ley considere esta materia como propia del Plan Insular y, de hecho, no aparece entre los usos susceptibles de conformarse como sistemas generales o equipamientos estructurantes. En consecuencia, ha de entenderse que el PIOT no puede definir actuaciones residenciales y, por tanto, esta OSE ha quedado derogada.

6. Complejo de equipamientos de salud del Valle de La Orotava: La finalidad de la Operación es el desarrollo de un complejo que oferte servicios sanitarios, de salud y belleza dirigidos a segmentos específicos de la demanda turística. Con la implantación de este complejo se pretende, ante todo, contribuir a la rehabilitación del Valle de La Orotava como área turística. Un complejo de equipamientos de esta naturaleza encaja dentro de la relación de equipamientos estructurantes, por lo que esta OSE sería compatible con la Ley. Sin embargo, el PIOT simplemente la define, sin delimitar su ámbito territorial, lo que remite al Plan Territorial Parcial de Ordenación de la Comarca. Ahora bien, es muy discutible que el PIOT pueda establecer que en una comarca ha de implantarse un equipamiento estructurante pero remitiendo su delimitación a un plan territorial (distinto sería que remitiera su ordenación, siempre que hubiera definido el ámbito); ello, además, supondría una situación de indefinición jurídica muy poco congruente con los criterios de la nueva Ley²⁵. Pero es que además, como ya se ha argumentado en el epígrafe 1.4 de esta parte B, se ha concluido que los planes comarcales previstos en el PIOT han quedado asimismo derogados. Por todo ello, ha de concluirse que esta OSE ha quedado derogada.
7. Complejo ambiental de residuos de Arico: El objetivo principal de la Operación es el desarrollo de un complejo ambiental en el cual se centralice y resuelva al más largo plazo posible el tratamiento y gestión de los residuos generados en la isla. Obviamente, se trata de una infraestructura de indudable carácter insular que encaja perfectamente en la relación del artículo 98.1 de la Ley, por lo que no ofrece dudas su absoluta compatibilidad con la misma.
8. Complejo de servicios del Macizo Central: El objetivo principal de la operación es dotar al Parque Nacional del Teide de unas instalaciones acordes con su importancia que se constituyan en elemento fundamental para ordenar el intenso uso público de este espacio natural, mejorando sus servicios y facilitando la compatibilidad entre las visitas y la preservación de sus altísimos valores ambientales. Un complejo de este tipo tiene pleno encaje en la relación de sistemas generales y equipamientos estructurantes, por lo que ha de concluirse que es compatible con la nueva Ley.
9. Complejo de equipamientos de Rasca: Esta Operación responde a dos determinaciones que la nueva Ley prevé que contenga el PIOT: de un lado la definición de reservas para actividades estratégicas para el desarrollo insular, en este caso, vinculadas al turismo (artículo 96.2.g) y, de otro, la definición de equipamientos estructurantes complementarios al turismo y vinculados al ocio (artículo 98.1.e). Por tanto, ha de concluirse que la misma es compatible con la LSENPC.

²⁵ Que el PIOT diga que hay que implantar un equipamiento estructurante y no señale su ámbito equivale a no decir nada. Al fin y al cabo, en cualquier momento se puede tramitar una modificación del Plan Insular para, con la debida justificación, incorporar a la ordenación nuevos sistemas generales o equipamientos estructurantes supramunicipales.

10. Rehabilitación urbana de Los Cristianos: Como su propio nombre indica, la finalidad genérica de la operación es la rehabilitación de este núcleo, cuyas infraestructuras y equipamientos dan muestras de obsolescencia. La rehabilitación de un área urbana no encaja claramente en la propia definición de OSE del PIOT, sino que más se asemeja a una línea o política de actuación que ha de continuarse en el tiempo. Pero, sobre todo, no puede sostenerse que la rehabilitación de suelos urbanos consolidados sea una de las competencias del planeamiento insular en la nueva Ley²⁶ sino claramente de los instrumentos de planeamiento municipal (o de los planes de modernización de áreas turísticas). En consecuencia, se entiende que esta OSE es contraria a la LSENPC y, por lo tanto, ha quedado derogada.
11. Rehabilitación urbana del Puerto de La Cruz: Es igualmente válida la argumentación del punto anterior. Por tanto, esta OSE es contraria a la LSENPC y ha quedado derogada.

Quedan pues derogadas cuatro Operaciones Singulares Estructurantes (Cabo Blanco, Equipamientos de Salud del Valle de La Orotava, y las dos de rehabilitación urbana) y, por tanto, han de suprimirse dichas secciones de este capítulo 4 del Título II de las Normas del PIOT (las secciones 6ª, 7ª, 11ª y 12ª). Ahora bien, para determinar si el resto de secciones se mantienen en su estado actual, es necesario revisar en detalle sus contenidos. Como todas tienen una misma estructura en cuanto a su articulado, se pasa a continuación a revisar el contenido de cada uno de los artículos de forma genérica y, si hubiera especificidades relevantes, se entran en consideraciones particulares sobre la OSE de que se trate:

- **Art. 2.4.n.1. Objetivos**: Pese a que estos artículos tienen carácter explicativo, se entiende que los mismos son necesarios para la correcta aplicación de las normas sustantivas de cada OSE y, en especial, han de tenerse en cuenta en la formulación de los correspondientes planes territoriales que desarrollen la ordenación de cada una de ellas. De otra parte, no se han observado contenidos específicos para alguna de las siete OSE que sean contradictorios con la LSENPC. Por tanto, se entiende que todos estos artículos deben mantenerse en su redacción actual.
- **Art. 2.4.n.2. Ámbito territorial**: Estos artículos describen el ámbito territorial de cada OSE, complementándose con el esquema gráfico al principio de la respectiva sección. La delimitación del ámbito es una determinación imprescindible tanto para la formulación del plan territorial correspondiente como para la aplicación del régimen transitorio en tanto éste se desarrolla. Sin perjuicio de lo ya señalado sobre la posible conveniencia de revisar algunas de las delimitaciones, no se aprecia en ninguno de los siete artículos contradicciones con la LSENPC, por lo que se entiende que deben mantenerse en sus redacciones actuales.

²⁶ Ni siquiera en el anterior marco legal, prueba de ello es que el propio PIOT remitía el desarrollo de la ordenación a planes urbanísticos.

- **Art. 2.4.n.3. Planeamiento de desarrollo:** En todas las OSE que se mantienen vigentes el PIOT prevé la elaboración de un Plan Territorial de Ordenación Parcial²⁷ para el desarrollo de su ordenación; tal determinación es compatible con la nueva Ley. Estos artículos se limitan a establecer dicha remisión de la ordenación, por lo que han de entenderse plenamente compatibles con la LSENPC.
- **Art. 2.4.n.4. Criterios de ordenación:** Como indica su nombre, estos artículos contienen los criterios que deben respetar los planes de desarrollo de cada OSE en la ordenación de la misma. El contenido de los mismos tiene, por tanto, carácter directivo de aplicación sobre dichos planes y, en consecuencia, se entiende que, si bien deben mantenerse, han de desplazarse de las Normas.
- **Art. 2.4.n.5. Criterios de gestión y desarrollo:** Respecto de estos artículos cabe señalar lo mismo que para los anteriores: tienen carácter directivo y, por tanto, han de desplazarse de las Normas.
- **Art. 2.4.n.6. Efectos de la declaración de Operación Singular Estructurante:** En todas las OSE que se mantienen vigentes²⁸, el PIOT contiene un artículo final en el que regula, con carácter de aplicación directa, el régimen jurídico sobre los terrenos incluidos en su ámbito en tanto no se lleve a cabo la correspondiente Operación (y, en particular, en tanto no se apruebe el planeamiento de desarrollo). Obviamente, se trata de un contenido imprescindible para garantizar que puedan realizarse las OSE, sin que el mismo presente ninguna contradicción con la nueva Ley. En consecuencia, se entiende que todos estos artículos deben mantenerse en sus redacciones actuales.

Por último, identificadas las cuatro OSE que quedan derogadas y revisados los contenidos de los artículos normativos de las siete restantes, queda referirse a la Sección 1ª de este capítulo:

- **Art. 2.4.1.1. Definición de las Operaciones Singulares Estructurantes:** Es un artículo de carácter explicativo; no obstante, se entiende que es necesario para la correcta interpretación y aplicación de las normas de aplicación sobre cada una de las OSE que se mantienen vigentes. Por tanto, se entiende que todos estos artículos deben mantenerse en su redacción actual.
- **Art. 2.4.1.2. Relación de las Operaciones Singulares Estructurantes:** Este artículo se limita a relacionar cuáles son las OSE delimitadas por el PIOT. A pesar de que no es imprescindible, se entiende que es conveniente mantenerlo para una mejor aplicación del capítulo normativo. En todo caso, de la relación habrán de suprimirse las OSE 5 (Estructuración urbana del entorno de Cabo Blanco), 6 (Complejo de Equipamientos de Salud del Valle de La Orotava), 10 (Rehabilitación urbana de Los Cristianos) y 11 (Rehabilitación urbana de El Puerto de la Cruz).

²⁷ La OSE del Complejo de Servicios del Macizo Central es una excepción, pues en ella el desarrollo de la ordenación debe ser llevado a cabo por el PRUG del ENP. En todo caso, esta remisión también ha de entenderse compatible con la Nueva Ley.

²⁸ Salvo en la primera del Frente Marítimo de Santa Cruz-El Rosario.
 C/ Las Macetas, s/n. Los Majuelos
 Pabellón Insular Santiago Martín 3ª Planta
 38108. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife

- **Art. 2.4.1.3. *Ámbito territorial de las Operaciones Singulares Estructurantes***: Este artículo otorga a los planes de desarrollo la capacidad de ajustar los ámbitos territoriales delimitados por el PIOT. Se trata de una determinación genérica, compatible con la LSENPC y que, por tanto, se entiende que debe mantenerse en su actual redacción.
- **Art. 2.4.1.4. *Planeamiento y ejecución de las Operaciones Singulares Estructurantes***: Este artículo señala los criterios genéricos con los que debe llevarse a cabo la ordenación y ejecución de las OSE. Dado su carácter directivo, se entiende que, si bien deben mantenerse, ha de suprimirse de las Normas y pasarse a otro documento del PIOT.
- **Art. 2.4.1.5. *Criterios de programación de las Operaciones Singulares Estructurantes***: Como en el caso del artículo anterior, se trata de criterios genéricos, en este caso respecto de la programación de las OSE (que, además, tienen el carácter de recomendaciones). Por ello, se entiende también que ha de suprimirse de las Normas y pasarse a otro documento del PIOT.

3. Título III: Disposiciones Sectoriales

3.1. Capítulo 1: Protección de los recursos naturales y culturales (salvo la sección 7ª)

Las disposiciones que tienen por objeto la protección de los recursos naturales se justifican en razón de la naturaleza de PORN del Plan Insular. De otra parte, las relativas a la protección de los recursos naturales estarían legitimadas como parte del contenido del PIOT siempre que se refieran a elementos para los que se justifique su relevancia insular. En base a estas consideraciones básicas se pasa a revisar el contenido de este capítulo a fin de valorar su adecuación a la LSENPC.

- **Sección 1ª: *Generalidades***: Los tres artículos que conforman esta primera sección tienen en su totalidad carácter explicativo, sin que se considere que tales textos son necesarios para la aplicación de las normas sustantivas de las siguientes secciones. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.1.b) de la LSENPC, se entiende que esta sección 1ª debe suprimirse de las Normas y pasarse a otros documentos del PIOT.
- **Artículo 3.1.2.1. *Deberes generales de los titulares privados sobre la protección de los recursos***: Este artículo relaciona una serie de obligaciones genéricas que deben cumplir los agentes privados en relación a los recursos naturales y culturales. Sin perjuicio de que su carácter genérico pueda cuestionar la procedencia de que estas disposiciones sean propias de un Plan Insular, lo cierto es que no se observa en su contenido ninguna contradicción con la LSENPC, por lo que se entiende que puede mantenerse su redacción actual.
- **Artículo 3.1.2.2. *Deberes generales de la Administración Pública en la protección de los recursos***: Este artículo relaciona una serie de obligaciones genéricas que deben cumplir los departamentos de la Administración Pública en relación a los recursos naturales y culturales. Cabe señalar las mismas observaciones que respecto del artículo

anterior. De otra parte, hay que hacer notar que todas las determinaciones de este artículo se califican como directivas, lo que se considera erróneo pues tienen el mismo alcance que las del artículo anterior que, correctamente, aparecen como de aplicación directa. Así pues, se entiende que este artículo puede mantenerse su redacción actual.

– **Artículo 3.1.2.3. Prevención de impactos sobre el medio ambiente y los recursos:** El párrafo 1 de este artículo es una directiva sobre el planeamiento en general señalando que, cuando proceda, deben aplicarse los procedimientos de evaluación de impactos previstos en la legislación vigente. Como ya se ha señalado, no compete al PIOT establecer disposiciones sobre el contenido de los planes y mucho menos sobre la obligación o no de los procedimientos de evaluación de impacto, ya que todos estos aspectos son materia de ley. El párrafo 2 establece el denominado “principio de no actuación” como directriz de ordenación territorial. Ahora bien, tampoco puede el PIOT imponer el criterio de actuación que ha de seguirse como resultado de la evaluación ambiental de una actuación, ya que esto está regulado con carácter general en la legislación medioambiental. En conclusión, se entiende que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.

– **Artículo 3.1.2.4. Directrices y criterios básicos para la gestión de los Espacios Naturales Protegidos:** Este artículo se limita a señalar que, al establecer las determinaciones de gestión, los planes de los ENP deben basarse en las directrices y criterios básicos del Documento III del estudio Base XXV-A del PIOT. Ahora bien, toda vez que se trata de una disposición con carácter de directriz a instrumentos de planeamiento, se entiende que, aun manteniendo su contenido, debe suprimirse de las Normas y pasarse a otros documentos del PIOT.

– **Artículo 3.1.3.1. Disposiciones generales (sobre el tratamiento y gestión de los residuos):** En este artículo se explica el contenido de la sección 3ª que tiene por objeto establecer “las bases para una gestión eficaz de residuos en Tenerife”. Lo cierto es que, como se analiza detalladamente en los siguientes párrafos, la mayor parte de las disposiciones de esta sección son contenidos más propios de normas legales que del PIOT. En todo caso, los tres primeros párrafos de este artículo son meramente explicativos sin que se entiendan necesarios para la aplicación de ninguna disposición sustantiva y, por lo tanto, deben suprimirse de las Normas y pasarse, si procede, a otros documentos del PIOT. En cuanto al párrafo 4 consiste en una directriz para que el Cabildo convenga con los sectores generadores de residuos un código de conducta; dado su carácter, también debe suprimirse de las Normas y pasarse a otros documentos del PIOT.

– **Artículo 3.1.3.2. Obligaciones y derechos de los generadores de residuos:** En este artículo contiene una serie de disposiciones carentes de cualquier contenido territorial que, por su naturaleza, son propias de normas legales o reglamentarias y no de instrumento de planeamiento. De hecho, no existe en ninguno de los artículos de la LSENPC que regulan los contenidos de los Planes Insulares ningún texto que ampare

que el PIOT pueda establecer disposiciones como "todo aquel que genere residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas" y las restantes. Por tanto, se entiende que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.

– **Artículo 3.1.3.3. Gestión de los residuos urbanos:** La valoración de la adecuación de este artículo a la nueva Ley debe hacerse diferenciadamente para cada uno de sus cinco párrafos:

a) Los párrafos 1 y 2 definen los residuos urbanos domiciliarios y los residuos especiales. La definición de los primeros sería necesaria para la aplicación del párrafo 3, pero éste ha de entenderse derogado (como se justifica en la siguiente letra). En cuanto a la definición de los segundos, carece de aplicación normativa sustantiva. En consecuencia, dado su carácter explicativo innecesario para la aplicación de disposiciones sustantivas, estos dos párrafos han de entenderse derogados.

b) El párrafo 3 establece la opción de recogida selectiva así como que la recogida de los residuos urbanos domiciliarios en la vía pública se hará en las condiciones adecuadas. La obligación de la recogida selectiva viene establecida legalmente y no es competencia del planeamiento territorial; de otra parte, tampoco lo es el regular la forma en que debe organizarse el servicio. Así pues, también este párrafo debe entenderse derogado.

c) El párrafo 4 es una disposición directiva que ordena a las administraciones competentes conformar una red de puntos limpios en Tenerife. Por su carácter directivo, se entiende que esta disposición debe suprimirse de las Normas y pasarse a otros documentos del PIOT.

d) El párrafo 5 consiste en instrucciones al planeamiento para la localización de los puntos limpios en áreas urbanas. El contenido de este párrafo sí es de naturaleza territorial; ahora bien, para mantenerse en el PIOT debe corregirse para concretar que tales instrucciones se dirigen al PTEO de Residuos, desde el supuesto que tales infraestructuras son de relevancia insular. Además, habrá de suprimirse de las Normas y pasarse a otros documentos del PIOT.

– **Artículo 3.1.3.4. Gestión de residuos industriales:** Todas las disposiciones de este artículo (6 párrafos) tienen por objeto la regulación de las actividades de los generadores de residuos industriales, imponiéndoles condiciones y sin que ninguna de ellas tenga contenido territorial. Así pues, tal como ya se ha argumentado, se entiende que por su naturaleza estas disposiciones no son propias del contenido y alcance del PIOT y han de entenderse derogadas.

– **Artículo 3.1.3.5. Gestión de residuos sanitarios:** Respecto de este artículo cabe repetir lo ya dicho para el anterior y, por tanto, la conclusión es idéntica: ha de entenderse derogado.

– **Artículo 3.1.3.6. Desarrollo de la ordenación y gestión de los residuos:** Los dos primeros párrafos de este artículo establecen que el instrumento que desarrolle la ordenación de los residuos será el PTEO de Residuos y que, en base al mismo, se han de articular los

pertinentes programas de actuación. El contenido de estas disposiciones es compatible con la LSENPC, pero debe de desplazarse de las Normas. De otra parte, los contenidos de los dos últimos párrafos no son propios de un instrumento de planeamiento y, por lo tanto, se entiende que han quedado derogados.

– **Artículo 3.1.4.1. Protección frente a la contaminación atmosférica:** Los tres primeros párrafos, aun siendo normas de aplicación directa, tienen por contenido la imposición de condiciones al ejercicio de actividades potencialmente contaminantes sobre la atmósfera. Ahora bien, por su naturaleza estas condiciones no son propias de un instrumento de planeamiento sino que deben regularse a través de una ley o reglamento sectorial; en consecuencia, deben entenderse derogados. El cuarto párrafo, de otra parte, tiene carácter directivo, estableciendo que la Administración competente (sin especificar cuál) desarrollará un programa de control y saneamiento atmosférico. Este contenido sí es propio del PIOT (en especial en razón de su naturaleza de PORN); no obstante, debe suprimirse de las Normas y pasarse a otros documentos del PIOT.

– **Artículo 3.1.4.2. Protección frente al ruido:** Los dos párrafos de este artículo contienen disposiciones genéricas que por su naturaleza son competencia de leyes o reglamentos sectoriales y no de un instrumento de planeamiento. En consecuencia, se entiende que están derogadas.

– **Artículo 3.1.4.3. Protección frente a la contaminación lumínica:** El primer párrafo es una disposición competencia de la legislación sectorial, como expresamente reconoce el propio texto. El segundo párrafo impone a las administraciones competentes la obligación elaborar un banco de datos territorializado de la atmósfera en la isla en base al cual elaborar un programa de actuación, materia esta que no compete al Cabildo. Por lo tanto, se entiende que este artículo ha quedado derogado.

– **Artículo 3.1.4.4. Protección de los suelos:** Este artículo consiste en instrucciones a las administraciones competentes para que lleven a cabo acciones encaminadas a proteger de la contaminación los suelos tinerfeños. Ahora bien, al margen de ser directrices que no han de estar en las Normas, no compete al Cabildo tales actuaciones, por lo que el artículo debe entenderse derogado.

– **Artículo 3.1.4.5. Protección de las aguas terrestres:**

a) El párrafo 1 impone la exigencia de autorización administrativa a las actividades susceptibles de contaminar los recursos hídricos. Toda vez que el PIOT no es competente para imponer tales autorizaciones, ha de entenderse que este párrafo ha quedado derogado.

b) El párrafo 2 asigna al Consejo Insular de Aguas en coordinación con la Consejería competente del Gobierno de Canarias, el control y vigilancia de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Tampoco corresponde al PIOT asignar competencias a departamentos de la administración, por lo que este párrafo también debe entenderse derogado.

- c) El párrafo 3, tras declarar la protección general de todos los cursos continuos de aguas superficiales existentes, prohíbe cualquier intervención que implique la disminución de sus caudales. En principio, esta disposición puede entenderse amparada por la Ley, máxime en razón de la naturaleza PORN del PIOT.
- d) El párrafo 4 impone la obligatoriedad de elaborar los estudios necesarios para definir los caudales ecológicos de aplicación en Tenerife. Este contenido ha de formar parte del Plan Hidrológico, como se deduce de lo señalado en el siguiente párrafo 5. En consecuencia, deberá suprimirse de las Normas y pasarse a otro documento del PIOT. Sin embargo, la segunda parte de este párrafo establece unos límites concretos al aprovechamiento de aguas superficiales y/o subterráneas que operan con el carácter de normas de aplicación directa en tanto el Plan Hidrológico no fije los caudales ecológicos. Este contenido debe mantenerse en las Normas.
- e) Los párrafos 5 y 6 establecen que el desarrollo de la ordenación y de la regulación de la protección de los recursos hídricos de Tenerife se acometerá mediante la actualización del Plan Hidrológico Insular y se señalan instrucciones que deben observarse en la elaboración de este instrumento de planeamiento. Por su carácter directivo, estas disposiciones deben suprimirse de las Normas y pasarse a otro documento del PIOT.

– **Artículo 3.1.4.6. Protección de las aguas marinas:** El contenido de este artículo, al margen de la procedencia o no de sus disposiciones, sería de aplicación sobre el mar circundante. Toda vez que, tal como se ha argumentado en el epígrafe 1.1 de esta parte B, las aguas circundantes no forman parte del ámbito del PIOT, este artículo ha de entenderse derogado.

– **Artículo 3.1.5.1. Protección de la biodiversidad:** El primer párrafo es una mera declaración sobre la importancia de proteger la “rica biodiversidad de la isla”, sin ningún alcance dispositivo y que, por lo tanto, debe suprimirse de las Normas y trasladarse a otro documento del PIOT. El segundo párrafo se refiere a los planes de desarrollo y, por tanto, también debe pasarse a otro documento.

– **Artículo 3.1.5.2. Régimen de protección de la flora y fauna silvestre:**

- a) El párrafo 1 establece “con carácter general” la protección de la flora y fauna autóctonas. Pese a su poca concreción, se entiende que esta disposición es compatible con el alcance que la Ley atribuye al PIOT, máxime dada su naturaleza de PORN. Sin embargo, la segunda parte del párrafo (desde “El alcance de la protección” hasta el final), es una remisión genérica a todos los instrumentos de planeamiento (incluyendo los municipales) que el PIOT no puede hacer. En consecuencia, esta frase debe ser suprimida.
- b) El párrafo 2 también es una disposición excesivamente genérica que, no obstante, no se considera que contradice la LSENPC y, por lo tanto, puede mantenerse.

- c) El párrafo 3 prohíbe una serie de actividades concretas. Si bien estas prohibiciones carecen de contenido territorial, se entiende que las mismas son compatibles con la Ley en razón de la naturaleza del PIOT como Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
- d) El párrafo 4 regula los supuestos en los que la Administración puede autorizar las intervenciones prohibidas en el párrafo anterior. Se trata de un contenido complementario de aquél y, por lo tanto, cabe aplicarle la misma conclusión: es compatible con la LSENPC y debe mantenerse.
- e) El párrafo 5 impone que toda intervención sobre la flora y la fauna obtenga autorización previa y regula el contenido documental de la solicitud de ésta. Tales aspectos no pueden ser regulados por un instrumento de planeamiento y, por lo tanto, este párrafo ha de considerarse derogado.
- f) Finalmente, el párrafo 6 ordena que se prevenga especialmente la introducción de especies foráneas y exóticas. Si bien esta disposición parece más propia de una disposición legal, se entiende que es compatible con la Ley en razón de la naturaleza del PIOT como Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y, por tanto, puede mantenerse.

– **Artículo 3.1.5.3. Criterios para la conservación de la diversidad de las especies:** Este artículo remite con carácter genérico a todos los instrumentos de planeamiento (incluyendo los municipales) la conservación y mejora de la diversidad, lo que el PIOT no puede hacer. Pero es que incluso señala las determinaciones (aunque lo llama criterios de conservación) que deben contener al respecto los planes, lo que tampoco es competencia del Plan Insular. En consecuencia, se entiende que este artículo ha quedado derogado.

– **Artículo 3.1.5.4. Actuaciones para la protección de la flora y fauna silvestres:**

- a) El párrafo 1 remite el desarrollo de la regulación tanto a disposiciones específicas de la Administración Ambiental como a los planes, incluyendo expresamente los urbanísticos. De otra parte, se hace alusión al Plan Territorial Especial de Ordenación de los Recursos del Medio Marino que, como ya se ha señalado, ha quedado derogado. Así pues, se entiende que, para que este párrafo sea compatible con la nueva Ley debe suprimirse desde “y urbanísticos” hasta el final.
- b) El párrafo 2 establece que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Medio Marino profundice en el estudio de las especies de la flora y fauna marina. Toda vez que dicho Plan ha quedado derogado, así debe entenderse también este artículo.
- c) El párrafo 3 se refiere a la observación de cetáceos, actividad que se realiza en el mar y, por tanto, fuera del ámbito del PIOT. Consecuentemente también este párrafo ha de entenderse derogado.
- d) El párrafo 4 encomienda al Cabildo la formulación de los planes de protección que correspondan de especies incluidas en el Catálogo de

las amenazadas. No compete al PIOT, sino a la pertinente regulación legal, asignar al Cabildo la formulación de tales planes de protección.

- e) Finalmente, el párrafo 5 establece que “la inclusión en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias de una especie, subespecie o población cuyo hábitat se localice en Tenerife exigirá la formulación de Programas de Recuperación de la misma”. De nuevo, el PIOT establece obligaciones fuera de su ámbito competencial, por lo que este párrafo ha de entenderse también derogado.

– Artículo 3.1.6.1. Disposiciones generales, fines y objetivos (sobre la protección del paisaje):

- a) El párrafo 1 tiene carácter explicativo innecesario para la aplicación de las normas; por tanto se entiende que debe suprimirse de las Normas y desplazarse, en su caso, a la Memoria.
- b) El párrafo 2 señala unos objetivos generales para la ordenación del paisaje (haciendo referencia al artículo 3.1.1.1. que ha de suprimirse de las Normas). Son consideraciones genéricas sin alcance dispositivo por lo que el párrafo debe suprimirse de las Normas y pasarse a otro documento.
- c) El párrafo 3 define el concepto de “ámbitos territoriales de singular interés” que serían aquéllos a mejorar a través de planes, programas o proyectos de regeneración paisajística; y relaciona los que considera como tales (delimitándolos en un plano). Estos ámbitos no son exactamente “los paisajes representativos de la isla” que la nueva Ley establece que ha de identificar el PIOT, sino aquellos que requieren ser regenerados. Aun así, se entiende que esta determinación del PIOT es congruente con el mencionado contenido que establece la Ley (artículo 96.2.c). Por tanto, se propone mantenerla, si bien no se aportan normas de protección concretas.

– Artículo 3.1.6.2. Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje: La carencia de contenido dispositivo concreto para la protección del paisaje en el PIOT se resuelve remitiéndolo a un Plan Territorial Especial²⁹. Ahora bien, la ordenación del paisaje y el establecimiento de medidas para su protección no es uno de los objetos exclusivos que la Ley prevé para los Planes territoriales especiales (artículo 120.1). De otra parte, el artículo 97.3 permite diferir a otros instrumentos de ordenación territorial algunos contenidos del Plan Insular entre los cuales no se incluye la ordenación del paisaje. Todo ello lleva a concluir que, en principio³⁰, ha de entenderse que el PIOT debería incluir entre su propio contenido las determinaciones precisas de ordenación paisajística sin que pueda remitirlas a un plan territorial específico; por lo tanto, se considera que este artículo ha quedado derogado. Ha de señalarse que la derogación de esta remisión obliga a

²⁹ El PTEO del Paisaje fue aprobado definitivamente por el Cabildo Insular de Tenerife en sesión plenaria del 27 de junio de 2014. Dicho Plan fue anulado mediante Sentencia del TSJ de Canarias de 14 de abril de 2014.

³⁰ Podría defenderse que cabe remitir la ordenación del paisaje a un Plan Territorial (que habría de ser parcial) siempre que se justificara detallada y específicamente que la especial importancia y complejidad de ese contenido provoca un retraso grande en la redacción del Plan Insular. Pero, obviamente, tal justificación no existe.

reconsiderar el contenido que en materia de ordenación paisajística ha de tener el propio PIOT.

3.2. Sección 7ª del Capítulo 1: Sobre la protección del patrimonio cultural

Como a continuación se justifica detalladamente para cada artículo, se propone la supresión completa de esta Sección de las Normas del PIOT; la mayoría de sus disposiciones son incompatibles con la Ley, y las restantes deben pasarse a otros documentos del PIOT. La principal razón de tan amplia derogación se encuentra en que el PIOT optó por basar su estrategia de protección del patrimonio cultural de la Isla en los catálogos municipales, de modo que la mayor parte del contenido de esta sección consiste en imponer condiciones al ejercicio de la competencia municipal en esta materia, lo cual –como se ha argumentado abundantemente a lo largo de este informe– no está amparado por la nueva Ley. Probablemente, habría sido mejor que el PIOT definiera el concepto legal de “patrimonio histórico insular” de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y, basándose en la obvia relevancia insular del mismo, estableciera disposiciones sustantivas al respecto (por ejemplo, la formación del Catálogo Insular).

– Artículo 3.1.7.1. Disposiciones generales y definiciones:

- a) El párrafo 1 explica la finalidad de esta sección 7ª; se trata de un contenido innecesario para la aplicación normativa, por lo que debe suprimirse y desplazarse a otro documento del PIOT.
- b) El párrafo 2 contiene las definiciones de tres términos que ya aparecen en la legislación vigente sobre patrimonio histórico. Dada su innecesidad y su carácter explicativo, se propone suprimir este párrafo de las Normas y desplazarse a otro documento del PIOT.

– Artículo 3.1.7.2. Plan Territorial Especial de Ordenación del Patrimonio Cultural: El PIOT prevé la elaboración de este instrumento de desarrollo con el objeto de identificar y establecer los criterios para la protección de los bienes inmuebles que integran el patrimonio cultural de Tenerife, así como fomentar el conocimiento y acceso de los ciudadanos a los mismos. Sin embargo, cabe repetir respecto de este Plan las mismas consideraciones señaladas previamente sobre el Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje y, por tanto, concluir que es incompatible con la nueva Ley. En consecuencia, debe entenderse que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.

– Artículo 3.1.7.3. Protección de los recursos culturales:

- a) El párrafo 1 es una mera explicación sin contenido dispositivo, por lo que se entiende que debe suprimirse de las Normas y desplazarse a otro documento del PIOT.
- b) El párrafo 2 establece que los instrumentos de planeamiento (y se refiere especialmente a los urbanísticos) deben incluir relaciones detalladas de todos los inmuebles o conjuntos de valor patrimonial identificados en su información urbanística. Como ya se ha dicho, el PIOT no es competente para regular el contenido de los instrumentos de planeamiento, por lo que este párrafo debe entenderse derogado.
- c) El párrafo 3 obliga a incluir en Catálogos todos los inmuebles que por sus características singulares sean objeto de preservación. Esta

determinación tampoco es competencia del Plan Insular sino de un texto legal. De hecho, la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, establece en su artículo 15 los instrumentos en que deben incluirse los bienes integrantes del patrimonio histórico canario (y no sólo en Catálogos). En consecuencia, este párrafo ha de entenderse derogado.

- d) El párrafo 4 regula la documentación que debe contener todo bien inmueble que se catalogue. De nuevo el PIOT excede su alcance competencial al regular el contenido de un instrumento. Así pues, también este párrafo ha de entenderse derogado.
- e) El párrafo 5 impone una forma de estructuración de los Catálogos (para separar los inmuebles “especialmente amenazados”) que no puede exigirse desde el PIOT. Por tanto, también este párrafo ha de entenderse derogado.
- f) El párrafo 6 establece que “la inclusión de un inmueble en un Catálogo formulado de forma independiente a los planes, conllevará la modificación del planeamiento urbanístico que resulte incompatible con el régimen normativo establecido por el Catálogo”. Sin perjuicio de que ésta es una conclusión obvia, tampoco compete al PIOT regular los efectos de la aprobación de los Catálogos. Así pues, también este párrafo ha de entenderse derogado.
- g) El párrafo 7 obliga a incorporar en los planes o en los catálogos normativas específicas de protección sobre cada uno de los inmuebles catalogados. De nuevo se trata de una exigencia de contenidos a los instrumentos de planeamiento para la que el PIOT no es competente. Así pues, también este párrafo ha de entenderse derogado.
- h) Finalmente, el párrafo 8 regula los supuestos en los que cabe desarrollar la normativa de protección a través de la formulación de planes especiales de protección. No corresponde al Plan Insular sino a la Ley regular la procedencia de los planes especiales de protección que, además, son instrumentos urbanísticos. En consecuencia, también este párrafo debe entenderse derogado.

– **Artículo 3.1.7.4. Criterios para la catalogación de los bienes inmuebles por el planeamiento:** En este artículo se señalan, en primer lugar (párrafos 1 y 2), los criterios con los que los que debe determinarse el interés patrimonial de inmuebles o conjuntos a efectos de su catalogación. La Ley no ampara que el Plan Insular establezca estos criterios que, por otra parte, condicionarían sin la debida justificación del interés insular, el ejercicio de la competencia municipal de protección del patrimonio. En segundo lugar (párrafo 3) establece las categorías con las que debe clasificar el planeamiento (municipal) los elementos que incluya en sus catálogos. Tampoco corresponde al PIOT imponer las categorías de protección que, además, ya vienen establecidas en la Ley. Por último (párrafo 4), se obliga a que en la protección integral de los inmuebles se incluya, al menos, la totalidad de la parcela en la que se encuentra el edificio, prohibiéndose las segregaciones salvo autorización insular. Si bien es razonable que la protección integral de un inmueble alcance también a la parcela, establecer esta norma con carácter general no se justifica desde el

interés insular y supondría un condicionamiento ilegítimo de las competencias municipales. Así pues, a la vista de lo expuesto, se entiende que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.

– **Artículo 3.1.7.5. Área de influencia de los bienes inmuebles:** En este artículo se establece la necesidad de que los planes (urbanísticos) delimiten áreas de influencia de los inmuebles catalogados a efectos de su protección y se señalan los criterios con que debe hacerse. De nuevo el PIOT vuelve a regular contenidos de instrumentos de planeamiento, algo para lo que no está amparado por la Ley; en consecuencia, ha de entenderse derogado este artículo.

– **Artículo 3.1.7.6. Obras e intervenciones en los elementos catalogados:** El objeto de este artículo es la regulación de las obras que pueden realizarse en edificios catalogados (en particular en los de protección integral), así como imponer al planeamiento la obligación de regular las condiciones para la ejecución de las obras. El primer aspecto es contenido propio de Ley (de hecho, se recoge en la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias), mientras que el segundo tampoco compete al Plan Insular al tratarse de la regulación del contenido de planes urbanísticos. Por tanto, este artículo se entiende que ha quedado derogado.

– **Artículo 3.1.7.7. Conservación de los bienes inmuebles:**

a) El párrafo 1 consiste en la declaración de una línea de actuación (incentivar las intervenciones destinadas a la rehabilitación de los inmuebles catalogados para alojar usos compatibles con sus valores) que, al carecer de contenido dispositivo directo, debe suprimirse de las Normas y desplazarse a otro documento del PIOT.

b) El párrafo 2 establece una serie de disposiciones que afectan directamente al contenido del derecho de propiedad de los inmuebles catalogados (derechos y deberes de los propietarios de los mismos). La regulación de estos aspectos es claramente competencia de Ley (incluso de la legislación básica estatal) y exceden en mucho a las competencias del PIOT. En consecuencia, ha de entenderse que este párrafo está derogado.

– **Artículo 3.1.7.8. Conservación de los bienes inmuebles:** Este artículo contiene una serie de disposiciones todas ellas relativas a acciones que el PIOT propone que lleve a cabo el Cabildo para contribuir a la protección del patrimonio cultural. Nada obsta a que las mismas formen parte del contenido del PIOT, pero deben suprimirse de las Normas y desplazarse a otro documento del PIOT.

3.3. Capítulo 2: Dotaciones

El objeto de este capítulo de las Normas Sectoriales del PIOT es la ordenación de los equipamientos públicos, estableciéndose disposiciones independientemente de su nivel jerárquico o de servicio. En el marco de la nueva Ley, el Plan Insular puede y debe establecer determinaciones de ordenación sobre los elementos dotacionales que se califiquen como equipamientos estructurantes de interés supramunicipal; sin embargo, la competencia de localización y ordenación de aquéllos que no alcancen ese

nivel jerárquico corresponde al planeamiento urbanístico. Así, según lo establecido en el artículo 1.4.2.3.-3 del PIOT, ha de entenderse que sólo los usos dotacionales de 1º nivel pueden ser objeto de regulación. En base a este criterio básico, se pasa a continuación a valorar la adecuación de las disposiciones de este capítulo.

– **Sección 1ª. Generalidades:** El contenido de los dos artículos de esta sección tiene en su totalidad carácter explicativo, que no es necesario para la aplicación de las disposiciones sustantivas del capítulo. En consecuencia, se propone suprimir esta sección y desplazarse a otro documento del PIOT.

– **Artículo 3.2.2.1. Criterios generales (de coordinación de política dotacional):** En este artículo se enuncian una serie de criterios bastante genéricos y obvios que deben presidir la actuación de la Administración Pública en materia dotacional. Dado que no son disposiciones de aplicación directa, deben suprimirse de las Normas y desplazarse a otro documento del PIOT como criterios para la actuación del Cabildo en su política dotacional (no para el conjunto de las administraciones).

– **Artículo 3.2.2.2. Criterios de ubicación e integración funcional:** Los criterios enunciados serían compatibles con la nueva Ley siempre que se aclarase que son de aplicación sobre las dotaciones de primer nivel jerárquico o de interés supramunicipal. En consecuencia, se propone mantener este artículo pero deberá corregirse añadiendo después de cada término "dotaciones" (en los tres párrafos) de la expresión "de primer nivel jerárquico".

– **Artículo 3.2.2.3. Condiciones de diseño:** Respecto de este artículo hay que repetir lo ya dicho para el anterior. Por tanto, se propone mantenerlo pero añadiendo después de cada término "dotaciones" (en los dos párrafos) de la expresión "de primer nivel jerárquico".

– **Artículo 3.2.3.1. Configuración de las redes dotacionales:** Los dos primeros párrafos de este artículo son una descripción de la configuración en red de las dotaciones, que es una explicación sin alcance normativo; por tanto, deben suprimirse de las Normas y desplazarse a otro documento del PIOT. El tercer párrafo, en cambio, asigna a los planes la posibilidad de precisar las definiciones y clasificación de los usos dotacionales, redundando en lo ya señalado en el capítulo 4º del Título Primero; dicha determinación no es procedente y debe considerarse derogada.

– **Artículo 3.2.3.2. Localización de las dotaciones:**

a) El párrafo 1 establece los criterios de localización que deben respetar los planes (también los urbanísticos) en la localización de las dotaciones. El PIOT solo puede establecer criterios de localización respecto de las dotaciones de primer nivel jerárquico, y para ser aplicados por planes territoriales. En consecuencia, se propone mantener este párrafo pero añadiendo el término "territoriales" después de la palabra "planes" de la primera frase, y suprimiendo los guiones que corresponden a las dotaciones de segundo y tercer nivel.

- b) Por los mismos motivos, el contenido del párrafo 2 puede mantenerse pero añadiendo el término "territorial" después de la expresión "Las figuras de planeamiento", y la expresión "de primer nivel jerárquico" después de la palabra "dotaciones".
- c) Igualmente, el párrafo 3 se entiende válido siempre que se aclare que los criterios son de aplicación sólo a las dotaciones de primer nivel jerárquico. Por tanto, deberá añadirse y la expresión "de primer nivel jerárquico" después de la palabra "dotaciones".
- d) Por último, hay que hacer la misma observación al párrafo 4, de modo que se propone mantenerlo pero añadiendo la expresión "de primer nivel jerárquico" después de la palabra "dotaciones".

– **Artículo 3.2.3.3. Dimensionamiento de las dotaciones:** Este artículo establece criterios respecto al dimensionamiento de las dotaciones que sólo pueden admitirse para las de primer nivel jerárquico. Por tanto, se proponen las correcciones que se indican a continuación:

- a) En el párrafo 1 se debe añadir la expresión "de primer nivel jerárquico" después de la palabra "dotaciones" de la primera frase. Además deberá suprimirse el primer guión, porque define el ámbito territorial de las dotaciones de nivel 1 por referencia a las de niveles inferiores, que no son competencia del PIOT.
- b) El párrafo 2 se entiende derogado. En primer lugar porque el PIOT no puede encargar a los departamentos gubernamentales competentes fijar dimensiones dotacionales y, en segundo, porque los planes territoriales pueden calificar inmuebles como dotaciones de primer nivel, pero no establecer dimensiones con carácter normativo genérico (y menos sobre las dotaciones municipales).
- c) El párrafo 3 también se entiende derogado, porque no corresponde al PIOT establecer que serán de aplicación los indicadores dimensionales contenidos en la legislación urbanística.
- d) El párrafo 4 también se entiende derogado, porque los estándares que establece son para tres tipos de dotaciones (espacios libres, deportivos y culturales) sin distinguir por nivel jerárquico, lo que supone que son de aplicación sobre dotaciones no supramunicipales.
- e) Por último, el párrafo 5 se propone mantenerlo pero añadiendo la expresión "de primer nivel jerárquico" después de "dotaciones y el término "territorial" después de "las figuras de planeamiento".

– **Artículo 3.2.4.1. Instrumentos de desarrollo (de la ordenación de las dotaciones):** En este artículo se señala que el desarrollo de los criterios de ordenación del presente capítulo deben desarrollarse a través de (1) instrucciones técnicas y disposiciones normativas sectoriales, (2) planes territoriales especiales de ordenación de las dotaciones, y (3) figuras de ordenación urbanística. No procede que el PIOT considere los primeros y los terceros como instrumentos de desarrollo de sus determinaciones. Hecha esta corrección, dado el carácter meramente explicativo de este artículo, se propone suprimirlo de las Normas y desplazarse a otro documento del PIOT.

- **Artículo 3.2.4.2. Planes dotacionales previstos por el PIOT:** En este artículo se señalan los planes territoriales especiales que el PIOT prevé para el desarrollo de la ordenación en materia de dotaciones. Como ya se expuso en el epígrafe 1.4 de esta parte B del informe, tales planes son compatibles con la nueva Ley. Aun así, habrán de corregirse las determinaciones que se establecen sobre cada uno de ellos suprimiendo toda referencia a las dotaciones que no sean de nivel supramunicipal. En todo caso, su contenido es de naturaleza directiva y debe desplazarse a otro documento del PIOT.

3.4. Capítulo 3: Infraestructuras

El objeto de este capítulo de las Normas Sectoriales del PIOT es la ordenación de las infraestructuras con la finalidad de adecuar progresivamente el soporte infraestructural a las necesidades de la isla, para proporcionar una base adecuada al desarrollo territorial y socioeconómico. Ahora bien, al igual que en el capítulo anterior, las determinaciones afectan a todas las infraestructuras, independientemente de su nivel jerárquico o de servicio. Como ya se ha dicho, en el marco de la nueva Ley, el Plan Insular puede y debe establecer determinaciones de ordenación sobre las infraestructuras que se califiquen como estructurantes de interés supramunicipal; sin embargo, la competencia de localización y ordenación de las que no alcancen ese nivel jerárquico corresponde al planeamiento urbanístico. A estos efectos, ha de entenderse que sólo las infraestructuras de 1º nivel (según lo que se establece en el artículo 1.4.2.4 del PIOT) pueden ser objeto de regulación. En base a este criterio básico, se pasa a continuación a valorar la adecuación de las disposiciones de este capítulo.

- **Sección 1ª. Generalidades:** El contenido de los dos artículos que componen esta sección tiene en su totalidad carácter explicativo, que no es necesario para la aplicación de las disposiciones sustantivas del capítulo. En consecuencia, se propone desplazar esta sección a otro documento del PIOT.
- **Artículo 3.3.2.1. Sobre la racionalización en la ejecución y uso de las infraestructuras:** En este artículo se enuncian una serie de criterios bastante genéricos que deben presidir la actuación de la Administración Pública en materia de infraestructuras. Dado que no son disposiciones de aplicación directa, deben suprimirse de las Normas y desplazarse a otro documento del PIOT como criterios para la actuación del Cabildo en su política dotacional (no para el conjunto de las administraciones).
- **Artículo 3.3.2.2. Sobre la integración paisajística y ambiental de las infraestructuras:** El contenido de este artículo sería compatible con la nueva Ley siempre que se aclarase que son de aplicación sobre las infraestructuras de primer nivel jerárquico o de interés supramunicipal. En consecuencia, se propone mantener este artículo pero deberá corregirse añadiendo, tanto en el título como en los dos párrafos, la expresión “de nivel supramunicipal” después del término “infraestructuras”.
- **Artículo 3.3.2.3. Sobre la integración funcional y territorial de las infraestructuras:** Procede la misma conclusión que respecto del

artículo anterior. En consecuencia, se propone mantener este artículo pero deberá corregirse añadiendo, tanto en el título como en los párrafos, la expresión "de nivel supramunicipal" después del término "infraestructuras". Por otra parte, el párrafo 4 obliga a tener en consideración las disposiciones legales y las limitaciones de las servidumbres aeronáuticas al elaborar planes de ordenación que pudieran afectar a los aeropuertos de la Isla. Sin cuestionar la innecesariedad de este precepto, para que sea compatible con la Ley han de suprimirse las palabras "y urbanística" y añadirse la palabra "territoriales" después de "planes".

– **Sección 3ª. Criterios para el desarrollo de la ordenación de las infraestructuras:** En esta sección se van estableciendo los criterios que deben tener en cuenta los instrumentos de planeamiento en la ordenación de los distintos tipos de infraestructuras (hidráulicas, de saneamiento, de energía, de telecomunicación, de tratamiento de residuos, viarias, de transporte, aeroportuarias y portuarias). Ninguna de las disposiciones de la Sección es de aplicación directa sobre actos de ejecución, sino instrucciones a los correspondientes planes; por tanto, han de suprimirse de las Normas y pasarse a otros documentos del PIOT. De otra parte, se plantean como criterios a tener en cuenta por cualquier plan, cuando sólo pueden dirigirse a los instrumentos de planeamiento territorial. Por consiguiente, al trasladar estos contenidos, cada uno de ellos debe vincularse a al Plan concreto (de los previstos por el PIOT) cuyo objeto es la ordenación del tipo correspondiente de infraestructuras de nivel supramunicipal (por ejemplo, el contenido del actual artículo 3.3.3.5. Criterios sobre la ordenación de las infraestructuras de telecomunicación, deberá vincularse a la sección del Programa de Actuación correspondiente al Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras de Telecomunicación).

– **Artículo 3.3.4.1. Alcance y contenido de esta sección (condiciones para la ejecución de las infraestructuras):** El primer párrafo de este artículo es una mera descripción del contenido de la sección por lo que, dado su carácter explicativo e innecesariedad, procede suprimirlo de las Normas y desplazarlo a otro documento del PIOT. El segundo párrafo plantea la posibilidad de que las condiciones contenidas en esta sección (en especial las de diseño) sean desarrolladas a través de Instrucciones Técnicas. Este instrumento de la antigua Ley ha desaparecido en la LSENPC, por lo que se entiende que el párrafo ha quedado derogado.

– **Artículo 3.3.4.2. Sobre integración paisajística, ambiental y funcional de los viarios:** Todo el contenido de este artículo es plenamente compatible con las competencias que la LSENPC asigna al Plan Insular, siempre que se aclare que las condiciones establecidas son de aplicación solo sobre los viarios de nivel supramunicipal. Por tanto, se propone mantenerlo pero cambiando el título del artículo por el de "Sobre integración paisajística, ambiental y funcional de los viarios de nivel supramunicipal"; asimismo, deberá añadirse la expresión "de nivel supramunicipal" después las palabras "vías", "viario" o "elementos viarios".

- **Artículo 3.3.4.3. Relación de los viarios con otros usos del territorio:** Cabe señalar lo mismo que respecto del artículo anterior. Por tanto, se propone mantenerlo pero añadiendo la expresión “de nivel supramunicipal” después de la palabra “viario” del título del y de “proyectos viarios” del 1º párrafo.
- **Artículo 3.3.4.4. Dimensionamiento y niveles de servicio de los viarios:** También se propone mantener este artículo pero añadiendo la expresión “de nivel supramunicipal” después de la palabra “viarios” del título del artículo y de “proyectos viarios” del primer párrafo; y, además, suprimiendo la expresión “de las Instrucciones Técnicas o” del segundo párrafo.
- **Artículo 3.3.4.5. Dimensionamiento y niveles de servicio de los viarios:** Por las mismas consideraciones señaladas para los artículos anteriores, se propone mantener este artículo pero añadiendo la expresión “de nivel supramunicipal” después de “las conducciones de servicio” del título del artículo y del primer párrafo; así como después de “las conducciones” del segundo párrafo.
- **Artículo 3.3.4.6. Condiciones particulares sobre las conducciones de energía eléctrica:** En este artículo, además de su actual contenido dispositivo, debe añadirse un tercer párrafo que diga que “las centrales extensivas de producción de energía eólica estarán prohibidas en las áreas calificadas como “incompatibles” del mapa eólico contenido entre los planos del PIOT. Este texto equivale a la nota 23 de la Matriz de Usos (sección 11ª del Capítulo 3 del Título II), que ha quedado derogada (véase epígrafe 2.11) en su conjunto, pero de la que debe mantenerse dicho contenido normativo. En consecuencia con lo dicho, se propone mantener este artículo pero cambiando su título que pasará a ser “Condiciones particulares sobre las instalaciones de energía supramunicipales”.

3.5. Capítulo 4: Usos primarios

- **Artículo 3.4.1.1. Generalidades, fines y objetivos sobre las actividades forestales y de conservación de la vegetación natural:** El contenido de este artículo tiene en su totalidad carácter explicativo y no es necesario para la aplicación de ninguna disposición sustantiva. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.
- **Artículo 3.4.1.2. Objeto, alcance y contenido (de la sección sobre actividades forestales):** Como el anterior, el contenido de este artículo tiene en su totalidad carácter explicativo y no es necesario para la aplicación de ninguna disposición sustantiva. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.
- **Artículo 3.4.1.3. Sobre revegetación de zonas agrarias abandonadas:** El primer párrafo de este artículo es una mera explicación que debe pasarse a la Memoria. Los párrafos 2 y 3 consisten en directrices para el desarrollo de la política ambiental insular, sin carácter dispositivo directo; en consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.

- **Artículo 3.4.1.4. Sobre los criterios de revegetación, repoblación forestal y tratamientos silvícolas:** Como en el artículo anterior, el contenido de éste consiste en directrices para el desarrollo de la política ambiental insular, sin carácter dispositivo directo; en consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.
- **Artículo 3.4.1.5. Sobre el patrimonio forestal:** También este artículo consiste en directrices para el desarrollo de la política ambiental y forestal de la Isla, sin carácter dispositivo directo; en consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.
- **Artículo 3.4.2.1. Generalidades, fines y objetivos de la ordenación (de las actividades agrícolas):** El contenido de este artículo tiene en su totalidad carácter explicativo y no es necesario para la aplicación de ninguna disposición sustantiva. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.
- **Artículo 3.4.2.2. Objeto, alcance y contenido (de la sección sobre actividades agrarias):** Como el anterior, el contenido de este artículo tiene en su totalidad carácter explicativo y no es necesario para la aplicación de ninguna disposición sustantiva. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.
- **Artículo 3.4.2.3. Sobre actuaciones en materia de comercialización:** El contenido de este artículo consiste en criterios a tener en cuenta en el desarrollo de la política agraria insular y carecen de alcance normativo de aplicación directa. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.
- **Artículo 3.4.2.4. Sobre fomento de la tecnificación agraria:** Ha de señalarse exactamente lo mismo que respecto del anterior artículo 3.4.2.3.
- **Artículo 3.4.2.5. Sobre la incidencia ambiental de las actividades agrarias:** Ha de señalarse exactamente lo mismo que respecto del anterior artículo 3.4.2.3.
- **Artículo 3.4.2.6. Sobre la incidencia ambiental de las actividades agrarias:** Ha de señalarse exactamente lo mismo que respecto del anterior artículo 3.4.2.3.
- **Artículo 3.4.2.7. Sobre el mantenimiento de paisajes agrícolas tradicionales:** Ha de señalarse exactamente lo mismo que respecto del anterior artículo 3.4.2.3.
- **Artículo 3.4.2.8. Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Agrícola:** Este artículo contiene varias instrucciones sobre el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Agrícola de Tenerife, uno de los instrumentos de desarrollo previstos por el PIOT para la ordenación de actividades económicas. Como ya se ha argumentado en el epígrafe 1.4 de esta parte B, la ordenación de actividades económicas como tales, por más que tengan relevancia sobre el territorio, no puede ser materia de un Plan Territorial Especial, toda vez que el artículo 120 LSENPC limita el objeto de éstos a asuntos concretos entre los que no están aquéllas. Tampoco la nueva Ley asigna al Plan Insular competencia para ordenar la actividad agrícola,

con la excepción de la delimitación y ordenación de los ámbitos que califique como reservas agrícolas (determinación que no contiene el PIOT actual). Tampoco existe actualmente ninguna disposición de la legislación sectorial (en materia de agricultura en este caso) que prevea la formulación de un planeamiento territorial con el objeto de ordenar la actividad en el territorio insular. Por tanto, ha de concluirse que la previsión del PIOT de formulación de este PTEO de la actividad agrícola es contraria a la LSENPC y, consiguientemente, este artículo debe entenderse derogado en su totalidad.

- **Artículo 3.4.3.1. Generalidades, fines y objetivos de la ordenación (de las actividades ganaderas):** El contenido de este artículo tiene en su totalidad carácter explicativo y no es necesario para la aplicación de ninguna disposición sustantiva. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.
- **Artículo 3.4.3.2. Objeto, alcance y contenido (de la sección sobre actividades ganaderas):** Como el anterior, este artículo tiene en su totalidad carácter explicativo y no es necesario para la aplicación de ninguna disposición. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.
- **Artículo 3.4.3.3. Sobre la modernización de las actividades ganaderas:** Este artículo contiene en criterios a tener en cuenta en el desarrollo de la política ganadera insular y carecen de alcance normativo de aplicación directa. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.
- **Artículo 3.4.3.4. Sobre actuaciones en materia de comercialización:** Ha de señalarse exactamente lo mismo que respecto del anterior artículo 3.4.3.3.
- **Artículo 3.4.3.5. Sobre salubridad de las explotaciones y eliminación de sus residuos:** Ha de señalarse exactamente lo mismo que respecto del anterior artículo 3.4.3.3.
- **Artículo 3.4.3.6. Normas básicas sobre las instalaciones ganaderas estabuladas:** Este artículo establece normas que serían de aplicación en la autorización de usos ganaderos estabulados (la concesión de una licencia de construcción o de inicio de actividad a una granja, por ejemplo). Las instalaciones ganaderas estabuladas son, en la nueva Ley, usos ordinarios. Por tanto, tal como se ha argumentado en el epígrafe 3.8 de la parte A de este Informe-propuesta, el Plan Insular no está legitimado para imponer condiciones para la admisibilidad de las instalaciones ganaderas con carácter genérico como se hace en este artículo³¹, ya que la competencia para hacerlo corresponde al planeamiento municipal. En consecuencia, se entiende que este artículo ha quedado derogado.
- **Artículo 3.4.3.7. Proyecto de explotación ganadera:** Este artículo establece que para autorizar la instalación o ampliación de una explotación ganadera ha de elaborarse un proyecto técnico y regula el

³¹ Se entiende que sí podría, en cambio, regular la admisibilidad de los usos ganaderos en ámbitos territoriales concretos delimitados en razón de su relevancia insular (por ejemplo, las reservas agrícolas o los Espacios Naturales Protegidos). Pero no es así como está planteado este artículo.

contenido el mismo. Como ya se ha señalado anteriormente, el Plan Insular no es competente para regular requisitos de tramitación administrativa. Consiguientemente, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado.

– **Artículo 3.4.3.8. Desarrollo de la ordenación sectorial de la ganadería:** Este artículo contiene varias instrucciones sobre el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Ganadera de Tenerife, uno de los instrumentos de desarrollo previstos por el PIOT para la ordenación de actividades económicas. Al respecto ha de repetirse lo ya dicho en relación al PTEO de la Actividad Agrícola (artículo 3.4.2.8) y, por lo tanto, concluir que este artículo debe entenderse derogado en su totalidad³².

– **Sección 4ª. Actividades pesqueras, marisqueras y acuícolas:** Si bien las actividades marisqueras y acuícolas pueden ejercerse también en el ámbito terrestre, lo cierto es que todo el contenido de esta sección se dirige a las aguas marinas circundantes de la Isla, previendo que el desarrollo del mismo se lleve a cabo por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Medio Marino de Tenerife (que ya se ha dicho que se entiende derogado). Por tanto, ha de entenderse que la sección completa ha quedado derogada al referirse a un espacio exterior al ámbito territorial del PIOT. En todo caso, aunque algún contenido de esta sección pudiera entenderse de aplicación en el interior del ámbito territorial del PIOT, al igual que las anteriores de este capítulo, sería una directriz para las políticas sectoriales que habría de desplazarse a otro documento del PIOT.

– **Artículo 3.4.5.1. Generalidades, fines y objetivos de la ordenación (de las actividades cinegéticas):** Este artículo tiene en su totalidad carácter explicativo y no es necesario para la aplicación de ninguna disposición. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.

– **Artículo 3.4.5.2. Objeto, alcance y contenido (de la sección sobre actividades cinegéticas):** Como el anterior, el contenido de este artículo tiene en su totalidad carácter explicativo y no es necesario para la aplicación de ninguna disposición sustantiva. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.

– **Artículo 3.4.5.3. Desarrollo de la ordenación y regulación sobre la caza:** Este artículo contiene varias instrucciones sobre el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Caza de Tenerife, uno de los instrumentos de desarrollo previstos por el PIOT para la ordenación de actividades económicas. Al respecto ha de repetirse lo ya dicho en relación al PTEO de la Actividad Agrícola (artículo 3.4.2.8) y, por lo tanto, concluir que este artículo debe entenderse derogado en su totalidad.

³² El Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Ganadera de Tenerife fue aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del Cabildo de Tenerife en sesión extraordinaria de 19 de julio de 2016.

- **Artículo 3.4.5.4. Condiciones básicas para el ejercicio de la caza:** Este artículo establece normas que regulan la caza, que es considerada por la nueva Ley como un uso ordinario; por tanto, tal como se ha argumentado en el epígrafe 3.8 de la parte A de este Informe-propuesta, el Plan Insular no está legitimado para regularlo. En consecuencia, se entiende que este artículo ha quedado derogado.
- **Artículo 3.4.5.5. Limitaciones al ejercicio de la caza:** Ha de señalarse exactamente lo mismo que respecto del anterior artículo 3.4.5.4.
- **Artículo 3.4.5.6. Señalización, cercados y vallados de terrenos cinegéticos:** Ha de señalarse exactamente lo mismo que respecto del anterior artículo 3.4.5.4.
- **Artículo 3.4.5.7. Regulación de los cotos de caza:** Ha de señalarse exactamente lo mismo que respecto del anterior artículo 3.4.5.4.

3.6. Capítulo 5: Actividades extractivas

El PIOT limita el ejercicio de las actividades extractivas de carácter industrial a unos ámbitos expresamente delimitados, prohibiéndolas al exterior de los mismos. Esta determinación (que es la fundamental del PIOT sobre esta materia) queda amparada por la nueva Ley si se entiende que los ámbitos extractivos se corresponden con las “reservas de suelo necesarias para actividades ... extractivas ... que sean estratégicas para el desarrollo insular”. En efecto, en el propio PIOT se declara que la actividad extractiva tiene un carácter estratégico, que afecta al conjunto de la isla y a las actividades claves de la economía. Si bien la correspondencia de los ámbitos extractivos con las reservas previstas por la LSENPC (artículo 96.2.g) parece suficientemente justificada, cabe dudar si la prohibición de la actividad extractiva fuera de estos ámbitos es compatible con la Ley. El que la Ley establezca que la delimitación de reservas turísticas por el PIOT “no impedirá la realización del uso turístico fuera de esas zonas”, puede llevar a la conclusión de que, con carácter general, la delimitación de reservas desde el PIOT (para la actividad estratégica que sea) no puede impedir que dicha actividad se realice fuera de las mismas. Sin embargo, aún cuando tal conclusión parece congruente con la intención del legislador, no es inequívoca, y supone una extrapolación no suficientemente justificada. Por tanto, sin perjuicio de que convenga la revisión de estos principios básicos del PIOT sobre la admisibilidad de los usos extractivos³³, lo cierto es que no hay suficientes argumentos para concluir que estos han quedado derogados por la nueva Ley.

Ahora bien, siendo admisible que el Plan Insular delimite unas “reservas extractivas” y prohíba estas actividades fuera de ellas, resulta más cuestionable que regule el ejercicio de las mismas tal como lo hace en las secciones tercera y cuarta (normas de aplicación directa sobre las actividades de extracción y de restauración). La regulación del ejercicio de las actividades no viene amparada entre los contenidos que la Ley atribuye al PIOT pero además, en este caso concreto, tales disposiciones están en su

³³ Tanto teniendo en cuenta la nueva Ley canaria como las discusiones recientes sobre los límites de la capacidad legal de los planes de prohibir determinados usos y actividades de forma genérica en el territorio.

mayoría contempladas en la normativa sectorial de minas. De otra parte, las actividades extractivas están consideradas como ordinarias por la Ley (artículo 59.1) y, por lo tanto, no compete al Cabildo resolver sobre su autorización, lo cual, a su vez, hace que sea improcedente que regule su ejercicio.

La sección quinta de este capítulo tiene por objeto regular los procedimientos de autorización y control de los usos extractivos. Como se ha señalado repetidamente a lo largo de este informe-propuesta, los instrumentos de planeamiento (y tampoco el PIOT) no están legitimados para regular condiciones procedimentales, razón por la cual esta sección debe entenderse derogada. La sexta y última sección del capítulo, establece el régimen transitorio sobre canteras en explotación de aplicación sobre los terrenos afectados por actividades mineras con anterioridad a la entrada en vigor del PIOT (octubre de 2002). Dado el tiempo transcurrido (más de quince años) es dudoso que existan aún canteras sobre las que quepa aplicar disposiciones de esta sección, pero de lo que se trata es de valorar la compatibilidad de las mismas con la nueva Ley. A tales efectos, dado que el criterio de esta sección consiste en verificar la adecuación de las canteras con las disposiciones del PIOT sobre la admisibilidad territorial del uso extractivo (es decir, si están o no en ámbitos extractivos) y, en términos generales, tales determinaciones del PIOT no pueden considerarse incompatibles con la LSENPC, tampoco lo sería esta sección.

– **Artículo 3.5.1.1. Generalidades, fines y objetivos de la ordenación:** El contenido de este artículo tiene en su totalidad carácter explicativo y no es necesario para la aplicación de ninguna disposición sustantiva. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.

– **Artículo 3.5.1.2. Esquema de la ordenación territorial, conceptos y definiciones:** Pese a que los seis párrafos de este artículo aparecen calificados como explicativos, lo cierto es que algunos de ellos tienen carácter dispositivo y los que no contienen definiciones o textos necesarios para la aplicación de normas del capítulo. En consecuencia, se entiende que este artículo debe mantenerse.

– **Artículo 3.5.1.3. Objeto y contenido de este capítulo:** Este artículo se limita a explicar el contenido del capítulo, lo cual ni tiene alcance dispositivo ni es necesario para la aplicación de las normas. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.

– **Artículo 3.5.2.1. Establecimiento del uso extractivo en el territorio insular:**

a) El párrafo 1 establece que el uso extractivo de carácter industrial sólo es admisible en el interior de los ámbitos extractivos delimitados por el PIOT. Como ya se ha argumentado, esta determinación no es contraria a la LSENPC y, por lo tanto, se entiende que este párrafo debe mantenerse.

b) En el párrafo 2 se explican los criterios con los que el PIOT ha delimitado los ámbitos extractivos. No es un contenido propio de las Normas y debería trasladarse a otro documento del PIOT.

- c) El párrafo 3 regula las condiciones en que, mediante modificación del PIOT, se podrían delimitar nuevos ámbitos extractivos. Toda vez que no se observa ninguna contradicción de este precepto con la LSENPC, se entiende que el mismo debe mantenerse.
- d) El párrafo 4 ha de entenderse derogado, porque se refiere a la actividad extractiva en el mar, que no forma parte del ámbito de ordenación del PIOT.

– **Artículo 3.5.2.2. Actividades extractivas artesanales y ligadas a obras públicas de interés insular:** Este artículo regula los dos tipos de actividades extractivas que el PIOT permite que se ejerzan fuera de los ámbitos extractivos y las condiciones en que son admisibles. En términos generales, el contenido dispositivo es compatible con la LSENPC; no obstante:

- a) En el párrafo 2 debe suprimirse la parte final (desde “deberá responder” hasta el final) debido a que el punto 2 del artículo 3.5.2.1 ha sido suprimido de las Normas y a que las normas de aplicación a las canteras industriales se entienden derogadas.
- b) El párrafo 3 se entiende derogado porque el PIOT no es competente para regular procedimientos de autorización (y por ello la sección 5ª de este capítulo se entiende derogada).

– **Artículo 3.5.2.3. Relación de ámbitos extractivos:** Este artículo relaciona y define el contenido normativo de los ámbitos extractivos que delimita el PIOT. Se entiende que su contenido es necesario para la correcta aplicación de las normas sustantivas de este capítulo.

– **Artículo 3.5.2.4. Coordinación de las explotaciones en relación al ámbito extractivo:** Este artículo establece el carácter temporal del uso extractivo, la obligatoriedad de que el planeamiento señale el uso final y la necesidad de coordinar las extracciones por canteras. Toda vez que no se observa ninguna contradicción de este precepto con la LSENPC, se entiende que el mismo debe mantenerse.

– **Artículo 3.5.2.5. Condiciones para la delimitación de canteras:** Este artículo contiene normas para delimitar canteras en el interior de ámbitos extractivos con la finalidad que las extracciones parciales puedan coordinarse con la actuación extractiva y restauradora de conjunto. Se entiende que no hay contradicción con la LSENPC y, por lo tanto, este artículo debe mantenerse.

– **Artículo 3.5.2.6. Planeamiento de los ámbitos extractivos:** Este artículo establece la obligatoriedad de desarrollar la ordenación de los ámbitos extractivos (salvo los de El Riquel y Guama) a través de Planes Territoriales Parciales. La nueva Ley, en su artículo 119, establece que “los planes territoriales parciales tendrán por objeto la ordenación integrada de partes singulares y concretas del territorio que, en virtud de sus características naturales o funcionales, el interés de su ordenación o planificación de sus usos, tenga trascendencia insular o supramunicipal”; además, obliga a que los ámbitos de los PTPO estén delimitados en el Plan Insular. Todas estas condiciones legales se cumplen respecto a los ámbitos extractivos: partes concretas del

territorio delimitadas por el PIOT y con trascendencia insular. En principio, por tanto, ha de entenderse que el artículo es compatible.

Sin embargo, en el artículo 97.3, la Ley limita la posibilidad de diferir para su ejecución las determinaciones de los PIO a otros instrumentos de ordenación territorial, sin que el caso de los ámbitos extractivos encaje en ninguno de los supuestos previstos³⁴. Así pues, la compatibilización de estos dos preceptos legales lleva a concluir que el PIOT sí puede establecer la conveniencia de formular planes territoriales parciales sobre cada ámbito extractivo, pero dichos planes territoriales parciales no serán vinculantes para el planeamiento urbanístico. Y, sobre todo, la ejecución de las determinaciones del PIOT –es decir, en este caso, la ejecución de actividades extractivas dentro de un ámbito extractivo– no puede supeditarse hasta la entrada en vigor del correspondiente PTPO. Ello implica que, dado que la actividad extractiva tiene carácter de uso ordinario, la autorización territorial de su ejercicio podrá concederse aunque en el ámbito extractivo de que se trate no esté en vigor el PTPO.

Esta interpretación es, de hecho, la que ha venido manteniendo el Cabildo de Tenerife: que en todos los ámbitos extractivos (con la excepción del de los Barrancos de Güímar³⁵) se podía autorizar el ejercicio de la actividad aunque no se hubiera formulado el correspondiente PTPO. Sin embargo, lo cierto es que existen interpretaciones (como la de la Sentencia 316/2012 de 21 de junio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Uno de Santa Cruz de Tenerife) que consideran la obligatoriedad de la aprobación del PTPO como condición previa a la ejecución de cualquier actividad en un ámbito extractivo. Por tanto, para compatibilizar plenamente este artículo con la nueva Ley, se entiende conveniente añadir un párrafo nuevo que deje claro que las determinaciones de estos PTP no serán vinculantes sobre el planeamiento municipal y que pueden llevarse a cabo actividades extractivas aunque no se hayan aprobado el PTP del ámbito extractivo correspondiente (incluso en el de los Barrancos de Güímar³⁶).

– **Artículo 3.5.2.7. Directrices de gestión:** El contenido de este artículo consiste en criterios a tener en cuenta en el desarrollo de la política pública en materia extractiva y carecen de alcance normativo de aplicación directa. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.

– **Sección 3ª. Condiciones sobre la ejecución de las labores extractivas:** En esta sección se establecen, con el carácter de normas

³⁴ Los ámbitos extractivos no pueden considerarse sistemas generales o equipamientos estructurantes (primer supuesto) ni su remisión a plan territorial parcial tendría nada que ver con la prevención de riesgos de ningún tipo (segundo supuesto). De otra parte, la remisión de la ordenación de estos ámbitos a planes territoriales no se justificó (ni detallada ni específicamente) en razones relacionadas con la ampliación del tiempo de redacción del PIOT, que es la última posibilidad de carácter excepcional que la Ley admite.

³⁵ Porque en la ficha de ese ámbito se establece que expresamente que “sólo se podrá explotar nuevas canteras previa ordenación de conjunto de la totalidad del ámbito”.

³⁶ Hay que entender que la disposición de la ficha que exige la previa ordenación de conjunto ha quedado derogada.

C/ Las Macetas, s/n. Los Majuelos
Pabellón Insular Santiago Martín 3ª Planta
38108. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife

de aplicación directa, diversas condiciones para la regulación del ejercicio de la actividad extractivas. Como ya se ha señalado al principio de este epígrafe, esta regulación no viene amparada entre los contenidos que la Ley atribuye al PIOT y además, en este caso concreto, tales disposiciones están en su mayoría contempladas en la normativa sectorial de minas. Por tanto, ha de entenderse que esta sección está derogada en su totalidad.

- **Sección 4ª. Regulación de la restauración:** En esta sección se establecen, con el carácter de normas de aplicación directa, diversas condiciones para la regulación de las restauraciones de las canteras. Cabe señalar las mismas observaciones que las hechas respecto de la sección anterior y, consiguientemente, ha de entenderse que ha quedado derogada en su totalidad.
- **Sección 5ª. Autorización de las actividades administrativas:** En esta sección se regulan aspectos procedimentales de la autorización de las actividades extractivas, incluyendo los contenidos de los proyectos técnicos y planes de restauración. El Plan Insular no es competente para regular estos aspectos, por lo que debe entenderse que esta sección en su totalidad ha quedado derogada.
- **Sección 6ª. Régimen transitorio sobre canteras en explotación:** Como ya se ha señalado al inicio de este epígrafe, el contenido de esta sección (sin perjuicio de su dudoso carácter operativo) no puede considerarse incompatible con la LSENPC. En consecuencia, se entiende que todos los preceptos que lo conforman mantienen su vigencia.

3.7. Capítulo 6: Actividades industriales y terciarias

Tal como se establece en el artículo 3.6.1.4, este capítulo de las Normas del PIOT tiene un doble contenido: en primer lugar (sección 2ª) establecer las condiciones que deben observar los planes de desarrollo en la ordenación física de los usos industriales y terciarios para lograr su adecuada inserción en el modelo territorial; de otra parte (sección 3ª) señalar las directrices de política sectorial que, con incidencia en la ordenación territorial, deben propiciar la consecución de los objetivos sobre la industria y los usos terciarios. El primer contenido tiene carácter exhaustivo; es decir, el PIOT condiciona la forma en que cualquier instrumento de planeamiento con competencia en la ordenación espacial de los usos ha de regular la admisibilidad de cualquier uso industrial o terciario. Así, por ejemplo, el PIOT señala condiciones de admisibilidad para usos e instalaciones terciarias en suelo rústico que deben ser desarrolladas a través de los planes urbanísticos municipales, o las reglas que éstos deben observar para admitir estos usos en áreas urbanas consolidadas o para clasificar polígonos industriales o terciarios municipales. Es claro que, en el marco de la nueva Ley, el PIOT no es competente para regular exhaustivamente las condiciones de admisibilidad de los usos industriales y/o terciarios, ni tampoco imponer condiciones a la regulación de las mismas por el planeamiento urbanístico. En base a lo expuesto en la parte A de este informe-propuesta se entiende que sobre esta materia el contenido del PIOT queda limitado a lo siguiente:

- a) La regulación de las condiciones de admisibilidad en suelo rústico de los usos, actividades y construcciones industriales y terciarias (de

servicios) que, según el artículo 62 de la LSENPC, hayan de calificarse de interés público o social. Esta regulación queda amparada por lo dispuesto en el artículo 79.1 de la LSENPC que establece que para la autorización de estos usos, el Ayuntamiento recabará del Cabildo informe sobre la regulación del mismo en el planeamiento insular.

- b) La regulación de las condiciones de admisibilidad o incluso la calificación expresa, independientemente de su localización, de las instalaciones o construcciones de naturaleza industrial o terciaria que, por su dimensión y nivel de servicio supramunicipal, han de considerarse como equipamientos estructurantes de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la LSENPC.
- c) La determinación y localización (o en su caso remisión a un plan territorial) de los polígonos industriales de trascendencia insular.

En cuanto a las directrices de política sectorial, del mismo modo que se ha señalado en relación a otros capítulos de este Título, son determinaciones válidas del PIOT siempre que se refieran al propio Cabildo Insular de Tenerife (y no al conjunto de administraciones públicas). Además, los contenidos de esta sección, en tanto directrices, han de desplazarse desde las Normas a otro documento.

A partir de las consideraciones generales expuestas, se pasa a continuación a valorar detalladamente la compatibilidad de las disposiciones de este capítulo con la nueva Ley.

– **Artículo 3.6.1.1. Criterios y objetivos de ordenación en materia industrial:** El contenido de este artículo tiene en su totalidad carácter explicativo y no es necesario para la aplicación de ninguna disposición sustantiva. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.

– **Artículo 3.6.1.2. Criterios y objetivos de ordenación sobre las actividades terciarias:** Los dos primeros párrafos de este artículo tienen carácter explicativo innecesario para la aplicación de ninguna disposición sustantiva; en consecuencia, se propone suprimirlo y pasarlo a la Memoria. Los párrafos 3 y 4 contienen directrices respecto del PTEO de Grandes Equipamientos Comerciales y de Ocio. Dicho Plan tiene por objetivo la ordenación de equipamientos estructurantes y, por tanto, es compatible con lo establecido en la LSENPC. No obstante, las determinaciones sobre el mismo, al tener el carácter de directrices, han de pasarse de las Normas a otro documento del PIOT.

– **Artículo 3.6.1.3. Usos y áreas urbanas industriales y terciarios:** Este artículo contiene dos definiciones, una de la de las cuales (usos industriales y terciarios) es una remisión a las ya existentes en el capítulo 4 del Título 1; mientras la otra (área urbana industrial y/o terciaria) es innecesaria para la aplicación de las normas sustantivas a mantener de este capítulo. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.

– **Artículo 3.6.1.4. Contenido y esquema de ordenación de los usos industriales y terciarios:** Este artículo explica el contenido del capítulo, lo cual ni tiene alcance dispositivo ni es necesario para la

aplicación de las normas En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.

– **Artículo 3.6.2.1. Usos e instalaciones industriales o terciarios fuera de áreas urbanas sin el carácter de Proyectos de Actuación Territorial:** En el nuevo marco legal no existen ya los PAT, razón por la cual es improcedente regular los usos en función de que tengan o no el carácter de Proyectos de Actuación Territorial. Ahora bien, los usos e instalaciones que son objeto de este artículo en el marco de la nueva Ley tendrían el carácter de ordinarios o complementarios de éstos, y por tanto no compete al Plan Insular establecer condiciones sobre los mismos. En consecuencia, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.

– **Artículo 3.6.2.2. Usos industriales o terciarios con el carácter de Proyectos de Actuación Territorial:** A diferencia de los usos que son objeto del artículo anterior, ha de entenderse que los del presente se corresponden con los que en la nueva Ley se consideran usos, actividades y construcciones de interés público y social y, en consecuencia, el Plan Insular está habilitado para establecer condiciones a su admisibilidad. Ahora bien, será necesario cambiar el título del artículo que debería pasar a llamarse “Usos industriales o terciario de interés público o social fuera de áreas urbanas”. Dicho esto, se pasa a valorar la adecuación a la nueva Ley cada uno de los párrafos:

a) El párrafo 1 señala qué usos han de implantarse mediante PAT. Obviamente, esta determinación ha quedado derogada, pero es que ni siquiera puede interpretarse como la determinación de cuáles son los usos industriales o terciarios con el carácter de interés público o social, porque tal contenido es propio de la Ley. En consecuencia, este párrafo ha de entenderse derogado.

b) El párrafo 2 impone a los planes (básicamente a los generales municipales, aunque no lo dice expresamente) los contenidos que deben incorporar para regular la admisibilidad de estos usos industriales o terciarios. Como ya se ha dicho en varias ocasiones, el Plan Insular no es competente para regular el contenido de los planes, razón por la cual este párrafo debe entenderse derogado.

c) El párrafo 3 impone los contenidos que deben incorporar los Proyectos de Actuación Territorial para regular la admisibilidad de estos usos industriales o terciarios. Cabe repetir lo ya dicho para el párrafo anterior además de que, en este caso, los PAT ya no existen en el marco legal. Por tanto, también este párrafo debe entenderse derogado.

d) El párrafo 4 incorpora una serie de condiciones que han de cumplirse en la autorización de estos usos. Salvo la primera (que exige que se localicen en ámbitos adscritos a ARH de protección económica o de protección territorial cuando estas dos categorías han quedado derogadas), todas las demás son normas de aplicación directa que, sin perjuicio de la conveniencia de que sean revisadas, no contradicen las disposiciones de la nueva Ley. Por tanto, se propone

mantener este párrafo salvo la disposición contenida en el primer guión.

- **Artículo 3.6.2.3. Usos industriales o terciarios en áreas urbanas con otro uso global:** Este artículo tiene por objeto dar instrucciones al planeamiento urbanístico sobre la regulación de las condiciones de admisibilidad de usos industriales o terciario sin carácter supramunicipal en áreas urbanas. Dado que la nueva Ley no permite al Plan Insular establecer condiciones al planeamiento municipal ni tampoco regular usos no supramunicipales en áreas urbanas, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.
- **Artículo 3.6.2.4. Polígonos para actividades industriales y terciarias municipales:** Este artículo tiene por objeto señalar las condiciones que debe cumplir el planeamiento general municipal en la delimitación de áreas urbanas con uso global industrial o terciario y que no tengan carácter supramunicipal. Por las mismas razones ya señaladas respecto del artículo anterior, ha de entenderse que también éste ha quedado derogado en su totalidad.
- **Artículo 3.6.2.5. Polígonos para actividades industriales y terciarias comarcales:** Este artículo se refiere a los polígonos de naturaleza supramunicipal, para cuya delimitación y ordenación la nueva Ley da plenas competencias al Plan Insular. Establecida pues la compatibilidad de principio de este artículo con la LSENPC, se pasa a continuación a valorar cada uno de los párrafos de que consta:
- a) El párrafo 1 relaciona los polígonos de ámbito comarcal que identifica el PIOT. Este contenido es compatible con la LSENPC y debe mantenerse.
 - b) El párrafo 2 establece que la delimitación de nuevos polígonos comarcales debe hacerse a través de planes territoriales especiales de ordenación, lo cual también es compatible con la LSENPC, toda vez que estos polígonos tienen la consideración de sistemas generales o equipamientos estructurantes (artículo 98). Así pues, este párrafo también debe mantenerse.
 - c) El párrafo 3 comprende instrucciones que deben ser atendidas por los PTEO en la delimitación de nuevos polígonos. Dado su carácter directivo, este párrafo debe suprimirse de las Normas y su contenido pasarse a otro documento del PIOT.
 - d) El párrafo 4 establece condiciones para la delimitación de los polígonos comarcales por el planeamiento municipal o los planes comarcales. Como ya se ha dicho, no cabe establecer instrucciones al planeamiento urbanístico y, de otra parte, los planes comarcales han sido derogados. En consecuencia, este párrafo debe entenderse derogado.
 - e) El párrafo 5 es válido siempre que se entienda de aplicación sobre el planeamiento territorial en la delimitación de nuevos polígonos comarcales (no sobre los planes urbanísticos). Ahora bien, dado su carácter de directriz al planeamiento se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.

f) El párrafo 6 establece, en primer lugar, que la ordenación de un polígono comarcal competirá al planeamiento urbanístico. Ahora bien, si el polígono comarcal es supramunicipal, no cabe en el marco de la nueva Ley que sea ordenado por instrumentos urbanísticos; en consecuencia debe entenderse derogada esta disposición y suprimirse la primera frase de este párrafo (Desde "La ordenación" hasta "haya sido establecida"). El contenido que sigue consiste en condiciones para la ordenación de los polígonos comarcales, con el alcance de directrices al planeamiento (territorial); en consecuencia, esta parte debe suprimirse de las Normas y pasarse a otro documento del PIOT.

– **Artículo 3.6.2.6. Grandes equipamientos comerciales:** Este artículo se refiere a los grandes equipamientos comerciales que son siempre de naturaleza supramunicipal, y por tanto en su delimitación y ordenación el Plan Insular es competente de acuerdo a la nueva Ley. Establecida pues la compatibilidad de principio de este artículo con la LSENPC, se pasa a continuación a valorar cada uno de los párrafos de que consta:

a) El párrafo 1 define qué usos, de la clasificación del capítulo 4 del Título 1, deben considerarse "grandes equipamientos comerciales y de ocio". Se trata de un contenido necesario para poder aplicar las disposiciones del artículo y, por lo tanto, debe mantenerse. Ahora bien, en este mismo párrafo debería incluirse la definición de los "grandes equipamientos comerciales de influencia territorial amplia" (que se contiene en el párrafo 2) y establecer expresamente que los mismos tienen carácter de elementos estructurantes insulares.

b) Hecha la corrección anterior, el párrafo 2 se limitaría a establecer la obligatoriedad del Plan Territorial Especial de Ordenación. Dicho Plan es compatible con la LSENPC y, además, viene impuesto por la legislación sectorial, por lo que ha de entenderse que este párrafo debe mantenerse.

c) El párrafo 3 establece que los grandes equipamientos comerciales que no han de ser objeto del PTEO del párrafo anterior pueden ser localizados por el planeamiento urbanístico y, además, establece condiciones que éste ha de cumplir en su ordenación. Una vez establecido que dichos usos no son insulares, es obvio que pasan a ser competencia de los planes urbanísticos; en todo caso, como ya se ha dicho varias veces, el Plan Insular no puede establecer condiciones al planeamiento municipal. En consecuencia, ha de entenderse que este párrafo ha quedado derogado.

d) El párrafo 4 establece condiciones que deben ser tenidas en cuenta en la localización de los grandes equipamientos comerciales y de ocio por el PTEO ya citado. Sin perjuicio de que debe suprimirse la alusión a las Directrices de Ordenación General (derogadas por la LSENPC), este párrafo, al tener carácter directivo, debe pasarse a otro documento del PIOT.

– **Sección 3ª. Directrices de coordinación de política sobre actividades industriales y terciarias:** Todas las disposiciones de esta sección son criterios que debe implementar el Cabildo en el desarrollo de sus políticas sobre las actividades industriales y terciarias

en la Isla, sin que tengan alcance normativo directo. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.

3.8. Capítulo 7: Turismo

- **Sección 1ª. Generalidades:** Todas las disposiciones contenidas en esta sección son explicaciones para describir y justificar la forma en que el PIOT afronta la ordenación del Turismo. Sin perjuicio de que algunas definiciones deban mantenerse pero trasladadas a disposiciones posteriores a las cuales se vinculan (tal como se expone en las mismas), se entiende que esta Sección debe suprimirse en su totalidad de las Normas y trasladar su contenido, debidamente corregido, a otro documento.
- **Sección 2ª. Ampliación de núcleos turísticos e implantación de complejos turísticos:** Esta sección tiene por objeto establecer las condiciones con las que en Tenerife pueden incorporarse nuevas áreas urbanas de uso global turístico. En la exposición de motivos de la LSENPC se plantea la “práctica prohibición de clasificar nuevo suelo con destino turístico” la cual, si bien no aparece expresamente recogida en el articulado, deriva de lo dispuesto en las vigentes Directrices de Ordenación del Turismo, que limitan la capacidad del planeamiento (al menos a medio plazo) de admitir urbanización de áreas no clasificadas previamente como suelo urbanizable. La concreción de estas limitaciones fue materializada en Tenerife a través del Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo, que opera sobre los “ámbitos de referencia turística” delimitados por el PIOT. Así pues, hay que entender que el enfoque del PIOT, basado en la delimitación de los “ámbitos de referencia turística” que son los únicos espacios donde puede haber “áreas turísticas”, es compatible con la nueva Ley³⁷ y con las Directrices de Ordenación del Turismo³⁸. De otra parte, las normas del PIOT destinadas a regular las nuevas áreas turísticas (de ampliación de núcleos existentes o complejos turísticos aislados) también pueden entenderse compatibles con la Ley (y las Directrices), siempre que esas áreas nuevas se correspondan con suelos clasificados. En todo caso, la concreción de las áreas nuevas turísticas susceptibles de desarrollarse (mientras se mantenga la prohibición de clasificar nuevo suelo turístico) es justamente el objeto principal del PTEOT. Así pues, sentada la compatibilidad básica de esta Sección con el nuevo marco legal, se pasa a continuación a valorarla para cada uno de los artículos.
- **Artículo 3.7.2.1. Objeto y contenido de la sección:** Se trata de una mera descripción del contenido de la sección, sin valor dispositivo. Por tanto, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT.
- **Artículo 3.7.2.2. Ámbitos de referencia turística:** Aunque se limita a definir los límites de los seis ámbitos de referencia turística

³⁷ Artículo 96.2.g): “Determinación de las reservas de suelo necesarias para actividades ... turísticas ... que sean estratégicas para el desarrollo insular”; artículo 100.1: “Los planes insulares podrán establecer zonas del territorio que, por sus características, deban ser reservadas con carácter preferente para la actividad y usos turísticos”.

³⁸ Directriz 8. Definición del modelo insular: “El planeamiento insular establecerá el modelo de desarrollo turístico ... definiendo: a) Las zonas turísticas de la isla, incluyendo dentro de ellas los ámbitos territoriales en que se desarrollen o puedan desarrollarse actividades turísticas alojativas o complementarias”.

C/ Las Macetas, s/n. Los Majuelos
Pabellón Insular Santiago Martín 3ª Planta
38108. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife

delimitados por el PIOT (que, a su vez, están recogidos gráficamente en los planos), se entiende que es un contenido necesario para la correcta aplicación del resto de disposiciones y, por tanto, se entiende que debe mantenerse. Pero además, por la misma razón, se entiende que debe incorporarse como párrafo 1 de este artículo, el texto del párrafo 1 del artículo 3.7.1.2, actualmente comprendido en la Sección 1ª que se ha propuesto desplazar de las Normas.

– **Artículo 3.7.2.3. Clasificación de las áreas urbanas turísticas:** Se señalan a continuación las conclusiones respecto de cada uno de los tres párrafos de este artículo:

- a) El párrafo 1, en primer lugar, remite a las definiciones de núcleos y áreas urbanas turísticas que se contienen en los párrafos 3 y 2 del artículo 3.7.1.2. Esos párrafos, al estar en la Sección 1ª, han sido suprimidos de las Normas; pero además, dichas definiciones no son válidas ya que hacen referencia a las ARH urbanas que han quedado derogadas. En consecuencia se entiende que debe suprimirse la primera frase del párrafo (desde “Son núcleos” hasta “en el punto 3.7.1.2.”), lo cual no impide la aplicación de las siguientes disposiciones. De otra parte, en este párrafo se ordena al planeamiento general que califique las áreas de acuerdo a la división del PIOT. Toda vez que no procede que el Plan Insular dé instrucciones al planeamiento municipal, se entiende que deberá sustituirse el término “planeamiento general” por “planeamiento territorial de ordenación turística”.
- b) El párrafo 2 define los dos tipos de áreas urbanas turísticas que contempla el PIOT a efectos de su regulación diferenciada. Este contenido no contradice la LSENPC y, por otra parte, es necesario para la aplicación de las siguientes disposiciones; por tanto, debe mantenerse.
- c) El párrafo 3 remite a un contenido normativo que ha sido derogado (artículo 2.3.9.1) y, por tanto, debe entenderse también derogado. Además, la exigencia de este artículo correspondería cumplirla al planeamiento urbanístico, motivo añadido para considerarla derogada.

– **Artículo 3.7.2.4. Ampliación de núcleos turísticos existentes:** Este artículo establece que en Tenerife sólo son admisibles nuevas áreas de urbanización turística convencional como ampliaciones de núcleos existentes en el ámbito de referencia turístico suroeste. Este contenido no es contrario a la LSENPC; no obstante, las condiciones añadidas sí lo son. A estos efectos:

- a) En el párrafo 1 deben suprimirse dos partes del mismo. En primer lugar la expresión entre comas “delimitadas a través de los procedimientos definidos en el artículo 2.3.9.6”, porque dicho artículo ha quedado derogado. Además debe también suprimirse la expresión final (“mediante áreas de ensanche o interiores a los mismos”) porque los términos empleados están definidos en preceptos también derogados.

- b) El párrafo 2 debe entenderse derogado en su totalidad, porque exige que las ampliaciones de los núcleos urbanos se dispongan en ARH urbanas o de expansión urbana, conceptos derogados.
- c) El párrafo 3 fija un límite de densidad bruta; al no contradecir la nueva Ley, debe mantenerse.

– **Artículo 3.7.2.5. Implantación de complejos turísticos:**

- a) El párrafo debe limitarse a establecer la admisibilidad de complejos turísticos sólo en los ámbitos de referencia turísticos, pero ha de suprimirse la regulación de su tramitación (no compete al PIOT y, además, se hace referencia a los PAT, inexistentes en la actualidad).
- b) El párrafo 2 fija la densidad bruta máxima, determinación compatible con la LSENPC, por lo que se entiende que debe mantenerse.
- c) El párrafo 3 fija los límites absolutos a las capacidades alojativas de los complejos turísticos. Como el anterior, se entiende que este párrafo es compatible con la LSENPC y debe mantenerse.
- d) El párrafo 4 señala las dimensiones superficiales mínimas de los complejos turísticos. Tampoco se entiende que esta determinación contradiga la nueva Ley, por lo que debe mantenerse.

– **Artículo 3.7.2.6. Implantación de establecimientos fuera de los ámbitos de referencia turísticos:** Este precepto regula los dos supuestos en que pueden admitirse establecimientos turísticos fuera de ámbitos de referencia (y, por tanto, fuera de áreas turísticas). El primer supuesto es que se localice en una parcela con condición de solar y en la que el uso sea admitido por el planeamiento que, obviamente, ha de ser el urbanístico; obviamente no compete al PIOT permitir el uso turístico en una parcela urbana en la que el planeamiento municipal lo permite. El segundo supuesto es que sean autorizables en suelo rústico³⁹, pero esa admisibilidad ya viene establecida por la propia Ley, por lo que tampoco compete al PIOT. En consecuencia, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado en su totalidad lo cual, a su vez, es congruente con la disposición de la nueva Ley de que la zonificación turística del PIOT no impedirá la realización del uso turístico fuera de esas zonas.

– **Cuadro resumen:** Este cuadro, en el que se sintetizan para una rápida lectura las condiciones de admisibilidad de las nuevas áreas turísticas (distinguiendo entre las convencionales y los complejos turísticos), puede mantenerse salvo la columna titulada “Área de Regulación Homogénea” que deberá suprimirse porque hace referencia a determinaciones que han quedado derogadas.

– **Artículo 3.7.2.7. Limitaciones de uso en los ámbitos de referencia turísticos:** Este precepto establece dos prohibiciones de aplicación directa. La primera, la de delimitación de nuevos sectores, salvo que se cumplan las directrices para la clasificación de suelo urbano y urbanizable que se contienen en la regulación de las ARH urbanas (artículo 2.3.9.2). Dado que ese artículo ha quedado derogado,

³⁹ El precepto hace referencia a los PAT o Calificaciones territoriales, instrumentos ambos derogados.

este primer precepto queda sin contenido; de otra parte, los casos en que pueden delimitarse nuevas áreas turísticas están regulados en los artículos 3.7.2.4 y 3.7.2.5, que ya han sido valoradas. La segunda prohibición se refiere a los usos individuales industriales, terciarios o residenciales en las nuevas áreas turísticas. Dado que esta disposición sobre admisibilidad de usos no afecta a las áreas consolidadas no es contradictoria con la LSENPC que expresamente señala que no puede impedirse el uso residencial preexistente en zonas turísticas. Ahora bien, en el fondo, lo único que se contiene a este respecto en este artículo es la remisión a un artículo específico (el 3.7.4.3) que establece las condiciones de admisibilidad y compatibilidad de usos en las áreas nuevas turísticas. Así pues, ha de concluirse que el artículo ha quedado derogado en su totalidad.

– **Sección 3ª. Sectorización de los suelos urbanizables turísticos:**

El objeto de esta sección es regular cómo se ha de producir la sectorización de los suelos turísticos, desde el supuesto de que las nuevas áreas turísticas (sean convencionales o complejos turísticos) se delimitan como sectores en ámbitos de suelo más o menos amplios clasificados como urbanizable no sectorizado. Sin embargo, las Normas del PIOT no establecían expresamente que todo el territorio donde pudieran delimitarse nuevas áreas turísticas había de clasificarse como suelo urbanizable no sectorizado. Pero, en segundo lugar, tal determinación sería contraria a la LSENPC toda vez que se ha suprimido esta categoría urbanística; de modo que, al no existir el SUNS tampoco puede existir la "sectorización". En tercer lugar, esta sección se limita fundamentalmente a regular el contenido que habrían de tener los documentos urbanísticos que se tramitaran para aprobar la delimitación de un nuevo sector de suelo urbanizable, materias que ciertamente no son competencia de un instrumento de planeamiento sino de una norma legal. En consecuencia, toda esta sección debe entenderse derogada.

– **Sección 4ª. Directrices para la ordenación de las áreas turísticas nuevas:**

Esta sección contiene un conjunto de directrices con bastante grado de detalle que serían de aplicación obligada sobre los planes que tengan por objeto la ordenación de las áreas turísticas nuevas y referencia para los que ordenaran las áreas urbanas turísticas consolidadas. En el nuevo marco legal (y también en el anterior), las determinaciones de ordenación sobre las que trata esta sección son competencia de los planes urbanísticos y, por tanto, municipal⁴⁰; de modo que ha de entenderse que el PIOT no está habilitado para establecer estas directrices. De otra parte, los contenidos concretos de esta Sección tampoco están comprendidos entre las determinaciones sobre uso turístico que se señalan en el artículo 100 de la Ley, por lo que serían nulos. Sin embargo, las Directrices de Ordenación del Turismo (DOT), que expresamente la LSENPC mantiene en vigor, requieren al planeamiento insular contenidos de ordenación más allá de los señalados en la nueva Ley. Por tanto, a continuación se revisan las determinaciones de esta sección para verificar, respecto de cada una, si

⁴⁰ Con la excepción de los Planes de Modernización y Mejora.

su contenido, aunque no esté en la LSENPC, queda amparado por las DOT en cuyo caso deberían entenderse vigentes.

– **Artículo 3.7.4.1. Objeto, alcance y aplicación de las directrices para la ordenación de las áreas urbanas:** Este artículo se limita a explicar el contenido de la Sección, sin tener carácter dispositivo concreto. En consecuencia, se propone desplazarlo a otro documento del PIOT

– **Artículo 3.7.4.2. Capacidad y ocupación máximas de las áreas y actuaciones turísticas de nuevo desarrollo:**

a) El primer párrafo define cómo ha de fijarse la capacidad máxima alojativa de un área turística a partir de las densidades normativas. Esta determinación, en realidad, carece de contenido dispositivo ya que se limita a establecer una regla de cálculo (que, por otro lado, es obvia) sin fijar ningún límite concreto.

b) El segundo párrafo establece otra regla equivalente, en este caso la de la equivalencia entre una vivienda y cuatro plazas.

c) El tercer párrafo, que nada tiene que ver con los dos anteriores, sí tiene en cambio contenido dispositivo concreto, ya que fija una ocupación máxima de la edificación en complejos turísticos (20%). Toda vez que los complejos turísticos pueden entenderse como establecimientos recreativos con capacidad alojativa turística, este contenido queda amparado por las Directrices 10 y 14.

Así pues, se entiende que los dos primeros párrafos de este artículo, en tanto reglas para la aplicación de contenidos normativos que el propio PIOT no establece, no son procedentes y deben entenderse derogados. En cambio, el tercer párrafo debe entenderse que mantiene su vigencia. Lógicamente, el título del artículo debería dejar de referirse a la capacidad turística.

– **Artículo 3.7.4.3. Admisibilidad y compatibilidad de usos en las áreas y actuaciones turísticas:**

a) El primer párrafo, con carácter de norma de aplicación directa, establece unos niveles mínimos de calidad para los nuevos establecimientos turísticos. La DOT 8 señala que el planeamiento insular definirá "b) Las estrategias referidas a los productos turísticos implantados y que deba ofrecer la isla, que deberán adecuarse especialmente a los rasgos identificadores y diferenciadores de la oferta, sobre la base de los recursos naturales, humanos y turísticos insulares, las infraestructuras y equipamientos disponibles, la imagen insular y las estrategias de comercialización". Si bien no es exactamente lo mismo, puede entenderse que la fijación de unos niveles mínimos de calidad a los productos turísticos forma parte de las estrategias a que se refiere esta directriz; por tanto, puede entenderse que este párrafo mantiene su vigencia.

b) El segundo párrafo señala condiciones concretas sobre la compatibilidad de usos no turísticos en áreas turísticas. La DOT 14 encomienda al planeamiento insular establecer "las condiciones generales de compatibilidad entre el uso residencial y el turístico, en

función de las características de las diferentes zonas y, en su caso, núcleos o urbanizaciones turísticas”. Ahora bien, esta habilitación está limitada por tres factores. En primer lugar, se refiere exclusivamente a la compatibilidad entre los usos residenciales y turísticos, sin que las Directrices incluyan usos distintos como hace el PIOT. En segundo lugar, se habla de “condiciones generales”, ya que las Directrices prevén que las condiciones concretas de admisibilidad de usos en cada parte de un área turística sean establecidas por el planeamiento urbanístico; sin embargo, las disposiciones de este artículo del PIOT condicionan excesivamente la potestad de ordenación de los planes urbanísticos. En tercer y último lugar, esta DOT prevé el establecimiento de condiciones de compatibilidad para zonas concretas de áreas existentes donde haya mezcla de usos⁴¹; sin embargo, en este párrafo del PIOT se están fijando normas de compatibilidad con carácter general (sin referencia territorial) y sobre áreas nuevas, lo cual no parece quedar amparado por la directriz. En consecuencia, ha de entenderse que este párrafo ha quedado derogado.

- **Artículo 3.7.4.4. Estándares mínimos de espacios libres, dotaciones y equipamientos:** Este artículo fija estándares mínimos que deben ser respetados en la ordenación de las nuevas áreas turísticas por los planes urbanísticos. Ahora bien, el PIOT no tiene competencia para establecer instrucciones de ordenación urbanística y, de otra parte, tampoco estándares distintos de los señalados en la propia Ley. En consecuencia, se entiende que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.
- **Artículo 3.7.4.5. Directrices para la ordenación y el diseño de los espacios libres públicos:** Todos los párrafos de este artículo son instrucciones directivas al planeamiento municipal, sin que las DOT habiliten para establecerlas desde el PIOT. Por tanto, se entiende que ha quedado derogado.
- **Artículo 3.7.4.5. Directrices para la ordenación y el diseño de los espacios libres públicos:** Todos los párrafos de este artículo son instrucciones directivas al planeamiento municipal, sin que las DOT habiliten para establecerlas desde el PIOT. Por tanto, se entiende que ha quedado derogado.
- **Artículo 3.7.4.6. Directrices sobre el diseño de la red viaria:** Sobre el contenido de este artículo cabe repetir lo ya dicho sobre el artículo anterior. Por tanto, se entiende que ha quedado derogado.
- **Artículo 3.7.4.7. Directrices sobre ubicación y dimensionamiento de dotaciones públicas y equipamientos:** Sobre el contenido de este artículo cabe repetir lo ya dicho sobre el artículo 3.7.4.5. Por tanto, se entiende que ha quedado derogado.
- **Artículo 3.7.4.8. Directrices sobre la dotación de aparcamientos:** También respecto de este artículo cabe repetir lo ya dicho sobre el artículo 3.7.4.5. Por tanto, se entiende derogado.

⁴¹ Ese contenido lo desarrolló el PTEOT sobre cada una de las áreas turísticas existentes.

- **Artículo 3.7.4.9. Condiciones de diseño y dimensionamiento de los servicios y las infraestructuras en las áreas urbanas turísticas:** También respecto de este artículo cabe repetir lo ya dicho sobre el artículo 3.7.4.5. Por tanto, se entiende derogado.
- **Artículo 3.7.4.10. Directrices sobre la ejecución y mantenimiento de la urbanización turística:** En este artículo se establecen una serie de obligaciones para propiciar la correcta ejecución y mantenimiento de las urbanizaciones. Ahora bien, no compete al PIOT, sino a la Ley, la imposición de deberes urbanísticos. En consecuencia, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado.
- **Artículo 3.7.5.1. Objeto, alcance y contenido de esta sección (5ª: Condiciones de los establecimientos turísticos):** Este artículo se limita a explicar el contenido de la Sección, sin tener carácter dispositivo concreto. En consecuencia, se entiende que debe trasladarse de las Normas
- **Artículo 3.7.5.2. Condiciones generales de aplicación a los establecimientos turísticos alojativos:** Este artículo establece tres condiciones que deben cumplir todos los establecimientos turísticos, independientemente de su tipología y localización. Tales condiciones se justifican desde la voluntad de “conformar una imagen unitaria del producto que refleje su destino vacacional de calidad”, que puede entenderse comprendido dentro de la definición de las estrategias turísticas que la DOT 8 encomienda como parte del contenido del PIOT. En consecuencia, cabe defender que no hay contradicción con el nuevo marco legal y, por tanto, mantiene su vigencia.
- **Artículo 3.7.5.3. Condiciones de implantación de establecimientos turísticos en áreas urbanas consolidadas:** El contenido de este artículo son instrucciones directivas para que el planeamiento urbanístico establezca la admisibilidad de establecimientos turísticos, lo cual –como ya se ha repetido varias veces a lo largo de este informe– no puede hacer el PIOT. Pero es que, además, las condiciones impuestas tampoco son propias del planeamiento, sino de la misma Ley. Así pues, ha de entenderse que este artículo ha sido derogado.
- **Artículo 3.7.5.4. Implantación de establecimientos turísticos en suelo rústico:** El contenido de este artículo, de una parte, hace referencia a instrumentos ya derogados (PAT y Calificaciones Territoriales) y, de otra, señala los productos turísticos (según la clasificación del PIOT) que pueden implantarse en suelo rústico, aspecto que es propio de la Ley. El único contenido sustantivo es la limitación de los complejos turísticos a los ámbitos de referencia turísticos, lo cual ya está señalado en el artículo 3.7.2.5. En consecuencia se entiende que este artículo ha quedado derogado.
- **Artículo 3.7.5.5. Condiciones de los establecimientos turísticos de naturaleza:** Se trata de normas de aplicación directa para la autorización de productos turísticos que, al disponerse en suelo rústico, tienen la consideración de usos de interés público y social y, por tanto,

el Plan Insular puede regularlos. En consecuencia, se entiende que este artículo mantiene su vigencia.

- **Artículo 3.7.5.6. Condiciones de los establecimientos de turismo rural:** Los establecimientos de turismo rural podrían ser objeto de regulación por el Plan Insular en los supuestos en que no tengan carácter de usos complementarios de acuerdo a la LSENPC. Ahora bien, salvo el primer párrafo (que es una definición que ya está en la legislación turística), todo el contenido de este artículo son instrucciones directivas al planeamiento urbanístico que no competen al Plan Insular. En consecuencia, ha de entenderse que este artículo ha quedado derogado.
- **Artículo 3.7.5.7. Condiciones de los campamentos de turismo:** Los campamentos de turismo son usos de interés público y social por lo que el Plan Insular puede contener disposiciones para regularlos. Así pues, los cuatro primeros párrafos, con el carácter de normas de aplicación directa, se entienden que mantienen su vigencia. Sin embargo, los párrafos 5 y 6, referidos a un Plan Territorial Especial de Ordenación de los Campamentos de Turismo, han de entenderse derogados, toda vez que la LSENPC no admite que estos usos sean objeto de un Plan Territorial Especial.
- **Artículo 3.7.5.8. Condiciones de los establecimientos turísticos recreativos:** Tanto por ser usos de interés público y social (si se implantan en suelo rústico) como porque la DOT 10 encomienda a los Planes Insulares la regulación de estos usos en suelo rústico, el PIOT es competente para establecer normas sustantivas sobre los mismos. Sin embargo, este artículo se limita a remitir la ordenación de los mismos a un Plan Territorial Especial de Ordenación cuando la LSENPC no admite que estos usos sean objeto de dicho instrumento. Así pues, este artículo ha quedado derogado.
- **Artículo 3.7.5.9. Cuadro resumen de los establecimientos turísticos:** El contenido de este cuadro es un mero resumen de los artículos precedentes, sin que aporte contenido propio. De otra parte, gran parte del mismo ha quedado derogado, tal como se justifica en las referencias a cada uno de dichos artículos. En consecuencia, se entiende que debe suprimirse de las Normas.
- **Sección 6ª. Ordenación de las áreas turísticas existentes:** La ordenación de las áreas urbanas existentes compete en el marco legal actual al planeamiento urbanístico, sin que el PIOT cuente con habilitación legal al respecto –ni en la LSENPC ni en las DOT–. Todo el contenido de esta sección consiste en instrucciones sobre cómo han de redactarse los planes urbanísticos de ordenación de las áreas turísticas. Así pues, ha de entenderse que la sección en su totalidad ha quedado derogada.
- **Sección 7ª. Directrices de coordinación de política turística insular:** Todas las disposiciones contenidas en esta sección consisten en criterios de actuación en materia turística que deben seguir las Administraciones Públicas, sin que tengan alcance normativo de aplicación directa. Por tanto, esta sección en su totalidad deberá

trasladarse de las Normas a otro documento del PIOT y, además, corregirse refiriéndose solo al Cabildo Insular de Tenerife.

- **Sección 8ª. Directrices sobre el contenido del Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo:** El PIOT impone el desarrollo de un PTEO del Turismo, pero este objeto no está comprendido en la LSENPC para dicha figura. Si bien las DOT prevén un Plan Territorial Especial⁴², se trata de un instrumento distinto del que se regula en esta sección. Además, tampoco podría el PIOT establecer condiciones a un instrumento de ordenación definido por las Directrices. En consecuencia, ha de entenderse que esta sección ha quedado derogada en su totalidad.

3.9. Capítulo 8: Residencia

Este Capítulo contiene criterios normativos y directrices sobre políticas públicas en materia residencial. Los usos residenciales son los más característicos de las áreas urbanas y sólo excepcionalmente son admisibles en rústico y, en tales supuestos, nunca con el carácter de usos de interés público o social. De otra parte, en ninguno de los artículos de la LSENPC referidos al contenido de los Planes Insulares se señala que éstos puedan contener determinaciones relativas a los usos residenciales. De hecho, el propio PIOT establece que las disposiciones normativas de este capítulo son de aplicación sobre el planeamiento urbanístico cuando éste ejerza su competencia de ordenación de las áreas residenciales, vinculando tales normas a las contenidas en el Título 2 sobre las áreas urbanas (que, como ya se ha visto, se entienden derogadas). De modo que cabe concluir, con carácter general, que en el nuevo marco legal el Plan Insular no tiene competencias para establecer determinaciones normativas sobre los usos y actividades residenciales. No obstante, se pasa a continuación a revisar cada una de las cuatro secciones que comprende este Capítulo para verificar más detalladamente su compatibilidad con la nueva Ley.

- **Sección 1ª. Generalidades:** Todas las disposiciones contenidas en esta sección son explicaciones para describir y justificar la forma en que el PIOT afronta la ordenación del Turismo. Al carecer de contenido normativo y tampoco ser necesarias para la aplicación de ningún precepto compatible con la Ley, se entiende que las partes que no se refieran a contenidos derogados deben trasladarse de las Normas a otro documento del PIOT.
- **Sección 2ª. Ordenación de los núcleos residenciales:** Esta sección contiene instrucciones que los planes urbanísticos deberían respetar en la delimitación, dimensionamiento (de la capacidad residencial) y desarrollo y gestión de los núcleos urbanos residenciales. Como ya se ha dicho, no cabe que el Plan Insular señale criterios al planeamiento urbanístico pero, además, menos en una materia sobre la que carece de competencias. Por tanto, esta Sección ha quedado derogada en su totalidad.
- **Sección 3ª. Ordenación y gestión de los núcleos residenciales en áreas rurales:** Respecto de esta sección cabría decir, en términos

⁴² Que es el que formuló el Cabildo de Tenerife.

generales, lo mismo que sobre la anterior. No obstante, la LSENPC (artículo 96.2.h) señala como una de las determinaciones que deben contener los PIO la “concreción de los criterios legales para la identificación y delimitación de los asentamientos rurales y agrícolas”. Esta sección cuenta con tres artículos; mientras el segundo y el tercero (artículos 3.8.3.2. y 3.8.3.3.) se refieren respectivamente a la ordenación y gestión de los asentamientos rurales y agrícolas y, `por tanto, han de entenderse derogados, el primero (artículo 3.8.3.1.) tiene por objeto la “admisibilidad y delimitación de asentamientos rurales y agrícolas”, cuyo contenido ha de valorarse específicamente (párrafo a párrafo) para valorar si es compatibles con la nueva Ley:

- a) El primer párrafo es meramente explicativo sin que sea necesario para la aplicación de las disposiciones normativas. Por lo tanto, debe desplazarse de las Normas.
- b) Los párrafos segundo y tercero definen, respectivamente, los asentamientos rurales y agrícolas. Dichas definiciones no son competencia del Plan Insular sino de la Ley que efectivamente las hace sin que sean exactamente las mismas que las del PIOT. En consecuencia, se entiende que estos dos párrafos han quedado derogados.
- c) El párrafo 4 concreta, en efecto, la definición legal de asentamiento rural, si bien su desarrollo es incluso inferior al que contiene la propia Ley en el artículo 35. Dado que este artículo de la Ley (o al menos sus tres primeros párrafos que son los que se refieren a la delimitación) es de aplicación en ausencia de determinaciones expresas del PIO, hay que entender que las disposiciones de este párrafo 4 se mantienen vigentes, sin perjuicio de que fuera conveniente (en otro procedimiento) armonizarlas con el citado artículo 35 LSENPC.
- d) El párrafo 5 concreta, a su vez, la definición legal de asentamiento agrícola, con lo cual ha de concluirse lo mismo que respecto del párrafo 4. En este caso, además, las disposiciones del PIOT son más precisas que las del citado artículo 35 LSENPC, que parecieran referirse solo a los asentamientos rurales. Por tanto, este párrafo se entiende que mantiene su vigencia.
- e) El párrafo sexto establece que los asentamientos no deben ser alternativas para resolver las necesidades de crecimiento de los municipios. Al margen de que se trata de una norma directiva, tampoco su contenido es propio del Plan Insular⁴³. Así pues, se entiende que ha sido derogado.
- f) El párrafo 7 establece condiciones de admisibilidad de los asentamientos, que es un contenido para el cual el PIOT no está habilitado expresamente en la Ley. Pero además, dichas condiciones se hace por referencia a ARH, considerando varias que han sido derogadas. En consecuencia, se entiende derogado.

⁴³ Sino de la Ley que, en efecto, contiene disposiciones en ese mismo sentido.

– Sección 4ª. Directrices de coordinación de política residencial:

Todas las disposiciones contenidas en esta sección consisten en criterios de actuación en materia de vivienda y suelo que deben seguir las Administraciones Públicas, sin que tengan alcance normativo de aplicación directa. Por tanto, esta sección en su totalidad deberá trasladarse de las Normas y, además, corregirse refiriéndose solo al Cabildo Insular de Tenerife.

4. Planos

El PIOT consta de 11 planos generales (1 hoja para ser impresa a escala 1:150.000) y 3 más que detallan tres de los anteriores (cada uno de ellos consta de 15 hojas a escala 1:25.000). Se pasa a continuación a valorar respecto de cada uno de estos planos el grado de adecuación a la nueva Ley.

4.1. Plano Síntesis de la Información

Este plano se presenta a escala 1:150.000 (1 hoja) y 1:25.000 (15 hojas) y divide el territorio insular en áreas homogéneas en cuanto a los usos existentes (en el momento de la formulación del PIOT), no ARH con alcance ordenancístico. Además, grafía la red viaria principal y los sistemas insulares. En tanto plano de información, no tiene carácter dispositivo ni tampoco se ve afectado por la nueva Ley; en consecuencia, sin perjuicio de la conveniencia de su actualización dado el largo tiempo transcurrido desde su elaboración, se entiende que debe mantenerse como parte de la documentación vigente.

4.2. Zonificación ambiental

Este plano se presenta a escala 1:150.000 (1 hoja) y 1:25.000 (15 hojas). La zonificación ambiental es una determinación propia de la naturaleza del PIOT de plan de ordenación de los recursos naturales. Ciertamente, hay una estrecha correlación entre las zonas ambientales (A, Ba, Bb y C/D) y la división del territorio en Áreas de Regulación Homogénea (ARH). Pero mientras las primeras deben entenderse como el resultado gráfico del diagnóstico territorial, las segundas, por más que basadas en aquéllas, implican un alcance dispositivo al cual ya se ha hecho referencia en el capítulo 2 de esta parte B. Por eso, si bien la entrada en vigor de la LSENPC implica la derogación de la delimitación y regulación de determinadas ARH, ello no implica que haya de alterarse la zonificación ambiental, siempre que se entienda que, en efecto, carece de alcance dispositivo. En consecuencia, y sin perjuicio de la necesidad de revisar estas delimitaciones a partir de la actualización de los contenidos ambientales del PIOT, se entiende que este plano debe mantenerse como parte de la documentación vigente.

4.3. Distribución básica de los usos

Este plano también se presenta a escala 1:150.000 (1 hoja) y 1:25.000 (15 hojas) y recoge la división exhaustiva de la Isla en recintos adscritos a las correspondientes categorías de Áreas de Regulación Homogénea (ARH). En los anteriores epígrafes 2.4 a 2.10 de esta parte B ya se ha analizado cada una de las categorías de ARH concluyendo que sólo son compatibles con la nueva Ley las ambientales, económicas y

estratégicas. Consiguientemente, en principio, de este plano deberían suprimirse todos los recintos adscritos a las otras categorías de ARH, de modo que sólo quedarían delimitados (y “coloreados”) los de las ARH ambientales, económicas y estratégicas.

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que este plano del PIOT tenía un alcance directivo; mediante un análisis a escala más detallada del territorio, los distintos instrumentos de planeamiento (territoriales, de Espacios Naturales Protegidos y planes generales urbanísticos) tenían la obligación de “desarrollar” esta división, “readscribiendo” en su caso ámbitos concretos de suelo a ARH distintas. En la medida en que se realizaban estos procesos de desarrollo del PIOT, aunque el plano no se modificara, se producía de hecho (y de derecho) una alteración de los perímetros de los recintos de las ARH. Por ejemplo, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Ganadería, tras el pertinente análisis detallado y siguiendo los criterios que se establecen en el régimen normativo de las ARH, readscribió unos terrenos en el entorno de Benijos de ARH ambiental a ARH de protección económica; esos terrenos, en este plano del PIOT siguen apareciendo como ARH de protección ambiental, pero en realidad su régimen jurídico es el propio de las ARH de protección económica. Este mismo ejemplo vale para todas las readscripciones llevada a cabo por todos los instrumentos de planeamiento (incluyendo los planes generales municipales) que se aprobaron definitivamente adaptándose al PIOT y, por tanto, desarrollando el submodelo de distribución de los usos del PIOT en su ámbito territorial y, en su caso, readscribiendo suelos de un ARH a otra.

En consecuencia con lo expuesto, los recintos que deben suprimirse no son los que en este plano del PIOT están asignados a ARH distintas de ambientales, económicas y estratégicas, sino los que a la fecha, como resultado de las aprobaciones de planes territoriales, de ENP y generales municipales adaptados al PIOT, estén efectivamente adscritos a ARH distintas de ambientales y estratégicas.

4.4. Modelo de Ordenación Territorial

Este plano se presenta a escala 1:150.000 (una hoja) y en él se recogen las siguientes determinaciones gráficas de ordenación, cuya compatibilidad con la LSENPC se señala a continuación:

- a) Las Áreas de Regulación Homogénea: deberán suprimirse las que han quedado derogadas de acuerdo a los criterios establecidos en el epígrafe anterior.
- b) La Red Viaria y de Transportes: al tener el carácter de sistema general supramunicipal deberá mantenerse sin alteración.
- c) Los equipamientos e infraestructuras insulares: también deberán mantenerse por tener igualmente el carácter de sistemas generales supramunicipales.
- d) La estructura comarcal: aunque carece de contenido dispositivo (no es el ámbito de los planes comarcales que han quedado derogados), se debe mantener como referencia, toda vez que la descripción de los modelos comarcales se hace por referencia a la misma.

4.5. Modelo de Estructura Urbana

Este plano se presenta sólo a escala 1:150.000 (una hoja) y en él se recogen las siguientes determinaciones gráficas de ordenación, cuya compatibilidad con la LSENPC se señala a continuación:

- a) Las delimitaciones de las áreas residenciales (principales, secundarias y asentamientos rurales), áreas turísticas (consolidados turísticos y consolidados mixtos) y áreas de expansión, deben considerarse determinaciones orientativas, sin alcance normativo, tal como se ha argumentado al analizar el Modelo de Ordenación Territorial del PIOT. La delimitación de las áreas industriales y terciarias, en cambio, sí son determinaciones vinculantes del PIOT.
- b) La Red Viaria y de Transporte debe mantenerse, tal como ya se expone en el epígrafe anterior.
- c) Las Operaciones Singulares Estructurantes también han de mantenerse, tal como se argumenta en el epígrafe 2.12 anterior, pero deberán suprimirse las que se entienden derogadas (Cabo Blanco, Equipamientos de Salud del Valle de La Orotava, y las dos de rehabilitación urbana).
- d) Red Viaria y de Transportes: al tener el carácter de sistema general supramunicipal deberá mantenerse sin alteración.
- e) La estructura comarcal puede mantenerse tal como se ha justificado en el epígrafe anterior.

4.6. Ámbitos de Intervención Singular

Este plano se presenta a escala 1:150.000 (una hoja) y en él se recogen las siguientes determinaciones gráficas de ordenación, cuya compatibilidad con la LSENPC se señala a continuación:

- a) Los ámbitos extractivos: que, toda vez que no han sido derogados como se ha expuesto en el epígrafe 3.6, debe mantenerse.
- b) Los ámbitos de referencia turística, que también deben mantenerse ya que, como se argumenta en el anterior epígrafe 3.8, no han sido derogados, sin perjuicio de que su alcance normativo haya quedado muy disminuido.
- c) Las Operaciones Singulares Estructurantes también deben mantenerse, suprimiendo las derogadas, tal como se expone en el epígrafe anterior.
- d) Red Viaria y de Transporte debe mantenerse, tal como ya se expone en el epígrafe 4.4.
- e) La estructura comarcal puede mantenerse tal como se ha justificado en el epígrafe 4.4.

4.7. Ámbitos de Regeneración Paisajística

Este plano, presentado a escala 1:150.000 (una hoja), delimita los ámbitos de regeneración paisajística previstos en el artículo 3.1.6.1 de las Normas. Tal como se ha expuesto en el anterior epígrafe 3.1, toda vez que el párrafo que contiene esta determinación se considera compatible con la LSENPC, ha de concluirse que este plano debe mantenerse.

4.8. Modelo de Ordenación de Puertos

Este plano, presentado a escala 1:150.000 (una hoja), recoge las determinaciones gráficas para la aplicación del artículo 3.3.3.10 de las Normas. Toda la sección en la que se incluye dicho artículo, tal como se ha expuesto en el epígrafe 3.4, debido a su carácter directivo, ha de desplazarse de las Normas a otro documento del PIOT. No obstante, la supresión del mismo de las Normas no implica la derogación de su contenido y, por tanto, requiere que se mantenga el plano para su correcta aplicación.

4.9. Índice de Potencial Eólico

Este plano, presentado a escala 1:150.000 (una hoja), tiene un mero valor informativo, y aparece debido a que era exigido por las Directrices de Ordenación General, actualmente derogadas. La información reflejada provenía de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, y no alcanza la fiabilidad mínima requerida. En consecuencia, dado su nulo carácter dispositivo, la innecesidad legal del mismo y su poca fiabilidad, se propone considerar este plano derogado.

4.10. Mapa Eólico

Este plano, presentado a escala 1:150.000 (una hoja) y divide el territorio insular en dos tipos de áreas: las incompatibles con instalaciones de generación de energía eólica y las potencialmente incompatibles. Este plano es requerido para la aplicación de la regulación de la admisibilidad de las infraestructuras supramunicipales de generación de energía eólica (véase lo ya expuesto en el epígrafe 3.4 en relación al artículo 3.3.4.6); de otra parte, la LSENPC, en su artículo 96.2.1) requiere que el Plan Insular elabore un mapa eólico de la Isla. En consecuencia, este plano debe mantenerse.

4.11. Esquemas

Este plano es una lámina que incluye 6 esquemas sobre mapas a escala muy reducida de la Isla. El valor de los mismos es fundamentalmente ilustrativo para entender la propuesta de ordenación del PIOT, sin que pueda decirse que tiene determinaciones dispositivas. En consecuencia, es un complemento de la Memoria de Ordenación del PIOT y como tal puede mantenerse, siempre que se añada junto al título un texto que aclare que carece de valor normativo”.

Con base en todo lo anterior, y teniendo en cuenta que el Pleno de este Cabildo Insular es el órgano competente para la aprobación del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (art. 41.2.1 del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife), se estima que debe ser este mismo órgano el que deberá acordar, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Única (apartado tercero) de la Ley 4/2017, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el contenido que debe considerarse vigente tras la derogación de las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Tenerife.

Por todo lo expuesto, previo dictamen de la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, **el Pleno**, con 16 votos a favor (10 de CC-PNC, 6 del Grupo

Socialista), y 10 abstenciones (5 del Grupo Popular y 5 del Grupo Podemos), **ACUERDA:**

PRIMERO: Considerar, en aplicación de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que el estado de vigencia de las distintas determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Tenerife es aquel que se indica en considerando sexto.

SEGUNDO: Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de Anuncios de este Cabildo Insular.

TERCERO: Comunicar el presente Acuerdo a los treinta y un Ayuntamientos de la Isla de Tenerife y a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.

CUARTO: Encomendar al Área de Política Territorial de este Cabildo Insular, la elaboración de un documento del Plan Insular de Ordenación de Tenerife actualizado en base a los resultados de este acuerdo. Dicho documento deberá publicarse en la página web www.tenerife.es/planes en sustitución del existente.

QUINTO: Encomendar al Área de Política Territorial de este Cabildo Insular, a la vista del documento actualizado y de los requerimientos de la nueva Ley, la elaboración de un informe-propuesta con los contenidos que deben incorporarse al Plan Insular de Ordenación para que éste alcance una eficacia y coherencia suficientes para la ordenación del territorio insular.

ÁREA DE PRESIDENCIA.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ASESORAMIENTO LEGAL AL PLENO Y A LAS COMISIONES PLENARIAS, DE REGISTRO Y FE PÚBLICA DE DICHS ÓRGANOS.

24.- Comparecencia, a petición del Grupo Podemos, de Don Aurelio Abreu Expósito, Consejero Insular del Área de Cooperación Municipal, Vivienda y Aguas, para informar sobre los grados de cumplimiento de los acuerdos plenarios del Cabildo de Tenerife en materia de viviendas y la actual situación de familias afectadas por desahucios en la isla de Tenerife.

Comparece el Consejero del Área de Cooperación Municipal, Vivienda y Aguas de este Cabildo Insular, **D. Aurelio Abreu Expósito**, a solicitud del Grupo Podemos, para informar acerca del grado de cumplimiento de los acuerdos plenarios en materia de vivienda y de la actual situación de las familias afectadas por desahucios en la isla de Tenerife, cuya intervención así como la de los Portavoces de los Grupos Políticos de esta Corporación constan íntegramente en el Diario de Sesiones del Pleno previsto en el artículo 68.3 del Reglamento Orgánico de esta Corporación, a las que, resumidamente, se hace referencia a continuación:

Comienza el compareciente diciendo que el área de vivienda es una de las áreas más importantes que gestionamos en el Cabildo insular de Tenerife, y ello por la importancia que para los socialistas tiene cualquier

área social de la administración pública. Es consustancial a nuestra naturaleza el preocuparnos y ocuparnos de los problemas de la ciudadanía, y así lo reflejamos en el propio presupuesto del área.

El presupuesto aumenta y seguirá creciendo de forma rotunda. Desde nuestra llegada, se ha visto fortalecido, con la creación de la Dirección Insular de Vivienda, pasando de un escaso millón de euros en 2015 a 3 millones en 2016; 4,5 en 2017 hasta los 5,4 en 2018, con un grado de ejecución de un 95%, en 2017, lo que demuestra la importancia que para nosotros tiene la gestión de la vivienda.

Nuestras competencias en materia de vivienda, como se ha reconocido desde el primer momento, son escasas, pero ello no ha impedido que trabajemos y nos involucremos acercándonos a las administraciones públicas que tienen mayores competencias, como es el Gobierno de Canarias o los ayuntamientos o mediante el impulso de diferentes proyectos de los que nos sentimos muy orgullosos ya que los mismos empiezan a reflejar datos muy positivos.

La situación de la vivienda en la isla es muy compleja y escasean las viviendas públicas que permitan a los ciudadanos acceder a alquileres sociales, acordes con su situación económica y familiar. También los alquileres con particulares, donde cada vez los precios se hacen menos accesibles, complica el acceso a la vivienda de los ciudadanos.

La precariedad laboral y el paro han supuesto que muchas personas no puedan afrontar el pago de sus hipotecas y de sus alquileres, motivo por el cual, surge el *Proyecto Base 25*. Este proyecto tiene sus cimientos en otros proyectos similares a nivel europeo, como el *Housing First*, que se basan en el compromiso de las familias de permitir el asesoramiento y acompañamiento de las entidades en diferentes aspectos de su vida. Todos los proyectos similares al Base 25 coinciden en que las familias firmen ese compromiso para dejarse acompañar.

Este proyecto, llevado a cabo en Tenerife junto a Cáritas con un presupuesto que fue aprobado por el Pleno en diciembre de 2016 con una enmienda del Grupo Podemos, comienza en la mayoría de las veces mediante el contacto telefónico con las familias, gracias a la colaboración y coordinación de los servicios sociales municipales que es fundamental.

Durante 6 meses, esta Administración, mantuvo visitas con todos los Ayuntamientos de la Isla y todos los equipos multidisciplinares para explicar en qué consiste el *Proyecto Base 25*, donde participaron todos los Grupos Políticos y donde además diferentes áreas del Cabildo, de Acción Social y de Gobierno Abierto, estuvieron presentes en cada una de las reuniones comarcales, para explicar y oír la situación dramática que supone un desahucio para las familias en cada uno de los rincones de esta Isla.

En todos los casos en donde las familias quieren nuestra colaboración se inicia el expediente con una visita domiciliaria de los trabajadores sociales, sea cual sea el lugar de la Isla a la que haya que desplazarse.

Esto que, a priori, puede parecer una tontería es un hecho que las familias agradecen profundamente, ya que las que se acogen a este proyecto tienen muchas limitaciones económicas y se encuentran en situaciones complejas, graves y muy estresantes, y valoran que una

Administración pública se acerque y les ayude en un momento tan complicado.

Además, el hecho de que las trabajadoras sociales se desplacen a los domicilios, les da a ellas una información integral de la situación, y nos ayuda a conseguir un diagnóstico más rápido, que nos permite detectar la posible existencia de menores en el domicilio que convierte la situación en más delicada si cabe.

Durante el año 2017, Base 25 ha abierto 148 expedientes afectando a 472 personas, 258 adultos y 214 menores, de los cuales 64 ya están cerrados tras recibir el asesoramiento necesario y el 17% encuentra una alternativa alojativa, el 13% cumple sus objetivos personalizados, el 6% es derivado a otros recursos sociales y el 19% se cierra porque los participantes rehúsan a la participación por diferentes causas o por la integración de otros miembros de la familia que forman parte de ese problema y entre todos se busca la solución.

Nos encontramos con distintas situaciones habitacionales. La principal que hemos abordado son los casos de desahucio por impago de alquiler, seguidos por ocupaciones ilegales de vivienda propiedad de entidades bancarias o financieras.

Ya explicó que en un primer momento, el proyecto cuenta con un protocolo de derivación de los ayuntamientos, que incluye un informe social por parte de ellos. Destaca la coordinación absoluta con los Ayuntamientos a la hora de implicarse desde el minuto uno en cada una de las situaciones.

Hemos trabajado con todos los ayuntamientos de la isla, pero la mayor problemática de vivienda la hemos encontrado en el ayuntamiento capitalino seguido de Granadilla de Abona. Santa Cruz de Tenerife por la mayor cantidad de población que se concentra y Granadilla por una importante problemática de ocupación ilegal, siendo el tercer municipio La Laguna.

En cuanto al perfil de personas participantes en este proyecto, se ha atendido prioritariamente a familias ya sean nucleares o monoparentales.

Encontramos, dentro de estos perfiles, perfiles significativos que conllevan situaciones muy complejas de resolver, familias monoparentales, jóvenes con menores a su cargo que tienen dificultades para conciliar el empleo con el cuidado del menor. Además se trata, en la mayoría de los casos, de jóvenes sin cualificación por lo que los puestos de trabajo suelen ser de salarios muy escasos que no dan para afrontar el pago de la vivienda. Otro perfil significativo es el de perceptores de rentas mínimas, pensiones no contributivas, rentas activas de reinserción, prestación canaria de inserción, en definitiva rentas de cuantías muy bajas, lo que provoca que dejen de pagar el alquiler para poder comprar alimentos, medicinas o suministros básicos como el agua.

También hay perfiles de personas que han sufrido una pérdida drástica de su nivel de vida, debido principalmente al desempleo prolongado. En este perfil, se encuentra la mayoría de los casos de ejecuciones hipotecarias o de desahucios por impago de alquiler privado. Además, encontramos perfiles de personas en situación administrativa

irregular al ser personas de otros países, lo que supone que se le niega el acceso a cualquier tipo de ayuda social. Hay algunos Ayuntamientos con dificultades administrativas para empadronar a una familia que tiene un derecho legítimo como para hacerlo.

Como pueden comprobar, nos encontramos diariamente con situaciones dramáticas, lo que no nos permite tener tiempo para poder responder en redes sociales a las continuas acusaciones sobre la financiación del proyecto. Seguramente, cuando termine mi intervención, se darán cuenta que el importe que se destina a este proyecto está perfectamente justificado, al igual que el procedimiento de subvención por el que se concedió cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley.

Esta primera aproximación al Base 25, nos permite detectar que el problema de la vivienda no es aislado, sino que es la consecuencia fundamentalmente de la falta de empleo y de la precariedad laboral. Por ello, en este proyecto, insistimos tanto en la necesidad de que existiera un técnico de empleo a tiempo completo destinado al proyecto, porque, si bien es cierto que la vivienda es la base fundamental de la vida de las personas, difícilmente se puede encontrar vivienda sin un empleo digno. La función principal que ha ejecutado este técnico de empleo ha sido la de realizar un proceso de orientación, información, y acompañamiento a las familias, con el objetivo de superar la situación de exclusión, bien a través de la consecución de un empleo, o mejorando la empleabilidad de los participantes.

Como ya dijo anteriormente, teniendo en cuenta las dificultades económicas de los participantes que acceden al proyecto, el técnico de empleo al igual que los trabajadores sociales, se han desplazado a los diferentes municipios para asistir y acompañar siempre a todos los miembros de las familias.

A través de Base 25, se han derivado a muchos beneficiarios a diferentes proyectos de empleo, con los siguientes resultados:

-43 personas atendidas en el área de empleo logrando más de una quincena de inserciones laborales. De ellas, 25 mujeres y 18 hombres, con edades entre los 30 y 45 años, y con estudios bastante bajos.

-De estas 43, más de la mitad, llevaban más de dos años desempleadas

El proyecto Base 25 está teniendo muy buenos resultados en cuanto a la intermediación, y en este sentido, el Cabildo está sirviendo de impulso a las distintas administraciones públicas. Los Ayuntamientos saben que en el Cabildo tienen un aliado en esta materia, y el Gobierno de Canarias sabe que desde el proyecto, se les comunica de manera inmediata, los casos en los que se requiere su intervención, para intermediar con las entidades financieras y bancarias. Hemos encontrado una dificultad enorme por parte del Gobierno de Canarias en no poner las viviendas necesarias a disposición del Cabildo, de los propios Ayuntamientos o del propio proyecto, lo que nos está suponiendo una dificultad a la hora de encontrar de manera inmediata la solución que requieren las familias en esa situación.

El 35 % de las personas con este proyecto han obtenido un empleo, si bien no es un empleo de larga duración, son empleos que ayudan en momentos determinados a las familias a tener un respiro económico.

En este momento, desde Base 25, se ha trasladado a la Dirección General de Vivienda 20 casos para que intermedie con distintas entidades financieras de las que se han conseguido con éxito satisfactorio lograr las viviendas para ellos.

Del total de familias atendidas en el ejercicio 2017, 88 han recibido atención jurídica; las principales actuaciones que se han realizado son:

- Asesoramiento y atención jurídica
- Revisión de documentación y cita para casos urgentes con fecha de lanzamiento
- Visitas a los juzgados para acceder a los expedientes judiciales
- Presentación de escritos solicitando aplazamientos o moratorias
- Coordinación y colaboración con procuradores, abogados de oficio, funcionarios de juzgado, letrados de ayuntamientos
- Orientación y estrecha colaboración con abogados de oficio
- Intervenciones judiciales en calidad de abogada
- Tramitación de enervaciones judiciales
- Negociaciones extrajudiciales
- Reclamaciones a los órganos judiciales por incumplimiento de derechos y garantías procesales

Como pueden comprobar, a pesar de las críticas continuadas, el proyecto Base 25 funciona y está integrado y coordinado por todas las Administraciones públicas e incluso se ha llegado a felicitar a los técnicos de Cáritas en privado por algún miembro del Grupo Podemos, le gustaría que el gesto de derivar a una persona a Cáritas y los agradecimientos a los técnicos también se hagan públicos y utilizar las redes sociales para fines más constructivos.

En el Área de Vivienda nos preocupaba la rehabilitación de las viviendas, y por ello aprobamos el proyecto de rehabilitación, suprimido de forma unilateral por el Gobierno de Canarias en 2011, en mitad de una crisis que obligó a los jóvenes a volver a sus casas con sus padres.

El plan de rehabilitación, por lo tanto, ha sido sumamente importante para familias con menos recursos económicos, que no podían afrontar obras tan básicas como la reforma de un baño o el arreglo de tuberías, y que en la mayoría de los casos no superaban los 6.000 euros. Con ellas, hemos logrado dignificar y poner en valor el patrimonio de las familias más humildes.

Dentro de este plan de rehabilitación de viviendas, hemos abordado diferentes obras según las necesidades de las familias. Aquellas que suponen facilitar las condiciones de accesibilidad y habitabilidad para personas con discapacidad, para personas mayores y también para personas dependientes. Pero también ha supuesto que familias hayan

conseguido poder escriturar o conseguir la cédula de habitabilidad de sus viviendas, en un trabajo coordinado entre este Cabildo y los ayuntamientos de la Isla.

Este Plan de rehabilitación de vivienda empezó con un presupuesto en 2016 de 1.322.000 euros y actualmente, es de 2.314.00 euros.

Orgullosos también estamos del resultado que está teniendo los denominados ARRUS, Áreas de Regeneración y Rehabilitación Urbana. Desde el Cabildo, estamos trabajando para dar a conocer a los ayuntamientos más pequeños la posibilidad que tienen de adherirse a esta figura jurídica.

Hasta el año pasado, sólo los ayuntamientos con mayor capacidad de gestión, como son Santa Cruz, Candelaria, La Laguna y Adeje, se habían adherido a estos convenios de colaboración. Queremos que el resto de ayuntamientos de la isla con menos capacidad técnica, puedan unirse a estos convenios. Son muchas las necesidades que existen en los diferentes municipios de la Isla de hacer rehabilitaciones íntegras de vivienda.

En este momento, estamos trabajando con municipios como San Juan de La Rambla, Arona y Buenavista del Norte, entre otros. Ya hemos conseguido que para el 2017 y 2018, se uniera el Ayuntamiento de El Tanque para rehabilitar 15 viviendas.

Por lo tanto, todos los ayuntamientos que lo necesiten contarán con el apoyo técnico y el asesoramiento jurídico que requieren para poder nutrirse de esta financiación tan importante.

No quiero olvidarme tampoco de la importancia del Consejo Insular de la Vivienda, el cual se creó en sesión plenaria el 28 de abril de 2014, pero no fue hasta el día 9 de noviembre de 2015, cuando se constituye y se pone en funcionamiento.

Desde esa fecha y hasta el momento actual, además de las celebraciones de los consejos territoriales que se han realizado por diferentes comarcas, el Consejo de la Vivienda propiamente dicho, se ha reunido el 1 de diciembre de 2015; el 11 de febrero de 2016; el 7 de marzo de 2016; el 5 de abril de 2016; el 26 de octubre de 2016; el 25 de enero de 2017; el 25 de julio de 2017, estando convocado de nuevo el pasado 28 de febrero, que no se pudo celebrar como consecuencia de la alerta meteorológica y que se ha trasladado al próximo martes 6 de marzo. En dicho Consejo, y tal y como se refleja en el orden del día enviado con antelación suficiente, se dará cuenta de todas las actuaciones realizadas por el área de Vivienda en el ejercicio 2017.

Para ello, además, se ha adjuntado la documentación necesaria para conocimiento de todos los aspectos que se tratarán en dicho Consejo, incluso se dará cuenta de las acciones que se han desarrollado desde el Área de Acción Social y que tienen relación con Vivienda.

En el Consejo Insular de la Vivienda, se crearon tres mesas. Una de ellas fue una comisión que impulsara el análisis, estudio y propuesta al Instituto Canario de la Vivienda, de la Oficina de Intermediación y Protocolo de Desahucio, al ser una competencia exclusivamente del Gobierno de Canarias. A través de este Órgano, intentamos impulsar la creación de dicha oficina de intermediación, designándose para ello una coordinadora que es

la responsable de impulsar su funcionamiento, al frente de la cual se nombra a Inma Évora, y que no ha convocado dicha Mesa o comisión, a diferencia de la Mesa de Personas sin Hogar, cuyo coordinador sí la ha convocado en distintas ocasiones aportando bastante información a los técnicos del proyecto Base 25.

Desde el Cabildo de Tenerife intentamos dentro de nuestras competencias, y respetando a todas las plataformas de la Isla, ayudar y acompañar a las familias que nos lo permiten en estas situaciones tan dramáticas, procurando siempre con nuestras soluciones, ajustadas a la legalidad, no añadir mayores problemas a las familias.

Trabajamos para que las familias consigan regularizar sus situaciones, porque ello supone una tranquilidad en sus vidas y una descarga importante de estrés. Las familias necesitan sentir que son capaces de afrontar los gastos que genera una vivienda, y también que forman parte de esta sociedad. Nosotros defendemos la sociedad del bienestar, lucharemos como socialistas, porque los ayuntamientos concedan a las familias las ayudas sociales que necesitan para salir adelante.

Lucharemos también porque el Gobierno de Canarias, ponga a disposición de las familias, viviendas sociales que se ajusten a su economía, y lucharemos también porque los bancos no castiguen a las familias que están pasando por una situación puntal complicada. Por lo tanto, seguiremos sacando proyectos como *Base 25*, que nos ha permitido, además de ayudar y acompañar a muchas familias, a hacernos una idea clara de cuál es la situación de la vivienda en la Isla. Tenemos que lograr que los Ayuntamientos cuenten con los recursos necesarios que les permita conceder las ayudas necesarias.

Concluye diciendo que se está haciendo un seguimiento muy riguroso de este proyecto por parte de los profesionales, también desde el punto de vista político, para evitar precisamente los malos entendidos y la mala información que se vierte en las redes sociales de forma malintencionada. Destaca el trabajo de la Directora Insular de Vivienda por su dedicación y seguimiento de este proyecto. Hace un llamamiento a la seguridad y a la seriedad con la que se está trabajando en este proyecto y a que los Grupos Políticos se sumen en la voluntad de aportar soluciones concretas que puedan ser realizables con las administraciones y competencias que tenemos cada una.

Interviene a continuación por el Grupo Podemos el Consejero **D. Julio Concepción Pérez**, señalando que la estrategia del Consejero no ha sido resolver un problema sino quitarse el problema de encima, a nuestro entender lo que ha habido es un incumplimiento grave de los acuerdos de varias mociones que se han traído al Pleno por parte de su Grupo, no habiéndose desarrollado los compromisos adoptados por la Corporación. La estrategia del Sr. Abreu ha sido liderar la el asesoramiento financiero a empresas y a particulares pero con otra estrategia más interesante, sacándose un proyecto de la manga e incumplir cada uno de los acuerdos que se han aprobado en este Pleno. Estamos en un punto muerto si los acuerdos plenarios no sirven para nada. Uno de los acuerdos adoptados era la creación de una oficina de intermediación hipotecaria, oficina que no existe, y ningún ciudadano sabe a dónde dirigirse físicamente cuando tiene

un problema, para ser asesorado y evitar que las entidades financieras tengan una situación privilegiada, esa situación de amparo a las familias con desahucio y pérdida de la vivienda no se da a día de hoy, un espacio físico donde se ofrezcan recursos. El diagnóstico sin hogarismo que tampoco lo tenemos y que también aprobó el Pleno, dándose el caso de que el Albergue ha pedido la colaboración a otras administraciones porque se han visto desbordados ante la afluencia de personas que se encuentran en la calle.

Por parte del Grupo Popular interviene la Consejera **D^a Ana Zurita Expósito**, diciendo que no llega a entender la política del Área de Vivienda más allá de lo que supone una mera aportación económica. De la gestión que hace el Área de Vivienda nos enteramos cuando se celebran los Consejos Insulares que son muy esporádicos y muy dilatados en el tiempo, desprendiéndose de la información que se da en ellos que tienen dos proyectos fundamentales: el de rehabilitación y el Base 25, y coincide con el representante del Grupo Podemos en que se trata de meras aportaciones económicas, o sea, lo que hace el Cabildo es casi quitarse un problema de encima. Recuerda las competencias que en este tema tienen las distintas Administraciones: Cabildo, Comunidad Autónoma y Estado. Afirma que lo principal es solucionar el problema de la vivienda a las personas con escasos recursos, en riesgo de vulnerabilidad, y en este Cabildo se ha aprobado un acuerdo fundamental que supone el primer paso que tiene que dar una persona que está en esta situación o en un riesgo de desahucio por deuda hipotecaria o por alquiler, como es la información y coincide también con el representante de Podemos en que el primer punto que aprobamos fue la creación de la Oficina de intermediación hipotecaria que lideraría el Cabildo y que funcionara a nivel comarcal. La función del Cabildo debe ser de colaboración con el Gobierno de Canarias e intentar evitar el problema porque lo que tenemos es falta de viviendas de emergencia social.

Interviene por el Grupo Socialista la Directora Insular de la Vivienda de este Cabildo Insular, **D^a Marta Arocha Correa**, diciendo que las actuaciones que está llevando el Cabildo en materia de vivienda se enmarcan dentro del principio de colaboración entre Administraciones y de las competencias genéricas que este Cabildo tiene en materia de cooperación municipal. En este sentido hay que agradecer a los empleados públicos del Cabildo el esfuerzo que realizan para buscar fórmulas jurídicas que nos permitan sacar adelante proyectos en esta materia, a pesar de las escasas competencias que tenemos.

Pasa a relacionar las actuaciones que se han puesto en marcha desde el año 2014, destacando la creación del Consejo Insular de la Vivienda, órgano consultivo, participativo y de asesoramiento, el proyecto Base 25 por el que fueron atendidas 148 familias en el 2017, con visitas domiciliarias y asesoramiento para evitar el lanzamiento de sus viviendas, y también ayudas al alquiler. El proyecto Base 25 está teniendo un gran éxito en la materia pero faltan viviendas para ofrecer a las familias que tendrán que ser aportadas por el Gobierno de Canarias, que es el titular del parque público de viviendas, aunque sabemos que existen viviendas vacías que son o del Gobierno de Canarias o de los propios Ayuntamientos; el Programa insular de rehabilitación de viviendas 2017-2018 cuyo objeto es asegurar la función social de la vivienda mediante el otorgamiento de subvenciones a los Ayuntamientos para distribuir entre familias que no disponen de

recursos económicos suficientes, tratándose de obras sencillas que dignifican la vida de las personas. Respecto a las áreas de regeneración y renovación urbanas cuyo objeto es la realización de obras y rehabilitación de edificios y reurbanización de espacios públicos, destacar que entre 2017 y 2018 se han logrado rehabilitar 1.216 viviendas, consiguiéndose que no sólo los grandes municipios como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Candelaria utilice esta vía de financiación sino también Ayuntamientos tan pequeños como El Tanque. Estamos trabajando también para prestar ayuda a los Ayuntamientos más pequeños de la Isla para que consigan la colaboración jurídica y económica para poder rehabilitar sus áreas, como por ejemplo El Tanque, esperando que se unan otros municipios con menos capacidad de gestión.

Por parte del Grupo Coalición Canaria-PNC interviene la Consejera del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana, **D^a M^a Coromoto Yanes González**, agradeciendo al compareciente, a la Dirección Insular y personal técnico el detalle de las líneas y los datos aportados, muchas de ellas son fundamentales para que desde el Cabildo se esté dando respuesta a personas que sufren ese drama social de la pérdida de su vivienda. Cuando hablamos de vivienda muchas veces se entrecruza con otras problemáticas sociales que se atienden desde el área de Acción Social y por ello la coordinación y las políticas transversales entre las distintas áreas es fundamental para seguir avanzando. La acción social debe ser integral y abarcar múltiples aspectos por ello planteamos la elaboración, que ya está en marcha, del Plan de inclusión social que pretende dar respuesta desde la transversalidad y dar un paso más a lo que se está llevando a cabo desde hace tiempo desde distintas áreas y proyectos destacando el trabajo desde dicha área de Acción Social que no solo piensa en el Base 25 como recurso alojativo sino también desde la atención integral social, con una serie de herramientas necesarias para la inclusión e integración efectiva y real de la persona, lo que significa un cambio cualitativo. Las líneas desarrolladas a partir del programa Base 25 se vienen complementando con una convocatoria pública de ayudas destinadas a los Ayuntamientos y entidades sociales, para cooperar y colaborar con ellos en materia de emergencia social, que incluye también el alquiler de la vivienda y otros recursos alojativos. Ya contamos con el diagnóstico de inclusión social con el que tener una visión más global y complementaria para trabajar en el citado Plan de inclusión social, avanzando en las políticas sociales que contribuyan a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad, así como la promoción de la inclusión social en nuestro territorio.

Se producen dos turnos más de intervenciones del compareciente y de los Portavoces de los Grupos Políticos, todo lo cual consta en el citado Diario de Sesiones del Pleno previsto en el artículo 68.3 del Reglamento Orgánico de esta Corporación.

25.- Moción de los Grupos Nacionalista Coalición Canaria-PNC y Socialista para solicitar al Estado la adopción inmediata de una serie de medidas en materia de Haciendas Locales y Función Pública.

Vista moción que presentan los Grupos Nacionalista de Coalición Canaria-PNC y Socialista para la inmediata actuación en materia de Haciendas Locales y Función Pública, del siguiente contenido literal:

"Exposición de motivos.

A falta de la liquidación definitiva, *las Entidades Locales cerrarán 2017 cumpliendo*, desde el punto de vista macroeconómico, *con los objetivos marcados en materia de estabilidad presupuestaria por el Estado, tal y como ha ocurrido en los últimos cinco ejercicios presupuestarios.*

Nuestro papel como gestores, en este ejercicio que se ha cerrado, fue nuevamente relevante, pues ha sido fundamental el esperado superávit de las Corporaciones Locales en 2017 para el cumplimiento del sector público en su conjunto. Este superávit se situará de nuevo en un 0,6% del PIB (tal y como ha manifestado el propio Ministerio), en torno a 7.000 millones de euros.

De igual manera, todo apunta a que lo volveremos a ser en 2018 para que *España salga del control especial presupuestario de Bruselas, vinculado al procedimiento de déficit excesivo.*

Ya en 2016, último ejercicio liquidado, se cumplió por la Administración Local con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto que fueron elaborados en su día por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria, el conjunto de las Administraciones Públicas alcanzó el objetivo del 4,6% del PIB, al situarse en un 4,32%, y para el ejercicio 2017 se estima que acabará en el 3,1% previsto y el 2,3% para 2018.

El subsector de Entidades Locales fue, un ejercicio económico más, *determinante en la consecución de los objetivos anteriormente referidos.* Obtuvo un *superávit de 7.083 millones de euros*, lo que representó el *0,6% del PIB*, frente a un *déficit del 0,8%*, el *1,6%* y el *2,5%* de las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y la Administración Central, respectivamente. En lo referente al objetivo del gasto, el conjunto de las Corporaciones Locales registró una *disminución del 0,6% en el gasto computable*, lo que supone el cumplimiento de la regla de gasto. De igual manera las Entidades Locales alcanzaron, una vez más, el objetivo de deuda pública, fijado en el *3%*, *al situarse en el 2,9% del PIB.*

Por tanto, nadie pone hoy en duda que los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares han sido claves y han cumplido con los tres pilares de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), como son el control del déficit, de la deuda y del gasto público, lo que nos hace merecedores del reconocimiento ante los ciudadanos del papel que desde la responsabilidad estamos desempeñando y donde *lejos de ser el problema de la administración pública española, estamos siendo protagonistas de la solución.*

El Cabildo Insular de Tenerife, en el último informe emitido por la Intervención General de evaluación del cumplimiento de los preceptos contenidos en la LOEPSF relativos a la liquidación del presupuesto y de las cuentas anuales del ejercicio 2016, referidos tanto a la Corporación Insular como Organismos Autónomos y Entes Públicos dependientes que consolidan

en términos de Contabilidad Nacional, ha cumplido con todas las reglas fiscales, es decir, la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, el período medio de pagos y la deuda pública. Respecto a este último parámetro, reseñar que el volumen total de capital vivo consolidado de las operaciones de crédito a corto y largo plazo vigentes supuso en 2016 el 43,50% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, este dato, extrapolado a diciembre de 2017 se situará en torno al 31% (el incumplimiento de la sostenibilidad financiera se produce al superar el 110%). Y si analizamos la evolución del endeudamiento real y previsible de esta Corporación a nivel consolidado en el período 2010 y 2018, se verifica una significativa disminución del mismo, ya que de 491,6 millones de euros en 2010 se pasará a 183,5 millones al cierre del ejercicio 2018, lo que supone una reducción del 63% de su endeudamiento. Este esfuerzo ha sido superior al realizado por el conjunto de la Administración local, toda vez que la participación, en términos relativos, del Cabildo Insular de Tenerife en el endeudamiento total de las Corporaciones Locales, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pasa del 1,20% en 2008 sobre un total de 32 mil millones de euros al 0,74 en 2016 de un total de 32,1 mil millones de euros. *Es por ello evidente la contribución de esta Corporación a los objetivos que fueron fijados en su día por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como una entidad más, en el conjunto de la Administración local.*

Como es sabido, la LOEPSF ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo al que ha quedado supeditada la política económica y social de las administraciones públicas, dando "prioridad absoluta" al pago de la deuda, por encima de cualquier otro gasto público.

Es un clamor de todas las fuerzas políticas, sin distinción de color, en los ámbitos de Gobierno, tanto municipal, provincial como en el insular, revisar y adecuar la regla de gasto, el superávit presupuestario, la tasa de reposición de efectivos y la financiación local, sin más dilación, en este ejercicio 2018.

La regulación, de la "regla de gasto", está restringiendo, *en este momento de inflexión en la coyuntura económica*, de manera injustificada la actuación de las Corporaciones Locales (CCLL), en un contexto en el que coexisten importantes superávits presupuestarios, más de 30.000 millones en el período 2012-2017 y un exceso de liquidez, más de 23.500 millones en bancos, según la FEMP, con acuciantes necesidades sociales y de inversión, y unos servicios públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), ha expresado que la concepción de la regla de gasto que se deriva de la LOEPSF es distinta de la interpretación que se hace de ella en Europa. En lugar de aplicarse a cada una de las Administraciones Públicas por separado, se aplica al conjunto de las mismas. De igual manera, no se activa mientras el país tenga abierto un procedimiento de déficit excesivo. La regla es un indicador del objetivo de estabilidad a medio plazo.

Nuestra normativa, en cambio, impone, una regla, injustificadamente rígida a todas y cada una de las administraciones, en

particular para las CCLL, en un contexto en el que es inminente que *España salga del* control especial presupuestario de Bruselas, en relación con la Administración Central.

El diseño actual de la regla provoca que, en la práctica, se aplique de manera independiente respecto del objetivo de estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de consolidación financiera del Estado. Dado que la regla de gasto no considera el incremento de los ingresos vinculado a la mejora de la coyuntura económica, la regla se acaba convirtiendo en un *criterio más severo en términos de consolidación fiscal que el que se deriva de aplicar el objetivo de estabilidad.*

Por todo ello, no es de extrañar, tal y como se ha expuesto, que haya sido el esfuerzo de consolidación fiscal de las CCLL el mayor responsable de la reciente reducción del déficit público en nuestro país, a pesar de que los niveles de gasto y deuda son sustancialmente inferiores a los de las CCAA y el Estado (5,7% de gasto público local sobre el PIB frente a un 42,4% del PIB de gasto público total y 2,91% de deuda local (32,2 miles de millones) sobre el total de deuda pública en 2016 (1.107,2 miles de millones).

Es tal el esfuerzo de consolidación realizado que se ha generado un profundo diferencial en el saldo presupuestario que mantienen las CCLL españolas en comparación con las de la Unión Europea (*0,6% del PIB de superávit en el caso español frente al 0,1% en la media europea*).

A tal efecto recordar que, en julio de 2017, se conformó un grupo de trabajo en la Comisión Nacional de Administración Local, con representación del Estado y de la FEMP para analizar la regla de gasto y flexibilizarla. A día de hoy, no se ha adoptado ninguna medida operativa. El Gobierno se comprometió a revisar la regla de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit de las corporaciones.

Unido a todo lo anterior, otra brecha, no menos importante, que se ha producido es la disminución de empleados públicos de la administración local, que ha pasado de 647.488 empleados en enero de 2011 a los 547.825 empleados de julio de 2016 lo que supone una reducción del 15,39%. Esto ha abocado a una situación en la que las Entidades Locales padecen graves dificultades para la prestación de los servicios que obligatoriamente tienen encomendados.

El pasado 6 de Octubre de 2017, en el marco de la tercera Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales, se alcanzó un acuerdo unánime, incorporado a la denominada "Declaración de Segovia", en el que se plasmaba la solicitud al Estado de flexibilización de los parámetros fiscales ante el hecho evidente de la positiva contribución de la Administración Local a la reducción de los niveles de deuda y déficit públicos, proponiendo que las medidas a adoptar, entre otras, estuvieran relacionadas con facilitar el uso del remanente de tesorería positivo y la eliminación del cumplimiento de la regla de gasto a entidades que hayan liquidado con superávit.

De igual manera el 13 de febrero de 2018 en el seno de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias, celebrada en Pontevedra, y presidida por el titular de la FEMP, se abordó, entre otras cuestiones, el difícil momento, casi dramático, que viven las Corporaciones Locales, ante la falta

de respuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, las limitaciones en la tasa de reposición de los efectivos de los Gobiernos Locales y el inicio de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica sin que, a su vez, se contemple el de la Administración Local.

Se trató la imposibilidad del uso del superávit presupuestario de 2017 (0,6% del PIB), en beneficio de los ciudadanos, existiendo la sospecha de que pueda ser utilizado por el Ejecutivo en beneficio tanto del propio Estado como de las Comunidades Autónomas.

Se solicitó, en ese sentido, reclamar la inclusión, antes de que finalice el mes de marzo, del uso del remanente de tesorería positivo del ejercicio 2017 en un Decreto-Ley sobre medidas urgentes de carácter presupuestario, toda vez que cualquier retraso para después del verano (en un escenario optimista de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado), haría inviables, por falta de tiempo y posibilidades las licitaciones.

Además, se propuso eliminar las restricciones a la inversión del superávit e ir más allá de las inversiones financieramente sostenibles que se contemplan en este momento y que, a juicio de la FEMP, impiden a las Corporaciones actuar en los ámbitos donde la necesidad de los ciudadanos es mayor, y que se concretan fundamentalmente en políticas sociales, de empleo, educativas, culturales o deportivas.

Se insistió en la petición de realizar el cálculo de la regla de gasto sobre el presupuesto inicialmente aprobado y no como el actual sistema en el que se calcula sobre presupuesto liquidado, penalizando a aquellas Entidades Locales que ahorran o no llegan a realizar algún gasto concreto. De igual manera se propuso que para el referido cálculo no se tomen en consideración gastos como las cofinanciaciones, ni aquellos que ocurren solo una vez, como las sentencias.

De igual manera, se insta al Estado a que cuanto antes se adopten las decisiones respecto a la racionalización del techo de gasto y se tomen en función de la eficiencia, toda vez que pueden arbitrarse de forma rápida, en la medida en que no exigen cambios legislativos, al tratarse de directrices de la Intervención General del Estado que se podrían aplicar, una vez acordadas políticamente, de forma inmediata.

Por todo ello, se presenta para su consideración y aceptación por el Pleno el siguiente ACUERDO:

Instar al Gobierno de España a:

- 1- Incluir, antes de que finalice el mes de marzo, en un Decreto-Ley sobre medidas urgentes de carácter presupuestario, en el marco de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, la eliminación de las restricciones a la inversión del superávit del ejercicio 2017 de los Gobiernos Locales, e ir más allá de las inversiones financieramente sostenibles que se contemplan en este momento y que impiden a las Corporaciones actuar en los ámbitos donde la necesidad de los ciudadanos es mayor, y que se concretan fundamentalmente en políticas sociales, de empleo, educativas, culturales o deportivas.

- 2- Establecer, igualmente, antes de la finalización del mes de marzo, un nuevo sistema en el cálculo de la regla de gasto, estructurando el mismo sobre la base del presupuesto inicialmente aprobado y no como el actual modelo que lo hace sobre el presupuesto liquidado, penalizando a aquellas Entidades Locales que ahorran o no llegan a realizar algún gasto concreto, todo ello siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo.
- 3- Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios el 100%.
- 4- Abordar la reforma de la financiación local de manera paralela a la reforma del sistema de financiación autonómico.”

Obtenido el consenso entre todos los Grupos Políticos presentes en esta Corporación, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:

1. Incluir, antes de que finalice el mes de marzo, en un Decreto-Ley sobre medidas urgentes de carácter presupuestario, en el marco de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, la eliminación de las restricciones a la inversión del superávit del ejercicio 2017 de los Gobiernos Locales, e ir más allá de las inversiones financieramente sostenibles que se contemplan en este momento y que impiden a las Corporaciones actuar en los ámbitos donde la necesidad de los ciudadanos es mayor, y que se concretan fundamentalmente en políticas sociales, de empleo, educativas, culturales o deportivas.
2. Establecer, igualmente, antes de la finalización del mes de marzo, un nuevo sistema en el cálculo de la regla de gasto, estructurando el mismo sobre la base del presupuesto inicialmente aprobado y no como el actual modelo que lo hace sobre el presupuesto liquidado, penalizando a aquellas Entidades Locales que ahorran o no llegan a realizar algún gasto concreto, todo ello siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo.
3. Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios el 100%, todo ello vinculado a las necesidades reales y capacidad financiera de cada corporación.
4. Abordar la reforma de la financiación local de manera paralela a la reforma del sistema de financiación autonómico.

26.- Moción de los Grupos Nacionalista Coalición Canaria-PNC y Socialista para el desarrollo de la Geotermia de Alta Entalpía en Canarias.

Vista moción que presentan los Grupos Nacionalista de Coalición Canaria-PNC y Socialista para el desarrollo de la Geotermia de Alta Entalpía en Canarias, del siguiente contenido literal:

“Exposición de motivos.

El concepto de energías renovables aparece en el mundo occidental con la primera crisis del petróleo desencadenada el 23 de agosto de 1973. Este contexto de crisis es aprovechado por España para reordenar su sector energético, a través de una herramienta que fue conocida como el *Plan Energético Nacional* (PEN), cuya primera versión tuvo lugar en 1975 y se prolongó en redacciones sucesivas hasta la década de los 90, cuando culminó con la liberalización del sector energético.

Ya en el primer PEN de 1975, se indicaba que una de sus prioridades era rebajar la participación del petróleo en el casi ausente mix energético nacional (petróleo y carbón), mediante su reemplazamiento por otras fuentes. Ese fue el inicio de las renovables en España y en los presupuestos de 1976 ya se dispuso de una partida en el Ministerio de Industria para su desarrollo.

En este orden de cosas, las inversiones para el desarrollo de la geotermia en España se canalizaron a través del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y de la desaparecida Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras (ENADIMSA), dependiente del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI).

Adelantándose incluso a este presupuesto, el IGME elaboró durante el período 1974-76 el *Inventario Nacional de Manifestaciones Geotérmicas*, en el que se identificaron y analizaron bajo el punto de vista geoquímico, todos los puntos termales del territorio nacional tanto peninsular como insular. A raíz de este estudio se concluyó que Canarias era la única zona del territorio nacional con recursos geotérmicos de alta entalpía en el subsuelo capaces de generar electricidad.

Ante estos resultados, en 1977 se lleva a cabo de manera inmediata la *Evaluación del potencial geotérmico de la isla de Lanzarote y selección de anomalías en las Islas Canarias*, que es el inicio de la planificación y ejecución de numerosos trabajos de investigación del potencial geotérmico de Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria y La Palma. En 1986, con la entrada de España en la Unión Europea, cambian los planteamientos y se accede a financiación de la Comisión Europea. Los prometedores resultados obtenidos durante los diez años anteriores respecto a la investigación geotérmica en Canarias, se presentan ante la D.G. XII (Investigación y Desarrollo) de Bruselas, obteniéndose financiación para varios proyectos de investigación.

La escasa contribución del Gobierno de Canarias en estos proyectos reflejaba el desinterés institucional canario ante la geotermia de alta temperatura para generar una electricidad que contribuyera al autoabastecimiento insular. Desgraciadamente, esta falta de implicación no fue solo hacia la geotermia, sino hacia todas las renovables y la mejor prueba de esta desidia de los sucesivos Gobiernos Autonómicos es que la contribución actual de las renovables en Canarias es del 8%, mientras que en la península está en el 17%, cuando el objetivo europeo para 2020 es de alcanzar el 20%.

El actual Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su discurso de investidura del 7 de julio de 2015, reconoció la situación y se comprometió a recuperar el tiempo perdido convirtiendo este 6% en un 60% en 20 años y alcanzar el 100% en 2050. Parece, por tanto, evidente la necesidad de un cambio hacia un modelo energético sostenible capaz de contribuir a la lucha contra el cambio climático que ya estamos sufriendo. Y el papel de la contribución de la geotermia de alta entalpía, única energía continua y gestionable entre las renovables y, por tanto, capaz de contribuir a cubrir la demanda de energía de base, va a ser fundamental. A título de ejemplo cabe decir que en la isla de São Miguel de las Azores, en 2017, la geotermia ha llegado ya a cubrir el 50% del diagrama de carga de la isla y, con ella, toda la demanda base.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Energía, publicó en 2011 su *Evaluación del Potencial de Energía Geotérmica. Estudio Técnico PER 2011-2020*, donde se indica nuevamente que la única zona española con posibilidad de recursos geotérmicos de alta temperatura, capaces de generar electricidad, son las Islas Canarias.

Durante el periodo 2007-2014 se activó el interés por la exploración geotérmica de alta entalpía en las Islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma gracias a la iniciativa conjunta de una empresa privada, que solicitó permisos de investigación en las islas, y el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN). Dicho proyecto fracasó ante la falta de los apoyos tanto institucionales como privados necesarios para su desarrollo.

El Plan Energético de Canarias (PECAN) 2005-2015 ni tan siquiera nombraba la geotermia y, consecuentemente, no disponía de ningún modelo económico para retribuir el posible kW geotérmico potencialmente generado por la iniciativa pública o privada. Tampoco la redacción de la actual Estrategia Canaria de Energía (EECan25) contempla este aspecto imprescindible para el desarrollo de la geotermia de alta entalpía en Canarias.

A pesar de este panorama desalentador, el INVOLCAN continúa trabajando por el desarrollo de la geotermia de alta entalpía en Canarias logrando en el periodo 2017-2018 la implicación, el compromiso y apoyo de los Cabildos Insulares de Tenerife (1,1 M€), Gran Canaria (0,43 M€) y La Palma (0,30 M€).

Durante este periodo, la única actuación conocida del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Industria y Energía, es la redacción de dos manuales de geotermia, uno de alta entalpía y otro de muy baja, que deberían estar finalizados a fin del presente año y que, en principio, tienen una finalidad didáctica e informativa sobre esta energía ante los agentes económicos insulares. Nada que ver con un posicionamiento claro y resolutivo para facilitar la introducción de la energía geotérmica para generar electricidad en Canarias.

Es, pues, el momento de apelar a la responsabilidad del Gobierno Autonómico, que es quien tiene competencias sobre el desarrollo energético de Canarias en su conjunto, para crear el marco legal y retributivo

adecuado que permita abrir y desarrollar la generación eléctrica mediante geotermia a los actores interesados.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Cabildo Insular de Tenerife el siguiente acuerdo:

1. Apoyar y facilitar la investigación para el desarrollo de la energía geotérmica de alta entalpía en Canarias con los presupuestos necesarios y suficientes para conocer con un buen grado de certidumbre si los recursos geotérmicos de alta entalpía existentes en el subsuelo de Canarias son técnica y económicamente explotables. No se pueden esperar otro periodo de 40 años sin responder a esta crucial pregunta y tampoco tiene sentido que unas islas con actividad volcánica manifiesta, sol y viento, solo se apoyen en las dos energías discontinuas (solar y eólica) dado que estas no son capaces de cubrir la demanda energética basal de las islas y que ésta deba satisfacerse con hidrocarburos líquidos o gaseosos.

2. Definir la modalidad de gestión a implementar para promocionar y desarrollar el recurso geotérmico de alta entalpía: público, privado o mixto.

3. Definir la modalidad de los apoyos públicos necesarios para la mitigación del riesgo inversor que supone la fase de exploración y perforación inicial, así como la política de retribución del kW geotermoeléctrico generado, en el caso de optar por la participación de la iniciativa privada desde las primeras fases de un desarrollo geotérmico de alta entalpía, como hacen todos los países del mundo que explotan sus recursos geotérmicos.

4. Planificar, dotar económicamente y comenzar a implementar las políticas de formación de técnicos en el campo de la geotermia de alta entalpía (exploración, perforación profunda, cementación de pozos, diagráfias, pruebas de producción, evaluación e ingeniería de yacimientos, etc), si fuera necesario con convenios de colaboración con países productores con experiencia. La importante potencialidad de creación de puestos de trabajo ha de estar dirigida tanto a técnicos superiores como a operarios.

Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición, por un lado, a los Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital así como de Economía y Competitividad y, por otro, a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias."

Habiéndose alcanzado el consenso entre todos los Grupos Políticos de esta Corporación, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:

- 1.** El Cabildo toma cuenta que para la implantación de la geotermia en Canarias se deben diferenciar dos etapas: la primera, que consiste en terminar de evaluar el potencial geotérmico de alta entalpía que hay en las Islas; y la segunda que, en el supuesto de que los resultados de la primera fuesen positivos, consistiría en abordar la explotación del recurso, y el modo de hacerlo. Será entonces cuando, desde la perspectiva del interés general, corresponda evaluar y decidir acerca

del modelo de explotación (público, privado o mixto), así como analizar la conveniencia de implicar en la inversión y la gestión a diferentes sectores (públicos y privados), que puedan aportar tanto capital como experiencia y conocimiento.

- 2.** El Cabildo se compromete a seguir apoyando, dotando y buscando el compromiso de las demás administraciones para investigar el desarrollo de la energía geotérmica de alta entalpía en Canarias, con los presupuestos necesarios y suficientes para conocer con un buen grado de certidumbre si los recursos geotérmicos de alta entalpía existentes en el subsuelo del Archipiélago son técnica y económicamente explotables. No se puede esperar otro periodo de cuarenta años sin responder a esta crucial pregunta, ni tiene sentido que unas islas con actividad volcánica manifiesta, sol y viento, solo se apoyen en las dos energías discontinuas (solar y eólica) que no son capaces de cubrir la demanda energética basal de las islas, provocando que ésta deba satisfacerse con hidrocarburos líquidos o gaseosos.
- 3.** De manera particular, el Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), liderará la elaboración urgente de un proyecto para terminar de evaluar el potencial geotérmico de Tenerife con la cuantificación correspondiente de su coste. Este documento constituirá la base de partida necesaria para solicitar ayuda a las administraciones autonómica, estatal y europea.
- 4.** El Cabildo, con el concurso de las demás administraciones implicadas, planificará, dotará económicamente y comenzará a implementar las políticas de formación de técnicos en el campo de la geotermia de alta entalpía (exploración, perforación profunda, cementación de pozos, diagrfias, pruebas de producción, evaluación e ingeniería de yacimientos, etc.), si fuera necesario mediante convenios de colaboración con entidades y países productores con experiencia. Este importante potencial de creación de puestos de trabajo debe estar dirigido tanto a personal técnico superior como a personal operario.
- 5.** El Cabildo de Tenerife, a través del INVOLCAN, y en colaboración con la administración autonómica y del Estado, organizará la celebración de unas Jornadas sobre Geotermia con el objetivo de visibilizar el papel de esta tecnología en la transición hacia un nuevo modelo energético de Tenerife; invitando, de forma particular, a ponencias de Azores y otras regiones insulares que tienen incorporada esta fuente de energía a su sistema eléctrico.
- 6.** El Cabildo acuerda instar al Gobierno de Canarias a que incluya la geotermia de alta entalpía en la planificación energética de Canarias (dado que no existe ninguna referencia en el documento preliminar EECan25 – Estrategia Energética de Canarias 2015-2025); en el entendimiento de que la geotérmica, a diferencia de otras fuentes renovables, constituye una energía limpia, *estable* y *gestionable*, que podría garantizar la energía de fondo que requiere el sistema eléctrico insular; y pudiendo constituir, en tal sentido, una de las tecnologías prioritarias del mix insular de Tenerife, pues reduce

dependencia, confiere estabilidad al sistema y mitiga el cambio climático.

7. Para su conocimiento e implicación, se acuerda finalmente, trasladar esta petición a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias; a los Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital, y al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España; y a las instituciones responsables en materia de Energía de la Comisión Europea.

27.- Moción de los Grupos Nacionalista Coalición Canaria-PNC y Socialista, para la mejora de la gestión del tráfico de Tenerife.

Vista moción que presentan los Grupos Nacionalista de Coalición Canaria-PNC y Socialista para la mejora de la gestión del tráfico en Tenerife, del siguiente contenido literal:

El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, regula las competencias en materia de tráfico y de seguridad vial:

Son competencias del Ministerio del Interior, entre otras:

- a) La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías cuando no exista policía local, así como la denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de seguridad en dichas vías.
- b) La regulación, ordenación y gestión del tráfico en vías interurbanas y en travesías, estableciendo para estas últimas fórmulas de cooperación o delegación con las Entidades Locales, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones y de las facultades de otros departamentos ministeriales
- c) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por motivos medioambientales, en los términos que reglamentariamente se determine.
- d) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así como las estadísticas de inspección técnica de vehículos, en colaboración con otros organismos oficiales y privados, en los términos que reglamentariamente se determine

Estas competencias, que las realiza la Dirección General de Tráfico, se materializan en los Centros de Gestión de Tráfico de la DGT. Actualmente existen 8 Centros de Gestión del Tráfico: Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, La Coruña y Baleares (Palma de Mallorca), cada uno de los cuales gestiona un área determinada.

Como bien define en su página Web la DGT, los Objetivos de los CGT son:

La vigilancia, gestión y regulación del tráfico, fundamentalmente en las vías de alta capacidad en las que están instalados los equipos de medida,

las cámaras y demás sistemas de control de la DGT, así como la actualización de la información a los usuarios de la vía, sobre el estado de circulación en la totalidad de vías interurbanas y travesías, durante las 24 horas del día de los 365 días del año, todo ello con el fin garantizar la movilidad, fluidez del tráfico y la seguridad vial, reduciendo los accidentes de tráfico en las mismas.

Son Funciones de los CGT:

1. Reducción de la siniestralidad

- Estudio y análisis de las condiciones de circulación y de la infraestructura, estudio de puntos conflictivos y realización de aforos, toma de datos y obras de mejora de la seguridad vial.
- Gestión de incidencias meteorológicas y de tráfico.
- Coordinación de las operaciones de auxilio en caso de accidente o incidente.
- Colaboración y participación en planes de emergencias por circunstancias meteorológicas, medio ambientales y planes de actuación en materia de protección civil y coordinación de emergencias.
- Tramitación, informe y seguimiento de obras en calzada, circulación de transportes especiales, mercancías peligrosas, pruebas deportivas, romerías, festejos, etc.
- Elaboración de normativa y reglamentación relacionada con la circulación. Programación y establecimiento de medidas de regulación del tráfico encaminadas a la reducción de situaciones de riesgo (restricciones de circulación, prohibición de adelantamiento, establecimiento de límites de velocidad por situaciones circunstanciales, etc.).

2. Proporcionar información y asistencia a los usuarios de la red viaria

- Recopilación y actualización de toda la información que puede ser de interés para la gestión del tráfico (incidencias de tráfico, meteorología, estado de las carreteras, restricciones, pruebas deportivas, fiestas populares, etc.).
- Difusión de la información de manera continua y actualizada (radio, televisión, teléfono, internet, Paneles de Mensaje Variable, aplicación para móviles, Redes Sociales etc.).
- Vigilancia, ayuda y asistencia en coordinación con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, la Patrulla de Helicópteros y los servicios de emergencia.
- Programas de visitas a los Centros de Gestión de escolares, universitarios, etc.

3. Gestión y control del tráfico interurbano

- Monitorización del tráfico en el conjunto de la red viaria vigilando el desarrollo de la circulación en todas las carreteras y detectando y siguiendo las incidencias de tráfico que se pudieran producir.

- Control del estado de la red, obras en la calzada, retenciones, accidentes y condiciones meteorológicas.
 - Toma de decisiones para la ejecución de de las medidas de regulación del tráfico a adoptar en cada momento, para garantizar la movilidad, fluidez del tráfico y la seguridad vial (establecimiento de itinerarios alternativos, prohibición de paso a determinado tipo de vehículos, cortes parciales o totales de vía, establecimiento de niveles de servicio, límites de velocidad u otras obligaciones o prohibiciones,...).
 - Gestión del tráfico en los accesos a las grandes ciudades (>600 Km control y otros 500 Km monitorización) y establecimiento de medidas específicas de gestión del tráfico para atender diferentes eventos que implican la afluencia masiva de vehículos a las mismas.
 - Planificación de medidas de ordenación del tráfico mediante conos, para la mejora de la capacidad de la vía (reducción/ampliación de carriles, carriles en sentido contrario al habitual, etc).
 - Carriles reversibles (en 11 provincias con un total de 300 Km pudiendo llegar hasta 400 Km), carriles adicionales, carriles en sentido contrario y BUS-VAO.
 - Información de itinerarios, rutas alternativas y situación de la red viaria.
 - Planificación y programación de los medios humanos y materiales para los períodos del año en que la Dirección General de Tráfico establece Campañas específicas de Control y Vigilancia, así como durante las Operaciones y Períodos Especiales de Tráfico (puentes, vacaciones).
4. Promover la investigación y realización de estudios en materia de seguridad vial
- Elaboración de estudios, informes y estadísticas:
 - En materia de accidentalidad y seguridad vial (evolución cifras de siniestralidad vial, análisis de los principales grupos de riesgo, seguimiento del uso y grado de eficacia de los dispositivos de Seguridad Pasiva: cinturón, casco, SRI..., tramos de concentración de accidentes, eficacia del permiso por puntos, etc.).
 - Informes de movilidad en los accesos a las grandes ciudades y de vialidad.
 - Elaboración de estudios sobre la evolución de las velocidades medias de circulación, las intensidades de tráfico, y los movimientos de largo recorrido.
 - Cooperación con otros organismos de la Administración con competencias complementarias a las de la Dirección General de Tráfico: Titulares de las vías, Agencia Estatal de Meteorología, Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias, Instituto de Estudios Turísticos, Consorcio de Transportes, etc. Cooperación y colaboración con otras Administraciones Públicas de carácter Autonómico y Local en lo relativo a participación en planes de emergencia así como establecimiento de convenios de colaboración y vigilancia.

- Participación en grupos de trabajo de la Unión Europea, en congresos y foros técnicos internacionales.
- Financiación de proyectos de investigación y desarrollo, así como colaboración con universidades, fundaciones, etc.

Los Sistemas de los CGT cuentan con:

1. Monitorización

- Monitorización de flujo a través de espiras electromagnéticas y EVA's:
 - Intensidad, velocidad, % vehículos pesados, distancia entre vehículos, ocupación, etc.
 - Monitorización meteorológica a través de Sensores de Variables Atmosféricas en Carretera" (SEVAC's):
 - Variables atmosféricas: Temperatura del aire, humedad relativa, presión atmosférica, radiación global, temperatura de aparición de rocío, velocidad, dirección y tipo de viento, etc.
 - Variables de precipitación: Visibilidad, intensidad, cantidad y naturaleza de precipitación.
 - Variables de calzada: Altura de la película de agua, de la capa de nieve, estado de superficie, temperatura de la superficie, temperatura de congelación, salinidad, etc
 - Monitorización mediante cámaras de TV:
 - Visión continua en muchos tramos de carreteras principales.
 - Accesos a grandes ciudades.
 - Lugares conflictivos: túneles, puentes.
 - Vigilancia, control y regulación del tráfico mediante patrullas de helicópteros
 - Monitorización y control de la velocidad mediante el sistema de radares fijos y en un tramo de la vía.
 - Sistemas de lectura de placas de matrícula
 - Nuevas tecnologías:
 - Sistemas de cálculo de tiempo de recorrido
 - Estudio de fotos de satélite.
 - Emisores en los vehículos.
 - Infrarrojos.
 - Estandarización y Homologación de equipamiento ITS destinado a la gestión del tráfico.
- #### 2. Control y señalización
- Señalización variable
 - Semáforos reguladores de carril (aspaflechas).
 - Control (de velocidad, itinerarios de desvío, etc.).

- Advertencias (rutas alternativas, velocidad recomendada, campañas de sensibilización, etc.).
- Información (estado del tráfico, incidencias, restricciones, tiempos de recorrido, meteorología, estacionamiento, etc.).
- Carriles reversibles, BUS-VAO, carriles en sentido contrario al habitual, carriles adicionales, etc.
- Control de accesos (Ramp Metering).

3. Información

- Antes del viaje:

Sistemas telemáticos (Teletexto, Internet, etc.)

- Durante el viaje:

Paneles de mensaje variable

RDS-TMC

- En cualquier momento:

Atención telefónica (011) , audiotexto

Aplicación de información de tráfico para móviles

Radio tráfico.

Internet <http://www.dgt.es>

Autoguiado.

Hay que señalar, lo que los propios informes recibidos de la Subdelegación del gobierno sobre informes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil del Subsector de Tenerife denominados "Informe sobre retenciones en la Autopista TF-5 (tardes de viernes y vísperas de festivo)" e "Informe sobre la problemática existente en la red Viaria de la Isla de Tenerife", destacan características de la Red Viaria de Tenerife de todos conocida:

- Orografía y dispersión de la población
- Elevado parque móvil. Provincia Santa Cruz de Tenerife 776.176 veh. Multiplica por 3.5 veces a media nacional por Km².
- Número de Camiones y Furgonetas: 117.205 unidades. 4º puesto en el ámbito nacional.
- Numero de autobuses: 2.866 unidades. 3er puesto en el ámbito nacional.
- Elevada densidad vial 741,20 Km de carretera / km². 2º Lugar en el ámbito nacional.
- Elevado número de eventos en carreteras. Aproximadamente 350 al año. Lo que posiciona a Tenerife en el número uno de eventos por km de red.

Además de los datos del análisis de la DGT se constata el crecimiento de la siniestrabilidad entre los años 2016 y 2017 en cuanto a mayor

número de puntos negros (de 66 a 73), mayor número de accidentes (de 1979 a 1987) y mayor número de fallecidos (de 13 a 19).

AÑO	2016	2017
PUNTOS NEGROS	66	73
ACCIDENTES	1979	1987
FALLECIDOS	13	19

AÑO	2016				2017			
	ZONA NORTE		ZONA SUR		ZONA NORTE		ZONA SUR	
	TF-5	TOTAL	TF-1	TOTAL	TF-5	TOTAL	TF-1	TOTAL
FALLECIDOS	5	7	3	6	3	10	5	9

Pues bien, en Canarias, y en particular en la isla de Tenerife, no existe ningún Centro de Gestión de tráfico de la DGT. Sin embargo, los problemas de tráfico son conocidos por todos, y los rangos de intensidad de vehículos en la red viaria de Tenerife superan en gran medida a la media estatal, equiparándose a las cifras de tráfico de las grandes capitales peninsulares (Madrid, Valencia, Bilbao).

Ante esta situación, el Cabildo de Tenerife, implantó el Centro de Información de Carreteras, que si bien no puede suplir a las competencias que por Ley tiene la DGT, ha venido a paliar la deficiente aportación de medios de la DGT en la isla de Tenerife.

El Centro de Información de Carreteras (CIC) cuenta con información en tiempo real del tráfico, coordina de los servicios de vigilancia y conservación viaria, dispone de una moderna infraestructura con los más innovadores dispositivos de video vigilancia y telecomunicaciones, prestando un Servicio continuo los 365 días del año y las 24 horas del día. Actualmente, posee 136 cámaras repartidas en los túneles y en las carreteras insulares con mayor densidad de tráfico. Se cuenta con 10 Paneles de Mensajería Variable.

Las imágenes se visualizan por los operadores de sala a través de un conjunto de monitores y para facilitar el trabajo de los operadores se ha implementado un sistema de Detección Automática de Incidencias DAI en túneles, sistema de análisis de imágenes que genera una alarma cuando se detecta una incidencia.

Como centro de coordinación de carreteras se está en continua colaboración con los recursos internos, Conservaciones Integrales y Ordinarias y con recursos externos, integra colaboración con: Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad CECOES, Policías locales, Guardia Civil COTA, Dirección General de Tráfico DGT, Consorcio de Bomberos de Tenerife, Centro de Coordinación de Operativa de la Administración Local CECOPAL y el Centro de Coordinación Operativa Insular del Cabildo CECOPIN.

En el año 2016 se gestionaron 25.438 llamadas desde el CIC. 17.967 entrantes y 7.471 salientes.

Además es el Área de Carreteras quien informa a los usuarios de incidencias a través de redes sociales y de la página web del CIC.

La gestión del Centro de Información de Carreteras cuesta anualmente al Cabildo Insular de Tenerife 1,3 millones de euros.

Pero además de los mecanismos y utilidades que un CGT aporta (en Tenerife el CIC), es notorio la falta de medios humanos y técnicos en la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico de Tenerife. La complejidad de la situación del tráfico en Tenerife, hace necesario un mayor número de efectivos en toda la Isla.

Por todo ello, se propone al Pleno del Cabildo Insular de Tenerife, el siguiente ACUERDO:

1.- Instar al Ministerio del Interior, ante los graves problemas de tráfico que sufre la Isla de Tenerife, y en el marco de sus competencias, a que aporte los medios materiales, logísticos y humanos para la gestión del Tráfico en Tenerife en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife a través del Centro de Información de Carreteras (CIC).

2.- Instar al Ministerio del Interior, ante los graves problemas de congestión y siniestrabilidad que sufre la Isla de Tenerife, y en el marco de sus competencias, a que de manera urgente se cubran las vacantes y las bajas de la plantilla de la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico en Tenerife, así como a dotar de los medios humanos y técnicos acorde con la relevancia de la problemática particular que en materia de tráfico sufre esta isla.

3.- Instar al Ministerio del Interior al restablecimiento del destacamento de la Guardia Civil en el Parque Nacional del Teide, siendo este espacio especialmente sensible en materia de tráfico y de seguridad ciudadana, como ocurre en gran parte de los parques nacionales con una problemática en materia de tráfico y seguridad ciudadana muy inferior.

4.- Reconocer el apoyo que el Cabildo Insular de Tenerife presta al Ministerio del Interior, a través del Convenio de Colaboración con una aportación de 199.964,06 €, apoyando las instalaciones y medios con los que cuenta la Guardia Civil en la isla y colaborando en sufragar los gastos derivados de la adquisición de diverso material (vehículos, desfibriladores, cámaras fotográficas, lectores, poleas, colchones de vacío, linternas, botas, entre otros), necesarios para su modernización y actualización, que favorezcan la mejora de la seguridad en las zonas turísticas y en los parques naturales y nacionales visitados por nuestros turistas."

Vista asimismo enmienda de adición presentada por el Grupo Popular con el siguiente contenido:

"5.- El Cabildo de Tenerife reconoce la labor que desarrolla en la isla los cuerpos y fuerzas de la Guardia Civil en general y de la unidad de tráfico en particular en el auxilio que prestan a todos los que utilizamos la red viaria de la isla de Tenerife.

6.- El Cabildo de Tenerife estudiará las propuestas presentadas recientemente por la Dirección General de Tráfico (DGT) para aliviar la saturación de tráfico de las dos autopistas de la isla de Tenerife y emitirá un informe detallando el nivel de ejecución o no de las mismas.

7.- El Cabildo de Tenerife suscribirá lo antes posible el convenio interadministrativo de colaboración con la Jefatura central de Tráfico, el cual ya está redactado, para desarrollar acciones en materia de tráfico y seguridad vial.”

Tras el oportuno debate que tuvo lugar que consta íntegramente en el Diario de Sesiones del Pleno previsto en el artículo 68.3 del Reglamento Orgánico de esta Corporación, y habiéndose obtenido el consenso entre todos los Grupos Políticos de la misma, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:

1.- Instar al Ministerio del Interior, ante los graves problemas de tráfico que sufre la Isla de Tenerife, y en el marco de sus competencias, a que aporte los medios materiales, logísticos y humanos para la gestión del Tráfico en Tenerife en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife a través del Centro de Información de Carreteras (CIC).

2.- Instar al Ministerio del Interior, ante los graves problemas de congestión y siniestrabilidad que sufre la Isla de Tenerife, y en el marco de sus competencias, a que de manera urgente se cubran las vacantes y las bajas de la plantilla de la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico en Tenerife, así como a dotar de los medios humanos y técnicos acorde con la relevancia de la problemática particular que en materia de tráfico sufre esta isla.

3.- Instar al Ministerio del Interior al restablecimiento del destacamento de la Guardia Civil en el Parque Nacional del Teide, siendo este espacio especialmente sensible en materia de tráfico y de seguridad ciudadana, como ocurre en gran parte de los parques nacionales con una problemática en materia de tráfico y seguridad ciudadana muy inferior.

4.- Reconocer el apoyo que el Cabildo Insular de Tenerife presta al Ministerio del Interior, a través del Convenio de Colaboración con una aportación de 199.964,06 €, apoyando las instalaciones y medios con los que cuenta la Guardia Civil en la isla y colaborando en sufragar los gastos derivados de la adquisición de diverso material (vehículos, desfibriladores, cámaras fotográficas, lectores, poleas, colchones de vacío, linternas, botas, entre otros), necesarios para su modernización y actualización, que favorezcan la mejora de la seguridad en las zonas turísticas y en los parques naturales y nacionales visitados por nuestros turistas.

5.- El Cabildo de Tenerife reconoce la labor que desarrolla en la isla los cuerpos y fuerzas de la Guardia Civil en general y de la unidad de tráfico en particular en el auxilio que prestan a todos los que utilizamos la red viaria de la isla de Tenerife.

6.- El Cabildo de Tenerife está estudiando las propuestas presentadas recientemente por la Dirección General de Tráfico (DGT) para aliviar la saturación de tráfico de las dos autopistas de la isla de Tenerife y emitirá un informe detallando el nivel de ejecución o no de las mismas.

7.- El Cabildo de Tenerife insta al Ministerio del Interior a la inmediata firma del convenio interadministrativo de colaboración con la Jefatura central de Tráfico, el cual ya está redactado, para desarrollar acciones en materia de tráfico y seguridad vial.

28.- Moción de los Grupos Nacionalista Coalición Canaria-PNC y Socialista, para exigir al Gobierno del Estado la adopción de diversas medidas para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Vista moción que presentan los Grupos Nacionalista de Coalición Canaria-PNC y Socialista para exigir al Gobierno del Estado la elaboración de diversas medidas para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres, del siguiente contenido literal:

“En el Día 22 de febrero se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial, una fecha en la que la UE recuerda que las mujeres europeas cobran de media un 15% menos que sus compañeros varones, por lo que deben trabajar 418 días para igualar el sueldo que los hombres reciben en un año.

Este número de jornadas laborales excede en 53 días los 365 del año natural, de forma que la mujer tendría que trabajar hasta el 22 de febrero del año siguiente para alcanzar el salario de un hombre. Por dicho motivo, en noviembre de 2008 el Parlamento Europeo designó el 22 de febrero Día Europeo de la Igualdad Salarial, que desde entonces se celebra en toda la UE.

Es un hecho demostrado que las mujeres cobramos menos que los hombres.

En el conjunto de la Unión Europea, según datos de la Comisión Europea, la diferencia salarial entre hombres y mujeres varía entre los 30 puntos registrados en Estonia y los 3,2 puntos en Eslovenia. El promedio fue del 16,4% en 2013. En otros países del mundo, como Estados Unidos, la brecha salarial es aún mayor: del 36% en la nación sudamericana.

Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis.

Según la última Encuesta de Estructura Salarial, publicada por el INE el 28 de junio de 2017, sobre 2015 las mujeres presentan una tasa de actividad inferior a la de los hombres en casi 12 puntos, junto a la mayor tasa de paro (18,35%) frente a la de los hombres (14,97%), a su vez se realizan cerca del 67% del empleo temporal a tiempo parcial, siendo el 42% de las mujeres las que tienen contrato indefinido a tiempo completo frente al 59% de los hombres.

El salario medio anual de las mujeres en el año 2015 fue del 77% representando un 23% inferior al de los hombres.

Porque se hace necesario el compromiso institucional y social para acabar definitivamente con la brecha salarial:

- Porque el trabajo a tiempo parcial en las mujeres representa aproximadamente un tercio más que el de los hombres.
- Porque la brecha salarial se sitúa de media en un 23% en detrimento del salario de las mujeres.
- Porque la tasa de empleo entre mujeres se reduce con el número de hijos e hijas frente a la de los hombres que aumenta.

- Porque las pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las de los hombres.

Por todas estas razones, y en definitiva, porque a pesar de los avances en políticas de igualdad, aún persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad.

Por este motivo la necesidad de mostrar nuestro compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa y equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y mujeres.

Las mujeres deben tener las mismas posibilidades de acceso al empleo que los hombres y de hacer su camino laboral, además de tener el mismo salario por trabajo de igual valor, porque corregir estas desigualdades implica mejorar las pensiones y protección social de las mujeres.

Es una cuestión de “democracia, justicia e igualdad” porque no podemos seguir hablando de mejorar la democracia si no mejoramos las condiciones de vida de las mujeres como ciudadanas y trabajadoras.

La evidencia de los datos de empleo de las mujeres y de la brecha salarial nos exige una respuesta política e institucional integral. Cambiar la realidad de la discriminación salarial que viven las mujeres es urgente y prioritario.

Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país en materia de igualdad, pero a la vez también reconocemos los retrocesos y recortes que se vienen produciendo en las políticas de igualdad.

Asimismo, no puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de la población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las mujeres se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral hasta la más cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres.

Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo.

Por ello, por la cercanía del día internacional de las mujeres con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, debemos seguir reclamando medidas y políticas para un verdadero cambio social que suponga una profunda transformación estructural en la que las mujeres sean protagonistas y copartícipes.

En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es la que se corresponde al ámbito laboral, por eso queremos promover que nuestro país cuente con una Ley de Igualdad Laboral que contribuya a erradicar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha salarial, que junto a la precariedad y la temporalidad, conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres.

En definitiva, la situación del empleo de las mujeres se caracteriza por la mayor precarización del empleo, menor tasa de actividad, menor tasa de ocupación, mayor tasa de paro, mayor temporalidad, que está provocando "feminización de la pobreza con contratos basuras" y por todo ello, una cuantía menor en las pensiones de las mujeres, tal y como se ha señalado.

Por último reseñar la importancia de la interlocución social y la necesidad de la participación de las mujeres en los procesos de negociación colectiva, en las mesas de negociación de las empresas, así como la presencia de las mujeres en los órganos de decisión tanto en las empresas como en las organizaciones sindicales y empresariales.

Por todo lo anterior, se propone al Pleno del Cabildo Insular del Tenerife los siguientes ACUERDOS:

1.- Instar al Gobierno del Estado a que realice un estudio que actualice los datos de la brecha salarial en nuestro país, que sirva como instrumento para combatirla y favorecer un mercado laboral más justo e igualitario.

2.- Instamos a los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados la presentación y aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, así como dar traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

3.- Instamos a la Comunidad Autónoma, la elaboración de un estudio sobre la situación laboral y salarial de los trabajadores y las trabajadoras del Gobierno Regional y del Parlamento Autonómico, en el que se recojan además las medidas adoptadas en materia de igualdad laboral o las que se tengan que establecer en su caso, al objeto de erradicar las posibles discriminaciones en esta materia.

4.- Instamos al Gobierno de la Comunidad Autónoma la elaboración y presentación para su aprobación por el Pleno, de un Plan de Igualdad específico para los trabajadores y trabajadoras del conjunto de la Administración Autonómica, en el que figuren las diferentes medidas a adoptar para eliminar cualquier discriminación de género y contemple las medidas que se consideren al objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal."

Obtenido el consenso entre todos los Grupos Políticos representados en esta Corporación, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:

1.- Instar al Gobierno del Estado a seguir trabajando en la actualización, normalización y unificación de datos sobre la brecha en las retribuciones de mujeres y hombres en el conjunto del Estado español de forma que la disponibilidad de esta información sirva como un instrumento para combatirla y favorecer un mercado laboral más justo e igualitario.

2.- Instar a todos los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso a trabajar conjuntamente para llegar a un consenso sobre la proposición de ley de igualdad retributiva, cuya tramitación ha sido apoyada en el Congreso sin ningún voto en contra el pasado 22 de febrero, que está

orientada a mejorar la posición de las mujeres en el mercado laboral y combatir la brecha retributiva.

3.- Instar al Gobierno Canario a la elaboración de un estudio sobre la situación laboral y retributiva de todas las mujeres trabajadoras residentes en Canarias, en el que se recojan además las medidas a adoptar para alcanzar la igualdad laboral y retributiva entre mujeres y hombres, tanto en materia de condiciones laborales de las mujeres (temporalidad, parcialidad, etc.) como en aspectos tales como la mejora de la negociación colectiva, mecanismos de intervención institucional para alcanzarla (refuerzo de las inspecciones de trabajo u otros), actuaciones en el seno de las empresas (elaboración de planes de igualdad), etc.

29.- Moción de los Grupos Nacionalista Coalición Canaria-PNC y Socialista, sobre las cotizaciones a la Seguridad Social de la Prestación Económica para Cuidados al Entorno Familiar.

Vista moción que presentan los Grupos Nacionalista de Coalición Canaria-PNC y Socialista sobre las cotizaciones a la Seguridad Social de la prestación económica para cuidados al entorno familiar, del siguiente contenido literal:

“Exposición de motivos

La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia distingue la existencia de dos clases de prestaciones: las que conforman, por un lado, el denominado por el artículo 15 de la citada ley el catálogo de servicios, y, por otro, las prestaciones económicas, que son subsidiarias de aquellas. Prestaciones económicas en donde se enmarca la protección a personas dependientes atendidas por cuidadores no profesionales.

Con respecto a los servicios, que tienen carácter prioritario, se enumeran en el artículo 15.1 de la Ley y consisten en prestaciones de tipo técnico o en especie, que consisten en el cuidado y atención de personas dependientes a cargo de profesionales especializados o de asistencia en centros, cuya función varía según el grado y tipo de dependencia que sufra el beneficiario. Estas prestaciones tienen la naturaleza de servicios y van destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otro, atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Los indicados servicios se prestan a través de la oferta pública de la red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados.

Son por tanto prestaciones en donde prima la atención personalizada, que se materializa en forma de servicios y que tienen aplicación prioritaria, en el sentido de que si mediante estas acciones es posible la atención de la persona dependiente ya no cabría la prestación económica para cuidados al entorno familiar.

Por tanto, con carácter subsidiario y excepcional se establece una serie de prestaciones económicas, cuyas funciones difieren según el destino, así, por ejemplo, de no ser posible la atención mediante alguno de los servicios, se incorporará la denominada prestación económica vinculada al

servicios, que se destina a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de Atención, debiendo ser prestado por una entidad o centro acreditado para la atención a la dependencia.

Las prestaciones económicas se equiparan a actuaciones de dar cantidades dinerarias para que sea el propio beneficiario o su familia quienes se encarguen de facilitar o proporcionar los servicios necesarios para su atención.

Las prestaciones económicas más significativas que explícitamente figuran en la ley son las siguientes:

- 1.- La prestación económica vinculada al servicio.
- 2.- La prestación económica de asistencia personal.

3.- La prestación económica para cuidados al entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Esta prestación se proyecta en una doble acción, por un lado, la prestación económica a la persona dependiente y por otra el apoyo al familiar que atiende a aquella y que en un inicio de la ley incluía la incorporación de este familiar al Sistema de la Seguridad Social.

Por cuidados no profesionales la ley entendía que era "la atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada". Se trata de la ayuda que con carácter permanente realiza una persona cercana y de la máxima confianza a la persona dependiente. La ayuda económica va siempre a la persona dependiente pero el cuidador, en el inicio de la ley tenía derecho a cotizar a la Seguridad Social.

La incorporación de los cuidadores no profesionales en el Sistema de la Seguridad Social fue una consecuencia inmediata del cambio de criterio por parte del legislador acerca del tratamiento de tales actividades en el plano de la protección social, que a su vez respondía a nuevas reivindicaciones de la sociedad, sin duda acuciada por nuevas necesidades que afectaban a la mayor parte de la población. Así la ley 39/2006, en su artículo 18.3 anunciaba que "el cuidador debía ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que se determinaran reglamentariamente". Y en su disposición adicional cuarta se concretaba que el gobierno determinaría reglamentariamente la incorporación de los cuidadores no profesionales en el Régimen que les corresponda y también los requisitos y forma de afiliación, alta y cotización. Por tanto, la ley 39/2006 nació con la clara intención de incluir a los cuidadores no profesionales en el Sistema de la Seguridad Social con las obligaciones y derechos propios de cualquier otro sujeto protegido por el Sistema. El desarrollo de la Seguridad Social aplicable a los cuidadores no profesionales no tardó en llegar y lo hizo a través de la publicación del RD 615/2007, cuya característica principal fue la aplicación del mismo tratamiento en todo el territorio nacional, al tratarse de legislación básica de Seguridad Social. El mecanismo que se previó fue el de la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social mediante el cual se incorpora obligatoriamente al cuidador no profesional en el Régimen General de la Seguridad Social, en situación de asimilada al alta. Esta situación de asimilada al alta se

consideraba a efectos de las prestaciones de jubilación, así como de incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de accidente sea o no de trabajo y de enfermedad común o profesional. Respecto a la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales fue asumida directamente por la Administración General del Estado por convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta situación de protección a los cuidadores no profesionales se mantuvo hasta noviembre de 2012, en donde se produjo un antes y un después para la ley de Dependencia. Los cuidadores no profesionales de dependientes dados de alta en la Seguridad Social pasaron de 171.713 a 25.350 y ello como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que supusieron una derogación encubierta de la ley de dependencia.

Ese texto legal recogía medidas especialmente sangrantes para los dependientes y sus familias, entre las que se encontraba la de la desaparición de la cotización en el régimen especial de cuidadores no profesionales por parte del Estado, convirtiéndolo en voluntario el hecho de permanecer en dicho régimen, teniendo que ser el propio cuidador el que abonase la totalidad de dicha cotización si quería mantenerla. Ello supuso que en el 2016 quedaban solamente 9.816 cuidadores no profesionales cotizando en la Seguridad Social.

Esta medida, por tanto, expulsó de la Seguridad Social a los cuidadores al dejar de costear el gobierno las cotizaciones, suponiendo la pérdida de un derecho subjetivo que afecta fundamentalmente a las mujeres, al ser mayoritariamente las mujeres las que ejercen como cuidadoras de personas dependientes.

Dado que en este momento según informa el propio gobierno de España se está saliendo de la crisis, produciéndose una buena dinámica de crecimiento.

Por todo ello, se propone al Pleno el siguiente ACUERDO:

- Instar al Gobierno central para que vuelva a incorporar a todos los las cuidadoras no profesionales al sistema de la Seguridad Social, asumiendo el propio Estado las cotizaciones correspondientes a través de un Convenio Especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, recuperando de esta forma un derecho subjetivo que hay que reconocer a todas las mujeres que están realizando una labor tan necesaria en esta sociedad."

Habiéndose obtenido el consenso de todos los Grupos Políticos de esta Corporación, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:

1.- Instar al Gobierno central para que vuelva a incorporar a todas las personas cuidadoras no profesionales al sistema de la Seguridad Social, mediante su incorporación en los Presupuestos Generales del Estado, asumiendo el propio Estado las cotizaciones correspondientes a través de un Convenio Especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, recuperando de esta forma un derecho subjetivo que hay que reconocer a

todas las mujeres que están realizando una labor tan necesaria en esta sociedad.

2.- Estudiar la posibilidad de que todas las personas cuidadoras no profesionales que perdieron ese derecho de cotización se les vuelva a reconocer con efectos retroactivos, ya que en su momento sufrieron doblemente la "crisis", teniendo que perder involuntariamente ese tiempo de cotización y debiendo continuar con los cuidados de las personas dependientes.

30.- Moción del Grupo Popular, para la ampliación del número de Pediatras en los centros de salud y la reposición del servicio de urgencias en el Hospital del Norte.

Vista moción presentada por el Grupo Popular para la ampliación del número de Pediatras en los Centros de Salud y la reposición del servicio de urgencias en el Hospital del Norte, del siguiente contenido literal:

"Exposición de motivos"

Como ya venía advirtiendo la Sociedad Canaria de Pediatría desde el año 2016, la escasez de pediatras para atender a los menores en los centros de salud y en los hospitales de la Isla se ha convertido en un serio problema en la atención sanitaria infantil, ya que más del 30% de las plazas en Atención Primaria de Canarias están cubiertas por médicos de otras especialidades, y en algunos casos el ratio es de 80 facultativos con más de mil pacientes.

Desde el ámbito de la medicina se afirma sin lugar a dudas que el mejor médico para un niño es el pediatra y, de hecho, para el caso de algunas enfermedades graves como el cáncer, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo para que las unidades de oncología pediátrica atiendan a niños hasta los 18 años, lo que podría ser ya una realidad este año.

Sin embargo, se da la paradoja de que en Atención Primaria las plazas de Pediatría que quedan vacantes por jubilación se están cubriendo por facultativos del área de la Medicina Familiar, según datos de la Sociedad Canaria de Pediatría. En concreto, y según cifras de 2016, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay 141 plazas de Pediatría, pero de éstas sólo 96 están ocupadas por pediatras, lo que representa el 68 por ciento. Además, la carga laboral de esta especialidad motivada por la escasez de especialistas provoca que el número de pacientes que tienen que atender los que están en activo es muy alto, lo que hace que la especialidad no sea atractiva para los médicos que han acabado el MIR.

El pasado viernes, día 23 de febrero, el pleno de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó por unanimidad instar al Servicio Canario de Salud (SCS) a reforzar los servicios de pediatría de los centros de salud del municipio. En concreto, el Consistorio solicitó la ampliación de los horarios de atención pediátrica, así como el incremento del personal pediátrico.

La escasez de pediatras es igualmente significativa en el área hospitalaria, y en fechas recientes el servicio de atención de urgencias

pediátricas en el llamado hospital del Norte de Tenerife, en Icod de los Vinos, se ha suspendido.

Este servicio se puso en marcha el pasado 15 de julio después de años de ser un derecho reclamado por los habitantes y autoridades del Norte, pero lo hizo no como un servicio de guardia de 24 horas, sino con un horario de atención muy limitado. Apenas tres meses después, en el mes octubre, ya ha dejado de funcionar porque la pediatra contratada causó baja y el Hospital Universitario de Canarias (HUC), del que depende el servicio, no ha logrado sustituirla, según informaron los medios de comunicación.

Diversos alcaldes del Norte de la Isla han público su malestar por esta situación, motivada por la falta de pediatras en la Isla, malestar que se une a la ausencia de un radiólogo de urgencias y, en definitiva, de un servicio completo de urgencias.

A la situación descrita respecto a la atención pediátrica, se dan unas deficiencias en la atención sanitaria que presta el Servicio Canario de Salud (SCS) en las islas que han hecho al Grupo Popular en el Parlamento de Canarias anunciar la reprobación del consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, por su manifiesta incapacidad para la planificación, que se concreta en el colapso repetido de los servicios de urgencia, pese a contar con más recursos (274 millones más que el año pasado), y en unas cifras en las listas de espera que son la más altas de toda España, lo que ha motivado la reciente aprobación por parte del Parlamento de Canarias a petición del Grupo Popular de una auditoría externa para fiscalizarlas.

Ante todo lo expuesto, el Grupo Popular propone al Pleno del Cabildo de Tenerife el siguiente ACUERDO:

1.- Instar al Gobierno de Canarias a resolver los colapsos en los servicios de urgencia y a reducir las listas de espera.

2.- Instar al Gobierno de Canarias a reponer de forma inmediata el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital del Norte, con un servicio de 24 horas.

3.- Instar al Gobierno de Canarias a incrementar el horario de atención pediátrica y el incremento del personal pediátrico en los centros de salud de la Isla.”

Obtenido el consenso entre todos los Grupos Políticos de esta Corporación, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:

- 1.** Instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a poner en marcha de forma inmediata el Plan de Urgencias Canario.
- 2.** Instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y al Servicio Canario de la Salud a la dotación adecuada de las urgencias pediátricas en los Hospitales Norte y Sur de la isla de Tenerife, tanto en lo que a especialistas en pediatría se refiere, como a los medios diagnósticos necesarios para evitar derivaciones innecesarias a los hospitales de referencias.
- 3.** Instar al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a revisar la convocatoria de plazas de MIR en Pediatría, de forma que se

relacione la oferta formativa a la demanda de los mismos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

31.- Moción del Grupo Popular, sobre inversiones en carreteras en la isla de Tenerife durante el período del prorrogado Convenio de Carreteras.

En relación con la moción presentada por el Grupo Popular sobre inversiones en carreteras en la isla de Tenerife, durante el período del prorrogado Convenio de Carreteras, la misma se retira por el Grupo proponente.

32.- Moción del Grupo Podemos, para adoptar criterios medioambientales y reducir la insostenibilidad en las fiestas y eventos masivos celebrados en la isla de Tenerife.

Vista moción presentada por el Grupo Podemos para adoptar criterios medioambientales y reducir la insostenibilidad en las fiestas y eventos masivos celebrados en Tenerife, del siguiente contenido literal:

“Justificación de motivos

Diariamente se celebran en nuestra isla fiestas populares, festivales de toda índole y tamaño, congresos y otros eventos de carácter más o menos masivo, que generan un alto impacto ambiental negativo. Se hace necesario, pues, desarrollar estrategias para cambiar la planificación de los eventos y la adopción de buenas prácticas que reduzcan el impacto ambiental sobre el medio de estas celebraciones.

En las recientes fiestas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se hizo visible, gracias a la implicación de la ciudadanía concienciada, una situación lamentable que daña gravemente la imagen no solo de la Ciudad sino de la Isla en su conjunto. Se han difundido escenas impresionantes de suciedad, compuesto sobre todo por bolsas, vasos y botellas de plástico, que cubrían como un penoso tapete hediondo las calles del centro de la capital. En realidad, esta situación lleva años siendo denunciada por personas y colectivos sensibilizados con esta problemática, que han venido mostrando su malestar al observar cómo en muchas fiestas y celebraciones públicas o privadas se genera una cantidad, que se puede calificar de obscena, de residuos (sobre todos plásticos de diverso tipo) impropia de una sociedad que pretende ser avanzada y con una absoluta pasividad de las administraciones públicas implicadas.



C/ Las Macetas, s/n. Los Majuelos
Pabellón Insular Santiago Martín 3ª Planta
38108. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife

Pero el problema no se circunscribe a los Carnavales de la capital tinerfeña. De forma general, en las fiestas populares la cantidad de residuos vertidos directamente a la calle aumenta de manera considerable; constituyendo un problema singular, entre otros, la cantidad de vasos de plástico desechables (y utilizados una sola vez) que se acumulan en la vía pública, lo que no pocas veces ocurre en los centros históricos de nuestros pueblos y ciudades, de alto valor patrimonial. El impacto ambiental de esta nefasta práctica se acrecienta ya que, aunque se tratara de envases reciclables (cosa que no sucede con los generalizados vasos de plástico) tales residuos no se pueden ya reciclar al estar sucios y, sobre todo, mezclados con todo tipo de desechos de otra naturaleza: sólo queda la opción de barrerlos (aumentando con mucho la carga de trabajo del personal encargado de esta tarea), cargarlos... y conducirlos para su enterramiento al vertedero de Arico. Suponen una molestia para el vecindario y viandantes, y obligan a las entidades locales a afrontar un coste económico extra por la limpieza de las calles. Esta nefasta gestión de los residuos no solo daña al medio y al paisaje urbano, sino que cuesta mucho dinero adicional al conjunto de la ciudadanía. Nuestras fiestas deben optar por convertirse en 'Zonas de Plástico Cero'. Se debe recordar la máxima de que *no es mejor quien más limpia sino quien menos ensucia*.



Justo tras la finalización de los Carnavales de Santa Cruz, y al calor del clamor popular indignado ante los reportajes fotográficos (sobre todo en redes sociales) que mostraban parte de esos miles de kilos de residuos de plástico que amanecían todos los días en los suelos de la ciudad, los responsables de la corporación, por boca de su concejal de Servicios Públicos, anunció para 'apagar el fuego' una serie de buenas intenciones ideadas para la celebración de las siguientes fiestas de don Carnal. La principal medida anunciada, que celebramos y esperemos se materialice lo antes posibles y se extienda más allá de esas fiestas, consistiría en restringir los vasos de plástico de un solo uso, obligando a consumidores y empresarios a distribuir y comprar vasos reutilizables.



En la misma información periodística, el referido concejal suministraba unos datos que deben llamar a la reflexión. "En esta edición del Carnaval hemos batido un record en residuos: 528 toneladas de basuras retiradas de las calles; 3,9 millones de litros de agua para limpiar las calles; 4.725 litros de productos químicos de limpieza; 8.000 horas de trabajo extra de los operarios de limpieza; y 120 viajes de camiones de basura a las instalaciones del PIRS". Estos datos supondrían un triste récord solo superado hace diez años, es decir, antes de la crisis.

Debemos tener presente que en todas las sociedades avanzadas, a pesar del crecimiento económico y poblacional, se ha conseguido disminuir la generación de residuos, vía implementación de políticas públicas que han logrado aumentos de la concienciación ciudadana. Cabe preguntarse al respecto: ¿Qué ha pasado en nuestra isla para que estemos más cerca del año 2008 que de los objetivos de reducción de residuos correspondientes a 2025?



Por otra parte, estaría bien que alguien recordara que unas fiestas sostenibles no se consiguen solo sustituyendo los vasos de plástico. Hay que analizar de manera integral el impacto ambiental de cada fiesta o evento, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes cuestiones:

- Reducir al máximo (hasta lograr el objetivo de erradicarlos) los envases de un solo uso. Reducir, reutilizar y reciclar.
- Ahorrar al máximo agua y electricidad.
- Utilizar decoración de materiales reutilizables.
- Realizar recogida selectiva de residuos.
- Gestionar el vaso reutilizable.
- Distribuir alimentos sanos y responsables con el medio ambiente y la salud.
- Garantizar el transporte público. Favorecer la movilidad sostenible.
- Proteger el hábitat de animales y plantas.
- Aprovechar también la fiesta como oportunidad para la educación ambiental.
- Comunicar a la sociedad en general el valor y repercusión positiva de un evento sostenible.

- Garantizar medidas correctoras post-fiesta, compensando la emisión de gases de CO₂, y el consumo de petróleo.

Según el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sostenible "es aquel evento diseñado, organizado y desarrollado de manera que se minimicen los potenciales impactos negativos ambientales, y que deja un legado beneficioso para la comunidad anfitriona y para todas las personas involucradas." Sigue explicando el Programa que todos los eventos celebrados generan un alto impacto negativo sobre el medioambiente, que se puede resumir en:

- Incremento de residuos.
- Elevado consumo de energía y agua.
- Generación de contaminación atmosférica.
- Degradación del entorno.
- Aumento del riesgo de accidentes.

Por el contrario, un evento planteado en términos de sostenibilidad (o, cuando menos, de *reducción de la creciente insostenibilidad*) presenta las siguientes ventajas comparativas:

- Reduce, de forma real, su impacto social y ambiental negativo. Incorpora un bien común.
- Confiere un valor añadido, humano y medioambiental, al evento. Atrae.
- Ahorra dinero, tanto a la organización como a los participantes. Economiza.
- Apoya a la economía y al empleo local. Compromete.
- Cambia nuestra relación con el Planeta, tanto de las personas participantes, como de las entidades proveedoras y patrocinadoras. Sensibiliza y educa.
- Posiciona y aporta buena imagen al evento. Diferencia.
- Refuerza la relación con clientela, patrocinadores y participantes. Fideliza.
- Crea vínculos emocionales evento – medio ambiente – organización. Promueve orgullo positivo.
- Inspira la innovación y la creatividad tecnológica y de gestión. Promueve eco-soluciones.
- Demuestra que otra forma de "hacer" es posible. Expande responsabilidad.

Siendo este asunto responsabilidad de todos y todas, se deben implicar por igual en su abordaje administraciones, empresas y entidades promotoras, patrocinadoras, y proveedoras, y personas participantes. Especial atención hay que prestar a las empresas importadoras y distribuidoras de estos productos plásticos de un solo uso, y orientar y favorecer su evolución urgente hacia otros productos duraderos, reutilizables y reciclables, ya que no solo está en juego su mala imagen

como empresas no respetuosas con el medio ambiente, sino lo que es peor, está en juego el empleo que generan.

Como administración pública, el Cabildo Insular de Tenerife debe colaborar con otras corporaciones locales para prohibir, con fecha de efecto del 1 de enero de 2020, el uso, comercialización, importación y exportación de utensilios como platos, vasos, copas, tazas, cubiertos y pajitas desechables, es decir, diseñados para su retirada después de un solo uso, íntegramente fabricados en cualquier variedad de plástico. Tenemos la obligación de contribuir a la disminución del impacto ambiental de los eventos y fiestas, ya sean aquellos promovidos de forma directa por esta corporación, como por otras administraciones municipales, y tanto en recintos cerrados como abiertos, haciéndolos compatibles con una mayor sostenibilidad, sin renunciar por ello a los objetivos lúdicos o culturales de la celebración. Sostenibilizar un evento puede resultar más sencillo de lo que parece, solo requiere un poco de planificación y mucho compromiso, valorando y adoptando las medidas adecuadas que reduzcan su actual impacto negativo ambiental y social.

Además, las celebraciones populares reúnen en un mismo lugar a personas con perfiles muy diferentes en cuanto a edad, profesión, intereses, etc. Constituye, por tanto, una ocasión ideal para transmitir a la población menos sensibilizada con el medio ambiente información y buenas prácticas relacionadas con el objetivo de la sostenibilidad. Un evento sostenible es una experiencia ejemplarizante, tanto para la ciudadanía, como para todas las entidades relacionadas con la organización de eventos. Un evento que es sostenible adquiere mayor valor añadido.

Las buenas prácticas ambientales incitan a la reflexión y animan al cambio de hábitos. Los resultados de una celebración sostenible: reducción de basura, limpieza del espacio, menores molestias, y un largo etcétera, se hacen visibles, y la sensación de bienestar trasciende a las personas que participan, lo que conlleva un aprendizaje indirecto acerca de cómo cuidar el medio que nos rodea.

Por todas las razones expuestas, se propone al Pleno del Cabildo Insular de Tenerife que adopte los siguientes acuerdos:

- A) El Área de Sostenibilidad y Medioambiente del Cabildo Insular desarrollará el Proyecto de 'Fiestas + Sostenibles' (al igual que existe o ha existido el de 'Hogares + Sostenibles' y 'Personas + Sostenibles', entre otros), con el objetivo de elaborar materiales y programas destinados a apoyar a los Ayuntamientos de Tenerife para mejorar el impacto ambiental de sus fiestas, así como para empresas que organizan eventos y para la ciudadanía en general.
- B) El Cabildo se compromete a implementar medidas inmediatas, a aplicar a partir de mayo de 2018, de reducción de residuos plásticos en todos los eventos (conciertos, ferias, congresos, reuniones, etc.), que se desarrollen en las instalaciones de la corporación insular (incluyendo Auditorio, Recinto Ferial, Estadio Heliodoro Rodríguez López, Pabellón Santiago Martín, etc.). Las empresas concesionarias que desarrollen actividades en los mismos deberán adaptar planes ambientales a sus eventos.

- C) El Cabildo, en colaboración con los Ayuntamientos, estimará las emisiones de CO₂ emitidas por los eventos festivos y otros, y establecerá medidas compensatorias tales como la plantación de árboles y especies vegetales autóctonas en alguna zona de interés del municipio (áreas degradadas, entornos urbanos abandonados, zonas incendiadas, etc.), como parte integrante del propio evento.
- D) El Cabildo desarrollará un distintivo insular de Calidad Ambiental, que será de obligado cumplimiento para cualquier celebración o fiesta que conlleve la financiación o colaboración de la corporación insular.
- E) El Cabildo dirigirá los esfuerzos a lograr unas fiestas sostenibles en toda la isla de Tenerife, apostando hacia el objetivo de lograr fiestas y eventos declarados 'de Plástico Cero'.
- F) El Cabildo impulsará ante los Gobiernos de Canarias y del Estado las iniciativas dirigidas a las modificaciones legislativas necesarias para prohibir, con fecha de efecto del 1 de enero de 2020, el uso, comercialización, importación y exportación de utensilios como platos, vasos, copas, tazas, cubiertos y pajitas desechables; es decir, diseñados para su retirada después de un solo uso, íntegramente fabricados en cualquier variedad de plástico, estableciendo que, a partir de dicha fecha tales productos deberán ser fabricados al menos en un 50 por ciento con sustancias biodegradables procedentes de materias orgánicas, como el almidón o la fécula de papa y, a partir de 2025, al menos en un 60 por ciento."

Obtenido el consenso entre todos los Grupos Políticos presentes en esta Corporación, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO INSTITUCIONAL:

1. El área de Medioambiente, Sostenibilidad y Seguridad del Cabildo Insular desarrollará dentro del programa Tenerife + Sostenible una línea que bajo la denominación de "Eventos + Sostenibles" se marca como objetivo elaborar materiales y programas destinados a apoyar a Administraciones y Particulares para mejorar el impacto ambiental de sus eventos.

2. Una acción de la línea de "Eventos + Sostenibles" será el fomento y asesoramiento a las distintas áreas y entidades asociadas del Cabildo Insular para que mejore los niveles de sostenibilidad de las actividades que desarrollen, así como de las instalaciones que gestionen. El objetivo de dicho asesoramiento en materia de eventos será buscar el objetivo de plásticos desechables cero.

3. El Cabildo Insular, dado que en el 2025 todos los países europeos deben alcanzar un nivel de reciclaje no inferior al 55%, instará a los Gobiernos del Estado y de Canarias a que adopten iniciativas legislativas tendentes a garantizar dicho objetivo, como la prohibición de uso, comercialización, importación, exportación, etc., de utensilios desechables como platos, vasos, copas, tazas, cubiertos, pajitas, etc., siempre y cuando estén diseñados para un solo uso y que se fabriquen en cualquier variedad de plástico. De igual forma fomentará su sustitución por elementos fabricados con materiales biodegradables procedentes de materias orgánicas. Este tipo de medidas irían en consonancia con las que ya se están adoptando en otros países del entorno Europeo como única vía de

poder alcanzar los objetivos marcados por la UE. Dichas iniciativas deberán estar aprobadas y en vigor como fecha tope el 1 de enero del 2022 si queremos alcanzar los objetivos marcados por la UE para el 2025.

33.- Moción del Grupo Podemos, para implementar medidas para garantizar la movilidad y la seguridad de las mujeres en los diferentes medios de transporte en la isla de Tenerife.

Vista moción que presenta el Grupo Podemos para implementar medidas para garantizar la movilidad y la seguridad de las mujeres en los diferentes medios de transportes en la isla de Tenerife, del siguiente contenido literal:

“Justificación de motivos

La ONU, en la IV Conferencia Mundial de 1995, reafirmó que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, además de que menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales y es también un obstáculo para el desarrollo. Atentar contra la integridad de las mujeres — sea cual sea el tipo de violencia utilizado— significa socavar las bases mismas de la democracia y destruir todo proyecto de futuro de nuestra sociedad.

La violencia contra las mujeres, que ha recorrido la historia y que aún en la actualidad ensombrece nuestro estado del bienestar, ha de tener sus días contados. Nadie puede hoy poner en duda la necesidad de que todas y cada una de las piezas que componen nuestra sociedad ha de movilizarse para acabar con ella. Erradicar la violencia es, fundamentalmente, una cuestión de justicia. De la misma manera que nada puede justificar una agresión, tampoco nada ha de impedirnos actuar contra la violencia de género.

Un informe elaborado por el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde revela que la sensación de seguridad de las mujeres es del 79% frente al 89% de los hombres. Esta circunstancia puede provocar que limiten sus movimientos en el transporte público colectivo y dado que el uso cotidiano del taxi es inasumible por motivos económicos.

En Moción queremos destacar la importancia de que los y las profesionales del sector de la movilidad en nuestra isla (taxistas, conductores y conductoras de guaguas, personal del tranvía), que están en la calle desarrollando su trabajo las 24 horas del día, al ser un sector al que una parte de víctimas de violencia de género acceden como primer recurso para sus desplazamientos o al salir de sus casas para garantizar su seguridad y ponerse a buen resguardo de sus agresores.

La intervención con el colectivo de profesionales de la movilidad, a través del desarrollo de un protocolo específico de sensibilización y formación y de nuevas medidas de prestación del servicio, tendrá como finalidad ayudar a evitar las agresiones, así como detectar y asesorar en materia de violencia de género a las víctimas que utilicen el transporte público o privado en sus desplazamientos (a casas de familiares, servicios

sociales, centros sociosanitarios, hospitales o cuerpos de seguridad) para así garantizar su seguridad física, emocional y jurídica.

Remarcamos que tanto el sector del transporte colectivo como el del taxi son sectores fuertemente masculinizados, de ahí la importancia de promover su implicación en la lucha contra la violencia de género porque con ello transmitimos el mensaje de que terminar con la violencia hacia las mujeres no sólo es una cuestión que concierne a las mujeres, sino que implica de manera necesaria e imprescindible a los varones para poder construir una sociedad más justa e igualitaria.

El transporte colectivo

Desde nuestro Grupo queremos destacar la iniciativa pionera desarrollada en algunas ciudades de Francia y que empieza a tener eco en algunas ciudades del Estado español a la hora de poner en marcha medidas en los transportes públicos para luchar contra las situaciones de acoso a las mujeres.

El ejemplo concreto es la norma que el Ayuntamiento de Nantes aplica desde hace meses y que permite que las mujeres se bajen de los autobuses nocturnos fuera de las paradas reglamentarias. La medida ha sido copiada en Burdeos y la región parisina y en España ya ha sido aprobada en las tres capitales vascas (Bilbao, San Sebastián y Vitoria), Terrassa y Vigo. Barcelona ha anunciado que estudia los planes ya implantados en otras ciudades para poner en marcha el suyo.

Los transportes públicos colectivos van a aportar así su granito de arena en la lucha contra la violencia machista para implantar el servicio a la hora de detenerse a demanda para mejorar la seguridad de las mujeres. La parada a demanda tiene como objetivo prioritario mejorar la seguridad de las mujeres y reducir el riesgo de poder sufrir una agresión sexual, bien porque las paradas están demasiado lejos de sus casas o porque hayan sido situadas en zonas con poca iluminación.

Con la activación de dicho servicio aumentamos la seguridad, desde una perspectiva de género, a la vez que atendemos a una de las demandas que, de manera reiterada, se viene produciendo por muchas mujeres que usan este servicio y que, tras bajarse de la guagua urbana, tienen que desplazarse con miedo para llegar a sus domicilios.

Es una medida de coste cero que mejora el servicio del transporte público y que va a permitir que los y las usuarias puedan solicitar bajarse entre dos paradas. Eso les facilitará apearse en una zona más cercana a su destino, reduciendo el riesgo de agresiones.

Esta medida resultará además beneficiosa para otro tipo de usuarios con movilidad reducida, pero sin olvidar que la iniciativa está destinada sobre todo a luchar contra la violencia machista para así evitar las agresiones sexuales a las mujeres durante los trayectos nocturnos.

El sector del Taxi

Por otra parte, los y las taxistas tienen una función social que hay que reivindicar, ya que son agentes con una participación muy directa en la vida comunitaria. Es el primer recurso que muchas víctimas utilizan al salir de sus casas. No hay que olvidar que el taxi es un servicio de 24 horas en la

calle y son en alguna medida los ojos de la sociedad ante los hechos que suceden de forma cotidiana.

Debemos de reseñar la campaña en contra de la violencia de género que en agosto de 2013 se desarrolló en la provincia de Málaga con la participación de unos 4.000 profesionales del sector del taxi, con la coordinación del Instituto Andaluz de la Mujer, la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi y Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi entre otras. Dicha campaña consistió en poner pegatinas grandes en las puertas de los vehículos y tarjetas para colgar del retrovisor. Bajo el título "Ante la violencia no estás sola" incluyendo toda la información y consejos contra la violencia de género: espacios donde denunciar, juzgados, Instituto de la Mujer, etc. Además, el colectivo de taxistas recibió una formación en materia de violencia de género para detectar a posibles víctimas con la finalidad de poder alertar a la policía cuando las lleven a bordo.

Desde el Grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife valoramos de forma positiva esta iniciativa por su trabajo en profundidad con un colectivo de gran visibilidad pública como son los y las taxistas.

Entendemos que estas propuestas se deben extender a otras profesiones y sectores de la movilidad igualmente significativos en la lucha por la igualdad.

Por ello consideramos necesario impulsar un programa formativo destinado a preparar y sensibilizar al personal de guaguas, taxis y tranvías en materia de violencia de género. Entre los objetivos de la formación estará adiestrar a estos y estas profesionales en habilidades de detección precoz e intervención ante estos casos, desarrollándose diversas acciones a través de cursos, talleres, jornadas, mesas redondas y encuentros insulares.

Es preciso destacar que los ayuntamientos de la isla son fundamentales a la hora de colaborar en la formación en el sector del taxi y con ello obtener información de primera mano en materia de asistencia a víctimas de violencia de género. Sería positivo que dicha formación fuera un programa específico a la hora de renovar el carnet dentro del sector, insertado dentro de una formación más amplia que a día de hoy ya reciben.

Las propuestas anteriormente expuestas vienen en la línea de algunas de las medidas que contiene el Pacto contra la violencia de género aprobadas por el Gobierno de España el pasado mes de septiembre, entre dichas medidas a desarrollar destacan mejoras en la asistencia y protección de las víctimas, medidas para la sensibilización y la educación, y la formación de los profesionales que intervienen en estos casos.

Es por ello que consideramos que, desde las Unidad Insular de Mujer y Transporte del Cabildo de Tenerife, en colaboración con los ayuntamientos de Tenerife, se debería de impulsar esta intervención específica en el sector de los y las profesionales de la movilidad en nuestra Isla.

Por todas las razones expuestas, se propone al Pleno del Cabildo Insular de Tenerife que adopte los siguientes acuerdos:

1. Impulsar desde la Unidad Insular de la Mujer del Cabildo de Tenerife en colaboración con los ayuntamientos y sectores del transporte público y privado medidas destinadas a garantizar la movilidad y la seguridad de las mujeres en la isla de Tenerife.
2. Desarrollar un proyecto de intervención en materia de violencia de género destinado a formar y sensibilizar a los profesionales del sector del transporte de la isla (guagua, taxis y tranvía); implementando para ello un protocolo de intervención que ayude a detectar y asesorar a las víctimas de violencia de género para así garantizar su seguridad física, emocional y jurídica.
3. Promover una campaña contra la violencia machista en el sector de la movilidad consistente en una pegatina grande en las puertas de los vehículos, tarjetas informativas para colgar del retrovisor, folleto con teléfonos de asistencia, así como toda la información necesaria para su correcta atención.
4. Impulsar la mejora en la iluminación de todas aquellas paradas de guaguas y de taxis que así lo requieran destinadas a garantizar la seguridad de las mujeres.
5. Activar el servicio de paradas a demanda en los trayectos nocturnos de los distintos servicios de guaguas destinadas a mejorar la seguridad de las mujeres y así reducir el riesgo de sufrir una agresión sexual.
6. Impulsar el desarrollo de estudios con perspectiva de género que ayude a mejorar la movilidad de las mujeres en la isla de Tenerife.
7. Estudiar el poder aumentar la frecuencia en horario nocturno de aquellas líneas de transporte público que ayude a reducir el tiempo de espera en las paradas para así garantizar una mayor seguridad entre el colectivo de mujeres.”

Habiéndose obtenido el consenso entre todos los Grupos Políticos de esta Corporación, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

1º.- Impulsar desde el Cabildo de Tenerife, en colaboración con ayuntamientos y sectores del transporte público y privado, medidas destinadas a garantizar la movilidad y la seguridad de las mujeres en la isla de Tenerife.

2º.- Desarrollar, desde la Unidad de Violencia de Género del IASS en el plazo de seis meses a partir de la adopción de este acuerdo, un proyecto de intervención en esta materia, en coordinación con las áreas del Cabildo con competencia en igualdad, movilidad y comunicación. Dicho proyecto deberá contener al menos:

- Diagnóstico situacional y mapa de riesgo de violencia machista, asociado a la movilidad y transporte de las mujeres en la isla.
- Análisis de los factores condicionantes de la existencia de dichos puntos de riesgo.

- Mecanismos de actuación para minimizar dichos riesgos, como pueden ser la iluminación de paradas, trayectos y horarios a implementar, rutas y paradas especiales y a demanda, etc.

- Protocolo para que los y las profesionales puedan detectar situaciones de riesgo.

- Estrategia de comunicación más eficiente con el objetivo de sensibilización, formación y asesoría a profesionales y personas usuarias de los servicios de transporte públicos en la Isla.

34.- Pregunta que formula el Grupo Popular, en relación al retraso considerable en la resolución de los expedientes de alquiler vacacional.

En relación con la pregunta que formula en Grupo Popular sobre el retraso en la resolución de los expedientes de alquiler vacacional, se contestará por escrito a la citada pregunta a solicitud de dicho Grupo.

35.- Pregunta que formula el Grupo Popular, sobre el Proyecto del "Anillo Insular de carreteras tramo Icod de los Vinos - Los Realejos".

En relación con la pregunta que formula en Grupo Popular sobre el proyecto del Anillo Insular de Carreteras tramo Icod de los Vinos-Los Realejos, la misma será contestada por escrito a solicitud de dicho Grupo.

36.- Pregunta que formula el Grupo Podemos, sobre el canal de Televisión Digital Terrestre del Cabildo de Tenerife.

Vista pregunta que realiza el Grupo Podemos sobre el canal de Televisión Digital Terrestre del Cabildo de Tenerife, cuyo contenido es el siguiente:

"Recientemente hemos visto en la prensa local como el consejero de Tecnologías de la Información y la Comunicación y Sociedad de la Información, Félix Fariña, informó que el canal de Televisión Digital Terrestre (TDT) del Cabildo se prevé que esté operativo antes del próximo verano.

Desde el grupo Podemos en el Cabildo apoyamos la opción de crear empleo público y de calidad en un sector muy castigado por la precariedad laboral, de igual manera veíamos necesario que las administraciones públicas jueguen un papel en sus medios de comunicación para asegurar que se respete siempre la independencia y la pluralidad por la que se deberían regir. Igual que manifestamos este apoyo, mostramos nuestras dudas de que se lleve a cabo nuestro deseo, ya que, es Coalición Canaria la que lo va a desarrollar y no hay más que ver el modelo que han implementado en la Televisión Pública Canaria para que nos salten todas las dudas y todas las alarmas.

En el desarrollo del expediente hemos constatado ya un primer problema y es que no se contara (a pesar de que ellos mismos se

ofrecieron) con la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias-Federación de Sindicatos de Periodistas (UPCC-FeSP) en el proceso de elaboración de la propuesta de la TDT del Cabildo, pese al compromiso alcanzado por el Presidente de la Corporación, el Consejero responsable y así como por el gabinete de prensa.

En la citada información aparecida en los medios, el Consejero Félix Fariña, adelantó que la Corporación insular gestionará el servicio, destinando unos 500.000 euros anuales, y que el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) funcionará como gestor directo de este medio, por lo que hay que empezar a adecuar el sistema y a contratar los servicios de radiofrecuencia y radiodifusión.

Es interés de este grupo conocer si sigue en vigor la licencia de la TDT otorgada por el Gobierno de Canarias, y en caso de estar extinguida, el Cabildo puede aportar la concesión demanial del espectro radioeléctrico otorgada por el Ministerio de Energía pese a la extinción previa de la licencia regional que le obligaba a la gestión directa así como los necesarios informes jurídicos que le permitirían una gestión indirecta con la "Posibilidad de intervención de empresas privadas en la producción y edición del canal artículo 40.2 LGCA" que es como, literalmente, explican en la publicidad de su canal que están distribuyendo entre empresas privadas del sector de la península, para vender esta presunta privatización encubierta de este canal público pese a que ese artículo de la LGCA que citan no otorga la posibilidad de cambiar la "gestión directa" por "indirecta" a las "Entidades Locales sino a las "Comunidades Autónomas" y que es la disposición transitoria segunda de dicha Ley en la que la Viceconsejería de Comunicación se basa para declarar la extinción de la concesión de los canales TDT al Cabildo."

Contesta **D. Félix Fariña Rodríguez**, Consejero con delegación especial en TIC y Sociedad de la Información de este Cabildo Insular, señalando que tanto en la memoria de viabilidad como en su parte jurídica como en el resto de los informes que obran en el expediente dice que "la licencia como operador televisivo está extinguida por aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual", pero en aplicación de dicha Ley ya no es preceptiva esa licencia para las Administraciones Públicas, luego lo único que se precisa en la concesión demanial que concede el Ministerio que no tiene fecha de caducidad, al no estar ligada a la licencia de la Comunidad Autónoma por no ser preceptiva, el Estado nos han contestado verbalmente que está en vigor, estando a la espera de la respuesta escrita.

La gestión acordada por el Pleno es la gestión directa a través del ITER, empresa cien por cien pública.

Interviene el Portavoz del Grupo Podemos, **D. Fernando Sabaté Bel**, para reiterarle la siguiente reflexión: el proyecto de televisión digital terrestre pública del Cabildo de Tenerife, con una finalidad esencialmente educativa, no ha tenido ningún reparo por parte de este Grupo, pero sí lo ha tenido y mucho esa fracción correspondiente a temas informativos, ya que si el modelo de la cuota de los informativos que van a haber va a ser del estilo del documental de media hora que el Gabinete de Prensa elaboró para hacer un resumen balance del año 2017, modelo estéticamente contemporáneo pero con el lenguaje, el fondo, el estilo y el formato de los Nodos de los años 60 y 70, no es de recibo democrático.

Termina el **Sr. Fariña Rodríguez** pidiendo que hagan el esfuerzo de entender que no existe ninguna televisión como esta en el País, no emite publicidad lo cual es impensable en todos los modelos de televisión existentes, es una televisión de bajo costo, innovadora y está centrada en la iniciativa 2030 y en la formación, para cubrir el 93% de la población de esta Isla, porque la banda ancha no está disponible para todos los ciudadanos de esta Isla y tardará algunos años, y vamos a hacer ese tránsito un poco más agradable hasta que la banda ancha llegue. Por lo tanto, considera que es una muy buena iniciativa y novedosa. Concluye diciendo que no le compete valorar la profesionalidad de los responsables de la información institucional que da el Cabildo.

37.- Pregunta que formula el Grupo Podemos, sobre el Código de Buen Gobierno del Cabildo de Tenerife.

Vista pregunta que realiza el Grupo Podemos sobre el Código de Buen Gobierno del Cabildo de Tenerife, del siguiente contenido:

"El pasado día 8 de enero realizamos pregunta por escrito vía Secretaría General del Pleno a la Sra. Consejera del Área de Gobierno Abierto, con el fin de solicitar el acta de constitución del Comité de Seguimiento del Código Ético de Buen Gobierno del Cabildo de Tenerife y el histórico del Registro de Incidencias desde la aprobación del mismo.

El Código de Buen Gobierno se aprobó en sesión plenaria el día 29 de mayo de 2015, tal y como nos dice la Consejera en su respuesta por escrito a nuestra solicitud de información:

Tiene una doble finalidad, la de garantizar la implantación de un modelo de Gobierno que incluya los pilares de funcionamiento del Gobierno Abierto y, por otro, la de determinar los principios y medidas que deben guiar la conducta individual de quienes ostentan responsabilidades públicas y del personal para la implantación del modelo de Buen Gobierno, así como las principales pautas básicas éticas y de conducta individual que deben presidir sus actuaciones. Este Código prevé la creación de un Comité de Seguimiento del cumplimiento del mismo y de un Registro de Incidencias, con el alcance y contenido que se apruebe reglamentariamente.

En este ámbito de actuación, la Mesa Técnica de Gobierno Abierto aprobó el 10 de mayo de 2016, la regulación del Comité de Seguimiento del Código de Buen Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Comité que se constituyó en sesión celebrada el día 28 de abril de 2017 a las 9:00 horas en la Sala Siete Islas del Palacio Insular.

El acta de la sesión de constitución fue remitida por correo electrónico a todos los miembros para su conocimiento, pero no ha sido aprobada, ya que se procederá a su lectura y aprobación, si procede, en la próxima reunión del Comité que, conforme a lo previsto en la regulación del mismo (artículo 8. Régimen de funcionamiento), celebrará sesión ordinaria dentro del primer cuatrimestre de cada año natural.

Por tanto, se procederá a la aprobación del Acta de Constitución del Comité en la sesión que se celebrará en el primer cuatrimestre de 2018, momento a partir del cual estará disponible la misma.

A su vez el Registro de Incidencias de Buen Gobierno en el Cabildo Insular de Tenerife, su creación y regulación, así como la gestión de las mismas se recoge en el Reglamento que al efecto aprobó el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el 29 de julio de 2016, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 3 de octubre de 2016.

En relación a su solicitud y según los datos que obran en el Servicio Administrativo de Gobierno Abierto, Acción Social, Participación y Atención Ciudadana, constan dos incidencias desde la aprobación del mismo:

- *IRI1/2016 en relación a la declaración/compatibilidad del Sr. Consejero Insular Don J.A.V.A.*
- *IRI2/2016 en relación con el expediente sancionador incoado por la Junta Electoral Provincial y a la sanción impuesta en fecha 16 de septiembre de 2016 al Sr. Presidente de la Corporación.*

Es interés de este grupo preguntar transcurridos casi tres años desde la aprobación del Código de Buen Gobierno, qué ha justificado el retraso en la implementación definitiva del mismo y cuál ha sido el criterio para recoger las dos incidencias que aparecen en el Registro de Incidencias.”

Contesta **D^a M^a Coromoto Yanes González**, Consejera del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana de este Cabildo Insular, diciendo que no hay temporalidad concreta para la implementación del Código de Buen Gobierno por ello consideramos que no hay retraso sino que se está implementando actualmente en un proceso continuo. El criterio para recoger las dos incidencias que aparecen en el Registro está establecido en el Registro de Incidencias aprobado en el Pleno de 29 de julio de 2016, en su artículo 3.

Interviene el Consejero del Grupo Podemos **D. Julio Concepción Pérez**, diciendo que con el Código de Buen Gobierno el Cabildo no puede permitirse tener sentados en este Pleno a imputados por corrupción política, citando a varios Consejeros que lo están por diversas razones. Les ha llamado la atención que en el artículo 6 de dicho Código que habla de medidas de organización y funcionamiento para la implantación del modelo de buen gobierno, y en el desarrollo de dicho artículo se explicita la necesidad de rendir cuentas a la ciudadanía de las decisiones y actuaciones realizadas por la Corporación. En ese sentido, llevamos a Comisión Plenaria una moción para establecer mecanismos de seguimiento y cumplimiento a las mociones aprobadas por la oposición, que fue rechazada por el Grupo de Gobierno, en la que D. Félix Fariña afirmó que “es labor de la oposición efectuar el seguimiento de las mociones”. Hace más de un año que rompió un código de buen gobierno por el incumplimiento y hoy se ve en la obligación de ponerle cinta adhesiva para que lo pueda leer el Sr. Fariña.

Concluye la **Sra. Yanes González** diciendo que el Código de Buen Gobierno tiene como medida inicial la sensibilización entre los empleados del Cabildo impulsando medidas de transparencia, este cambio requiere un cambio de cultura en la organización, y estamos trabajando con las personas del Cabildo y de las Empresas Públicas para lograrlo. Desde el Área de Gobierno Abierto todo el personal está trabajando para llevar a cabo este Código de Buen Gobierno, habiéndose realizado más de cien acciones encaminadas a implementar este modelo desde la Mesa Técnica de

Buen Gobierno. Con respecto al Registro de Incidencias, decir que tiene un procedimiento y que puede utilizar el Sr. Concepción si así lo considera.

Sin otro particular, se levantó la sesión siendo las once horas y cincuenta y seis minutos, de todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

DOMINGO JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ